Darío Azzellini
El negocio de la guerra
Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado

CULTURA Corazón Adentro
MISIÓN SOCIALISTA

Las formas de conducción de la guerra han cambiado. El «debilitamiento» de los Estados nacionales, evidente síntoma del sistema-mundo capitalista, ha propiciado la privatización de la violencia: las guerras están integradas a la economía de mercado, y como consecuencia lógica han terminado por convertirse en el «objetivo principal de los actores con el fin de lograr ganancias en el capitalismo global». La creciente aparición de mercenarios (agentes de compañías militares privadas), paramilitares y complejos criminal-institucionales en las líneas de combate es una muestra, como diría Azzellini, de que la realidad va más allá de cualquier película de ciencia-ficción. A lo largo de esta exhaustiva investigación, varios expertos revelan los mecanismos ocultos tras las «nuevas guerras» focalizadas en Latinoamérica, Asia, África y los Balcanes.

Darío Azzellini (Wiesbaden, 1967). Politólogo, autor y documentalista. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad Wolfgang Goethe de Francfort (Alemania) y la BUAP de Puebla (México). Es miembro del consejo editorial de *Working USA, The Journal of Labor and Society* y de la *International Encyclopedia of Revolution and Protest. 1500 to the Present*. Ha publicado numerosos estudios, entre ellos podemos mencionar: *Il Venezuela di Chávez. Una rivoluzione del XXI secolo?* (2007) y *Das Unternehmen Krieg* (2003)


ISBN: 978-980-01-1735-1

Txalaparta








Darío Azzellini
El negocio de la guerra
Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado
milenio libre

Txalaparta
República Bolivariana de Venezuela
Monte Ávila
Editores Latinoamericana CA

Darío Azzellini
(Compilador)

El negocio de la guerra

Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado

milenio libre

EL NEGOCIO DE LA GUERRA

Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado







EL NEGOCIO DE LA GUERRA

Nuevos mercenarios y terrorismo de Estado

Darío Azzellini
Compilador



1ª edición alemana, *Das Unternehmen Krieg,* Assoziation A, 2003
1ª edición en español, Txlaparta, 2005
1ª edición en Monte Ávila Editores, 2009

© MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A. 2008
Apartado Postal 70712, Caracas, Venezuela
Telefax: (58-212) 263.8508
monteavila@monteavila.com.ve

Imagen de portada
David Morey, 2009

Diseño de la colección
ABV Taller de Diseño, Waleska Belisario

Diagramación
Sonia Velásquez

Corrección
Olga Molina / Wilfredo Cabrera

Hecho el Depósito de Ley
Depósito Legal Nº lf50020098002952
ISBN 978-980-01-1736-1

PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN

Las formas de conducción de las guerras están cambiando. Al lado de los ejércitos estatales surgen cada vez más compañías militares privadas (CMP[1]), compañías de seguridad privadas (CSP), paramilitares, «Señores de la Guerra», ejércitos privados y mercenarios como nuevos actores de guerra. Actualmente, las guerras se llevan a cabo con menor frecuencia entre estados nacionales, y con mayor frecuencia en el interior de éstos entre tropas regulares e irregulares y, en todos los casos, contra la población civil.

En las ciencias sociales y los medios eso es debatido bajo el término «nuevas guerras». Generalmente, se considera la creciente aparición de actores privados de violencia como síntoma del «debilitamiento del Estado» y como «caos»; así como una pérdida del «monopolio de la violencia estatal» es síntoma de «Estados fallidos» frente a los cuales Occidente se encuentra más o menos impotente.

El presente trabajo analiza estos fenómenos desde otra perspectiva. Demuestra cómo es precisamente la globalización capitalista y neoliberal la que está llevando a nuevas guerras en las periferias de este sistema.

La presente edición es la más completa y actualizada hasta la fecha sobre la obra viva que representa «el negocio de la guerra». La primera edición en alemán, en el 2003, estuvo precedida por una serie de seminarios y debates, que organicé junto con mi amigo y compañero de trabajo y militancia Boris Kanzleiter, con varios de los y las especialistas que luego aportaron sus investigaciones para el libro. La idea surgió debido a que, por las regiones y los conflictos que conocíamos, era evidente que más allá de supuestas explicaciones religiosas, étnicas, nacionales, etcétera, se trataba de una violencia organizada de parte de viejas o nuevas élites que toma

formas cada vez más privatizadas y estructuradas, y la cual, en fin, cumple un papel estabilizador, en el sentido que garantiza las condiciones de explotación: de fuerza de trabajo o de recursos.

Dos años de intensos debates dieron luz a la primera edición en alemán (*Das Unternehmen Krieg*, Assoziation A, 2003) curada en conjunto con Boris Kanzleiter. Desde entonces el libro ha visto numerosas ediciones en diferentes idiomas y países, casi todas actualizadas y ampliadas: *La empresa guerra* (Venezuela, Question, 2004); *La privatización de las guerra$* (Bolivia, Cedib, 2005); *El negocio de la guerra* (Estado Español, Txalaparta, 2005); *La empresa guerra - Bisnis Perang dan Kapitalisme Global* (Indonesia, Insist, 2006); *L'Azienda Guerra* (Italia, manifestolibri, 2006); *Le Business de la Guerre* (Francia, Gatuzain, 2006) y *El negocio de la guerra* (Argentina, Txalaparta, 2008).

A partir de la edición boliviana me ocupé sólo de actualizaciones y ampliaciones, mientras extendí mis investigaciones a Iraq, Venezuela y el desenvolvimiento de la privatización de servicios militares a escala mundial. Frente a ediciones anteriores, la presente se puede considerar en gran medida un libro nuevo. Lo cual incluye a la edición en castellano de Txalaparta, presentada por el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en el programa de radio y televisión *Aló Presidente* el 10 de febrero de 2008, al cual tuve el honor de asistir como invitado. Para la presente edición no sólo reescribí los capítulos sobre Iraq, la clasificación de CMP y el marco legal, Colombia y México, sino que también incluí un capítulo nuevo sobre Venezuela y el mapa global de la privatización de la guerra, fruto de una maravillosa colaboración con la artista Lize Mogel, de Nueva York.

El uso de violencia privatizada como síntoma inherente del supuesto «debilitamiento del Estado» está siendo impulsado en gran medida por Occidente. Esto queda particularmente patente en el desarrollo que presenta el ejército estadounidense, el cual crea en su mismo seno elementos de privatización que integran la conducción de guerras a la economía de mercado. Las CMP —generalmente fundadas por antiguos soldados de carrera asumen hoy, ya no sólo la construcción de campamentos militares, sino cada vez más (también), misiones de combate. Ha transcurrido ya mucho tiempo desde que la declaración de Independencia de Estados Unidos calificó el uso de mercenarios por el rey de Inglaterra como

«totalmente indigno de una nación civilizada». En Iraq hay más empleados de CMP que soldados de la coalición.

Analizando las nuevas guerras en Latinoamérica, África, los Balcanes y Asia, no encontramos ningún tipo de «caos», «estallidos de violencia irracionales» y «conflictos étnicos», como se sugiere en innumerables medios de comunicación. Hemos llegado más bien a descifrar un nuevo orden de guerra, donde los actores militares privados son usados por los Estados y las élites para asegurar su dominio. Tal como hemos venido investigando desde hace muchos años, en casos concretos esos actores pueden ser paramilitares para la lucha contrainsurgente en Colombia[2] y México[3], o contrarrevolucionaria en Venezuela[4], como también compañías militares privadas que reclutan ex militares y policías para patrullar en los protectorados de los Balcanes, Afganistán e Iraq.

Mientras tanto, la conducción de la guerra se ha convertido en algunos casos en el objetivo principal de los actores, con el fin de lograr ganancias en el capitalismo global. Esto es válido, por ejemplo, para los aparatos militares africanos, que se transforman en empresas de la industria minera y llevan a cabo luchas armadas entre ellas por el dominio de las minas, dejando tras de sí un inmenso número de víctimas (sólo la guerra del Congo le ha costado la vida desde 1994 a un número de personas que oscila entre 2,5 y 3,5 millones, siendo el 90% civiles).

Las «nuevas guerras» no constituyen un fenómeno que pueda ser considerado como homogéneo. La guerra de las compañías mineras militares en el Congo difícilmente puede ser comparada con el programa paramilitar de lucha contrainsurgente colombiana, que sigue la doctrina del *Low intensity warfare* (guerra de baja intensidad) del ejército de Estados Unidos, enseñada en el centro de formación para los militares latinoamericanos ubicado en Fort Benning, en el estado de Georgia (ex Escuela de las Américas).

Un cuerpo de guardaespaldas reclutado entre mercenarios en Estados Unidos para el presidente afgano Abdul Hamid Karzai es algo diferente a los antiguos militares del ejército del *apartheid* sudafricano, quienes protegen hoy los oleoductos en Nigeria al servicio de consorcios transnacionales. Antiguos generales altamente condecorados del ejército

estadounidense —quienes prestan ayuda militar privada en la creación del ejército croata y permitieron que éste realizara una de las mayores «limpiezas» étnicas de la guerra de Yugoslavia— tienen poco en común con los narcotraficantes en Kosovo o Macedonia. Estos últimos libran batallas competitivas bajo la apariencia de representantes armados de «grupos étnicos», hasta ser integrados por parte de la «comunidad internacional», bajo un control de protectorado en las funciones gubernamentales. De allí que el análisis de casos específicos sirva para la diferenciación entre ellos y, al mismo tiempo, sea requisito indispensable para generalizaciones.

En capítulo I, Thomas Seibert critica al discurso mismo sobre las «nuevas guerras». Seibert afirma por una parte que los diversos fenómenos atribuidos a las «nuevas guerras» como, por ejemplo, el surgimiento de ejércitos no estatales, no son tan novedosos aunque sí se estén transformando. Por otra parte, el autor también asevera que con el cambio del contexto global desde finales de los ochenta, se forman estructuras sociales y políticas que promueven la expansión de las economías de guerra. Bajo esta perspectiva, formas de transformación de la conducción de guerras en una parte de la economía de mercado, el creciente surgimiento de paramilitares, ejércitos de mercenarios y de compañías militares privadas, representan una consecuencia directa del capitalismo neoliberal.

Sigue en el capítulo II una investigación sobre Iraq, el ejemplo más avanzado de privatización de la guerra con 180.000 contratistas trabajando en tareas militares o de seguridad. Describo cómo funciona el negocio en Iraq, cómo el país se ha transformado en un punto de encuentro internacional para CMP, cómo éstas reclutan personal en todo el mundo y, durante los últimos años, especialmente en América Latina.

El tema de las CMP había sido ignorado y descuidado durante mucho tiempo. Sólo después del ataque de milicianos iraquíes en Faluya que le costó la vida a cuatro mercenarios el 31 de marzo de 2004 empezaron a ser publicadas más informaciones al respecto. A pesar de que en un primer momento se trató de convencer al mundo de que los estadounidenses asesinados eran civiles, con el paso del tiempo no se pudo ocultar que éstos eran empleados de la compañía militar privada Blackwater USA. Aunque supuestamente son civiles y no militares, los empleados de ese tipo de compañías asumen plenamente tareas militares. En el caso de la

Blackwater los «empleados» como guerreros privados —personal militar altamente calificado y entrenado— asumen tareas hasta de más riesgo que el ejército mismo. En Iraq, por ejemplo, estaban encargados de actuar detrás de las líneas enemigas, es decir, se introducían de manera clandestina a Faluya para llevar a cabo acciones militares, cuando ésta estaba controlada por fuerzas rebeldes iraquíes. Un trabajo altamente peligroso y muy bien pagado (hasta 1.500 dólares al día). Ejércitos privados, expertos militares e informáticos al servicio de las tropas estadounidenses, radares del ejército de Estados Unidos manejados por compañías privadas, aparecen como elementos de ciencia-ficción. Sin embargo, la realidad a veces va más allá y es más increíble que cualquier película de este género. El negocio mundial de las compañías militares privadas alcanza, según estimaciones, unos 200 millardos de dólares anuales.

Los capítulos III y IV analizan las CMP, la forma moderna de los mercenarios, que desempeñan un importante papel en cada uno de los ejemplos regionales descritos. Estas empresas reclutan personal cualificado y lo ofrecen como servicio a misiones bélicas para asesoramiento militar, labores de reconocimiento e inteligencia y formación militar. En el capítulo III analizo cómo se ha desarrollado el negocio de la privatización de la guerra en los últimos años, qué clase de tareas asumen las CMP, el porqué de esa externalización (que tiene bien poco que ver con ahorros económicos, como nos quieren hacer creer los discursos oficiales), qué modelos económicos fomentan la privatización de la violencia y cómo se ha organizado la impunidad alrededor de las actividades de las CMP. En el otro capítulo sobre el tema (Cap. IV) Boris Kanzleiter describe el desarrollo de las CMP antes de la guerra de Iraq.

En el capítulo V, relativo a Colombia, analizo cómo se crearon grupos paramilitares por parte de las élites locales con el apoyo del ejército y empresas transnacionales y se contrataron compañías militares privadas, todo ello bajo auspicio financiero y político proveniente principalmente de Estados Unidos. Luego, para tranquilizar a la comunidad internacional, premiar a los paramilitares, legalizar las riquezas robadas y evitar que fueran juzgados por sus crímenes, se organizó una supuesta desmovilización, después de la cual los paramilitares siguieron existiendo y asesinando como antes. Sus víctimas son generalmente sindicalistas, activistas de

los derechos humanos o miembros de movimientos campesinos, quienes son calificados como simpatizantes de la guerrilla.

Como señalo en el capítulo VI, el modelo paramilitar, incluyendo los paramilitares, está siendo exportado de Colombia hacia Venezuela, donde todo indica que se está gestando la creación de una Contra como en Nicaragua, pero mezclada con muchos elementos del paramilitarismo colombiano.

En el capítulo VII, sobre México, investigué un modelo de paramilitarización que, más allá del uso de tropas en la lucha contrainsurgente, ha sido generado como nueva forma de organización social, la cual incluye comunidades rurales enteras.

Algo muy parecido se pudo observar durante la guerra en Guatemala, analizada en este mismo trabajo (capítulo VIII) por Matilde Gonzáles y Stefanie Kron. Las autoras se concentran en la relación existente entre paramilitarismo, violencia y género. Durante los años ochenta, el conflicto con la guerrilla en este pequeño país centroamericano dejó un saldo de decenas de miles de víctimas, y aún años después de su fin continúa existiendo en las comunidades un cierto orden de género producido por violaciones masivas.

Boris Kanzleiter parte de los ejemplos de Serbia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo para analizar cómo se ocasionaron «diferencias étnicas» durante la guerra de Yugoslavia como resultado del paramilitarismo. Los paramilitares formados desde los respectivos aparatos de seguridad del Estado, llevaron a cabo campañas de robo y despojo contra la población civil, que se vio obligada a posicionarse dentro de «límites étnicos». Al mismo tiempo, los paramilitares se transformaron —a través de una especie de «acumulación originaria»— en protagonistas del proceso de privatización, ya que habían juntado capital y pudieron establecer «complejos criminales institucionales» que actúan más allá del término de la guerra.

Un modelo parecido al colombiano ha sido descubierto por el especialista en Kurdistán y Turquía, Knut Rauchfuss. Él mismo explica en el capítulo X cómo una alianza entre políticos, militares y narcomafia dirige la paramilitarización del conflicto kurdo en Turquía.

En una entrevista realizada por Boris Kanzleiter, el especialista Matin Baraki explica cómo en Afganistán, por medio de la «guerra contra el

terror», se impuso una reorganización del sistema de los Señores de la Guerra tras la caída de los talibanes. Dicho sistema reubicó al país en el primer lugar de la producción internacional de heroína desde el año 2002. Matin Baraki afirma que tanto las posibilidades de emancipación política y social como las capacidades de articulación de la oposición fueron obstruidas por la institución de los Señores de la Guerra convertidos en pilares de la administración internacional.

Henri Myrttinen evidencia cómo la violencia en Indonesia, generalmente reseñada en los medios como conflictos «étnicos» y «religiosos», se suscribe de manera clara a intereses de poder económico y habitualmente es dirigida o aprovechada por el Estado. Las raíces del conflicto y la manera como se ha llevado a cabo datan de los años de la dictadura de Suharto, y con ello representan una «vieja» nueva guerra.

El especialista en África, Björn Aust, analiza en el capítulo XIII la economía de la guerra del Congo, que a mediados de los años noventa se convirtió en la «primera guerra mundial del África». Después de los fracasados intentos de un desarrollo recuperador y casi totalmente olvidado por la opinión pública occidental —incluyendo a sus representantes críticos—, en el corazón de África se extiende en la actualidad una economía de libre mercado radical y desregulada. En esta economía, aparatos militares, milicias y paramilitares compiten mediante las armas por la explotación de materias primas que son exportadas por compañías transnacionales hacia Europa, Japón o Estados Unidos.

Lisa Rimli llega a una conclusión similar al referirse a la economía de guerra en Angola, que encuentra continuación incluso después de la firma de un acuerdo de paz. La autora observa cómo las convenciones de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (OUA) para la proscripción de actividades de mercenarios aceptan de manera implícita el uso de mercenarios por parte de gobiernos reconocidos.

Al final se encuentra una versión actualizada del mapa global de la privatización de la guerra, hecho junto con Lize Mogel. La versión original era de 16 x 3 m y estuvo expuesta en la bienal de Kwangju, Corea del Sur a finales de 2006. El mapa se concentra en los casos más emblemáticos, que son Iraq y Colombia.

Con la vasta información que presenta esta recopilación, reunida por expertas y expertos en los diferentes contextos específicos, no quiero atemorizar ni hacer perder esperanzas a nadie. Al contrario, estoy convencido de que es necesario conocer adecuadamente el funcionamiento y los actores del nuevo orden de guerra para poder oponerse a él. Es sumamente importante entender que los límites entre guerra y paz se desdibujan cada vez más. Tal como lo muestran las líneas de desarrollo presentadas en este libro, los bombardeos de Bagdad o los de Belgrado no constituyen en absoluto la corta interrupción de una «paz» imaginada, donde la «guerra» aparece sólo como un estado de excepción. En realidad, lo que hoy se expande por regiones cada vez más amplias del globo es un estado de guerra permanente de diferente intensidad que necesita respuestas mucho más complejas que la simple demanda de un cese a los bombardeos.

Lo que requiere la situación actual es una crítica estructural a la «guerra», como nuevo orden global del desarrollo actual del capitalismo. Y en Venezuela, un debate amplio sobre las estrategias contrarrevolucionarias adaptadas. En ese contexto le quiero dar las gracias a Monte Ávila Editores Latinoamericana por la publicación del libro; a Vanessa Davies por haberme invitado a su programa en VTV a principios de febrero de 2008, abriendo así un gran espacio para un debate urgente; y al presidente Hugo Chávez por haber asumido el tema con mucha claridad. Además quiero agradecer al Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, a los muchos voceros de Consejos Comunales y a tantos revolucionarios de las organizaciones de base, como también a algunos valientes efectivos de las Fuerzas Armadas, como también a algunos revolucionarios con cargos institucionales que me pasaron información delicada, no se callaron frente a los hechos y dieron un aporte valioso a la investigación sobre Venezuela.

DARÍO AZZELLINI
julio 2008

NOTAS

1. El término *Private Military Companies* (PMC), o a veces *Contractors,* se ha establecido para el concepto de los servicios militares o de ejércitos privados en la literatura. Realmente este concepto es algo problemático, pues se remite al intento por parte de Tim Spicer, jefe de las tropas de mercenarios Executive Outcome y Sandline, de encontrar un concepto socialmente aceptable para sus actividades.
2. Darío Azzellini y Raul Zelik, *Kolumbien*, *Grosse Geschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung*, Editorial Neuer ISP, Frankfurt, 1999.
3. Boris Kanzleiter y Dirk Pesara, *Die Rebellion der Habenichtse. Der Kampf für Land und Freiheit gegen deutsche Kaffeebarone in Chiapas*, Edition ID-Archiv, Berlín, 1997.
4. Darío Azzellini, *Venezuela Bolivariana*, Neuer ISP Verlag, Köln, 2007; Darío Azzellini, *Il Venezuela di Chávez*, DeriveApprodi, Roma, 2007.

CAPÍTULO I
EL NUEVO ORDEN DE LA GUERRA. EL CAPITALISMO GLOBAL Y SU SALVAJE CARA OCULTA

THOMAS SEIBERT

Para el año 2007, el «barómetro de conflicto» que publica anualmente el Instituto de Investigación sobre Conflictos Internacionales de Heidelberg (Alemania) dio cuenta de 31 conflictos políticos o sociales conducidos militarmente, de los cuales seis son calificados como guerras con extensión territorial. Sin embargo, realmente ninguna de ellas se llevó a cabo entre Estados soberanos[1]. Y mirando con más detalle cuáles guerras han sido consideradas «clásicas» en los años anteriores, fueron sólo las guerras de Estados Unidos y sus aliados contra Afganistán (2001-) y contra Irak (2003-). No obstante, sólo en el sentido formal de la palabra se puede considerar estas guerras como «clásicas», es decir, entendidas como guerras interestatales. La primera no se condujo en ningún momento contra el ejército regular de un Estado, sino contra los señores de la guerra talibanes y la red de Al Qaeda, e incluso con la ayuda de otros señores de la Guerra. Además, la guerra en Afganistán forma parte de la «Operación Libertad Duradera» (Operation Enduring Freedom), que no tiene límites temporales ni territoriales y que lucha contra una serie indefinida de posibles enemigos. La segunda guerra interestatal, también llevada a cabo en el marco de la «Operación Libertad Duradera», el asalto a Iraq durante la primavera del año 2003, en clara violación de los principios del Derecho Internacional público, por motivos evidentes tampoco se puede considerar una guerra en el sentido clásico de la palabra. El bando invasor se enfrenta a combatientes irregulares y el número de bajas de EE.UU. y sus aliados es mayor desde que fue declarado el fin de la guerra, de lo que lo fue durante la misma.

CAMBIO EN LOS PARADIGMAS DEL ORDEN DE LA GUERRA

La realidad parece comprobar el discurso iniciado por autores como François Jean, Jean-Christophe Rufin, Michel Ignatief, Mary Kaldor, Herfried Munkler y Erhard Eppler, entre otros, según los cuales el lugar de las «viejas guerras» conducidas por estados nacionales soberanos y reguladas por el Derecho Internacional público está siendo ocupado por las «nuevas guerras», que son conducidas por diversos actores muchas veces no estatales y sin ningún tipo de regulación legal[2]. Aunque este discurso apunta a modificaciones históricas indiscutibles, no analiza aquello que desea explicar[3], lo que puede ser apreciado incluso desde el concepto de guerra sobre el que se sustenta. Esto se debe a que la diferencia entre las guerras «nuevas» o «posclásicas», por una parte, y las «viejas» o «clásicas» por la otra, se reduce al mismo nivel de diferencia entre guerras «correctas» e «incorrectas» en un cambio normativo. Así, el discurso de las «nuevas guerras» legitima las «guerras correctas» —que son reguladas por el Derecho Internacional público y conducidas por Estados nacionales soberanos— como última *ratio* del intento de eliminar de la faz de la tierra el horror causado por las «guerras incorrectas».

El argumento central para ello radica en su clasificación de «guerras de desintegración del Estado», como consecuencia del fracaso de una «estatalidad robusta»[4]. La pacificación sólo podría alcanzarse entonces mediante el restablecimiento de un monopolio del poder estatal, si es necesario por la vía de una intervención militar y la implantación de una estructura de protectorado. Precisamente para eso, los estados dominantes del sistema mundial capitalista ya se autoapoderaron (y es aquí donde se evidencian los intereses políticos que rigen el discurso), intentando ejercer un dominio sobre la incontrolada y quizás incontrolable violencia en las periferias desde la segunda Guerra del Golfo, a través de una serie de «guerras de ordenamiento mundial» (R. Kurz). Aquí también se trata, aparte del cálculo dirigido hacia el control y la limitación, del acceso a los recursos y las fuerzas laborales, cuyo aprovechamiento todavía despierta un interés específico.

En contra de la diferenciación entre «viejas» y «nuevas» guerras, tan manejable como conforme al poder, antes que nada se puede constatar

que la construcción de una sucesión lineal de órdenes de guerra históricos, desde los ejércitos nómadas de la Edad Media hasta los ejércitos regulares del Estado nacional moderno, idealiza la realidad desde siempre. Ya en tiempos anteriores las guerras eran simultáneamente más y diferentes a supuestos conflictos armados regulados por el Derecho Internacional público entre los ejércitos regulares de estados separados territorialmente y siguiendo cálculos racionales. Para empezar, los ejércitos regulares no pueden ser concebidos en su génesis histórica como una institución del Estado nacional moderno, pues constituyen uno de los elementos de los cuales el Estado se origina en primera instancia. Incluso más adelante, las guerras conducidas por este tipo de ejércitos no podían ser analizadas sobre la base del cálculo racional de la soberanía en guerra. En este sentido, ya Marx hacía referencia al hecho de que la función de la guerra en el capitalismo no sólo se reduce a la conquista o a la usurpación de territorios extranjeros y de sus mercados, sus materias primas y su fuerza laboral, sino también a la destrucción sistemática y a menudo involuntaria de capital, con la cual de hecho se resolvieron las crisis de sobreproducción.

Por ello, los fenómenos atribuidos a las «nuevas guerras» pueden ser observados incluso en la mayor parte de las «viejas guerras»: el desacato a las diferencias entre combatientes y civiles y la amplia destrucción de la infraestructura económica, la cooperación entre actores estatales y no estatales, asimetrías extremas entre las partes en guerra, la acción en espacios desestatizados, la desaparición de los límites de toda codificación jurídica y política, y la sobredeterminación a través de etnicismo, racismo o «fundamentalismo». Esto es válido también, y particularmente, para las dos guerras mundiales, específicamente en la guerra de conquista nacionalsocialista. En ella, el antisemitismo del imperio nacionalsocialista redujo en forma masiva los cálculos racionales planteados. La diferencia entre las «viejas» y las «nuevas» guerras tampoco se puede sostener respecto a las guerras de liberación anti y postcoloniales, en las cuales se encuentran también todos los fenómenos que, en primera instancia, deberían fundamentar la diferencia.

Las guerras calientes en la Guerra Fría y Mayo del 68

En el discurso de las «nuevas guerras», el fin de la confrontación de bloques termina la transición que va de las guerras clásicas a las posclásicas. Sin embargo, en realidad con la ruptura de cambio de época de 1989 termina, ante todo, una guerra que no fue ni clásica ni posclásica: la Guerra Fría entre Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. Empezando inmediatamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ésta subordinó la competencia multipolar de diferentes estados nacionales, hasta entonces medida también militarmente, a una competencia bipolar a escala mundial entre dos bloques de estados dominados, uno por Estados Unidos y el otro por la URSS. Con ello, las guerras clásicas interestatales se habían imposibilitado *de facto*, tanto dentro de los bloques como entre ellos; y en lo sucesivo se limitaron a aquellos estados que no pertenecían a ninguno de los bloques. Zonas de influencia nacional-estatal o interés de ocupación, colonización o expansión ya no eran tanto el objeto de la competencia, más bien lo eran las mismas formas de reproducción capitalista que había en ambos bloques: la *pax* americana con su capitalismo monopolista o la *pax* soviética con su capitalismo monopolista de Estado, que eran órdenes de paz y de guerra al mismo tiempo.

Mientras no se tratase de remanentes conflictos coloniales (como por ejemplo la guerra francoargelina o la francovietnamita, o las guerras de Portugal en Angola, Guinea y Mozambique), los conflictos armados durante la época de la competencia de sistemas estaban dirigidos ante todo hacia la (re)integración o la expansión de ambos bloques. Se trataba de guerras «hacia adentro» (Hungría 1956, República Socialista Checoslovaca 1968, diversas intervenciones estadounidenses principalmente en América Latina), o de «guerras de suplentes» conducidas por movimientos guerrilleros anti o poscolonialistas. Si el bloque dominado por los soviéticos hizo de la guerrilla un elemento funcional, Occidente se apoyó en las dictaduras coloniales y poscoloniales que la guerrilla combatía, y en una contraguerrilla a menudo formada por mercenarios, cuyo proceder ya desde entonces se asimilaba al de los «movimientos rebeldes» de las «nuevas guerras». Y aunque tanto la guerrilla como la contraguerrilla, así como los regímenes establecidos por ambas, dependían estructuralmente de la alimentación de los bloques que había tras ellos,

las guerras que conducían no cumplían en su funcionalidad para la confrontación de bloques.

En cualquier lugar donde tanto las revueltas propulsadas militarmente por la guerrilla, como los gobiernos que las originaban, superaban la propia instrumentalización e iban más allá, se abrieron posibilidades para el establecimiento de una fuerza que se liberase de la lógica de la competencia de sistemas y fuese por lo menos tendencialmente antagónica a la reproducción del dominio capitalista (bien sea monopólico o de Estado). Y en los casos en que las tendencias que no habían desarrollado todavía su potencialidad fallaban frente a la prepotencia de la confrontación entre bloques, se les imponía la reproducción del capitalismo, que pasaba por encima de ellas, no sólo en el marco de la confrontación de bloques, sino también por medio de ella.

Naturalmente, lo anterior era válido también en el interior de cada uno de los bloques, donde la Guerra Fría se utilizó para solidificar la hegemonía ideológica y la reintegración de ámbitos opositores al sistema respectivo.

Durante los años sesenta, sin embargo, la funcionalidad de la competencia de sistemas para la reproducción del dominio capitalista fue disminuyendo continuamente. Entraron en crisis no sólo formas singulares de regulación y de representación del socialismo real, o bien de la democracia liberal, sino las mismas formaciones de socialización fordista, fundamentadas en la producción industrial a gran escala, base de ambos sistemas. Al vislumbrarse, alrededor de Mayo de 1968, la posibilidad de un reforzamiento y una penetración mutua de las guerras de liberación anti y poscoloniales con el surgimiento vertiginoso de revueltas sociales y culturales en los países occidentales y orientales, la continuidad del dominio capitalista monopólico o de Estado estaba bajo serios riesgos.

El capital occidental respondió a la continua agudización de las crisis con una transformación de sus formas de socialización, que estuvo apoyada en la utilización sistemática de fuerzas productivas de tecnología de información. Al mismo tiempo, la intensificación de la competencia de sistemas promovida ante todo por el complejo militar-industrial de Estados Unidos y acompañada por un rearme masivo, aumentó la presión sobre el bloque soviético y llevó finalmente a la bancarrota de los países capitalistas

de Estado aupada por el éxodo de millones de personas. Al derrocamiento de sus aliados en el Oriente de Europa le siguió la disolución de la URSS, el desplome de los Estados en vías de desarrollo que dependían de ella en el Sur global y la derrota total de los últimos movimientos de emancipación anti o poscolonial. La Guerra Fría había terminado, y las guerras calientes que se habían llevado a cabo bajo sus condiciones empezaron a convertirse en «nuevas guerras»: guerras cuyo contexto lo forma actualmente el capitalismo posfordista transformado.

La transición posfordista y el «Nuevo orden mundial»

A principio de la década de los noventa, los países antes dominados por el bloque soviético y los estados del Sur en vías de desarrollo que seguían su modelo fueron incorporados por primera vez a un capitalismo realmente extendido a nivel global, en el cual las corrientes de finanzas, mercancías y saberes tienden a estar libres de todas las limitaciones de los estados nacionales y, a su vez, son sujetas a la regulación de una red de instituciones supranacionales (OTAN, OCDE, FMI, Banco Mundial). Con la creación de cadenas mundiales de valor se llegó a una reestructuración global de la división del trabajo, en la que el sector primario de la agricultura y la obtención de materias primas, y el sector secundario de la producción industrial fordista, que hasta entonces había sido el sector líder, cayeron bajo el dominio del sector terciario de los servicios «inmateriales» (en el sentido más amplio de la palabra)[5].

Con la desvalorización sistemática de la fuerza laboral en la agricultura, y la obtención de materias primas e industriales, que acompaña al fenómeno antes expuesto, se echó abajo el mito del «desarrollo recuperador», que ya era obsoleto desde el principio de la crisis de la deuda a comienzos de los años ochenta. Éste había prometido a los países con un sistema capitalista de Estado del segundo mundo «adelantar», y a los países en desarrollo del Tercer Mundo, la futura incorporación al fordismo del Primer Mundo capitalista monopólico.

De hecho, la inclusión en el sistema mundial posfordista excluyó sistemáticamente de cualquier perspectiva de desarrollo a una «población sobrante» que se cuenta por millones y crece diariamente. Al cabo de

pocos años se llegó a la amplia pauperización de sociedades completas tanto en el Sur como en el Este, a la desintegración de su sistema político y económico y a una migración masiva de aproximadamente 191 millones de personas (70 millones más que en 1990)[6]. Según estimaciones de la Cumbre Social de Ginebra de las Naciones Unidas del año 2000, más de 1,2 millardos de personas deben sobrevivir con menos de un dólar al día. El poder adquisitivo de un sueldo promedio en América Latina ha llegado a ser hoy 27% menor que en 1980, mientras que 40% del producto social bruto se concentra en manos de 1% de la población, con tendencia a un aumento drástico.

En parte, la situación en África y Asia es incluso más dramática. En total, la participación del 20% más pobre de la población mundial en la producción, inversiones extranjeras, exportación y comunicación se coloca debajo del 1%, mientras que la participación del 20% más rico de la población mundial se encuentra entre el 70% y el 90%. El 70% de las inversiones a escala global y el comercio mundial son controlados por las 200 compañías transnacionales más grandes. Este desarrollo encuentra su concreción estadística final en el promedio de la expectativa de vida: mientras ha aumentado en los 31 países más ricos del mundo entre 1975 y 1997, ha disminuido en 18 países del mundo durante el mismo período, específicamente en 10 países de África y 8 países de la antigua Unión Soviética o de Europa del Este. Los ejemplos más drásticos se encuentran en África, donde el promedio de expectativa de vida decayó en Botswana de 52 a 47, en Zimbabwe de 51 a 44 y en Zambia de 47 a 40 años[7].

La asimetría en la estructura de poder global se regula ante todo a través del endeudamiento de los países en desarrollo con respecto a actores estatales o no estatales del Norte. También aquí, la dinámica de la pauperización se puede comprobar estadísticamente: mientras la deuda total de los países en vías de desarrollo del Sur se situaba bajo los 100 millardos de dólares para el año 1970, para 1998 había aumentado a 2.465 millardos de dólares. Considerando que sólo el servicio de la deuda generalmente devora entre 30% y 50% de su presupuesto de Estado, los países en desarrollo dependen continuamente de nuevos créditos, si desean mantener un mínimo de soberanía en actuación y planificación. Sin embargo, el bloque dominante de estados y el Fondo Monetario Internacional

controlado por el mismo, condicionan los nuevos créditos a «programas de ajuste estructural» que obligan a los Estados en desarrollo al desmantelamiento progresivo de sus estructuras de Estado social, ya marginales de todas maneras, y al mismo tiempo a la venta de los mejores sectores de sus economías nacionales a las compañías transnacionales.

En el marco de la división del trabajo globalizada y posfordista, la desvalorización o la subvaluación sistemática de la fuerza laboral alcanza finalmente también a las metrópolis del Norte. Con ello, la diferencia entre metrópolis y periferias se desprende tendencialmente de la escisión territorial Norte-Sur o Este-Oeste, y se reproduce en forma desterritorializada entre los estados y, dentro de ellos, entre las regiones estatales y supraestatales, entre la ciudad y el campo, en las ciudades mismas y finalmente entre los mismos individuos: en un *apartheid* social y mundial, que es a la vez menos claro y más pronunciado que nunca. El Cuarto Mundo de los totalmente marginados, una frontera que se encuentra en cualquiera de las regiones mundiales, sin embargo no representa algo exterior al capitalismo global sino que es, en efecto, su otro lado bárbaro. Al mismo tiempo, es el espacio —que hay que entender como territorial solamente en forma limitada— en el cual realmente se puede hablar de «nuevas guerras».

Economía de la guerra social

Debido a que el derrumbe de los países en vías de desarrollo en ningún otro lugar del mundo ha sido tan drástico como en África, la situación de sus países sirve como referencia central del discurso de las «nuevas guerras» y del periodismo vinculado al mismo. Los medios de comunicación masiva informan una y otra vez sobre inmensas limpiezas étnicas y masacres aparentemente sin motivos u objetivos en el marco de innumerables conflictos como en Angola, Etiopía, Eritrea, el Congo, Ruanda, Somalia, Sudán y Sierra Leona.

Estos hechos se explican con un modelo de análisis etnicista e incluso racista ampliamente difundido, según el cual diferentes grupos étnicos no «podían» convivir unos con otros dentro de la estrechez de un mismo Estado nacional, y por ello tarde o temprano deberían enfrentarse.

En realidad, la crisis africana no resultó de una violencia etnicista, llegando a una explosión casi natural y del «desmoronamiento del Estado» causado por la misma: ambos fenómenos son, en sí mismos, consecuencia de la historia particular de la descolonización de África, que nunca pudo cumplir en la realidad con su orientación ideológica de «desarrollo recuperador». Por ello, los países en desarrollo de África en ningún momento alcanzaron la soberanía de los países latinoamericanos. Por ejemplo, el ejército y la policía desde un principio eran su esencia, y sus cuerpos oficiales procedían en gran parte de los aparatos coloniales de poder.

Alcanzada una independencia formal, la política de las élites estatales apuntó hacia la apropiación privada de los ingresos de la economía de exportación. También lograban ganancias extra a través del aprovechamiento metódico de las rivalidades entre los distintos bloques; los recursos así conseguidos beneficiaban a sus cuentas privadas y al aparato militar y de policía. Para crear un mínimo de legitimación política establecieron un sistema clientelista basado en la pertenencia a clanes. Dado que casi no se implantaron otras instituciones estatales, las estructuras locales de la sociedad de clanes se mantenían como el único recurso de confianza, justicia y seguridad social. En la medida que el Estado africano en desarrollo se mantuvo enfrente de la población propia como un partido que actuara sólo según los intereses particulares de las élites, que casi no podía sustentarse en una lealtad de las masas establecida por instituciones del Estado social y de la sociedad civil.

Con el fin de la confrontación entre bloques y con la reestructuración posfordista de la división global del trabajo, este modelo de desarrollo se desplomó. En la lucha por los recursos restantes de sus países económicamente destruidos, las élites dominantes se dividieron y tomaron a los propios pueblos como rehenes y a la vez como infantería de su competencia por la supervivencia. Cuando el Estado en desarrollo, en bancarrota, suspende el pago de sueldos a los militares y la policía, las tropas se abastecen acechando a la población por medio de ataques, mientras algunos señores de la guerra establecen en sus regiones, en parte de manera abierta, regímenes de producción esclavista. Debido a que en muchos países africanos más de la mitad de los jóvenes no tienen sustento, ni las tropas regulares ni las irregulares necesitan preocuparse por la afluencia,

pues el servicio en el ejército o en las bandas de los señores de la guerra constituye la única fuente de ingresos para gran parte de la población masculina, independientemente de si el sustento proviene del pago de sueldos o directamente del robo. Entre estos frentes más que complejos, los ejércitos privados de mercenarios pasan a desempeñar un papel cada vez más importante como un bando que opera por su propia cuenta.

Con la destrucción progresiva de las condiciones previas a la guerra, la usurpación rapaz de los medios de supervivencia —y con ello la de las mujeres— se convierte en la base de la reproducción social. Sin embargo, esto significa que en muchas sociedades africanas la guerra ya no es una interrupción irregular de la reproducción más o menos pacífica de la vida social, sino que se ha convertido en una economía regulada según sus propias leyes y orientada hacia su propia reproducción. A pesar de las diferencias —a menudo relevantes— entre los casos singulares, las economías de guerra social son la verdad material de las «nuevas guerras» también en Asia y América Latina, en los «Estados en transformación» que una vez estuvieron dominados por el bloque soviético y, por último, pero no en menor grado de importancia, en las regiones en derrumbamiento de las metrópolis.

Su dinámica no está siempre determinada por enfrentamientos militares manifiestos; en muchos casos, su forma violenta se mantiene en el nivel de bandas o de sistemas de gángsteres. Aquí se encuentran también enlaces con la economía del crimen organizado y, naturalmente, con las diversas expresiones de la economía informal y de la economía de migración. El hecho de que estas economías no constituyan una excepción al capitalismo actual, que no estén «fuera» de él —sino que representen su lado bárbaro—, se concreta en sus innumerables nexos con la economía mundial regular, y representa una variación del hecho válido para el capitalismo en general, de una combinación históricamente variante en forma continua de formas de producción capitalistas y no capitalistas.

El monopolio de poder imperial

Mientras el posfordismo del Sur globalizado culmina en las economías de la guerra social, el del Norte globalizado culmina en la actual Operación

Libertad Duradera, llevada a cabo actualmente en Iraq. La interpretación generalizada de todos los bandos por medio de ideologías racistas, nacionalistas, etnicistas o incluso «fundamentalistas», no resulta tanto de lazos étnicos o religiosos obsoletos, sino de la desvalorización profunda de ideologías socialistas en su sentido más amplio y de la debilidad simultánea de las ideologías liberales y democráticas en la transición del fordismo al posfordismo. Los desplazamientos del campo ideológico reflejan el fin del mito del «desarrollo recuperador» y, al mismo tiempo, la disolución de los compromisos de clases metropolitanos.

Por lo tanto, los estados del Norte actúan como poderes más dominantes que hegemónicos del sistema mundial: si la hegemonía está basada en una lealtad de masas construida a través de la integración ideológica, la dominación se fundamenta sólo en la superioridad violenta, actualmente en la cualidad de ser invencibles, estructural, de Estados Unidos[7]. A esto equivale que el proyecto ideológico de los poderes dominantes del posfordismo mire exclusivamente y de forma inmediata a la implantación e imposición de un monopolio imperial de violencia, es decir, un monopolio de violencia que recurre a un amplio «orden mundial». Este sistema está basado ante todo en los escenarios amenazantes de la «prevención de crisis», del «*management* de conflicto» y del antiterrorismo; y ya casi nada en las promesas de desarrollo, progreso y participación.

La carta de este monopolio de la violencia se encuentra en el «nuevo concepto estratégico» que fue elevado por la OTAN a estatuto de la Alianza, con motivo de su quincuagésimo aniversario en abril de 1999. En este concepto, los poderes dominantes parten de «riesgos militares y no militares muy diversos, que proceden de diversas direcciones y a menudo son difíciles de prever».

A éstos pertenecen

> la incertidumbre y la inestabilidad en la región euroatlántica y sus aledaños, y la posibilidad de que se produzcan en la periferia de la Alianza crisis regionales (…). Las rivalidades étnicas y religiosas, los conflictos territoriales, la insuficiencia o el fracaso de los esfuerzos de reforma, los abusos contra los derechos humanos y la disolución de Estados (…). Los intereses de seguridad de la Alianza pueden verse afectados por riesgos distintos de carácter más

general, en particular por actos de terrorismo, de sabotaje o de delincuencia organizada y por la perturbación del flujo de recursos vitales.

Asimismo, pueden plantear problemas para la seguridad y la estabilidad de la Alianza los grandes movimientos incontrolados de población, en particular los resultantes de los «conflictos armados». En consecuencia, este escenario global amenazante demanda «capacidades militares eficaces en todas las circunstancias previsibles»[8]. Con ello, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte —que limitaba la Alianza a la asistencia recíproca en el caso de un ataque militar en contra de una de las partes que la conforman— es nulo. Actualmente, las llamadas «non-article 5 missions» (misiones no artículo 5) tienen el mismo rango que las misiones para la «defensa de la alianza», eso explícitamente también sin el apoyo de la ONU o la OSCE.

Así como esta amplia autohabilitación no puede ser interpretada con base en su propia explicación —como un deber de «intervención humanitaria» en nombre de los derechos humanos—, tampoco puede ser analizada solamente siguiendo la teoría clásica del imperialismo.

La Operación Libertad Duradera sigue, como objetivo guía primario aunque no como fin único, a un «imperialismo exclusionista de la seguridad». Su misión está resumida por Robert Kurz de la manera siguiente:

> No se mira a la conquista y la incorporación para adueñarse de ciertos recursos (mucho menos humanos). Por el contrario, la orientación estratégica está dirigida a mantener a distancia del sistema la enorme y amenazante masificación de «superfluos» en las periferias. Las catástrofes causadas por la misma economía universal de mercado deben permanecer «fuera». Desde este punto de vista, las corrientes de refugiados tienen que ser detenidas antes de las fronteras orientales, y las regiones de derrumbe «pacificadas» en un nivel de miseria.
>
> El objetivo implícito sólo puede consistir en una jerarquía de exclusión escalonada por continentes, que se extiende desde unos pocos países asociados a la OTAN y la Unión Europea (del tipo de Hungría), pasando por un cinturón de Estados sátrapas y de fachada (del tipo de Croacia), llegando hasta «protectorados» o *homelands* totalmente dependientes, administrados por organizaciones internacionales o guerras de bandas (por ejemplo, Kosovo); que a su vez conforman una «jerarquía de pauperización»[9].

A eso corresponde la forma —más policíaca que clásica— militar de las guerras de ordenamiento mundial que siguieron a la Segunda Guerra del Golfo (1991); hasta la emprendida Tercera Guerra del Golfo, las cuales se llevaron a cabo siguiendo más bien el ejemplo de un *blitz*, con el cual la policía «reordena» un barrio dominado por gánsteres.

En una acción de este tipo no se trata de limpiar para siempre de los gánsteres a la zona afectada, con el fin de llevar a sus habitantes orden, seguridad y civilidad a largo plazo. El objetivo consiste, ante todo, en contener a la población pauperizada en sus propios barrios, es decir, al aislamiento territorial de las zonas residenciales de la clase media y alta —visto en el nivel mundial— de las regiones mundiales todavía prósperas. Al mismo tiempo se trata de aclarar, de forma manifiesta, quién es un ciudadano decente y quién un villano, así como determinar los límites entre lo que será tolerado y lo que no.

Que como consecuencia de las guerras extremadamente asimétricas la figura de los señores de la guerra se haya intensificado y que éstos estén directamente vinculados con el control imperial (como ha sucedido recientemente en Afganistán) no constituye una contradicción a lo anteriormente dicho: el monopolio imperial de la violencia sigue con el modelo de la funcionalización de la contraguerrilla en uso en las «guerras de suplentes».

Lo mismo pasa en la paramilitarización intencional de los conflictos sociales, como es el caso de Colombia, donde los «para» que actúan como señores de la guerra debieron, antes que todo, ser construidos por las élites locales y nacionales en cooperación con Estados Unidos, para poder manejar la rebelión social. La continuidad incontrolable en el tiempo, en casos particulares incluso el aumento de la pauperización, la privación de derechos y la violencia extrema son conscientemente aceptados porque se trata cada vez menos de eliminar en forma planificada el «subdesarrollo», sino principalmente del control de una población «excedente», a la cual el sistema mundial ya no tiene nada más que ofrecerle.

Los planes Marshall, que fueron creados igualmente para África, los Balcanes o el Mediano y Cercano Oriente, también están determinados por cálculos económicos concretos. Sin embargo, estos cálculos siguen solamente a los imperativos de aprovechamiento de un capital desterritorializado,

que ya no puede frenar la dinámica posfordista de pauperización y exclusión, pues tiene a ésta como precondición estructural.

Ahora bien, la geopolítica global está ciertamente amenazada por escisiones internas, debido a las cuales se desmorona la unidad imperial de los poderes dominantes en una tríada conformada por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Aunque estados metrópolis dependen uno del otro para asegurar el dominio que sólo pueden imponer en conjunto, su interdependencia no anula su competencia interna. Pero ya no puede ser analizada sólo como una competencia interimperialista, sino al mismo tiempo y más específicamente, como una competencia en el imperio. Si el primer concepto define las relaciones entre los diferentes aliados, en el último se disputa la forma de la implantación, imposición y ejecución del mismo monopolio imperial de violencia.

La discusión es sólo alrededor de si este tipo de intervenciones deben ser aprobadas multilateralmente o si pueden ser implementadas unilateralmente por el líder, Estados Unidos, sin la aprobación de los aliados. Y también está en discusión hasta qué punto y qué élites árabes son integradas en la estructura imperial, y cómo deberá ser enfrentado el peligro objetivo de una revuelta panarábica-islamista de masas, que crecerá en la medida que se les escape de las manos a estas élites. Dejando de lado los sucesos catastróficos posibles en cualquier momento —por ejemplo, una guerra dentro del imperio—, todo indica que la administración de Bush fracasará a pesar de su superioridad militar; y que Estados Unidos y la Unión Europea acordarán una política que cumpla más con las exigencias estructurales del imperio conjunto.

LOS LÍMITES DEL IMPERIO

Previo a la incursión de la maquinaria militar angloamericana en Iraq se sucedieron protestas antibélicas en formas y dimensiones nunca antes vistas, donde participaron más de once millones de personas sólo durante el día de acción a nivel mundial (15 de febrero de 2003). Con ello pudo comprobarse, una vez más, que la oposición creciente —desde mediados de los años noventa— contra el posfordismo global no pudo ser doblegada por la demostración de poder imperial, que se había convertido en vio-

lencia material en el inmenso despliegue de tropas en el golfo. En cuanto la movilización para el Día Global Antiguerra tuvo sus orígenes en el Foro Social Europeo realizado en Florencia en noviembre de 2002, la alianza allí iniciada del llamado «movimiento crítico a la globalización» con el movimiento pacifista se manifestó realmente como una fuerza social de relevancia mundial. En este contexto, los y las manifestantes del 15 de febrero utilizaron el poder del que hoy disponen, de ser el primer movimiento social de la historia que no tiene en la forma política de la Internacional su fin, sino su punto de partida.

A pesar de ello, el «movimiento de los movimientos» está muy lejos de poder cuestionar materialmente el orden mundial dominante. Esto se debe, por un lado, a que está enfrentado a una formación del capitalismo que surgió de una amplia deslegitimación de todas las fuerzas de oposición anticapitalistas previas a ella y, por lo tanto, se ha fundamentado ideológicamente desde sus inicios sobre el mito de un «fin de la historia». El movimiento crítico a la globalización está esbozado en consecuencia por una extraña pérdida de experiencia, luego de que es familiar con la propia historia sólo según la interpretación de los supuestos vencedores. Éstos aprovechan la ventaja en la lucha ideológica confrontando de improvisto el autoproclamado «fin de la historia» con el «choque de las civilizaciones», apoyándose justo en las condiciones que ellos mismos crearon[10].

En una forma ideológicamente transformada, ambas metáforas, sin embargo, contienen el segundo y decisivo problema del movimiento antibélico crítico a la globalización. Este problema consiste en que la oposición contra la violenta «multiplicación y fragmentación» del sistema mundial sólo podrá convertirse en una lucha de liberación universal cuando ésta sea apoyada también, y especialmente, por la «población sobrante» pauperizada, que lucha dentro de las economías de la guerra social por su mera supervivencia. Por ello, la Internacional que se está creando actualmente encuentra su piedra de toque en la capacidad para poner en comunicación distintas subjetividades políticas que se forman dentro de realidades de vida extremadamente diferentes e incluso tendencialmente opuestas. Serán las resistencias del Sur global (como ya lo ha ejemplificado la irrompible autonomía de la migración) que determinan en mayor medida los objetivos y las formas de lucha. La tarea para los movimientos sociales

y las izquierdas políticas en los estados de la tríada consiste en romper el consenso racista de las metrópolis que fue reforzado con el discurso de las «nuevas guerras», según el cual el Norte global debe ocuparse de la implementación de la democracia, los derechos humanos y el civismo. La descolonización es y seguirá siendo una condición estructural previa a toda emancipación.

Notas

1. Heidelberger Institute for International Conflict Research at the Department of Political Science, University of Heidelberg: «Conflict Barometer 2007» http://hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2007.pdf
2. Jean François Jean-Christophe Rufin, *Ökonomie der Bürgerkriege*, Münster, 1995; Mary Kaldor, *Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung*, Francoforte en el Meno; Michel Ignatief, *Die Zivilisierung des Krieges*, Hamburgo, 2000; Herfried Münkler, *Die neuen Kriege*, Reinbek, 2002; Erhard Eppler, *Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmark? Die Privatisierung und Kommerzialisierung der Gewalt*, Francoforte en el Meno, 2002; Ulrich K. Preuss, «Krieg, Verbrechen, Blasphemie». *Zum Wandel der bewaffneten Gewalt*, Berlín, 2002.
3. El presente ensayo critica el concepto de «nuevas guerras» desde una perspectiva materialista histórica, que coloca a las guerras y al orden de las mismas en el contexto de la reproducción del dominio capitalista. Se abren accesos a este tipo de perspectivas, por una parte con Michael Hardt / Toni Negri, *Imperio. El nuevo orden mundial*, Buenos Aires, 2002; y por otra con Robert Kurz: *Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung,* Bad Honnef, 2003.
4. Herfried Münkler, en entrevista con Eberhard Sens, *Lettre International* 14, Winter 2002, p. 14 ss.
5. En aras de evitar un recurrente malentendido, quiero aclarar específicamente que el dominio del sector terciario determinado por el posfordismo es cualitativo y no cuantitativo: mientras el alcance del trabajo «material» (en la producción de bienes y la obtención de materias primas) ejecutado en el sector primario y secundario excede todavía el trabajo «inmaterial» (en la prestación de servicios) del sector terciario, este último, sin embargo, construye el marco en el cual el primero se da y es aprovechado.
6. Organización Internacional para las Migraciones (2008), www.iom.int

7. El dramático descenso en la expectativa de vida en el Sur africano se debe en gran parte a la propagación del sida, que sólo puede ser analizada indirectamente como resultado de la globalización del posfordismo. A pesar de esta relevante salvedad, las cifras siguen siendo claras; a lo que habría que agregar, además, que se ha registrado una disminución semejante del promedio de la expectativa de vida en los barrios de las grandes ciudades de Estados Unidos.
8. Ese poder militar ilimitado de Estados Unidos se basa en que de los gastos militares globales, que el instituto sueco Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) cifra para el año 2007 en 1,339 millardos de dólares, Estados Unidos gasta poco menos de la mitad: 547 millardos de dólares. www.sipri.org.
9. El concepto estratégico de la OTAN, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada en Washington los días 23 y 24 de abril de 1999, www.mde.es/mde/docs/tratados/concepto.pdf.
10. Robert Kurz, *Jungle World*, nº 19, 1999.
11. La obra de Francis Fukuyama *El fin de la Historia y el último hombre* (México, 1992), exprime la autoestima de los vencedores frente al derrumbe de las izquierdas políticas del siglo XX; Samuel P. Huntington, *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial* (Barcelona, 1997), marca la línea de cómo este fin debe mantenerse en pie en contra de ellos, que no lo quieren aceptar. Ambos libros delimitan el horizonte ideológico del posfordismo y forman así —con o sin proponérselo— el subtexto del discurso de las «nuevas guerras».

CAPÍTULO II
IRAQ: EL LADO PRIVADO DE LA GUERRA

DARÍO AZZELLINI

Según informaciones del propio Ejército de EE.UU., en Iraq hay 180.000 empleados de CMP: más que soldados de EE.UU. y todos los demás aliados en su conjunto[1]. 130.000 trabajan para un total de 632 CMP con las cuales el Pentágono y otras instituciones gubernamentales de EE.UU. firmaron contratos. Entre 1994 y 2004, solamente el gobierno de Estados Unidos firmó más de tres mil contratos con CMP para servicios a sus tropas en misiones en el exterior. En 2003 el Pentágono estimó que de los 87.000 millones de dólares para la «gran campaña de Iraq» (incluyendo Afganistán y Asia central), 30.000 millones serían destinados a pagar a CMP[2]. Sin embargo según un artículo publicado el 29 de julio de 2004 por el Centre for Public Integrity (Washington), hasta la fecha sólo en Iraq ya había otorgado contratos a 150 CMP de Estados Unidos, con un volumen total de 48,7 mil millones de dólares. Por eso la «Coalition of the Willing» (Coalición de los dispuestos) muchas veces es definida como la «Coalition of the Billing» (Coalición de los cobradores).

Ya durante la invasión en marzo de 2003, muchos de los sistemas de armamento altamente desarrollados de los buques de guerra en el Golfo fueron manejados por especialistas de cuatro CMP diferentes, así como también los sistemas de armas de los vehículos aéreos no tripulados *Predator*, de los *Global Hawks* y de los aviones de bombardeo B-2 Stealth[3]. En Iraq, empleados de CMP hacen patrullaje, cuidan edificios, infraestructura y prestan guardaespaldas para representantes iraquíes y de Estados Unidos. Hasta el personal en las cárceles militares en Iraq pertenece a empresas privadas de seguridad. Y empresas privadas en Iraq también se apoyan en los servicios que ofrecen las CMP.

A las CMP no les gusta que les llamen «ejército no oficial», prefieren definirse como «guardias privadas», «mánagers de riesgo», «asistentes de seguridad», o expresiones parecidas. Supuestamente, desarrollan actividades que son únicamente «tareas de seguridad» y actúan militarmente sólo para su propia defensa. La realidad, sin embargo, es diferente. Debido a que bajo la estrategia de tropas de Estados Unidos y sus aliados —la llamada «Coalición de los dispuestos»— sus tropas ya sólo se atrincheran en campamentos militares y a veces organizan bombardeos aéreos o «expediciones punitivas» con un amplio despliegue militar en ciudades y barrios que no se han comportado según sus planes, el papel de las CMP se ha hecho tan fuerte como arriesgado.

Durante los primeros doce días de abril de 2004, cuando la resistencia iraquí aumentó sus ataques, el general Kimmit anunció que fallecieron setenta soldados estadounidenses. Durante el mismo tiempo se habla hasta de ochenta muertos entre empleados de CMP[4]. Las cifras de muertes totales se desconocen. Los cuatro estadounidenses asesinados el 31 de marzo de 2004 en Faluya, quienes después fueron arrastrados por las calles por una multitud, fueron presentados en los medios en un primer momento como civiles. En realidad se trataba de combatientes de la CMP Blackwater USA, que escoltaban un transporte. Esta empresa también operaba «detrás de las líneas enemigas», en las zonas controladas por la resistencia. Empleados de Blackwater USA participaron en enfrentamientos y evacuaciones armadas de soldados estadounidenses heridos en los combates de Faluya.

Muchas de las víctimas de los atentados, ataques y secuestros denominadas «civiles» en los medios de comunicación y en las declaraciones oficiales de Estados Unidos, lo son sólo formalmente. En realidad se trata de empleados de diferentes CMP: mercenarios modernos que en un conflicto bélico actúan a favor de una parte en conflicto. Por ello, no es sorprendente que por el lado opuesto sean vistos y tratados como enemigos.

El único sobreviviente a la emboscada de un convoy al oeste de Bagdad, en la zona de Faluya el 9 de abril de 2004, fue el estadounidense Thomas Hamill, quien luego fue secuestrado y, supuestamente, el 2 de mayo logró escapar de sus secuestradores, era empleado de una CMP[5]. También los italianos Fabrizzio Quattrocchi, Humberto Cupertino, Salvatore Steffio

y Mauricio Agliana, secuestrados en abril de 2004, trabajaban como combatientes privados armados para una CMP italiana, contratada por otra estadounidense. Éstos fueron liberados en junio de 2004, con excepción de Quatrocchi, que fue ejecutado en cautiverio. El 12 de abril el comandante supremo estadounidense, general Ricardo Sánchez, declaró que nueve estadounidenses, todos civiles, habían desaparecido después de un ataque a un convoy cerca de Abu Ghraib. En realidad, siete de ellos eran empleados de Kellogg, Brown & Root (compañía militar y subempresa de Halliburton). El 2 de mayo de 2004, en un atentado-bomba a un convoy murieron dos empleados de Global Risk International provenientes de Islas Fiji. Y el 26 de noviembre de 2004, en un ataque a la zona verde de Bagdad, supuestamente la zona más cuidada y segura de la ciudad, murieron cuatro mercenarios nepalenses, de las unidades gurkha de Global Risks Strategies y 15 fueron heridos. La lista es interminable.

En total, se puede presumir que la suma de empleados de CMP que han muerto en Iraq podría ser superior a la de los 4.102 (junio, 2008) soldados de EE.UU. muertos. Determinar el número es extremadamente difícil. Ni los enfrentamientos llevados a cabo por las CMP, ni sus empleados que pierden la vida en Iraq, figuran en las estadísticas de las fuerzas militares estadounidenses. Por ejemplo, el 4 de abril de 2004 unas milicias iraquíes atacaron el cuartel general de Estados Unidos en Nayaf. El combate de defensa duró aproximadamente cuatro horas. Se utilizaron incluso ametralladoras y granadas de cuarenta milímetros. Sin embargo, en los informes militares de Estados Unidos no hubo referencia alguna a los hechos. ¿Por qué? La respuesta es simple, no participaron militares en el combate. Fueron empleados de Blackwater USA quienes se enfrentaron a las milicias[6].

Los sueldos de los empleados de estas compañías varían mucho y se rigen por el tipo de tarea, formación y país de procedencia. En el último eslabón se encuentran los iraquíes. La CMP Erinys, por ejemplo, tiene entre 14.000 y 15.000 iraquíes como personal de vigilancia de plantas petroleras y oleoductos. Ellos reciben sólo 150 dólares[7]. Alrededor de 3.000 dólares mensuales reciben ex miembros de tropas especiales chilenas, gurkhas nepaleses, combatientes de las Fiji o sudafricanos. Si son empleados para realizar tareas especiales sus sueldos pueden ascender

entre 6.000 y 15.000 dólares al mes. Los expertos de Blackwater USA reciben, para misiones especiales, entre 600 y 1.500 dólares al día. Más o menos la misma suma es destinada a la compañía. Personal hay de sobra.

IRAQ: PUNTO INTERNACIONAL DE ENCUENTRO PARA CMP

La enorme necesidad de servicios privados militares llevó a que grandes y pequeñas empresas de este sector abrieran oficinas en Bagdad. Aparte de EE.UU. hay muchas CMP británicas[8]. Según el director de la CMP londinense Janusian, sólo las empresas británicas de mercenarios en los primeros años de ocupación de Iraq aumentaron su facturación de 320 millones de dólares a 1,8 millardos. Por ejemplo, Global Risk Strategies, antes del ataque de Estados Unidos a Afganistán, tenía sólo dos empleados. Hoy en día trabajan para esta compañía más de mil hombres en el ámbito de resguardo de infraestructuras y servicio de guardaespaldas. Y abrió oficinas en Londres, Washington, Johanesburgo, Bagdad, Kabul, Islamabad, Hongkong, Dubai y Suva (Fiji). Global Risk International, de Hampton, Middlesex (Gran Bretaña), es parte de Global Risk Group y es una de las más grandes empresas británicas en el negocio de Iraq; emplea gurkhas y combatientes de Islas Fiji, así como ex soldados de las fuerzas especiales británicas SAS, para vigilar el cuartel general de Estados Unidos en Bagdad[9]. La compañía británica Armor Group vigila el Foreign Office y cuenta con 500 gurkhas para resguardo de las a su vez CMP estadounidenses Bechtel y Kellogg, Brown & Root[10].

En Iraq también se encuentra DynCorp, la cual, entre sus actividades realiza el servicio de fumigación de cultivos de coca y amapola en Colombia (incluyendo unidades especiales de evacuación de militares y policías heridos o en peligro), vigila militarmente la frontera de Estados Unidos con México, participa en el desarrollo del escudo espacial del Ejército de Estados Unidos, realiza el mantenimiento de aviones y buques de guerra de Estados Unidos, maneja las zonas de experimentación de bombas atómicas en Estados Unidos y también tiene actividades en Israel y Palestina. En octubre de 2003 murieron en Gaza, a causa de una bomba, tres empleados de DynCorp que estaban escoltando a personal de la Embajada de Estados Unidos. Además, en Iraq tiene la tarea de reclutar

y entrenar a la nueva policía. Para ello formó un equipo de mil personas que se ocupan de la selección del personal. DynCorp estuvo implicada en Bosnia en la violación de mujeres y trata de menores, y en Colombia en abuso de drogas, y cayó bajo sospecha de narcotráfico.

Entre las grandes en Iraq se encuentra también la estadounidense Halliburton, de cuya junta directiva fue miembro el ex vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney. Halliburton recibió en 2003 un encargo de 391 millones de dólares destinados al mantenimiento del Laboratorio Nacional Los Álamos (Nuevo México), en donde se producen bombas atómicas de Estados Unidos[11]. El volumen de contratos para los diferentes servicios prestados por Halliburton en el marco de la guerra en Iraq hasta el 2007 fue de mínimo 1,7 millardos de dólares. De ellos, 710 millones fueron destinados a la restauración y manejo de la producción petrolera. En Turquía, Jordania y Kuwait, Halliburton se ocupa del hospedaje de soldados y de la logística del ejército estadounidense, labores por las que recibe un total de 390 millones de dólares. Su hasta hace poco subempresa Kellogg, Brown & Root (KBR) recibió después de la invasión 170 millones de dólares para obras de reconstrucción y 28 millones para edificar campamentos para prisioneros de guerra. Pero KBR también se ocupa del hospedaje y transporte de miembros del ejército estadounidense (269 millones de dólares), y hasta cobró 40 millones de dólares por haber prestado la logística para la búsqueda de supuestas armas de destrucción masiva[12].

El hecho de que tanto Halliburton como KBR no hayan cumplido los contratos, o hasta hayan cobrado de más, no obstaculizó los negocios. KBR es el mayor receptor de contratos del gobierno estadounidense en Iraq. En el marco de las operaciones en los Balcanes, según el propio Pentágono, KBR prestó «servicios insuficientes». Además, en los primeros cuatro de siete contratos asignados por el Pentágono supuestamente cobró demasiado, así que los tres restantes fueron asignados a otras empresas o ejecutados por el Ejército de EE.UU. Halliburton, a su vez, le cobró gastos exagerados de combustible al Ejército estadounidense en Iraq a través de un contrato con su en ese entonces subempresa, KBR. Y en marzo de 2008 salió a la luz pública que KBR había registrado a más de 21.000 empleados a través de una empresa de buzón en Islas Caimán, evadiendo el pago de centenares de millones de dólares al Estado[13].

Blackwater USA : un ejército privado de ultraderecha

Blackwater USA es una empresa estadounidense con sede principal en Moyock (North Carolina). Fue fundada en 1997 por Erik Prince, ex oficial de los Navy Seals (tropas especiales de marina), millonario y ultraderechista. El nombre *Blackwater* se refiere a las misiones secretas nocturnas de buzos de guerra. La empresa recluta a su personal entre las fuerzas especiales Navy Seals, Army Rangers y Delta Force, y entre miembros de fuerzas especiales alrededor del globo. Así puede anunciar en su página web: «Tenemos personal para cumplir con cualquier misión»; naturalmente, proclama «en todos lados el apoyo a la libertad y la democracia»[14]. Blackwater USA empezó ofreciendo entrenamiento para miembros del ejército y la policía de EE.UU. en su terreno de seis mil hectáreas, donde se encuentra también un pequeño pueblo para ejercitar misiones urbanas de combate. Allí entrenó a más de cincuenta mil soldados y policías. El Gobierno de Estados Unidos se lo agradeció desde el 2002 con contratos por un volumen total de 35 millones de dólares[15]. Sumas que en ese entonces parecían altas. Todavía Blackwater no había entrado al negocio de Iraq.

Blackwater empezó en Iraq con 450 empleados y cumpliendo especialmente tareas muy difíciles. Entre otras, la vigilancia para la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), incluyendo a Paul Bremer (gobernador estadounidense de Iraq) y a visitas importantes. La compañía se encarga además del entrenamiento de las unidades iraquíes antiterroristas. Con este propósito, Blackwater USA tiene a su disposición un antiguo aeropuerto militar fuera de Bagdad.

Como lo demuestra el caso de los cuatro asesinados en Faluja, los empleados de CMP trabajan bajo condiciones que ni el mismo ejército aceptaría. Como por ejemplo la falta de apoyo y de informaciones sobre la situación de seguridad, al mismo tiempo que son encargados de las misiones más peligrosas. Así que los ataques no parecen tan inesperados y sorprendentes, como intenta hacer creer la compañía en su página web: «las imágenes del ataque no provocado y el maltrato de nuestros amigos hacen evidentes las condiciones extraordinarias bajo las cuales trabajamos de manera voluntaria para llevarle al pueblo iraquí la paz y la democracia».

Hoy los empleados de Blackwater en Iraq, son miles. La CMP recibió hasta el 2006, de parte del gobierno de EE.UU., contratos por un total de 500 millones de dólares para trabajos en Iraq; sólo en 2006 la suma aumentó a 1,2 millardos y durante los primeros cuatro meses del 2007 llegó a 601 millones de dólares[3]. Mientras tanto, Blackwater ha avanzado a ser uno de los ejércitos privados más poderosos. Tiene una base militar propia, veinte aviones y más de veinte mil mercenarios especializados en sus listas.

El dueño de Blackwater, Prince, apoya al Partido Repúblicano y organizaciones cristianas fundamentalistas antiinmigrantes con generosas sumas de dinero y mantiene contactos con las milicias racistas antiimigrantes Minutemen. Sin embargo, es un *partner* bien visto por el Pentágono. En su junta directiva se encuentra también Cofer Back que, entre 2002 y 2004, fue el máximo responsable de la lucha antiterrorista del gobierno de EE.UU. Joseph Schmitz, ex inspector general del Pentágono, es su director de operaciones, y además su consultor[16].

Empresas y mercenarios sudafricanos

En Iraq se encuentran algunos miles de mercenarios sudafricanos provenientes en su mayoría de los servicios de seguridad y unidades especiales del ejército del ex régimen de *apartheid*, como por ejemplo el Batallón 32, Vlakplaas, y de la unidad élite Koevoet, las cuales llevaban a cabo operaciones militares en contra de opositores al régimen en Namibia. Se encuentran al servicio de CMP británicas y algunas sudafricanas y ganan entre 5.000 y 10.000 dólares al mes. Más que el sueldo anual de los empleados de empresas de seguridad en Sudáfrica[17]. Según la ley sudafricana de mercenarios de 1998, todas las empresas necesitan un permiso del Comité Nacional del Control de Armas Convencionales para actividades en el ámbito de la seguridad internacional. Sin embargo, la ley da lugar a posibles salidas, ya que sólo nacionales y empresas sudafricanas que tienen la intención de actuar militarmente a nivel nacional necesitan el permiso oficial. Así, las CMP declaran sus trabajos no como militares sino como «servicios de seguridad».

Entre las empresas de seguridad activas en Iraq figura Erinys International. Erinys (nombre de una diosa griega que perseguía a un culpable

cuyos actos no encontraban castigo) tiene en Iraq un ejército privado de 1.500 sudafricanos y emplea a 14.000 guardias iraquíes. Los especialistas sudafricanos están armados con ametralladoras y disponen de refuerzos de tropas en helicóptero. La empresa fue fundada por el ex oficial británico Alastier Morrison y tiene cuatro directores, de los cuales tres viven en Sudáfrica. Sus oficinas se encuentran en Midrand (Sudáfrica) y Dubai. En el año 2003 abrió una oficina en Gran Bretaña y poco después una en Bagdad. Erinys firmó un contrato por 39, 5 millones de dólares para el entrenamiento de fuerzas de seguridad iraquíes para vigilar los oleoductos, tarea que también realizó para British Petrol (BP) en Colombia y para otras empresas en Angola, en el delta del Niger y en Ghana[18].

En enero de 2004 murieron en Iraq, a causa de una bomba, dos empleados de Erinys, Deon Gouws y François Strydom. Éstos formaban parte de las unidades especiales Vlakplaas y Koevoet, durante el régimen del *apartheid*. Gouws admitió en los interrogatorios de la Comisión de la Verdad en los años noventa haber participado en, como mínimo, un atentado contra opositores al régimen, y haber quemado entre 40 y 60 casas de activistas de la oposición[19]. Gray Branfield, empleado de la Hart Group caído en Kut, había planificado en 1985 un asalto sangriento a exiliados del Movimiento de Liberación ANC en Gabor, capital de Botswana. En este ataque fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un niño de cinco años[20].

CMP y Latinoámerica

Antes del 2003 muchas CMP reclutaban mayoritariamente personal de EE.UU., Gran Bretaña, Islas Fiji y Filipinas. Frente a la creciente demanda y tras difundirse la noticia del riesgo que estos trabajos implican (hasta que algunos gobiernos, como el de Filipinas, aconsejaran oficialmente a sus ciudadanos no enrolarse en este tipo de empleos), las CMP empezaron a reclutar personal en América Latina. La estadounidense Halliburton busca a través de su filial Halliburton Latinoamérica en Colombia, empleados colombianos para «servicios de seguridad» en Iraq. Éstos deben resguardar oleoductos y gasoductos, además de trabajar como guardaespaldas para empresas privadas en Bagdad, Mosul, Faluja y Basora. Mientras voceros de la compañía niegan el asunto, los recluta-

dores y participantes cuentan de tareas de reclutamiento a principios de diciembre de 2004, momento en el que un grupo de dieciséis personas ya abandonaba Colombia para dirigirse a Iraq. Los combatientes colombianos —experimentados en guerra y bajo entrenamiento estadounidense— son altamente valorados. Se les ofrecen hasta siete mil dólares al mes más seguro de vida, contratos por un año prorrogables otros seis meses, como también vacaciones cortas cada tres meses a la ciudad europea de su preferencia[21]. La condición es que no pueden abandonar su empleo antes del fin del contrato, en caso contrario se ven obligados a devolver el monto total del dinero recibido. A través de su subempresa ID Systems, Blackwater también recluta en Colombia para Iraq.

Triple Canopy, de Lincoln, Illinois (EE.UU.), cambió sus actividades de reclutamiento de Filipinas a El Salvador, Perú, Chile y Honduras. La historia militar del país centroamericano fue una de las razones de peso para ello, como admite el portavoz de la compañía, Joe Mayo. Triple Canopy (especializada en guardaespaldas de empleados civiles de instituciones estadounidenses en Iraq) estaba en búsqueda de militares con formación de fuerzas especiales. En El Salvador, tropas especiales y escuadrones de la muerte asesinaron a más de 80.000 personas en doce años de guerra. El ejército de Estados Unidos los entrenó para eso. Casualmente, fue también un ex militar estadounidense y ex entrenador de las tropas especiales del Ejército salvadoreño quien organizó el reclutamiento. Este reclutador, copropietario de una empresa de seguridad en El Salvador (ante la prensa prefiere el anonimato), relató que los primeros cien reclutados salieron hacia Iraq el 17 de septiembre 2004 y que las salidas iban a continuar. Para un país como El Salvador, 1.700 dólares —cantidad mensual que les ofrece Triple Canopy— es mucho dinero, teniendo en cuenta que un guardaespaldas gana tan sólo 350 dólares al mes[22]. En Perú, Triple Canopy reclutó directamente a través de una filial con personal estadounidense en Lima. Desde el 2005 han reclutado ya más de mil ex soldados de las tristemente célebres unidades antisubversivas para misiones en Iraq.

En Chile, según el senador Alejandro Navarro, del Partido Socialista, desde el 2003, a través de subempresas como la Red Táctica Consulting Group, Triple Canopy y Blackwater han reclutado más de 1.200 ex militares

para misiones en Iraq[23]. Blackwater contrató por primera vez en el 2003 a 122 ex miembros del Ejército chileno, muchos expulsados de éste por sus implicaciones en crímenes contra los derechos humanos. Estos elementos fueron empleados a través de la empresa uruguaya Neskowin, dirigida por José Miguel Pizarro, ex oficial del ejército de Pinochet. Como Pizarro declaró al periódico chileno *La Tercera*, también reclutaba a ex militares argentinos. Un vocero de Blackwater le aseguró al periódico británico *The Guardian* que los comandos chilenos son «muy, muy profesionales». También en Honduras así como en Chile, Triple Canopy recluta a ex militares para misiones en Iraq a través de Your Solutions, filial de Your Solutions Inc., de Illinois (EE.UU.)[24].

3D Global Solutions, a través de su subempresa limeña Gesegur SAC (Gestión de Seguridad Sociedad Anónima Cerrada), también recluta en Perú y contrató a por lo menos 200 ex militares y policías, los cuales trabajan en Iraq brindándole seguridad a empresas y funcionarios. La misma 3D Global Solutions también recluta a ex militares hondureños.

El ciudadano estadounidenste Jeffrey Shippy, que vivió en la base militar de EE.UU. en Manta, Ecuador, reclutó ilegalmente entre 2005 y 2006, mercenarios en Ecuador y Colombia con una empresa no registrada de nombre EPI & Security. Cuando las autoridades ecuatorianas empezaron a investigar, Shippy huyó del país.

En Brasil, más de 500 militares, ex militares y pilotos fueron contratados como mercenarios para vigilar instalaciones militares norteamericanas en Iraq por parte de TESS e Inveco International Corporation, que reclutaron para otras CMP.

Según informaciones del periódico guatemalteco *Prensa Libre,* varias CMP están reclutando en forma masiva a ex miembros de la unidad especial del ejército Kaibiles para misiones en Iraq. Los Kaibiles se hicieron famosos en la guerra en Guatemala por mutilar a sus víctimas con machetes[25].

Sin embargo, tal vez el hecho más preocupante es que bajo el mando de CMP de EE.UU. se están sumando y preparando miles y miles de ex militares y ex policías de muchísimos países latinoamericanos, muchos implicados en casos de crímenes de lesa humanidad (en contra de los

Derechos Humanos). Todos ellos están en las bases de datos de CMP que trabajan estrechamente con el Pentágono. Así que hay potencialmente un «pequeño» ejército contrarrevolucionario en *stand by* que ya aprendió a operar con los estándares y bajo el mando del Ejército de EE.UU. En su gran mayoría se trata de personal ligado a la derecha que regresa a sus países de origen después de haber trabajado en Iraq, sosteniendo contactos con CMP, con el Ejército de EE.UU., con los servicios secretos y con otros mercenarios de todo el mundo.

Fácilmente se podrían convertir en la base de una futura Contra en los países que EE.UU. quiera desestabilizar.

¿BANDAS IMPUNES?

Empleados de las CMP Caci y Titan, que prestan servicios de administración de cárceles militares, como también de interrogatorios, traductores y guardias carcelarios, estuvieron implicados en los casos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib. Así se explica que sólo diez soldados fueron juzgados por los hechos: gran parte de los interrogatorios, y también de la seguridad, en Abu Ghraib era responsabilidad de empleados de las CMP mencionadas. Y como ellos no pertenecen al Ejército de EE.UU., no son juzgados por ese país y su justicia militar.

Torturas, ataques violentos y hasta asesinatos de parte de empleados de CMP en Iraq están a la orden del día. A mediados de noviembre de 2007 un empleado de DynCorp disparó y mató a un taxista en Bagdad, «Simplemente decidieron matar al conductor y marcharse», señaló el general Abdul Karim Khalaf, un portavoz del Ministerio iraquí de Interior[26]. En internet circulan videos grabados con celulares en los cuales se puede ver a mercenarios que como pasatiempo le disparan a carros civiles que cruzan casualmente su camino. En agosto de 2007 mercenarios de la CMP australiana Unity Ressources Group (URG), que en Iraq le prestan servicios de escolta a algunas ONG, asesinaron a dos mujeres[27].

Una investigación de una comisión especial del Congreso de EE.UU. sobre la empresa Blackwater, publicada en septiembre de 2007, presenta un cuadro espantoso. Habla de «violencia frecuente y extensa» de parte de

los empleados de Blackwater. Según la investigación, los hasta la fecha 1.100 empleados de Blackwater en Iraq desde el 2005, habrían estado implicados en mínimo 195 enfrentamientos armados, con un mínimo de 16 víctimas iraquíes. En 163 de los casos los empleados de Blackwater abrieron fuego aunque habían sido contratados para labores defensivas[28]. Respecto a la clase de empleados que tiene Blackwater, el informe aclara: sólo durante el año 2006, Blackwater despidió en Iraq a 122 empleados por abuso de armas, alcohol y drogas ilegales o por comportamiento violento.

El caso más impactante en ese momento todavía no había sucedido. El 16 de septiembre de 2007 mercenarios de Blackwater asesinaron sin razón alguna a 17 civiles en una plaza de Bagdad e hirieron a otros 26 (gravemente). Los mercenarios argumentaron haber actuado en defensa propia. Sin embargo eso fue negado no sólo por las autoridades iraquíes, sino también por una investigación del FBI que no encontró ninguna evidencia de una situación de autodefensa y estableció que en el caso de 14 de los 17 muertos, se pudo comprobar que no hubo justificación alguna para los asesinatos[29].

Blackwater había acompañado un convoy cuando a alguna distancia se dio una detonación. Los mercenarios, entonces, simplemente abrieron fuego contra carros y civiles con ametralladoras y lanzagranadas. Luego, en un cruce con mucho tráfico a 150 metros del primer lugar de los hechos, se hicieron camino abriendo fuego[30]. El gobierno iraquí, después de lo sucedido protestó enérgicamente y le quitó la licencia a Blackwater. Sin embargo, unas semanas más tarde quedó claro quién tiene la última palabra en Iraq y Blackwater regresó a operar igual que antes. El gobierno de EE.UU. le aseguró a los mercenarios la misma inmunidad frente a demandas civiles de la que gozan los militares. Aunque eso ni urgía. Ya en febrero de 2006, Donald Rumsfeld había clasificado a las CMP como parte del aparato militar de EE.UU., sustrayéndolos, de esta manera, de la justicia civil. Y el último día de su mandato, el 27 de junio de 2004, el gobernador estadounidense de Iraq, Paul Bremer, firmó un decreto que le otorgó a las CMP y CSP, inmunidad frente a la justicia iraquí[31]. Tampoco fueron sometidas a la justicia militar[32].

NOTAS

1. Christian Miller: «Private contractors outnumber U.S. troops in Iraq», *Los Ángeles Times,* 4 de julio de 2007.
2. Ian Traynor, «The Privatisation of War», en *The Guardian*, 10 de diciembre de 2003.
3. Ibíd.
4. Carlo Bellinzona y Franz Gustinich, «In guerra senza uniforme», *Limes*, mayo de 2004.
5. *La Repubblica,* 21 de abril de 2004
6. The *Washington Post,* 6 de abril de 2004.
7. Carlo Bellinzona, art. cit.
8. Íbid.
9. Ian Traynor, art. cit.
10. Robert Fisk, «Carrell, Severin: Mercenaries in Iraq. Occupiers Spend Millions on Private Army of Security Men», en *The Independent*, 29 de marzo de 2004.
11. Hermann Bellinghausen, «Halliburton, *ejército paralelo* en EU», en *La Jornada,* 5 de septiembre de 2003.
12. Dago Langhans, «Kriegsprofite», en *Junge Welt*, 4 de septiembre de 2004.
13. *Der Spiegel* online, 7 de marzo de 2008.
14. www.blackwater.com.
15. *Time,* 12 de abril de 2004.
16. *The Washington Post*, 23 de diciembre de 2007.
17. *Der Spiegel* online, 1 de octubre de 2007; TeleSUR, 14 de octubre de 2007, 30 de octubre de 2007 y 8 de noviembre de 2007.
18. Roswitha Reich: «Lukratives Söldnertum», en *Jungle Welt*, 20 de agosto de 2004.
19. Ruth Weiss. «Südafrikanische Söldner im Iraq. Alte Soldaten sterben nicht», en *WoZ*, 19 de febrero de 2004.
20. *La Jornada,* 8 de abril de 2004.
21. François Misser. «Die Legion der Schurken», en *Taz*, 3 de junio de 2004.
22. *El Tiempo,* 12 de diciembre de 2004.
23. *CNEWS*, 8 de octubre de 2004.
24. Eduardo Tamayo G., «Mercenarios con "impunidad de facto"», revista *Pueblos,* 13 de noviembre de 2007.
25. Naciones Unidas: «Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Misión a Honduras». 20 de febrero de 2007.
26. Citado en *Prensa Latina*, 21 de octubre 2007.
27. TeleSUR, 14 de noviembre de 2007.

28 Ibídem.

29. Committee on Oversight and Government Reform, Memorandum de 01 de octubre de 2007. http://oversight.house.gov/documents/20071001121609.pdf
30. TeleSUR, 14 de noviembre de 2007.
31. *Der Spiegel* online, 5 de octubre de 2007.
32. «Coalition Provisional Authority Order Number 17», (*Revised*) 17 de junio de 2004.
33. *Últimas Noticias,* Caracas, 14 de octubre de 2007.

CAPÍTULO III
CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE CMP SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MISIÓN DE COMBATE

DARÍO AZZELLINI

Cuando surgieron las primeras CMP hace varias décadas, estaban mayoritariamente limitadas a actividades logísticas. Al cabo de unos cuantos años ya se habían creado cientos de empresas —la mayoría fundadas por ex militares provenientes de unidades especiales— con una oferta diversa y amplia de servicios bélicos. El negocio se expandió rapidísimamente.

Proveedores de servicios militares pagados, comúnmente llamados mercenarios, no son nada nuevo en la historia militar. Sin embargo, con el invento de las compañías militares privadas (CMP) se situó a ese negocio, a principios de los años noventa, en el sector económico supuestamente «limpio». Así las empresas pueden reclutar y ofrecer sus servicios abiertamente. Y esa fue también la idea detrás del término Private Military Companies, o a veces *Contractors* (PMC), que tiene su origen en el jefe de las empresas de mercenarios Executive Outcome y Sandline, Tim Spicer, que buscó un término socialmente aceptable para sus actividades.

Como la fama de mercenarios nunca ha sido la mejor, en su presentación las CMP intentan constantemente distanciarse de la imagen sucia de éstos. Así se puede leer en casi todas las páginas web, documentos y aclaraciones de las CMP, que éstas actúan en el marco de las leyes nacionales e internacionales, que prestan servicio sólo a sujetos reconocidos por el Derecho Internacional, donde el respeto a los Derechos Humanos representa una línea fundamental en su trabajo y que, además, trabajan por «la paz y la democracia». Incluso, haciendo uso de esta aparente imagen, varias CMP se agruparon bajo el nombre de Asociación Internacional para Operaciones de Paz (International Peace Operations Association, IPOA).

Dado que EE.UU. tiene gastos militares por aproximadamente 530 mil millones de dólares al año, 46% del gasto militar mundial, la mayoría de las

CMP proviene de allí. Sin embargo, surgieron CMP a lo largo de todo el mundo. Otros países clave son Gran Bretaña, Israel y Rusia, aunque también las hay en Francia, Italia, Rumania, Bulgaria, Alemania, Australia, etcétera, y en muchos países en conflicto.

Las CMP crecieron rápidamente durante la última década y operan como cualquier otra empresa transnacional capitalista. Empresas más pequeñas fueron adquiridas por otras más grandes, integrando de esta manera una oferta cada vez más amplia de «servicios militares». Esto lleva a la formación de verdaderas megaempresas como DynCorp, un pequeño imperio con treinta mil empleados, o Kellogg, Brown & Root (KBR). En parte, son cotizadas en las bolsas de valores. Una idea sobre el crecimiento de este sector se evidencia en la relación entre soldados regulares y empleados de CMP en los campos de batalla. Por ejemplo, durante la primera guerra en contra de Irak, una de cada cien personas presentes en el campo de batalla pertenecía a una CMP; posteriormente en Afganistán ya era una de cada cincuenta, y en Irak al principio de la guerra actual era una de cada ocho. En julio de 2007 *Los Angeles Times* publicó una investigación basada en datos del ejército de EE.UU. según la cual hay 180.000 empleados de CMP en Irak, más que soldados de todos los demás países de la alianza en conjunto. Nunca el papel de estas empresas fue tan visible como en la actual guerra en Iraq. Las CMP reclutan personal en todo el mundo y los sueldos de sus empleados varían según el país de origen de los mercenarios y sus capacidades. Los iraquíes ganan unos 500 US$ al mes; los latinoamericanos entre 1.000 y 7.000 US$ y los sueldos de «especialistas militares» en misiones de combate pueden llegar a 1.500 US$ por día.

Sin embargo, hay que diferenciar: las CMP de EE.UU. operan sólo con el consenso explícito del Pentágono, están totalmente integradas al concepto políticomilitar de EE.UU. y sus formas de proceder. Mientras el otro extremo lo representan las CMP rusas, las cuales generalmente disponen de amplio armamento propio, como aviones, helicópteros de combate y tanques. Ellas ofrecen sus servicios abiertamente en el mercado global.

Las actividades de las que se encargan las CMP son muy diversas. Éstas se extienden desde el manejo de campamentos para entrenamientos militares, como lo hace la empresa estadounidense Cubic, pasando por la for-

mación de soldados a nivel internacional, la fumigación de los supuestos cultivos de coca y amapola en Latinoamérica, el mantenimiento del armamento, hasta el manejo de la cárcel militar estadounidense en Guantánamo. En general, los prestadores de servicios militares se pueden clasificar en tres grupos o campos de actividades[1]:

a) Formación y *consulting* (consultoría);

b) servicios en el sector de tecnología y logística; y

c) misiones de combate.

Sin embargo, hay que subrayar que muchas de las actividades no se limitan a una sola categoría. La separación muchas veces se debe a que actúan bajo condiciones dudosas desde el punto de vista jurídico. Así, la participación en combates está estrictamente prohibida a las CMP que intervienen en Colombia en nombre del Pentágono o la DEA. A pesar de esto, muchas empresas como, por ejemplo, Air Scan, prestan servicios logísticos al Ejército colombiano y las empresas petroleras Occidental Oil y Ecopetrol. Air Scan analiza y evalúa las informaciones de los sobrevuelos de espionaje y de las instalaciones de radar, y pasa las informaciones necesarias para las misiones militares a los pilotos de la aviación militar colombiana. Estos últimos, usando como base estas informaciones, llevan a cabo los bombardeos. Formalmente se trata de un servicio en el campo de la tecnología. Sin embargo, ¿no representa esto una participación en combates? Los tres sectores se suelen también diferenciar por su distancia del frente de guerra. En Iraq, donde todo el país se ha vuelto frente de guerra, una clara distinción de las tres categorías se torna difícil.

FORMACIÓN Y ASESORÍA

En el caso de formación y asesoría se trata de una transferencia organizada por agentes privados de conocimiento militar generado por el Estado. Eso se hace de manera generalizada, pero se vuelve especialmente problemático en los casos en los cuales las CMP asumen esas tareas porque los ejércitos no pueden actuar abiertamente (como en las circunstancias de un embargo, etcétera), o cuando una presencia militar directa no es bien vista. Este fue el caso de MPRI en Croacia, que planificó y dirigió

las tropas croatas en su ofensiva militar que desplazó a doscientos mil serbios de la Krajna. Luego MPRI acabó encargándose de la formación del Ejército croata. En Iraq, por ejemplo, DynCorp lleva a cabo la formación del nuevo Ejército y la nueva Policía. Todo esto con una importante ventaja para el gobierno de Estados Unidos: ampliar sus estándares militares a otros países, lo que posteriormente facilitará la mutua cooperación.

Servicios en el sector de tecnología y logística

Estos servicios son muy diversos y van desde la preparación de comida para los soldados hasta el manejo de sistemas de armas sofisticadas. Así, Kellogg, Brown & Root (KBR), hasta el 2007 subempresa de Halliburton —de cuya junta directiva el hoy vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, formó parte— abastece al ejército estadounidense entre otras cosas de víveres, agua y diesel, como también se ocupa del transporte de armamento. Además, KBR firmó varios contratos más para megaproyectos en el marco de la reconstrucción de Iraq, la construcción de campos de detención de prisioneros de guerra y servicios de logística para el Ejército de Estados Unidos.

En el sector de alta tecnología el empleo de personal calificado de empresas privadas es de gran importancia. Cada vez más productores de armamento suministran también expertos para el manejo y mantenimiento del mismo. Así, sistemas complejos de armas pueden ser usados inmediatamente sin que haya necesidad de tener que formar primero a los soldados (los vehículos aéreos no tripulados Predator empleados en Iraq son manejados por civiles). Del mismo modo, empresas como Lockheed Martin y Northrop Grumman (junto a sus sistemas de armamento sofisticado) suministran también el personal mecánico y técnico necesario para el manejo. De Latinoamérica, por ejemplo, se sabe que todas las estaciones radar manejadas por Estados Unidos en el continente están, en realidad, en manos de CMP; DHL, subempresa para envíos *express* y logística de la empresa de correos alemana, ofrece servicios de logística para el Ejército de Estados Unidos en Iraq. DHL empezó en 2004 con el envío diario de 14 vuelos a Iraq, con una capacidad de carga de 250-300 toneladas cada uno. El número de sus empleados en Iraq aumentó rápidamente de 7 a 138.

En un principio su trabajo consistía en repartir el correo a los militares estadounidenses; actualmente la empresa transporta todo el material que los militares estadounidenses y las empresas contratadas por ellos necesitan. No sorprende que Paul Gillett, *country manager* de DHL en Iraq, sea sudafricano y ex militar. Y no sólo él, la mayoría de los «expertos foráneos» de la filial iraquí cuentan con un historial militar. Además, DHL contrató a un grupo de ex soldados británicos que, coordinados por un «manager de seguridad», vigilan los negocios de la compañía[2]. Otro servicio menor lo ofrece la empresa alemana Optronic, cuyo gerente fue condenado a cuatro años de cárcel por venta ilegal de armas[3]. Esta empresa recluta civiles como comparsas para que el Ejército estadounidense en Alemania pueda llevar a cabo sus entrenamientos militares en un ambiente más real[4].

MISIONES DE COMBATE

En Iraq, en comparación con anteriores conflictos y guerras, ha aumentado en gran medida el empleo de CMP en situaciones de combate. La supuesta no participación de CMP es cada vez más confusa. Por ejemplo, se dan casos donde CMP son formalmente contratadas como «empresas de seguridad» para tareas que van desde brindar protección a blancos militares, hasta enviar soldados en situaciones de guerra frente a ataques enemigos.

Hasta la guerra contra Iraq, las misiones de combate eran, más bien, la excepción. La participación existía, pero en general era encubierta tras tareas en los sectores de logística, consultoría o misiones de combate, bajo el ofrecimiento de servicios de seguridad a empresas de recursos naturales (véase el caso de Colombia, Congo, Angola y otros). En Iraq, y a partir de entonces, las CMP han ido asumiendo cada vez más misiones de combate.

Un informe del «Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación»[5] reporta que varios centenares de ex militares contratados por Your Solutions en Honduras y Chile para trabajar en Iraq en «misiones de seguridad», han sido entrenados

militarmente. También acota que se les han proporcionado armas de combate, como ametralladoras o fusiles de asalto.

Igualmente utilizan un uniforme muy parecido al que utilizan los soldados norteamericanos en Iraq, así como chalecos antibalas y cascos. El hecho de que tenían que montar guardia en primera línea en la «Zona Verde» de Bagdad, se puede muy bien interpretar como que han sido especialmente reclutados en el extranjero para combatir en un conflicto armado. En un conflicto armado como el del Iraq resulta imposible distinguir entre fuerzas regulares combatientes y las fuerzas auxiliares que les ayudan, especialmente en situaciones en que los guardias privados dan protección a convoyes, edificios, personas o material[6].

El informe indica que otras circunstancias hacen pensar que se trata de mercenarios cumpliendo actividades ilegales:

> el hecho de que tanto las empresas de seguridad privadas implicadas en el reclutamiento como en el entrenamiento y la financiación de las personas contratadas, como los mismos hondureños y chilenos, han estado animados esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal. También cumplen con el criterio de que no son nacionales de una parte en conflicto ni residentes en un territorio controlado por una parte en conflicto, así como con el criterio de no haber sido enviados en misión oficial como miembros de sus fuerzas armadas por un Estado que no sea parte en conflicto[7].

Las amplias actividades de CMP en Iraq demuestran que la privatización de la guerra ha avanzado profundamente hasta el ámbito de las misiones de combate. Los «nuevos mercenarios» actualmente ya se encargan de buena parte de la conducción de la guerra.

PERROS DE GUERRA DUDOSOS

Tan profesionales y serias como las CMP se presenten, entre sus filas se encuentran varias empresas y figuras dudosas. La empresa sudafricana Meteoric Tactical Solutions (sede central en Pretoria, Sudáfrica) recibió un contrato por 270.000 libras de la institución británica de ayuda al desarrollo Department for International Development (DFID) para instalar guardaespaldas y choferes para el pequeño equipo del DFID en Iraq.

Dos de los dueños de la empresa, Lourens «Hecky» Horn y Harry Carlse, fueron arrestados junto al ex combatiente SAS, Simon Mann.

El 7 de marzo de 2004, fuerzas de seguridad del aeropuerto de Harare confiscaron en Zimbabwe un Boeing 727 y arrestaron a 65 mercenarios de diferentes nacionalidades. El Boeing tenía que seguir a Guinea Ecuatorial para encontrarse con otro comando de mercenarios. El grupo estaba encargado de efectuar un golpe para derrocar al Presidente. En el avión se encontraron 61 fusiles de asalto AK-47, 45.000 cartuchos, 160 granadas y mil municiones antitanque. Apenas unos meses antes, Hecky había firmado el contrato con el Gobierno inglés sobre la misión en Iraq.

Horn y Carlse fueron juzgados en Zimbabwe en el 2004, acusados de haber apoyado y organizado un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial[8]. Fueron absueltos por falta de pruebas. Sin embargo, tenían pendiente otro juicio por el pedido de extradición de Guinea Ecuatorial, donde son acusados de alta traición por haber preparado un golpe. Se fugaron a Sudáfrica, donde residen y fueron juzgados otra vez por haber violado la ley sudafricana que prohíbe «asistencia militar» a/o en otros países. Horn y Carlse pactaron con la justicia y nada más pagaron una multa y fueron condenados a cuatro años en libertad condicional. Se declararon culpables y acusaron también a Mark Thatcher, hijo de la ex Primera Ministra británica, de haber financiado un helicóptero para el intento de golpe[9]. Al parecer, el golpe se dirigía a apoderarse de concesiones de pozos petroleros en el tercer productor petrolero africano.

Simon Mann, por otro lado, era anteriormente uno de los directores de la empresa de mercenarios sudafricana Executive Outcome. De su cierre surgió Sandline, la cual fue fundada por Simon Mann, Anthony Buckingham y el ex miembro del SAS Tim Spicer. En 1998 el Gobierno británico contrató a Sandline para intervenir en Sierra Leona y esquivar el embargo de armas de la ONU. Un papel central en ello lo jugó Tim Spicer. Un año antes, Spicer y Sandline habían tenido ya graves problemas con la justicia cuando fueron contratados para una misión ilegal en Papúa-Nueva Guinea. Tenían que combatir al ejército rebelde de Bougainville, que luchaba en contra de la explotación de cobre por sus consecuencias ambientales desastrosas. No obstante, a mediados de 2003, Spicer con su nueva empresa Aegis Defense Services, recibió del Ejército de Estados Unidos un contrato por

293 millones de dólares para encargarse de la vigilancia y coordinación general de las CMP de varias empresas que trabajan en la «reconstrucción de Iraq», y para el personal del Project Managament Office (PMO) —empresa que dirige los proyectos en Iraq.

VENTAJAS DE LA EXTERNALIZACIÓN

La supuesta ventaja económica de la externalización de las tareas militares —como en muchas ocasiones se afirma—, hasta ahora no ha podido ser probada. Los casos conocidos demuestran lo contrario. La formación, la parte más costosa, sigue a cargo de los ejércitos nacionales. Por ejemplo, la formación de un Green Berret estadounidense tarda 18 meses y cuesta 257.000 dólares[10]. Si después éste se cambia a una CMP, le cuesta como mínimo cuatro veces el sueldo anterior a los que lo contratan. Eso lleva también a que cada vez más soldados con formación especial se pasen de las filas de los ejércitos oficiales a las CMP.

Los supuestos ahorros financieros a través de las CMP también son cuestionados por muchos otros motivos. Las CMP, como empresas, tienen el reto de obtener máximas ganancias con mínimas inversiones. Así, la dimensión y el alcance de la seguridad «prestada» por obligación se vuelve una cuestión de contabilidad gastos-provecho, y de bien común se transforma en una cuestión de capacidad económica. La seguridad, entonces, ya no es un bien que se mide por parámetros de derechos humanos y Estado de derecho, sino una mercancía que se mide según los criterios de oferta y demanda. Otro problema que surge con el uso de las CMP es que no les conviene la paz. Y cuando, como ocurre en Estados Unidos, la elaboración del presupuesto de defensa del Gobierno se externaliza a CMP, como Booz Allen Hamilton, Perot Systems Government Services y Miltec Systems Co., el asunto se torna irónico.

El *outsourcing* le permite a EE.UU. mantener varias guerras/enfrentamientos mayores al mismo tiempo, como lo exige su nueva doctrina militar. Y ayuda a mantener ocultas las cifras verdaderas de caídos. En total, se estima que los empleados de CMP que han muerto en Iraq podrían ser más que los 4.102 soldados estadounidenses caídos (junio 2008). Determinar una cifra exacta es extremadamente difícil. Ni los enfrentamientos

llevados a cabo por las CMP, ni sus empleados que mueren figuran en las estadísticas de las fuerzas militares estadounidenses.

Así se sustraen las intervenciones militares al control público y parlamentario. Si el control democrático y parlamentario de actividades internacionales y transnacionales en otros sectores se ha hecho extremadamente difícil bajo las condiciones de la globalización, esto ocurre en mayor medida en el sector de las CMP. Mecanismos nacionales de control desaparecen o no se desarrollan de la misma manera que la internacionalización o la privatización, mientras que al mismo tiempo no se construyen mecanismos internacionales para su control. Los gobiernos y sus ejércitos tienen que rendir cuentas en los parlamentos, las empresas privadas no. Éstas sólo tienen que rendir cuentas frente a sus contratantes. Así, con el uso de las CMP se puede también organizar misiones internacionales encubiertas. Como sólo los contratos con un volumen de más de 50 millones de dólares deben ser sometidos a aprobación en el Senado de Estados Unidos, y los contratos con CMP raras veces superan esa cantidad de dinero, pueden evadir fácilmente cualquier tipo de control democrático. Además, el Pentágono, a través del uso de las CMP en varias regiones del mundo (como, por ejemplo, Colombia), tiene también un control y acceso directo a los campos de batalla.

Miles Frechette, ex embajador de EE.UU. en Colombia lo resumió elogiando que

> es muy práctico disponer de fuerzas que no son parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Si alguien muere o lo que pase, se puede decir que no era miembro de las Fuerzas Armadas. Porque nadie quiere ver morir a soldados americanos[11].

Las CMP también sirven para evadir leyes y acuerdos internacionales. En Estados Unidos, la institución International Traffic in Arms Regulation está encargada de vigilar a las CMP, quienes según la ley de este país no deberían aceptar «trabajos críticos». Sin embargo, en la realidad no existe casi ningún control, las competencias no son claras y mientras las CMP están obligadas al silencio total frente a terceros, los militares se esconden detrás del contenido oficial del contrato firmado.

Al mismo tiempo con las actividades de las CMP se difunden también normas estadounidenses, lo que simplifica cooperaciones y alianzas militares. En los años noventa las CMP estadounidenses entrenaron a ejércitos de más de 40 países a través de acuerdos de cooperación con el Pentágono.

MERCENARIOS Y ECONOMÍA DE ENCLAVE

Se está observando un cambio en la conducción de la guerra y de las estrategias de dominio y explotación. La posibilidad de contratar expertos militares de cualquier tipo permite transformar el poder económico en poder militar y dominio económico de manera aún más rápida que en el pasado (lo que varias empresas transnacionales ya asumieron como estrategia en la competencia por el dominio).

El experto en CMP, Peter Singer, habla de «paralelos históricos» que remiten a 250 años atrás, al referirse al uso masivo de mercenarios[12]. Sin embargo, se presenta otro paralelo histórico en la estrategia militar llevada a cabo en Iraq (parecida a la de Colombia, como también al planificado envío de tropas de la Unión Europea al Congo) con la realizada para sustentar la economía de enclave de la época colonial. En esta época fueron controlados militarmente sólo puntos de interés económico y se solían sacar los recursos naturales de forma directa. La construcción de una infraestructura regional no se llevó a efecto. La población fue disciplinada con «expediciones punitivas militares».

Hoy día, después del fin de la confrontación de bloques, se dejó de lado la intención de instalar en las regiones de conflicto o los países ocupados, un nuevo orden estable y duradero, similar al de las fuerzas dominantes. Lo que sucede más allá de los enclaves controladas militarmente ya casi no importa, hasta que la explotación y exportación de recursos naturales o cierta producción específica no esté en peligro. Y si observamos los ejemplos de Kosovo, Iraq o Afganistán, el regreso del colonialismo se manifiesta también en el modelo administrativo que se construye, el cual se asemeja más a un protectorado que a una nación soberana.

En ese contexto es importante desenmascarar el discurso del África olvidada que se ha vuelto lugar común. Los medios, igual que los políticos, argumentan que «Como en África los estados se desintegran —una

cuarta parte prácticamente ya no existe—, el capital global evita el África subsahariana»[13]. Una afirmación totalmente errónea y falsa. Las economías africanas, especialmente la extracción de recursos, no están para nada «olvidadas». Al contrario, están totalmente integradas en los flujos globales de recursos y armas. Y justo las situaciones de guerra y conflicto le permiten a las empresas transnacionales apoderarse, bajo las mejores condiciones, de los recursos del rico continente. Así que el discurso racista de reducir los conflictos en el continente a cuestiones incomprensibles de supuestos grupos étnicos y tribus y el cuento del continente olvidado, les conviene a muchos para poder mantener los conflictos y la explotación, o empezar nuevos conflictos por el control de recursos. Conflictos que luego se convierten en eternos, y crean su propia economía, siempre permitiendo el flujo a bajo costo de preciosos recursos, en el caso de África, por ejemplo, petróleo, coltán, diamantes y más.

Francia, por ejemplo, es una fuerza subimperial fuerte con intereses propios definidos que actúa de manera militar en sus zonas de influencia, principalmente en África. Aparte de sus tropas especiales y la Legión Extranjera, que también operan de manera ilegal y a favor de intereses económicos y geoestratégicos específicos, también hay muchos mercenarios franceses y algunas compañias militares privadas. Un ejemplo es Secopex, que se presenta como «alternativa francesa en el mercado internacional de seguridad». Compuesta de 700 «especialistas de seguridad», civiles y ex miembros de fuerzas militares élite, ofrece un «amplio conocimiento teórico, metodológico y operacional que garantiza la calidad del servicio». Secopex tiene una red de representantes en París, Lyon, Argel, Marruecos, Costa de Marfil, México DF, Budford (EE.UU.) y Bangui (República Centroafricana) y personas de contacto en Nigeria, Angola, República Democrática del Congo, Rusia y Kuwait. En África hay además una fuerte presencia de CMP británicas y sudafricanas, casi siempre con nexos estrechos o participación propia en empresas mineras o petroleras.

IMPUNIDAD ORGANIZADA

Las CMP actúan en un «espacio de inmunidad». No siendo oficialmente parte de aparatos militares, sus empleados no pueden ser sometidos a la

justicia militar. Como civiles tendrían que ser sometidos al derecho civil local, lo que en la mayoría de las zonas de operación es casi inexistente o no tiene ninguna procedencia legal. En ocasiones, además, las CMP fijan en sus contratos una cláusula que define que sus empleados no pueden ser juzgados. Por ejemplo, en el caso de la CMP estadounidense Air Scan que en 1998, en el marco del control del territorio desde el aire de un oleoducto importante de Colombia, fue responsable del bombardeo a una población causando la muerte de 18 personas. Otro caso es el de los empleados de Aviation Development, una subempresa de Northrop Grumman, que maneja los radares estadounidenses en Perú. En 2001 se permitió que la aviación militar peruana abatiera una avioneta en zona fronteriza, matando a una misionaria estadounidense y su hija de pocos meses. Los empleados de las dos CMP nunca llegaron a tener juicio.

En Iraq tampoco ningún empleado de CMP ha sido juzgado[14] hasta la fecha. El «Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios», nombrado en 2005 por la Comisión de DDHH de la ONU, afirma que los empleados de CMP y CSP, aunque fuertemente armados, no son ni civiles ni combatientes. Ellos representan más bien una nueva forma de mercenarios, que se podrían nombrar «combatientes irregulares». La inmunidad que le otorgan las diferentes potencias a esos mercenarios se transforma en una impunidad de facto. El grupo de trabajo de la ONU advierte que los estados que contraten a semejantes empresas, posiblemente sean también responsables por los crímenes en contra de los derechos humanos que comete el personal de éstas. Frente a las dificultades de los estados en situación de conflicto para controlar las actividades de CMP y CSP, el grupo de trabajo establece que una buena parte de la responsabilidad recae en los estados desde los cuales se exportan servicios militares y de seguridad. El grupo de trabajo exige además a los estados exportadores de esos servicios, no otorgarle inmunidad a las CMP y CSP y su personal[15].

Según el artículo 47 del Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra, los mercenarios no son considerados combatientes, y en consecuencia en caso de ser detenidos, no se les considera prisioneros de guerra. Sin embargo, la Convención de Ginebra no define la actividad de mercenarios como crimen internacional, así que tampoco define obligación alguna de castigar semejantes actividades. Eso, sin embargo, se encuentra en

la «Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, el financiamiento y el entrenamiento de mercenarios», que define como actos criminales las actividades de los mercenarios así como también las de quien los recluta, usa, financia o entrena. Además, la Convención establece que «cometerá un delito todo mercenario (…) que participe directamente en hostilidades o en un acto concertado de violencia, según sea el caso»[16]. La Convención data de 1989 y después de casi veinte años ha sido ratificada solamente por unos treinta estados. EE.UU., obviamente, no forma parte de los países firmantes.

A finales de diciembre de 2007, 256 ex presos de Abu Ghraib, con el apoyo del Centro para Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights, CCR) demandaron a la empresa Caci International por tortura. Aseguran haber sido «golpeados en repetidas ocasiones, sodomizados, amenazados con violaciones, encerrados en celdas desnudos, sometidos a electrochoques y atacados por perros, entre otras humillaciones». La demanda nombra concretamente a dos mercenarios, Stephen Stefanowski (alias Big Steve) y Daniel Johnson (alias DJ) como torturadores. Los dos son acusados de haber dirigido a los militares estadounidenses ya condenados como torturadores, Charles Graner (diez años) y sargento Ivan Frederick (ocho años)[17]. Otra demanda en contra de Caci había sido rechazada en el 2004 por una corte de EE.UU. como «infundada».

NOTAS

1. Véase: Peter W. Singer, «Corporate Warriors. The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry», *International Security*, Vol. 26, Nº 3, Winter 2001-2002.
2. «DHL will in Iraq in zwei Jahren Geld verdienen», en: *Netzzeitung*, 22 de octubre de 2004. http://www.netzeitung.de/spezial/globalvillage/310250.html
3. Herbert Wulf: «Die Kriegs AG. Das blühende Geschäft mit dem Risiko». In: *Medico Rundschreiben* 2/2004. http://www.medico-international.de/ rundschreiben/0204/0204 kriegsag. asp.
4. http://www.us-statisten.de/ger/cob.html, 7 de agosto de 2005.

5. Naciones Unidas: «Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación». Misión a Honduras. 20 de febrero, 2007, p. 2.
6. Ibíd., pp. 16-17.
7. Ibíd., p. 17.
8. *The Independent,* 29 de marzo de 2004.
9. «Trio to testify against Thatcher». BBC News, 17 de noviembre de 2004. news.bbc.co.uk
10. Carlo Bellinzona y Franz Gustinich, «In guerra senza uniforme», *Limes*, mayo de 2004.
11. Paul De la Garza und Davis Adams: «Military aid… from the private sector», *St. Petersburg Times,* 3 de diciembre de 2000.
12. P.W. Singer, «Warriors for hire in Iraq», en *Salon* (www.salon.com), 15 de abril de 2004, S. 28
13. Erhard Eppler. *Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmark? Die Privatisierung und Kommerzialisierung der Gewalt*, Francoforte en el Meno, 2002, pp. 56-57.
14. Naciones Unidas: «Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación», 13 de septiembre de 2006, p. 15.
15. Sobre el Grupo de Trabajo véase: http://www2.ohchr.org/english/issues/ mercenaries/ index.htm
16. «Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios». Publicada por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas -DPI/1049 -13336. Diciembre de 1990 -5M.
17. TeleSUR: 20 de diciembre de 2007. Véase también: District Court Columbia, Case nº 05-cv-1165 (JR), ampliación de la acusación del 17 de diciembre de 2007. http://ccr-justice.org/files/ Saleh_ FourthAmendedComplaint_12_07.PDF

CAPÍTULO IV
GUERRA Y PAZ, S.R.L.
EJÉRCITOS Y CORPORACIONES MILITARES PRIVADAS COMO ACTORES DE LAS NUEVAS GUERRAS

BORIS KANZLEITER

Además de los ejércitos estatales regulares, en los últimos años se han desarrollado compañías militares privadas (CMP) como actores de la guerra. Lugares de acción, formas de organización y funciones representan una envergadura ampliamente especializada. Las corporaciones militares privadas ofrecen, por ejemplo, unidades armadas que custodian valiosos campos de extracción petrolera o minas de diamantes para las compañías internacionales en situaciones de guerra civil. En África y Asia los ejércitos privados reclutados entre antiguos militares altamente calificados son contratados por gobiernos o rebeldes, y juegan un papel decisivo en operaciones bélicas. Empresas privadas de inteligencia ofrecen a fuerzas beligerantes, reconocimiento aéreo y especialistas en informática. Generales del ejército retirados venden su especialización estratégica en el mercado internacional y capacitan a ejércitos de estados que están sometidos a embargo por la ONU. Asimismo, el *peacekeeping* (mantenimiento de la paz) de las Naciones Unidas es asumido hoy día en parte por corporaciones privadas a las que pertenecen antiguos policías.

La formación y el mantenimiento de campos militares de las tropas de intervención estadounidenses son facilitados en todo el mundo o en gran parte de él, por corporaciones privadas. Para el transporte de las tropas se recurre a líneas aéreas privadas[1].

Cuando los miembros del Center for Public Integrity intentaron conseguir un resumen de las crecientes actividades de los ejércitos privados y los servicios militares privados en el otoño de 2002, llegaron a un total de noventa empresas que funcionan mundialmente en ciento diez países[2]. En realidad, el número de CMP debería ser mucho más alto, pues sólo una parte específica del negocio es realizada con compañías legales o semilegales con

nombre y dirección. Muchas de estas empresas disponen de las mejores relaciones con el mercado negro internacional de armas. Los límites entre las misiones legales y los mercenarios ilegales son difíciles de establecer. A esta complejidad se agrega el hecho de que están generalmente organizadas en forma de red. Una empresa se provee a sí misma de filiales en otros lugares. O viceversa. Diversas pequeñas empresas constituyen una red mediante un acuerdo, que en el futuro podrá ser visto de una forma totalmente distinta. Pero algo es muy cierto: «Con suficiente dinero cualquiera puede armar una fuerza militar poderosa hoy día», declara Stephen Metz, analista del Strategic Studies Institute (Instituto de Estudios Estratégicos)[3].

NEOLIBERALISMO, NUEVAS GUERRAS Y TIPOS DE CMP

El auge de los ejércitos privados es el resultado directo de una serie de eventos políticos y económicos comenzados con el fin de la Guerra Fría, o que han pasado a un plano más importante desde entonces. En este sentido, la aplicación mundial de un modelo neoliberal capitalista desde mediados de los años setenta es un factor clave[4]. En el paradigma del neoliberalismo el imperativo de la privatización vale también para la milicia, así como para otros sectores que eran anteriormente funciones del Estado, como por ejemplo el sistema educativo y de salud. «Sólo aquellas funciones que deben ser cumplidas por el mismo Ministerio de Defensa deberán mantenerse allí establecidas», declara el ministro de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, en relación con la reestructuración del sector castrense estadounidense. «Todas las funciones que puedan ser cumplidas por el sector privado no forman parte de las tareas fundamentales de las instituciones gubernamentales», puntualiza Rumsfeld[5].

Esto significa más concretamente que una mayor parte de las misiones del Ejército estadounidense está siendo asumida hoy día por corporaciones militares privatizadas. Se privatizó particularmente el permiso de logística, transporte y suministro, y fue delegada a corporaciones que a menudo fueron fundadas por antiguos altos generales. Mientras para la Operación Tormenta del Desierto, realizada en 1991 contra Iraq, sólo uno entre cincuenta miembros del cuerpo de expedicionario estadounidense era miembro de una CMP, para fines de los años noventa ya fue uno entre diez,

para entonces un 10%. Según cálculos de la Oficina General de Contabilidad estadounidense (General Accounting Office, o GAO), 10% de los 13,8 millardos de dólares estadounidenses utilizados entre 1995 y marzo de 2000 para las misiones militares de Estados Unidos en los Balcanes, fueron dirigidos a las CMP[6]. «Nadie sabe con seguridad cuán grande sea esta industria secreta», escribió el *New York Times*, «pero algunos expertos militares estiman el mercado global en los cien millardos de dólares»[7].

Por supuesto, no sólo los ejércitos regulares forman componentes privatizados. El fin de la Guerra Fría y la subsiguiente imposición global del modelo capitalista neoliberal tienen como consecuencia el agravamiento de las disparidades socioeconómicas regionales y la exclusión social de cada vez más partes de la sociedad mundial. La riqueza es monopolizada en menos manos mientras la pobreza gana un mayor terreno, y las estructuras de equilibrio y compromiso social son socavadas. Los llamados «Estados débiles» en las periferias del mercado mundial son progresivamente menos capaces de integrar políticamente las zonas socioeconómicas cuyas tendencias están enfrentadas. Como consecuencia, las fragmentaciones sociales y políticas aumentan, lo que se exterioriza a menudo en forma de un fundamentalismo religioso o étnico gracias a la ausencia o la exclusión de alternativas de emancipación.

Con esta tendencia mundial, se fomentó la creación de constelaciones de conflicto que se denominan en la actualidad «nuevas guerras»[8]. Allí surgen actores no estatales como «señores de la guerra», paramilitares o grupos irregulares armados de este tipo, que impulsan un régimen de economía de guerra sustentado por ellos mismos. Este régimen se apoya en el control de la explotación de las riquezas de los suelos, el robo o el contrabando, mientras la estatalidad constantemente es socavada en estas regiones por el mantenimiento de un monopolio de la violencia. En estas economías de guerra las CMP son solicitadas como combatientes, tropas coloniales para las compañías transnacionales o escoltas para las organizaciones de ayuda humanitaria.

No es extraño que las CMP cambien de cliente y de bando en el transcurso del conflicto. Con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y las operaciones militares de Estados Unidos (y sus correspondientes aliados) en Afganistán e Iraq, se agudizaron los

numerosos conflictos regionales, así como las «necesidades de seguridad», imaginarias o reales, que crearon nuevos ámbitos de misiones para las CMP. «La guerra contra el terrorismo es una garantía total de empleo para estos jóvenes», opina David Des Roches, vocero de la Defense Security Cooperation Agency (Agencia de Cooperación para la Defensa), de la división del Ministerio de Defensa estadounidense que coopera con corporaciones militares legales en ese país[9].

Pero no sólo ha crecido la demanda, también la oferta de las corporaciones militares privadas ha aumentado mucho. En la vía hacia la reestructuración y disminución de los ejércitos regulares en los años noventa, fueron excluidos del servicio unos seis millones de soldados a nivel mundial, entre ellos muchos oficiales. A ello se agregan cientos de miles de antiguos miembros de los servicios secretos, particularmente en los países del Occidente europeo, que quedaron desempleados con el fin de la Guerra Fría.

Una gran parte de estos militares y miembros de los servicios secretos encontró nuevas fuentes de empleo en el creciente sector de la industria de las CMP, así como las empresas privadas de seguridad. En este sentido, un 70% de los antiguos miembros de la antigua KGB soviética presuntamente trabajan hoy en el sector de las CMP. Del Ejército soviético, que anteriormente sufría por la falta de recursos financieros, divisiones completas de tropas se han puesto a salvo en la economía privada. La empresa rusa Sukhoi ofrece aviones de combate junto con pilotos y personal en tierra, una «aviación militar pequeña pero completa», como declara el investigador Thomas K. Adams. En cuanto a las misiones en Etiopía a finales de los años noventa, los pilotos de Sukhoi presuntamente combatieron a otros ex pilotos militares soviéticos, que volaban para la aviación militar de Eritrea[10].

El experto militar P. W. Singer intentó desarrollar una tipología de las CMP en la revista especializada *International Security*. Según Singer, es pertinente separar tres sectores el uno del otro. En un primer sector se encuentran corporaciones militares privadas que intervienen directamente en el campo de batalla y combaten armadas. Éstas son reclutadas generalmente por gobiernos, consorcios o actores no estatales armados, que sólo disponen de personal insuficientemente calificado o de escaso material

bélico. El segundo sector está compuesto por las CMP que brindan asesoría militar y capacitación. La diferencia decisiva en relación con el primer tipo radica en que los miembros de estas firmas no participan directamente en las operaciones militares. Un tercer sector son finalmente las CMP que ofrecen logística, apoyo técnico y transporte para los ejércitos regulares o irregulares.

A continuación se presentarán ejemplos correspondientes a cada tipo. Así, se distinguirá entre ellos, ya que se considera relevante separar los tipos entre sí, y simultáneamente se establecerán las coincidencias que existen. No se tratará sobre los mercenarios como se conocen a partir de la guerra en Yugoslavia. Allí estaban activos en todos los bandos, varios miles de beligerantes internacionales como combatientes del frente. En este sentido, unos cien extremistas de derecha provenientes de Alemania, por ejemplo, combatieron del lado de los nacionalistas croatas, bosnio-musulmanes y albanos[11]. Del lado de los serbio-bosnios entró en acción una tropa de igualmente unos cien nacionalistas griegos, que luego de la toma de Srebrenica izaron en el lugar tanto la bandera serbia como la griega[12]. El ejército bosnio-musulmán estuvo protegido por unos tres mil *muyahidines* de países islámicos, que fueron integrados en una brigada del Ejército[13]. A diferencia de las CMP, la motivación prioritaria de estos beligerantes internacionales era una protección con base ideológica, política o religiosa de una de las partes en guerra, mientras que las CMP están interesadas principalmente en las ganancias. No obstante, el límite sigue siendo débil, pues la actividad comercial de muchas CMP también está evidentemente circunscrita a apreciaciones políticas, así como los recursos ideológicos del nacionalismo étnico o el fundamentalismo religioso son utilizados para disimular las motivaciones económicas.

LAS CMP EN EL FRENTE

Quizá el ejemplo mejor estudiado y más conocido de una CMP que participó como ejército privado en frentes de batalla es la corporación militar privada Executive Outcomes (EO)[14]. A pesar de que EO sólo contaba con dos mil miembros, la tropa tuvo una influencia decisiva en el transcurso del conflicto bélico en Angola, Sierra Leona y otros países de África

subsahariana durante los años noventa. EO fue fundada en 1989 por Eeban Barlow, un antiguo oficial de reconocimiento y funcionario del servicio secreto en una unidad especial del Ejército sudafricano, que había quedado desempleado con sus homólogos al finalizar el régimen del *apartheid*.

En el comienzo de los años noventa, Barlow y su tropa de EO (reclutada principalmente antiguos miembros de unidades especiales sudafricanas) asumieron misiones de capacitación en Sudáfrica. En 1993, los ex miembros de la unidad especial británica Special Air Service (SAS), Tim Spicer y Anthony Buckingham, un antiguo oficial de la unidad especial de la Marina británica SMS, tomaron parte en el negocio junto con Barlow e hicieron de EO una empresa de capital propio con sede en Londres. Buckingham trabajaba en el negocio petrolero y contrató a EO para proteger sus campos petroleros en Angola, donde el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), regente, y la tropa rebelde de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) se enfrentaban en una guerra civil.

Barlow reunió una tropa con 50 antiguos oficiales del Ejército sudafricano y dirigió junto con seiscientos soldados de las fuerzas de combate regulares angoleñas un ataque exitoso contra la Unita, con el que pudo retomar el dominio de los campos petroleros de Soyo. Finalmente, EO asumió la protección de los campos petroleros por encargo del Gobierno angoleño mediante un contrato de 140 millones de dólares. Tras esta victoria, EO protegió la mina de diamantes de Canfufo, en Lunda Norte, en septiembre de 1993. Según parece, los mercenarios percibieron otros 40 millones de dólares por esta misión. Miembros de EO capacitaban a soldados indígenas y atacaban también a las unidades de la Unita cuando lo consideraban necesario para la protección de las minas. Con ello, se produjeron combates más agudos con docenas de muertos. En 1998, EO comenzó a capacitar a soldados del Ejército regular por órdenes oficiales del gobierno del MPLA.

Para este momento, sin embargo, EO ya había prolongado sus actividades más allá de las fronteras de Angola. Ya para marzo de 1995, envió un equipo a Sierra Leona para proteger las minas de diamante de Kono que habían sido ocupadas por los rebeldes. En sólo once días pudo desplazarlos. En los combates, los mercenarios de Sudáfrica utilizaron los aparatos

más modernos. En el este de Europa, EO había adquirido por lo menos siete helicópteros de combate y diez aviones (interceptores, de protección aérea, para el transporte de tropas, cazas a reacción). Además, tanques de infantería y tanques anfibios de transporte que pertenecían al pequeño pero potente ejército de la EO.

Luego de las misiones en Angola y Sierra Leona, las tropas de EO fueron utilizadas en Kenia, Zambia, Rwanda, Zaire y Uganda. En este sentido, sus actividades ya no sólo se limitaban a las misiones militares. La CMP articuló una extensa red de filiales que participaban en parte directamente en la explotación de las riquezas que habían sido conquistadas o custodiadas por sus mercenarios. Simultáneamente, creó empresas con campos de actividad relacionados con sus actividades militares: Advanced System Communication disponía de sistemas de comunicación y satélites; Capricorn Air ofrecía capacidades de transporte aéreo. OPM Support Systems brindaba asesoría jurídica y de inversiones e impuestos. La tropa de mercenarios se había convertido en una verdadera empresa económica bajo el auspicio de una sociedad *holding*. En efecto, la propia EO fue disuelta en 1998. El Gobierno sudafricano decretó una ley, por presión internacional, que prohibía a sus ciudadanos el trabajo como mercenarios. Entretanto, en Gran Bretaña las actividades de EO se hicieron públicas y habían sido duramente criticadas por la prensa.

Sin embargo, el fin de EO era sólo el comienzo de una amplia actividad comercial. Spicer fundó la CMP Sandline como sucesora de EO y desde entonces ha asumido una serie de misiones de combate. Simultáneamente, Spicer comenzó a entrar en la discusión abierta y a defender la función de las CMP, argumentando que éstas podrían ayudar a los gobiernos legítimos en la lucha contra los rebeldes. Asimismo expresó, en una conferencia en el verano de 2002 que consideraba razonable la utilización de las CMP en la protección de la «oposición iraquí» o la «alianza del Norte» en Afganistán, y que no podía imaginar que alguien pudiese estar «en contra de ello».

En ese aspecto no estaba tan equivocado. Luego de largas discusiones sobre las actividades de las CMP, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña ya había publicado un documento para febrero de 2002 que preveía un reglamento jurídico para las CMP en ese país. El ministro

de Relaciones Exteriores, Jack Straw, declaró que «los Estados y las organizaciones internacionales» buscarían el apoyo del «sector privado» para cumplir con tareas que «anteriormente estaban reservadas exclusivamente a la milicia». Straw afirmó que podía imaginar, por ejemplo, que las CMP pudiesen utilizarse en las misiones de paz de la ONU, pues eran más económicas que las tropas regulares[15].

También detrás del frente, las CMP están vinculadas con la guerra. Quizá el ejemplo más claro para el segundo tipo de CMP (según Singer), que otorgan asesoría y capacitación militar, lo constituye la empresa Military Professional Ressources Incorporated (MPRI) con sede en Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos. MPRI fue fundada en 1988 por Carl Vuono —quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense entre 1987 y 1991—, el general Harry E. Soyster —antiguo jefe del servicio secreto militar de Estados Unidos—, y Crosbie Saint —antiguo comandante del Ejército estadounidense en Europa—. En el directorio de la empresa se encuentran otros 20 antiguos altos oficiales de Estados Unidos. El general Harry E. Soyster afirmó con orgullo: «Aquí tenemos más generales por metro cuadrado que en el Pentágono». Setecientos ex militares en total trabajan contratados en MPRI. La empresa puede contar adicionalmente con doce mil antiguos militares estadounidenses, según los cálculos propios, que pueden ser contratados para misiones[16].

La misión de la empresa es definida por Soyster de la siguiente manera: «Cuando nos dirigimos a algún lugar es porque, bien hemos sido enviados por el gobierno estadounidense, o bien hemos sido contratados por otro gobierno. No me avergüenza decir que lo hacemos por el dinero. Pero lo hacemos correctamente»[17]. MPRI es activa a nivel mundial. Las misiones encargadas en la página web oficial (www.mpri.com) son enviadas a Taiwan, Corea del Sur, Nigeria, Sudáfrica, Kuwait y los Balcanes. Se sabe que MPRI también ha trabajado en diversos países de Latinoamérica (entre ellos Colombia) y en las antiguas repúblicas soviéticas.

MPRI no es sólo un ejemplo de la comercialización de la conducción de la guerra en la época del neoliberalismo, sino que también muestra cómo el uso de empresas militares privadas facilita la conducción de la guerra a los gobiernos cuando el empeño del ejército oficial es políticamente pro-

blemático. Mientras se utilicen corporaciones militares privadas en lugar de alianzas regulares, la conducción política puede desprenderse de su responsabilidad inmediata en operaciones determinadas. Las corporaciones militares podrían ser empleadas como una forma oscura de política exterior y de influencia internacional «privatizada».

Ejemplo de ello es la, quizás hasta ahora, más discutida utilización de MPRI en Croacia. Luego de que esta república de la antigua Yugoslavia declarara su independencia en 1991, el gobierno nacionalista de Franjo Tudjman movió cielo y tierra para formar un potente ejército regular de unidades policiales y paramilitares reclutadas espontáneamente. Entretanto, la minoría serbia que habitaba en el este de Croacia y que se oponía a la secesión de la república, formó la autónoma región República Serbia de Krajina y deseaban la unificación con Serbia. No obstante, los nacionalistas croatas calificaban a estas regiones como parte inalienable del recién fundado Estado y erigían la conquista militar de las zonas estratégicamente significativas como un objetivo nacional.

Mientras (a pesar de un embargo de armas ordenado por Naciones Unidas en septiembre de 1991 sobre todas las repúblicas que formaban parte de Yugoslavia), Croacia hizo abundante uso de armas provenientes del mercado negro internacional abastecidas por los aliados bajo manga. El ejército recién formado necesitó también de capacitación militar y asesoría estratégica. Una parte de esta misión fue asumida por MPRI, que firmó un contrato con el gobierno croata. El acuerdo fue apoyado por el gobierno estadounidense bajo la presidencia de Bill Clinton, que para ese entonces también había entrado en el ámbito militar con mayor fuerza en la guerra de la ex Yugoslavia y, entre otras cosas, intentó repeler mediante bombardeos de la OTAN a las tropas serbias en Bosnia-Herzegovina en noviembre de 1994.

En agosto de 1995 el Ejército croata se dispuso, después de una larga preparación, para la Operación *Oluja* (Tormenta) e ingresó en sólo pocos días en la República Serbia de Krajina, que fue vencida casi sin combates. A pesar de ello se llegaron a cometer crímenes de guerra contra la población civil serbia y una extensa «limpieza étnica». El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY) en La Haya establece en el escrito de la demanda realizada contra Ante Gotovina, uno de los generales

croatas responsables, que entre ciento cincuenta mil y doscientos mil civiles serbios (casi la población serbia total de Krajina) fueron desplazados sistemáticamente por las tropas croatas, sus casas fueron destruidas y sus propiedades saqueadas. Según estimaciones del ICTY, en la Operación *Oluja* fueron asesinados más de cien civiles[18]. Los cálculos de la organización de desplazados serbios, Veritas, sitúan en casi dos mil las víctimas de las acciones militares, en las cuales participaron más de cien mil soldados y policías croatas[19].

Según las declaraciones de MPRI, la misión de los miembros enviados a Croacia consistía únicamente en la capacitación de los oficiales croatas en cuanto a «relaciones civiles-militares». De ninguna manera se había realizado un adiestramiento en cuanto a tácticas o armas en los siete meses previos a la Operación *Oluja*, declaró Soyster a la revista *Time* en enero de 1996[20]. Posteriormente crecieron las dudas con respecto a esta declaración. Si se hubiese tratado de un mero adiestramiento en «cuestiones de derechos humanos», como afirma MPRI, posiblemente la empresa no hubiese enviado una tropa de alto grado hacia Adria. Según un informe del experto en asuntos militares Ken Silverstein publicado en la prestigiosa revista *Nation Magazine*, el general Richard Griffitts y el general Crosbie Saint participaron junto con el general Vuono, en el comando de quince cabecillas de MPRI, todos antiguos altos militares de la fuerza de combate de Estados Unidos.

En las avanzadas de la Operación *Oluja*, el equipo de MPRI mantuvo presuntamente un contacto cercano con los oficiales croatas que comandaron el golpe contra la Krajina serbia. Así, según noticias de un oficial de conexión croata, el general Vuono se reunió unas diez veces con el «arquitecto» croata de la ofensiva, el general Varimar Cervenko, en los cinco días previos a la Operación *Oluja*[21]. Por lo tanto, no resulta sorprendente que, como fue constatado por los observadores, dicha operación siguiese las típicas tácticas estadounidenses con movimientos integrados de aire, artillería e infantería. «La ofensiva en la Krajina se asemejaba a una operación del manual de la OTAN», opina Deborah Avant, una experta en corporaciones militares privadas[22]. Y el general de cuatro estrellas Charles Boyd, el ex número dos del Pentágono en Europa, comentó: «Carl Vuono y Butch Saint son mercenarios que hicieron un muy buen trabajo para los croatas»[23].

Una nota reveladora de la ayuda militar de MPRI al Ejército croata se encuentra en ciertos datos personales. Según revelaciones del *Jane's Defense Weekly*, uno de los «planificadores clave» de la Operación *Oluja,* capacitado por MPRI, era el albanokosovar Agim Ceku, quien sirvió en el ejército croata como general en los años noventa. En la guerra de Kosovo de 1999, Ceku resurgió como jefe del Estado Mayor del ELK (Ejército para la Liberación de Kosovo), que luego de la retirada de las tropas serbio-yugoslavas desplazó por lo menos a doscientos mil serbios y gitanos de la provincia. Hoy día, Ceku es el jefe de la tropa de seguimiento formada por la administración interina de la ONU en Kosovo, la Kosovo Protection Corps (KPC), cuyos miembros son inculpados por numerosas actividades terroristas y criminales[24].

Asociación privada-pública en la «Guerra contra el terrorismo»

Mientras CMP como MPRI ejercen una influencia encubierta en la política exterior del Gobierno estadounidense y con ello siguen más bien exigencias políticas, un gran número de ellas es utilizado con motivos comerciales de disminución de costos. Particularmente, el *outsourcing* y la privatización de sectores de logística, del transporte y del abastecimiento de tropas, constituye un mercado continuamente creciente para las CMP. También para éstas (el tercer tipo de CMP según Singer) se puede esgrimir un ejemplo de Estados Unidos.

Se trata de la empresa Kellogg, Brown & Root, hija del consorcio Halliburton Co. Ésta se encuentra entre las empresas más grandes del mundo en equipos para la extracción petrolera, y fue dirigida durante algún tiempo por el actual vicepresidente de Estados Unidos y antiguo ministro de Defensa de ese país, Dick Cheney. Un hecho nada insignificante, como se ha evidenciado[25].

Kellogg, Brown & Root es uno de los grandes ganadores de la «guerra antiterrorismo», declarada por Estados Unidos a nivel mundial desde el 11 de septiembre de 2001. Con la aprobación del Logistics Civil Augmentation Program (Programa de Aumento Logístico Civil, o Logcap), que fue dispuesto por el Pentágono en diciembre de 2001 de cara a las crecientes

tareas a escala mundial, la empresa Kellogg, Brown & Root asumió una parte de las misiones para la nueva construcción de instalaciones militares de Estados Unidos en todo el mundo.

Así, fueron precisamente miembros de Kellogg, Brown & Root quienes construyeron rápidamente la cárcel para talibanes capturados y presuntos combatientes de Al Qaeda en marzo de 2002, por 16 millones de dólares, en el cuartel militar de Bahía de Guantánamo, en Cuba. Simultáneamente, la empresa edificó bases militares del Ejército estadounidense en Afganistán, Pakistán, Kirguistán y Uzbekistán. En la primavera de 2002 se le habían conferido misiones del Ejército estadounidense por un volumen total de negocios que asciende a los 740 millones de dólares. La empresa no trabaja realmente de manera exclusiva para el Ejército estadounidense. En septiembre de 2001 cerró un trato más de 283 millones de dólares con Rusia para destruir los cohetes intercontinentales en sus silos. También el Ejército británico firmó un acuerdo por 420 millones de dólares con la empresa para pertrechar una flota de transportadores de gasolina.

El ejemplo de Kellogg, Brown & Root demuestra cómo en el transcurso de los años anteriores la estructura de las milicias regulares se ha desplazado en dirección a la conducción de la guerra privada, en la cual compañías significativas, y no sólo la industria armamentista, desarrollan un interés particular en un estado de guerra ilimitado y permanente. Bien sea Somalia, Haití, Kosovo, Bosnia o Arabia Saudita y Vietnam, Kellogg, Brown & Root estaba y está donde se retiren los militares estadounidenses.

La principal esfera de acción era representada ya en los años noventa por la facilitación de servicios como el suministro de alimentos.

El cambio en la esfera de acción de Kellogg, Brown & Root alude a la cada vez mayor integración funcional entre empresas privadas y los ejércitos en las misiones. Ya entre 1962 y 1972, el Pentágono le asignó encargos por decenas de millones de dólares. Sin embargo, para entonces las misiones se referían a trabajos que no se encontraban en el campo de batalla. Así, los trabajadores de la empresa construyeron calles, pistas de aterrizaje y muelles en Vietnam que posteriormente fueron utilizados militarmente. Esta empresa era una de las principales contratistas en la edificación de bases aéreas en la isla Diego García, en el Océano Índico.

Con la ofensiva de *outsourcing* a principios de los años noventa cambiaron las posiciones de las misiones. En 1992, Kellogg, Brown & Root logró un primer acuerdo de cinco años con la U.S. Army Corps of Engineers, mediante el cual la empresa trabajaba inmediatamente con los GI en zonas de misiones del Ejército estadounidense y actuaba dentro de sus instalaciones militares. Hoy día, son precisamente los miembros de Kellogg, Brown & Root quienes construyen las instalaciones militares en las regiones de los conflictos. Gracias al proveedor, la empresa se convirtió en parte importante de la maquinaria bélica.

La integración de empresas privadas y ejércitos regulares en una Private Public Partnership (Asociación Pública Privada) *sui generis* se evidencia también en la mixtura de su personal. Al igual que en la MPRI, en la mayoría de las CMP son antiguos militares o políticos de alto rango quienes se encuentran en las presidencias de estas compañías y se apoderan de millones de dólares en su participación. En este sentido, Kellogg, Brown & Root no es una excepción. Como ministro de Defensa durante la presidencia de George H. Bush, Dick Cheney contrató a esta empresa en 1992 por un total de 8,9 millones de dólares para elaborar un estudio acerca de las posibilidades de privatizar los trabajos rutinarios del Ejército estadounidense. Una de las principales beneficiadas era la misma empresa, ya que en los años siguientes asumió misiones que ella misma había descrito como posibles rangos de acción de las CMP. En 1995 Cheney cambió la política por la junta directiva de Halliburton Co., la empresa madre de Kellogg, Brown & Root. Allí, Cheney obtuvo en pocos años más de 30 millones de dólares en sueldos, acciones y un arreglo, hasta que volvió a ingresar a la política tras la victoria electoral de George W. Bush y se convirtió en vicepresidente de Estados Unidos.

Por supuesto, no sólo fue en la guerra contra el «terrorismo» que Halliburton Co., a través de su empresa hija Kellogg, Brown & Root, ganó billones de dólares. Bajo la dirección de Cheney la empresa realizó también negocios en los años noventa con «Estados viles» como Libia e Irán, hoy señalados como candidatos amenazantes de la civilización. Sólo Iraq, que fue bombardeado en 1991 bajo la responsabilidad de Cheney como ministro de Defensa, pudo adquirir un par de años después de la Halliburton Co., maquinaria para campos petroleros por un valor de 73 millones

de dólares. El embargo comercial de aquel entonces fue violado, pues se contrató a dos filiales para el suministro. Los propios intereses económicos parecen ser más importantes para los líderes propagandistas de la guerra permanente conducida con mucha ostentación ideológica, que la presunta provisión defensiva en servicio de la «civilización».

¿Caída del Estado o nuevo régimen de control?

El surgimiento de las CMP como actores de la conducción de la guerra (aunque también del «mantenimiento de la paz») representa nuevos retos para el análisis de constelaciones bélicas y mecanismos de control social. Es de destacar que el Estado nacional ha perdido su monopolio de la violencia en las regiones donde se disputan nuevas guerras, como en partes del África subsahariana, Asia central y parte de los Balcanes. En lugar de los estados, brotan ahora actores de la violencia privada en forma de «señores de la guerra» o paramilitares que se sirven de las CMP como proveedores calificados de servicios de violencia. Una nota interesante es que esto se aplica también a los nuevos regímenes de control de la «comunidad internacional» que se constituyen en forma de protectorados en los Balcanes, o en Afganistán e Iraq. El gobierno estadounidense contrató por ejemplo a la CMP DynCorp en el marco de misiones de las Naciones Unidas para a la capacitación de policías en Bosnia-Herzegovina, Kosovo y el Timor Oriental[26]. Asimismo, el presidente designado en Afganistán por parte de la «comunidad internacional», Hamid Karsai, es protegido, desde noviembre de 2002, por guardaespaldas de DynCorp[27].

Si se observa el fenómeno de las corporaciones militares privadas en sus diferentes formas de aparición junto con la rápida extensión de servicios de seguridad privados en países orientales industrializados, y más aún en los «Estados de transformación» del Este europeo, se puede afirmar que se proyectan tendencias marcadas para una reformulación en el mantenimiento de controles sobre la sociedad. Hablar de un «fin de la estatalidad» sólo sería correcto en una forma limitada, pues generalmente es el mismo aparato estatal el que comercializa el ejercicio de la violencia. En este sentido, el aparato estatal abre el espacio para las corporaciones privadas de violencia sin ceder los controles. A ello se agrega también que a

pesar de la oposición inicial, hoy se está pensando en la ONU y en muchos gobiernos, cómo pueden ser reguladas y juzgadas las actividades de las CMP. En estados particulares como Estados Unidos ya existen reglamentos. Allí, la Secretaría de Estado autoriza a las CMP establecidas en el país a actuar para gobiernos extranjeros bajo la ley de exportación de armas (International Traffic Arms Regulation Law)[28].

De esta forma se presenta un panorama de conflictos actuales en el que gobiernos rígidos con fuerzas de combate regulares y el apoyo de las CMP se enfrentan a actores de violencia privada como los señores de la guerra, que por su parte también son apoyados por las CMP, dentro de las ruinas de los «Estados débiles» devastados por la globalización neoliberal y por la guerra. Debido a que se están produciendo movimientos de refugiados no deseados y que se está ejerciendo el derecho al control y a la intervención por parte de los poderes hegemónicos mundiales de los centros capitalistas, el mantenimiento de la paz para la contención de la desestabilización es igualmente asumido cada vez más por las CMP que, además de la ayuda para el transporte de organizaciones humanitarias, protegen contra los saqueos y posibilitan a las compañías transnacionales el aprovechamiento de las riquezas del suelo en las regiones de la guerra.

NOTAS

1. www.flightwatch.net proporciona una sinopsis sobre las líneas aéreas civiles que se prestan para el transporte militar.
2. The Center for Public Integrity: «Making a Killing. The Business of War» (serie de once artículos); www.icij.org/dtaweb/icij_bow.asp (2002).
3. Stephen Metz. *Armed Conflict in the Twenty-first Century. The Information Revolution and Postmodern Warfare*, Strategic Studies Institute Report, Carlisle, Pa., abril de 2000. http://carlisle-www.army.mil/usassi/ssipubs2000/conflict/conflict.html
4. La política de la reestructuración neoliberal fue diseñada con la crisis del capitalismo fordista de la posguerra en los años setenta y fue aplicada por gobiernos neoconservadores (Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos), así como por las

compañías transnacionales. Después del colapso de los Estados socialistas reales de 1989 a 1991, se impuso también inmediatamente la política asumida por las fuerzas socialdemócratas a nivel mundial. En el fondo, ésta estaba dirigida a una desregulación de los mercados internacionales de capitales y financieros que apoyaba ofensivas neoliberales sobre una subversión básica de las relaciones de las fuerzas sociales en beneficio de las compañías transnacionales. Las posibilidades de participación económica, social, política y estatal se vieron fuertemente limitadas (Ref.: Hirsch, Joachim: «Die Globalisierung der Gewalt» (agosto, 2002); www.links-netz.de)

5. Citado en Kathleen Hennessey. «A Contract to Spend. A company with powerful Washington connections stands to earn millions supporting the Pentagon's War on Terror», 23 de mayo de 2002.; www.motherjones.com
6. Renae Merle. «More Civilians Accompanying U.S. Military. Pentagon Is Giving More Duties to Contractors», *Washington Post*, 22 de enero de 2003.
7. Leslie Wayne.«Going Backwards. America's For-Profit Secret Army», *New York Times*, 13 de octubre de 2002.
8. Para el concepto «nueva guerra» revisar: Münkler, Herfried, *Die neuen Kriege*, Hamburg 2002; Kaldor, Mary, *Neue Kriege und alte Kriege*. *Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung*, Frankfurt A.M., 2000.
9. Citado en: Esther Schrader. «US Companies Hired to Train Foreign Armies», *Los Angeles Times*, 14 de abril de 2002.
10. Adam Singer y P. W. Singer, «Corporate Warriors. The Rise and Ramifications of the Privatized Military Industry», *International Security*, Vol. 26, nº 3, Invierno 2001/2002.
11. Ministerio de Asuntos Exteriores: «Mercenarios alemanes en conflictos armados. Respuesta del gobierno alemán ante la pequeña pregunta del diputado Carsten Hüber», entre otros. Publicación del Bundestag nº 14/6205 del 30 de mayo de 2001.
12. Michas Takis, *Unholy Alliance*. *Greece and Milosevic's Serbia in the Nineties*, Texas, 2002.
13. International Crisis Group. «Bin Laden and the Balkans. The Politics of Anti-Terrorism» (9 de septiembre de 2001); www.crisisweb.org
14. Para la EO ver Ralf Bendrath: *Söldnerfirmen in Afrika. Neue politische Vergesellschaftungsformen jenseits des modernen Staates*, Berlin, 1998 (ensayo no publicado postulado para el Premio Christiane-Rajewski para la reivindicación de las nuevas generaciones en 1998 del *Arbeitsgemeinschaft Friedens und Konfliktforschung*); Anne Jung, «Angola im dritten Jahrzehnt des Krieges, Verkauf von Diamanten und Öl an den Norden finanziert den Krieg», *Analyse & Kritik*, 13 de abril de 2000; Laurence Mazure. «Die Deregulierung der militärischen Gewalt. Südafrikanische Söldner im Dienste von Regierungen und Privatwirtschaft», *Le Monde Diplomatique*, 10 de octubre de 1996; Peter Linke: «Boom des modernen Söldnertums. Konfliktregulierung, wenn es dem "Shareholder value" nützt», *Freitag*, 26 de mayo de 2000; Thomas K.

Adams, «The New Mercenaries and the Privatization of Conflict», *Parameters*, verano 1999, pp. 103-116.
15. «Making a Killing. The Business of War. Marketing the "New Dogs of War"» (30 de octubre de 2001); http://www.icij.org/dtaweb/icij_bow.asp?Section=Chapter&Chap Num. 3
16. Ídem.
17. Esther Schrader, art. cit.
18. The International Crime Tribunal for the Former Yugoslavia, Case nº IT-01-45-I; www.un.org/icty
19. «Sest Godina od *Oluje*», *B92*, 4 de agosto de 2001; www.b92.net
20. Mark Thomson. «Generals for hire», *Time Magazine*, 15 de enero de 1996.
21. Ken Silverstein. «Privatizing War. How affairs of state are outsourced to corporations beyond public control», *Nation Magazine*, 4 de agosto de 1997.
22. Deborah D. Avant. «The Market of Force: Exploring the Privatization of Military Services. Informe de discusión para el Council on Foreign Relations»; www.cfr.org/public/pubs/privmil.html
23. Citado en Mark Thomson, 15 de enero de 1996.
24. Jeremy Scahill. «Cleansing Serbs in Kosovo», *The Nation*, 10 de julio de 2000.
25. …Para Kellogg, Brown & Root, Halliburton y Dick Cheney. Pratap Chatterjee. «The War on Terrorism's Gravy Train», Cheney's Former Company Wins Afghanistan War Contracts; Ders.: Force Provider. The Base in a Box; Ders. Dick Cheney. *Soldier of Fortune* (2 de mayo de 2002) www.corpwatch.org; Colum Lynch: «Halliburton's Iraq Deals Greater Than Cheney Has Said Affiliates Had $ 73 Million in Contracts», *The Washington Post*, 23 de junio de 2001.
26. Informaciones según la página oficial de DynCorp: www.dyncorp.com.
27. Peter Beaumont, «US pulls out Karzai's military bodyguards. Special forces who foiled assassination attempt on Afghan leader replaced by private security guards», *The Observer*, 24 de noviembre de 2002.
28. United Nations/ Economic and Social Council/ Commission on Human Rights: «Report of the second meeting of experts on traditional and new forms of mercenary activities as a means of violating human rights and impending the exercise of the rights of peoples to self determination», Ginebra, 13-17 de mayo de 2002; Foreign and Commonwealth Office: «Private Military Companies. Options for Regulation», 12 de febrero de 2002.

CAPÍTULO V
COLOMBIA: LABORATORIO EXPERIMENTAL PARA EL MANEJO PRIVADO DE LA GUERRA

DARÍO AZZELLINI

El surgimiento de actores no estatales armados y el creciente otorgamiento de tareas militares y represivas a empresarios privados es casi siempre considerado como una señal de debilitamiento del Estado. Colombia es una muestra ejemplar de que éste no debe ser necesariamente el caso. La imposición de los intereses estatales y del capital privado es transferida en forma controlada a las corporaciones militares privadas (CMP) y a los paramilitares. Con ello no podría calificarse de ninguna manera a Colombia como un «Estado fallido».

El país de 44 millones de habitantes fue considerado durante décadas como un buen lugar para las inversiones, y ha tenido las tasas de crecimiento más altas del continente latinoamericano hasta 1998. Colombia es rica en recursos naturales como petróleo, carbón, oro, esmeraldas, agua y biodiversidad. Cuatrocientas de las quinientas empresas estadounidenses más grandes han invertido en este país. A esto se agrega el narcotráfico, el factor de crecimiento más dinámico[1]. Los grandes bancos perciben ganancias del lavado de dinero, y los consorcios químicos ganan de los productos base para la producción de cocaína.

Luego de una recesión entre 1998-1999 siguió rápidamente la recuperación. Una fuerte desvalorización del peso, la liberalización del tipo de cambio, un duro programa de austeridad y el ataque frontal a la legislación laboral permitieron un nuevo aumento de las exportaciones en un 13% en el año 2000. El presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-) intensificó la orientación neoliberal y así el *New York Times* destacó a Colombia a principios de 2003 como uno de los seis «mercados emergentes» más interesantes a nivel mundial. Sin embargo, esta política precisa también una intensificación de la guerra.

Colombia constituye desde hace 25 años un laboratorio para la conducción privada de la guerra. Política, Ejército, Policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares, ejército estadounidense, la agencia antidrogas norteamericana DEA, compañías transnacionales y CMP cooperan en constelaciones cambiantes para imponer sus intereses comunes en contra de las organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo, contra los crecientes movimientos insurgentes armados[2]. La guerra se dirige en su mayor parte en contra de la población. Según la organización para los derechos humanos Cohdes, 305.966 personas (85.000 más que en el año 2006) fueron desplazadas en Colombia durante el año 2007. En total, se calculan más de 3 millones de desplazados dentro del país[3].

En enero de 2007 el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, declaró que durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se contabilizaron 11.292 asesinatos políticos, en su mayoría atribuidos a paramilitares. La mayor parte de la responsabilidad con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos ya no se adjudica (como se hacía aún en los años ochenta) al Ejército y los órganos de represión estatal, sino a los paramilitares.

En Colombia hay guerra desde hace más de cien años. Desde los años sesenta ésta se disputa entre las guerrillas y los aparatos de poder de las élites, y ha sido particularmente intensa en los últimos 15 años, en los que se ha internacionalizado el conflicto. Estrategia que Colombia y EE.UU. han aplicado también a nivel militar. Colombia deja sus fronteras descuidadas y hace operaciones militares para empujar la guerrilla hacia territorios de países limítrofes para involucrarlos en el conflicto. La presencia guerrillera —supuesta o real— sirve también de pretexto para amenazas hacia Venezuela y Ecuador.

Entre 2000 y 2006 se ejecutó el Plan Colombia con un volumen de 13 millardos de dólares, de los cuales 80 por ciento fueron destinados a programas militares, antinarcóticos y antiterrorismo y 20 por ciento en desarrollo social y alternativo. EE.UU. aportó al Plan casi cinco millardos, a lo que se debe sumar los aportes del Gobierno colombiano y de Europa. El aporte militar de EE.UU. siguió también en 2007 y 2008 con unos 750 millones de dólares al año, ahora bajo el nuevo nombre de Plan Patriota[4]. Asimismo, las fuerzas de combate de Estados Unidos asumen un papel

cada vez más activo *in situ*. Exploradores Awacs (Sistema aerotransportado de alerta y control tempranos) de la Fuerza Aérea estadounidense y estaciones de radar de dicho país en Colombia —que deberían servir para luchar contra el narcotráfico— transmiten informaciones sobre movimientos de la guerrilla desde marzo de 1999. Desde finales de 2001 el control se utiliza de manera oficial para la «lucha contra el terror». Al mismo tiempo se anuló la restricción de la utilización de material bélico estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces se pueden encontrar instructores del Ejército de Estados Unidos cada vez con mayor frecuencia. A esto se agregan 20 CMP, como mínimo, comisionadas por el Pentágono y por empresas privadas. Además hay que añadir las compañías de seguridad privadas (CSP), que están cada vez más integradas a las estrategias militares. En Colombia cuentan aproximadamente con 160.000 empleados[5].

CORPORACIONES MILITARES PRIVADAS

Empleados de CMP trabajan en vigilancia, inteligencia o como pilotos, entrenan grupos especiales de la Policía y el Ejército colombiano. En el ámbito militar altamente calificado se encuentran empleados extranjeros *in situ* de las empresas Bell Helicopter Textron Inc., así como Sikorski Aircraft Corp (ambas de helicópteros de combate) y Lockheed-Martin (aviones militares). Estas empresas brindan apoyo al Ejército en el cuidado, mantenimiento y manejo de las herramientas adquiridas. Las CMP trabajan para los ejércitos colombiano y de EE.UU., para la DEA, los servicios secretos estadounidenses y las empresas privadas. En general se trata de antiguos miembros de unidades élite de Estados Unidos y ex militares de otros países, veteranos de guerra o militares activos norteamericanos que asumen misiones temporalmente limitadas durante sus vacaciones. También se encuentran empresas internacionales como las británicas Control Risk (consultas de prevención de riesgos, ex militares para la conducción de negociaciones, intentos de liberación en secuestros) y Global Risk (entrenamiento para liberación de rehenes, guardaespaldas, control técnico y armado).

La utilización de CMP ofrece numerosas ventajas. Ya que éstas son delegadas y financiadas generalmente en forma directa desde Estados Unidos (por el Pentágono o los servicios secretos), instituciones gubernamentales colombianas declaran no estar informadas sobre sus actividades. Por otra parte, Estados Unidos tiene acceso directo a la zona de operaciones por medio de las CMP. A su vez, las instancias de control y una crítica opinión pública son mantenidas a distancia tanto en Colombia como en Estados Unidos. De ese modo se puede eludir el tope establecido en 2004 por el Congreso de Estados Unidos para las fuerzas de acción en Colombia de 600 civiles y 800 militares, ya que las CMP sencillamente contratan personal proveniente de otros países. El número de empleados extranjeros de las CMP en Colombia en 2008 probablemente supera los 2.000.

En 2007 el Ministerio de Exteriores de EE.UU. publicó un reporte solicitado por el Congreso numerando todas las CMP contratadas por el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa para trabajos en Colombia en 2006. Según la lista los dos ministerios pagaron durante el año 309,6 millones de dólares a las siguientes empresas (detrás del nombre se encuentra el volumen en dólares del contrato o los contratos asignados): Lockheed-Martin (52,87 millones; 250,000); Lockheed Martin Technology Services (600.000; 3,4 millones; 207,000); Lockheed Martin Mission Support (292,000); Lockheed Martin Integrated Systems (LMIS) (2,35 millones; 2,75 millones; 1,47 millones); LMIS/OPTEC (9,41 millones; 52,254; 822,559; 1,7 millones); DynCorp International (164,26 millones); Olgoonik (2,43 millones); ARINC (7,88 millones; 20,95 millones); Oakley Networks (5 millones); Northrop Grumman Information Technology International, Inc (479,000); Northrop-Grumman Mission Systems (2,85 millones); Mantech (1,19 millones; 561,900); Mantech International (2,95 millones); ITT (6,53 millones); ARINC (356,000); Telford Aviation ((2,78 millones); King Aerospace (9,04 millones); CACI, Inc. (555,230); Tate Incorporated (420,603); Chenega Federal Systems (200,000); PAE Government Services (40,000; 2,5 millones); Omnitempus (1 millón); Construction, Consulting, & Engineering - CCE (300,000); U.S. Naval Mission Bogota Riverine Plans Officer (200,000); Science Applications International Corporation (SAIC) (78,879)[6]. En esos datos no están incluidas las CMP contratadas directamente por el Estado o el Ejército colombiano, ni las que tienen contratos

con otras instituciones de Estados Unidos, o las que son oficialmente contratadas por empresas transnacionales.

Desde 1997 han muerto en la guerra en Colombia por lo menos 20 ciudadanos estadounidenses miembros del Ejército, de la DEA o de las CMP, todos declarados como civiles aunque fueron enterrados con honores militares. En la fuertemente militarizada región sureña de Putumayo la población reporta haber visto con frecuencia a militares extranjeros que llegan en helicóptero y que también han sido vistos participando en combates directos[6].

Estados Unidos se ve cada vez más profundamente envuelto en la guerra de Colombia. Ciudadanos norteamericanos y miembros de las CMP de otras nacionalidades están involucrados en forma activa, estructural y sistemática en ella. Es sólo cuestión de tiempo que los primeros soldados estadounidenses entren en enfrentamientos armados con la guerrilla, lo que podría servir como pretexto para un compromiso directo de las tropas estadounidenses en Colombia.

En el caso del ataque colombiano el 2 de marzo 2008 a un campamento de las FARC tres kilómetros adentro de territorio ecuatoriano con aviones, cohetes y tropas transportadas en helicóptero, muchos, incluso militares ecuatorianos, han hablado sobre una posible participación de EE.UU.[7]. El apoyo supuestamente se dio desde la base estadounidense Manta en Ecuador. Analizando las características de la operación un apoyo militar estadounidense es muy probable, por lo menos en inteligencia y armamento sofisticado. En ese caso sería casi segura la participación de CMP, que son las que manejan muchos de estos asuntos.

DynCorp

La CMP con más personal en la guerra colombiana es DynCorp, que también participa en las fumigaciones de cultivos de droga. Para ello tienen a su disposición 88 helicópteros y avionetas del Gobierno estadounidense. La misma empresa estadounidense oculta la cifra total de sus empleados en el país. Diferentes fuentes mencionan una cifra de cien a 355, de los cuales menos de un tercio serían ciudadanos norteamericanos.

Un ex empleado declaró: «Cuando yo trabajaba allí, nuestra cifra aumentó de 120 a 450»[8]. Los contratos de DynCorp en el marco de la campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en Colombia aumentaron de 6,6 millones de dólares en 1996 a 30-40 millones anuales a partir de 1999, subiendo vez más hasta llegar a los 164 millones de dólares en 2006.

La sede principal de las operaciones andinas de DynCorp se encuentra en la Patrick Air Force Base (Base de la Fuerza Aérea Patrick) en Florida. Allí se pone a prueba a aquellos aspirantes que se hayan presentado por los anuncios en la prensa y asignan a los programas Colar (*Colombian Army* o Ejército Colombiano) y Helas (*Helicopter Assimilation* UH-IN, o Asimilación de Helicópteros UH-IN). No son pocos los que se postulan; después de todo, un piloto en la guerra de Colombia gana entre 75.000 y 90.000 dólares anuales[9].

La sede principal de DynCorp en Colombia se encuentra en el aeropuerto El Dorado de Bogotá; otras ocho bases militares fungen de «lugares delanteros de operaciones» (FOL en inglés). Según el contrato, DynCorp emplaza pilotos y mecánicos y lleva a cabo entrenamiento de pilotos, vuelos de inspección y transporte de tropas para la destrucción de áreas de cultivo y laboratorios de droga. Miembros de DynCorp se hallan en los aviones de inspección OV-10 D (Broncos) en Colombia, vuelan las aeronaves de fumigación T-65 y acompañan las operaciones mixtas de la Policía colombiana con grupos especiales en helicópteros. Estos Grupos de Búsqueda y Rescate (Search and Rescue Teams, SAR) están compuestos a menudo por ex soldados de élite del Ejército estadounidense y se les encomienda la evacuación de personal militar en situaciones de peligro, oficialmente sólo en la «guerra antidroga». No obstante, un veterano de DynCorp informó que son empleados de igual forma en misiones de combate contra la guerrilla[10]. Un piloto de nacionalidad peruana de DynCorp declaró:

> Yo fui mercenario en Colombia, porque era un trabajo a sueldo, para librar una guerra que no es mía (…). Se trataba de una operación típica militar (…) normalmente nos contratan para operaciones comerciales, pero cuando trabajamos para el Ejército de Colombia, la cosa es otra[11].

En las fumigaciones de cultivos de droga los límites con las operaciones militares son más bien fluidos. Para protección, se dispara sobre la zona con ametralladoras desde el helicóptero en avanzadas que, acto seguido, acompañan a las misiones con piezas armadas de artillería[12], ya que la guerrilla busca proteger a los pequeños agricultores de coca de las fumigaciones, pues éstas son parte de la guerra. Las fumigaciones destruyen todo tipo de cultivos y causan daños severos y enfermedades, llegando hasta la muerte de campesinos y su ganado. Incluso se fumigaron regiones sin cultivos de coca.

DynCorp niega participación en operaciones de combate, pese a que ésta se hizo evidente cuando, el 18 de febrero de 2001, las FARC derribaron a balazos un helicóptero de la Policía que acompañaba a una fumigación en Caquetá, al suroeste de Colombia. Después de un aterrizaje de emergencia, un grupo SAR de DynCorp evacuó al piloto y a sus acompañantes. Los cuatro salvadores estadounidenses armados con ametralladoras M-16 libraron combates con la guerrilla, y otros dos helicópteros con personal estadounidense dieron fuego de cobertura. El piloto de DynCorp evacuado del helicóptero de la Policía derribado —que tampoco era colombiano— y otro miembro de la tripulación usaron pistolas y un lanzagranadas. Por lo menos ocho «evacuaciones calientes» fueron supuestamente efectuadas por los grupos SAR en los últimos seis años.

Aparte que empleados de DynCorp han estado implicados en asuntos de narcotráfico y abuso de drogas en Colombia, esta CMP también contrata a subempresas como Eagle Aviation Services and Technology (EAST) desde hace 15 años para el transporte de carga en el marco de la lucha antinarcóticos. La misma empresa fue encargada también, en 1985, de parte del empleado de la National Security Agency, Oliver North, para el suministro de armas a la Contra —que luchó contra el gobierno sandinista en Nicaragua— para así eludir una decisión del Congreso estadounidense que había prohibido este tipo de suministro de armas (caso Irán-Contra). Y también estuvo involucrada en el transporte de cocaína desde Colombia, negocio que se usó para financiar las compras de armas. En la corte, EAST simplemente declaró que no sabía de qué transportes se trataba y que asumía que todo era legal porque habían sido contratados por representantes oficiales. El asunto no ha tenido consecuencia jurídica para la empresa.

NORTHROP GRUMMAN Y SUS SUBSIDIARIAS FANTASMA

Northrop Grumman, que administra cinco estaciones de radar para el control del espacio aéreo en el oriente y sur de Colombia, ofrece también otros servicios. Para algunos, contrata subempresas. Así, por ejemplo, supuestamente contrató a California Microwave Systems (servicios militares y de inteligencia en el ámbito de telecomunicaciones y control del espacio aéreo) para realizar vuelos de inspección destinados a pasar al Ejército colombiano datos sobre movimientos y paraderos de columnas y comandantes guerrilleros. El 13 de febrero de 2003, unidades de las FARC derribaron una avioneta Cessna 208 en el departamento de Florencia, región de Caquetá, del Frente 15 de las FARC y sus comandantes. A la tripulación pertenecía un miembro colombiano del servicio secreto y cuatro supuestos empleados estadounidenses de California Microwave, reclutados por la Oficina de Administración Regional (Office of Regional Administration) de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una dirección fingida de la CIA. Tanto el colombiano como uno de los norteamericanos fueron encontrados muertos, los tres norteamericanos restantes se encuentran en manos de las FARC.

En vista de lo anterior, el Gobierno estadounidense envió 50 soldados élite a Colombia que deben prestar apoyo en la investigación y logística al Ejército colombiano en la búsqueda de «los secuestrados y sus secuestradores». Ante la interpelación del *Washington Post* en cuanto a su posible participación en las acciones de liberación, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores contestó: «tendríamos la capacidad de hacerlo». Eso rompería el límite del Congreso, que establece que las tropas estadounidenses no deben participar en operaciones militares. Con el envío se transgredió de igual forma el tope antes mencionado. Aunque según las declaraciones de George Bush, en total son sólo realmente 208, el mismo *Washington Post* hablaba de 411 soldados norteamericanos[13]. Sin embargo, hasta julio de 2008 el gobierno de Estados Unidos no tenía ninguna pista de los prisioneros.

El caso también evidencia otro problema. Después de la retención de los mercenarios de California Microwave los pilotos se vieron transferidos a una compañía recién creada de nombre CIAO Inc. Sin embargo,

parece que no hay posibilidad de contactar a esta supuesta CMP; según reportan varios periodistas, las líneas telefónicas están desconectadas o no son contestadas. Eso refuerza la tesis avanzada por algunos especialistas del tema, que sostienen que algunas de las CMP funcionan simplemente como pantallas para operaciones de la CIA u otros organismos estadounidenses y que han sido creadas y controladas totalmente por sus redes de inteligencia.

VIOLENCIA PRIVATIZADA AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

Ya que las compañías transnacionales (CTN) necesitan «seguridad de inversión», éstas trabajan (en situaciones de guerra) en conjunto con las Fuerzas Armadas para proteger sus plantas e intervenir directamente en la guerra. Además, la utilización de grupos paramilitares al servicio de intereses capitalistas particulares es también común en Colombia. Más de 2.000 sindicalistas han sido asesinados durante los últimos 20 años. Y como informó el sindicato de la industria de alimentos Sinaltrainal a principios de mayo 2008, la persecución no paró ni después de la supuesta desmovilización paramilitar. En los primeros cinco meses de 2008 fueron asesinados 26 sindicalistas, desapareció Guillermo Rivera, del sindicato de la Contraloría, y varios sindicalistas sobrevivieron a atentados, entre ellos el presidente de la USO, Jorge Gamboa.

El jefe paramilitar Carlos Castaño admitió en el pasado francamente: «Asesinamos a los sindicalistas porque no dejan trabajar a la gente». O como explicó Iván Duque —ex vocero paramilitar encarcelado—, a principios del 2007 a la agencia Argenpress: «El apoyo de las empresas a los paramilitares era lógico, ya que respetábamos las empresas privadas y las ideas de las compañías y los paramilitares sobre los beneficios del libre mercado coincidían».

El primer caso conocido de colaboración empresarial con el paramilitarismo es el de la empresa petrolera Texaco en la organización de grupos paramilitares en la zona de Puerto Boyacá a partir de 1983. A principio de la década de los noventa, los sindicatos acusaron a la CTN suiza Nestlé de haberse servido de paramilitares para liquidar a sus representantes

en las negociaciones por el contrato colectivo. La misma acusación fue levantada también en contra de Drummond Coal, que en 2007 extrajo 28 millones de toneladas de carbón[14]. Se acusa a la multinacional estadounidense de

> haber suministrado dinero, víveres, combustible, armamento y tierras para cuarteles a los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). A cambio de ello, la AUC ejerce una violencia extrema, tortura y asesina a sindicalistas para evitar que éstos operen en estas empresas[15].

El 14 de abril de 2003 se admitió una demanda presentada por la Fundación Internacional para los Derechos Laborales (International Labour Rights Foundation) en nombre del sindicato de mineros y familiares de tres asesinados ante una corte laboral en Alabama, Estados Unidos. La corte se refirió a los paramilitares como «actores estatales»[16]. Sin embargo, en julio de 2008 un jurado absolvió a la empresa.

Oxy, AirScan y el Ejército de Estados Unidos

Colombia está entre los diez mayores proveedores de petróleo a Estados Unidos. La compañía de inteligencia privada estadounidense Stratfor afirmó a fines de 2002 que

> la mayor prioridad para el gobierno de Bush es la protección de las regiones petroleras de Colombia (…) y la seguridad de otras regiones rurales en donde se presuma la existencia de yacimientos de crudo, para que así las empresas estadounidenses puedan iniciar sus perforaciones de exploración bajo condiciones seguras[17].

Veinte por ciento del petróleo colombiano es extraído en el campo petrolero Caño Limón ubicado en el departamento de Arauca, al nororiente en la frontera con Venezuela, y a través de un oleoducto de cientos de kilómetros llega hacia el puerto caribeño de Coveñas. La mitad de esta cantidad va hacia Estados Unidos. Pozos y oleoducto son de la multinacional estadounidense Oxy y la colombiana Ecopetrol. Allí se encuentra también el territorio reconocido de los indígenas U’Wa, que se han resistido durante una década a las perforaciones exploradoras de la Oxy, quien los reprime por medio del Ejército colombiano y paramilitares.

Debido a que la guerrilla perpetró cientos de atentados contra el oleoducto durante los años noventa, el Gobierno estadounidense concedió 88 millones de dólares para su protección militar en el año 2003: más helicópteros de guerra para la XIII Brigada del Ejército, construcción de búnkeres y la capacitación de tropas colombianas por parte del Ejército de Estados Unidos. Desde entonces el apoyo militar de EE.UU. al oleoducto se ha mantenido en alrededor de cien millones de dólares al año. Una subvención de casi tres dólares por cada barril de petróleo Oxy.

La vigilancia de los campos y del oleoducto le corresponde a la CMP AirScan de Florida. Vuelan Cessnas 337 (Skymaster) con cámaras de vigilancia de video y de infrarrojo, e informan al Ejército sobre presencia y movimientos guerrilleros. Pilotos que han trabajado en eso informan que han «operado frecuentemente como apoyo secreto a las patrullas antiguerrilla y han seleccionado objetivos militares, incluso celebraban muertes si un piloto de la aviación militar alcanzaba con una bomba a una unidad de la guerrilla»[18]. El 13 de diciembre de 1998, varios helicópteros de la aviación colombiana atacaron, durante sus fiestas patronales, al pueblo de Santo Domingo ubicado a unos 50 kilómetros del oleoducto. Dieciocho habitantes, entre ellos siete niños, murieron bajo el fuego de las ametralladoras o por las bombas racimo; otras 23 resultaron heridas. El ejercitó responsabilizó a las FARC.

En mayo de 2000, una investigación del FBI confirmó la utilización de una bomba racimo estadounidense y la tripulación del helicóptero fue inculpada por asesinato múltiple. El piloto colombiano y su copiloto reconocieron haber lanzado las bombas, sin embargo, los objetivos habrían sido establecidos por AirScan[19].

No se interrogó ni a los tres pilotos estadounidenses ni a los empleados de AirScan. Los pilotos colombianos tampoco fueron condenados. A finales de mayo de 2004, un tribunal colombiano condenó al Estado a pagar unos 2 millones de pesos (700.000 dólares) a las familias de las 18 víctimas mortales. Con lo que, de hecho, se clasificó el bombardeo y asesinato como responsabilidad del Estado.

La Oxy apoyó la operación de manera decisiva en la medida en que «facilitó el transporte de tropas, la cooperación en la planificación y el

combustible para la aviación colombiana, e inclusive para la tripulación del helicóptero inculpada en el bombardeo»[20]. Los aviones de AirScan y los helicópteros de combate despegan y aterrizan en el campo petrolero de Caño Limón. Allí se encuentra también la base de acción equipada técnicamente por Oxy, en la cual los pilotos de AirScan mostraron esa mañana a los militares la grabación en video del primer vuelo de reconocimiento[21].

Oxy y sus filiales pusieron a disposición de la XVIII Brigada militar helicópteros para el transporte de tropas, combustible, uniformes, autos y motocicletas. Esa brigada es tristemente célebre por ajusticiamientos extralegales, graves violaciones de los derechos humanos y colaboración con paramilitares.

La empresa financia incluso un mejor abastecimiento de la unidad para reforzar la moral de la tropa (un apoyo de más de 750.000 dólares al año). No obstante, declaró que en el momento del bombardeo «no tenía nexos contractuales con los pilotos o el avión». Esto es cierto en el sentido formal, pues aunque Oxy financia el avión Skymaster, no costea directamente los servicios de la CMP. Ahora la compañía asociada Ecopetrol paga a la Aviación militar colombiana, que a su vez cancela a AirScan[22].

BRITISH PETROLEUM Y DSL

British Petroleum (BP) explota los campos petroleros de Cusiana en el oriente de Colombia, y tiene participación determinante en el consorcio Ocensa, que maneja el oleoducto de 800 kilómetros de largo que va desde Cusiana hasta el puerto de Coveñas. BP y Ocensa comisionaron, a comienzos de los años noventa, a Defense System Colombia (DSC - Sistema de Defensa Colombia), una empresa hija de la británica Defense System Ltd (DSL), la seguridad de los campos de extracción y del oleoducto durante su construcción, y aun después de culminada ésta. BP se preocupaba tanto por los atentados del ELN como por la central obrera izquierdista Unión Sindical Obrera (USO).

Para el DSC, el ex oficial del servicio secreto británico Roger Brown asumió el lineamiento de las medidas de seguridad. Brown adquirió en 1997 armas para el Ejército financiadas por Ocensa a través de la em-

presa de seguridad israelí Silver Shadow, que también participó en la elaboración del concepto de seguridad. Se trató de equipo sofisticado para la guerra antiguerrilla, entre otros tecnología de vigilancia y vehículos aéreos no tripulados para inspección. Aparte de lo anterior, se entrenaron unidades policíacas y del Ejército en tácticas de lucha contrainsurgente y guerra psicológica.

Amnistía Internacional manifiesta lo siguiente: «Lo que es especialmente alarmante es que DSC/Ocensa haya comprado material militar para la XIV Brigada del Ejército colombiano, que tiene un historial atroz de violaciones de derechos humanos». En ese momento había una investigación en contra de la Brigada del Ejército por complicidad en una masacre de 15 civiles y conexiones con los paramilitares. Amnistía también calificó como preocupante la relación con empresas de seguridad israelíes, «dado que en el pasado esas empresas han proporcionado mercenarios de nacionalidad israelí, británica y alemana para adiestrar a organizaciones paramilitares que actúan bajo el control de la XIV Brigada». Los mismos paramilitares eran responsables ya durante la construcción del oleoducto de la muerte de 140 personas sólo en la región alrededor de Segovia. Este hecho afectó principalmente a activistas de organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como también al comité local para los derechos humanos en su conjunto.

Amnistía tiene una explicación para eso, pues la estrategia para la seguridad del DSC se apoya «en informantes muy bien pagados cuya misión es reunir de forma encubierta "información secreta" sobre las actividades de la población local de las comunidades por las que pasa el oleoducto e identificar a posibles "subversivos" dentro de esas comunidades», afirmó Amnistía Internacional. Aún más preocupante es que esta información secreta es, según informes, transmitida después por Ocensa a los militares colombianos que, junto con sus aliados paramilitares, han elegido frecuentemente a los considerados subversivos como víctimas de ejecución extrajudicial y «desaparición»[23].

Cuando el negocio de las armas salió a la luz pública en 1997, Ocensa no extendió el contrato con el DSC, y Brown tuvo que renunciar a su cargo. Sin embargo, en su lugar llegó el general colombiano inactivo Hernán Guzmán Rodríguez, que supuestamente fue responsable de un

grupo paramilitar que perpetró 149 asesinatos entre 1987 y 1990. Asimismo, BP extendió el contrato con el DSC.

En octubre de 1998 el Parlamento de la UE aprobó una resolución en la que se condenaba el financiamiento de escuadrones de la muerte por parte de la BP. El sindicato USO, que es regularmente objetivo de asesinatos paramilitares y de acusaciones jurídicas, sigue denunciando acciones de espionaje en su contra.

BP no representa ninguna excepción, pues también Texaco colaboró con paramilitares, así como la petrolera española Repsol en Arauca ha sido acusada de mantener nexos con paramilitares[24].

PARAMILITARES COMO BRAZO ARMADO DE LAS ÉLITES

La creación de los paramilitares y la externalización de la guerra sucia ha tenido ventajas significativas para el Gobierno. Debido a que los paramilitares son considerados actores no estatales, Colombia apareció como un Estado amenazado por muchas partes, un poder neutral colocado bajo presión de la izquierda y de la derecha. Así, Colombia es una democracia reconocida internacionalmente, a pesar de que detrás de la fachada se erige un Estado paramilitar en el cual son asesinadas anualmente más personas que durante las dictaduras militares en otros países latinoamericanos. También desde el punto de vista de la política interna el escenario de violencia le sirve al Gobierno. La presencia de innumerables actores armados aparentemente poco distinguibles y la violencia extrema han conducido a una despolitización, que en algunos sectores se convierte en una tendencia abierta de derecha: lo único que importa es la tranquilidad, sin tener en cuenta cual sea su precio. Ésta es también la causa del apoyo del cual goza Uribe.

El paramilitarismo también sirvió para mejorar la imagen del Ejército. Antes de la masificación del paramilitarismo el Ejército y la Policía eran responsables de la gran mayoría de los crímenes en contra de los derechos humanos. Ya a finales de los ochenta el paramilitarismo era responsable de 70% de los crímenes en contra de los derechos humanos. Eso le dio al Ejército, otra vez, la posibilidad de acceder a ayuda militar internacional, que estaba anteriormente cuestionada.

Y los paramilitares son el comodín para la imposición de los intereses de la oligarquía, militares, gobierno, narcotráfico y compañías transnacionales, que no existirían sin su protección. Los paramilitares no poseen un programa político, a excepción de la defensa de las estructuras de poder existentes y los intereses de la economía privada. O como lo expresó el jefe paramilitar Carlos Castaño en una entrevista por Radio Caracol el 4 de febrero de 2003: «Nosotros respetamos la propiedad privada, respetamos las inversiones extranjeras, respetamos la economía nacional».

La formación de la estrategia paramilitar actual se remonta a 1980. En los años noventa, los grupos llegan —en su mayoría— a organizarse de manera centralizada a nivel nacional como AUC, y cuando empezó su supuesta desmovilización en 2003 tenían unos 13.500 miembros. Aun después de que el proceso de desmovilización terminó en 2006, con casi tres veces más supuestos desmovilizados, quedaron miles de paramilitares activos.

Este ejército ilegal, cuyos combatientes cobran un salario mensual de ensueño para Colombia, 500 dólares, es financiado en 70% por el narcotráfico[25], y a ello se agregan pagos de diversas compañías. El objetivo primario de los paramilitares es la destrucción física de cualquier oposición. Así, la Unión Patriótica (alianza electoral socialista fundada con la participación del Partido Comunista) perdió en casi 13 años unos 4.000 miembros asesinados por los paramilitares.

Los paramilitares evitan combates directos con la guerrilla. Sus ataques son dirigidos principalmente a civiles desarmados, campesinos, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, miembros de partidos y organizaciones de izquierda, en fin, todas las iniciativas de autoorganización y bajo el concepto sintomático de «limpieza social» también atacan a pequeños criminales, indigentes, niños de la calle, homosexuales, trabajadoras del sexo y artistas callejeros, entre otros. Para sembrar el terror, actúan con la violencia más extrema, torturan a sus víctimas y muchas veces las descuartizan vivas con motosierras. Al mismo tiempo obligan al resto de la comunidad a observar estos atropellos y prohíben bajo amenaza de muerte enterrar los cuerpos.

El terror a los paramilitares y la necesidad de los narcoempresarios del lavado de dinero —luego de la apertura de mercados— han promovido la

agroindustria exportadora. Una verdadera contrarreforma agraria fue encauzada por el desplazamiento y el robo. La oficina de Naciones Unidas para el control de las drogas y la prevención del crimen estima que los narcoempresarios se han apropiado de 44.000 kilómetros de tierras, casi 40% de las áreas cultivables de Colombia.

Frecuentemente la población es expulsada de regiones donde se han planificado megaproyectos. Eso facilita los trabajos, y las tierras robadas ofrecen enormes ganancias especulativas. La familia Castaño, por ejemplo, se apropió de aproximadamente 1,2 millones de hectáreas.

Los orígenes de los paramilitares se remontan a mucho tiempo atrás. En algunas regiones funcionaron desde los años cincuenta, como brazo armado de las élites locales y regionales.

A comienzo de los años sesenta se formó a la Policía y al Ejército en conformidad con la doctrina de «seguridad nacional» de Estados Unidos y la conducción de la guerra de baja intensidad. En esta estrategia, con el «comunismo» y la «subversión», el «enemigo interno» está en el centro de interés. Así, durante esos años se promulgaron decretos y leyes que le dieron una base legal al establecimiento de «grupos de autodefensa». El Ejército y la Policía comenzaron a entrenar y a armar grupos en las zonas de conflicto con la intención de involucrar más a la población en los enfrentamientos y apoyar a los órganos de seguridad del Estado.

A mediados de los años setenta se originaron los escuadrones de la muerte dirigidos directamente por el Ejército, así como la Alianza Anticomunista Americana (AAA), que llevó a cabo atentados con bombas, secuestros y asesinatos de representantes de izquierda. La AAA fue fundada por el ex comandante general del Ejército Harold Bedoya Pizarro. Bedoya, ex agregado militar de la Embajada colombiana en Estados Unidos, alumno de la School of Americas en Fort Benning (Georgia) y más tarde empleado en la misma como instructor, estuvo envuelto durante toda su carrera en actividades paramilitares y graves violaciones a los derechos humanos, sin haber sido nunca demandado por ello. Junto a él participaba Iván Ramírez, a quien investigaba a fines de los noventa una división de la Fiscalía General por sus conexiones con los paramilitares y con la CIA.

Los grupos de la región del Valle del Cauca formaron la base sobre la cual se crearon los escuadrones de la muerte en Puerto Boyacá desde 1980-1981, que velaban por los intereses del poder político local, algunos empresarios del Magdalena Medio, de la Texas Petroleum Company (Texaco) y los narcotraficantes de Medellín. Uno de los primeros grupos es el MAS (Muerte a los Secuestradores). 59 de sus 163 integrantes eran militares, según declaraciones del fiscal general Carlos Jiménez Gómez. El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha pasó a formar parte finalmente del MAS y exportó el modelo a otras regiones.

> En su anticomunismo galopante y con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública y del narcotráfico, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Correa extienden el dominio del grupo de Boyacá a otros municipios principalmente, durante el período 1985 a 1987. A partir de ahí la expansión se dará hacia el nordeste antioqueño: Córdoba, Urabá, Bajo Cauca antioqueño con el apoyo de Fidel Castaño, con el beneplácito y la colaboración de múltiples ganaderos, así como de industriales del narcotráfico,

según describe el proceso la organización de derechos humanos Indepaz[26].

El paramilitarismo siguió extendiéndose hasta 1990. La muerte de Rodríguez Gacha en 1989 y los conflictos internos en el Cartel de Medellín entre Pablo Escobar y Fidel Castaño (apoyado por otros capos) debilitaron estos esfuerzos entre 1990 y 1993. Sin embargo, los paramilitares y los narcotraficantes encontraron nuevos aliados: la DEA, la CIA y la NSA (National Security Agency o Agencia de Seguridad Nacional).

Estados Unidos comenzó a cooperar en 1992 en una operación de 15 meses por parte de la Policía colombiana para el apresamiento de Pablo Escobar[27], que culminó en diciembre de 1993 con su muerte. Y contribuyeron con la formación, capacitación y apoyo de una unidad especial de la Policía, el Bloque de Búsqueda, que sostuvo estrechas relaciones con el grupo paramilitar «Los Pepes» (perseguidos por Pablo Escobar), que apareció a partir de febrero de 1993. Fue fundado por miembros del Cartel de Cali y los adversarios de Escobar, entre ellos Alberto Uribe Sierra, padre del actual Presidente, para luchar contra Escobar[28].

Ya desde 1993 el fiscal general Gustavo de Greiff presentó pruebas a Estados Unidos de que diferentes altos oficiales del Bloque de Búsqueda

trabajaban estrechamente en conjunto con «Los Pepes». Las pruebas hubieran sido suficientes para acusarlos por corrupción, narcotráfico, tortura, secuestro y quizá también asesinato, sin embargo no fue así. Joe Toft, entonces jefe de la DEA en Bogotá, se expresó muy claramente en un documento del 3 de agosto de 1993:

> El testimonio de los testigos indica que algunos miembros del Bloque y de Los Pepes, no sólo estaban llevando a cabo operaciones conjuntas, algunas de las cuales resultaron en secuestros y posibles asesinatos, sino que eran más bien los jefes de Los Pepes los que daban la orden de fuego y no la Policía.

En otro informe de la DEA del 22 de febrero de 1993, el agente Javier Peña describe una redada del Bloque de Búsqueda guiada por Fidel Castaño[29]. Peña, entonces enlace de la DEA con «Los Pepes», llegó luego a pertenecer a la dirección de la DEA en Bogotá.

Después de la muerte de Escobar, «Los Pepes» se convirtieron en el pilar central de la organización paramilitar de los hermanos Castaño. A partir de 1994 entraron de nuevo en la ofensiva. Carlos Castaño fundó las ACCU como fuerza regional en Córdoba y Urabá. En la segunda mitad de los años noventa se siguió expandiendo el modelo, y finalmente todos los grupos confluyeron bajo la organización central única AUC.

La cooperación con el Ejército es extensa, según lo demuestran innumerables ejemplos como la masacre de Mapiripán. En la mañana del 15 de julio de 1997, 300 paramilitares de las AUC de Urabá alcanzaron la población en el departamento del Meta. En seis días asesinaron a 48 personas de forma bestial, las decapitaron, las descuartizaron y las arrojaron al río Guaviare. El Ejército llegó a Mapiripán justo cuando ellos ya se habían retirado. Al mismo tiempo, a unos pocos kilómetros de distancia en el campo Barrancón del Ejército, finalizaba un entrenamiento de fuerzas especiales. Estaba presente toda la cúpula del Ejército colombiano y algunos oficiales estadounidenses. Anteriormente, en ese lugar unidades especiales de Estados Unidos habían entrenado durante meses a la II Brigada Móvil y a los paramilitares[30]. Declaraciones y documentos demuestran que un oficial del servicio secreto de esa brigada coordinó la llegada de los paramilitares y que otros dos militares fletaron los aviones en los que viajaron más de 100 paramilitares hasta el aeropuerto —con-

trolado por el Ejército— San José de Guaviare[31]. El general que en ese entonces dirigía la VII Brigada del Ejército fue informado por vía escrita y telefónica del ataque, sin hacer nada al respecto.

A partir del 2000, el Plan Colombia cuadruplicó el número de soldados profesionales y multiplicó por veinte los helicópteros del Ejército, aviones de inspección y consejeros militares, mientras que el número total de los paramilitares que acogían satisfactoriamente al plan aumentó de 5.000 a 13.500.

En los territorios definidos por el Plan Colombia como zonas prioritarias, los paramilitares se mostraron particularmente activos[32]. Según un paramilitar entrevistado por el *Boston Globe*, el Plan no hubiese sido viable sin los paramilitares. La estrategia conjunta fue acordada entre ellos y el Ejército. El ex defensor del pueblo para los Derechos Humanos de la ciudad de Puerto Asís, Germán Martínez, observó: «El fenómeno paramilitar en Putumayo es la punta de lanza del Plan Colombia para hacerse con el control territorial de las áreas que han de ser fumigadas»[33].

Los paramilitares se han apropiado simultáneamente de la mayor parte del negocio de la droga, controlan las rutas clave del narcotráfico, el lavado de dinero y con ello el 70% de las exportaciones de droga[34].

En el año 2001, los paramilitares comenzaron a colocar progresivamente en la mira a centros urbanos. Asimismo, la ciudad de Barrancabermeja, al norte de Colombia, de 400.000 habitantes, es ocupada *de facto* por las AUC luego de varias masacres posibilitadas por el Ejército. Las AUC patrullaban las calles libre y abiertamente e impusieron sus reglas. La organización política y social es casi imposible, cientos de activistas cayeron como víctimas de las «limpiezas».

Los grupos paramilitares se componen también, en parte, por militares. Las FARC y el ELN presentaron, luego de un ataque a cinco campos paramilitares en el sur de Bolívar en el año 2001, varios documentos de identificación de soldados de carrera activos que fueron encontrados entre los paramilitares muertos, entre ellos un líder[35].

En los últimos años, los paramilitares han operado igualmente de forma creciente en Ecuador, Panamá y Venezuela. Ellos atacan, amenazan, asesinan y desplazan a la población en las zonas fronterizas. Esto cumple con el interés del Gobierno estadounidense de ejercer presión sobre los países vecinos para militarizar sus fronteras.

El 10 de septiembre de 2001 el gobierno de Estados Unidos colocó a la AUC en su «lista de grupos terroristas»[36]. Sin embargo, este hecho no tuvo consecuencias directas. No se buscó ni se persiguió a Castaño, pues él representa una figura igualmente clave para Estados Unidos, quien ofreció repetidas veces en años anteriores hacer que los narcotraficantes colombianos se sometan, y éstos se encontraron varias veces por su iniciativa.

En marzo de 2000 fue capturado el ex fotógrafo de modas e informante de la DEA y el FBI, Baruch Vega, acusado de nexos con el narcotráfico. Según informaciones de *El Tiempo* de Bogotá y *El Nuevo Herald* de Miami, Baruch Vega trabajaba como nexo entre la DEA y los narcos ofreciéndoles, en sus propias palabras, «un programa de resocialización para narcotraficantes». Baruch Vega había organizado numerosos encuentros entre la DEA y narcotraficantes colombianos. A cambio de pagos millonarios, el abandono del negocio de la droga y la inversión de su fortuna en EE.UU., se les ofrecías visas americanas para ellos y sus familiares[37]. Vega gestionó la entrega de más de 100 capos a la justicia de EE.UU.[38]. El descubrimiento del «programa» llevó a que fuera quitado de su cargo el comandante de la policía colombiana, José Rosso Serrano, suspendidos varios agentes de la DEA, y en Florida tuvo que renunciar una fiscal que al parecer estaba a cargo de los negocios con la justicia.

Durante la primavera de 2001, Carlos Castaño renunció a ser el líder militar de las AUC y se convirtió poco después en su «líder político». Salvatore Mancuso fue nombrado el nuevo líder militar y se instituyó un estado mayor de 10 personas (incluyendo a Mancuso). Mancuso dirigió el bloque paramilitar del Catatumbo, al cual la policía le adjudica 7.300 de los 8.113 asesinatos políticos en Norte de Santander, entre 1999 y 2004. Mancuso, que en una entrevista televisiva admitió, «por nuestras manos pasaron 228.000 kilos de clorohidrato de cocaína», también es el contacto con la *'Ndrangheta,* la mafia de Calabria (Italia). En un operativo internacional de policía efectuado en diciembre de 2006, después de tres años de investigaciones, fueron capturadas 49 personas, entre las cuales estaba el narcoempresario italiano Giorgio Sale. El clan de Sale trabajaba directamente con Salvatore Mancuso. Según investigaciones de la fiscalía italiana la *'Ndrangheta* administra el capital internacional de muchos narcos colombianos y colabora con ellos en la producción de cocaína, como en el contrabando de ésta hacia Europa.

A mediados de 2002 las AUC fueron disueltas formalmente y presuntamente reorganizadas sin la participación de los bloques implicados en el narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos. Un paso para posibilitar una imagen limpia y hacer posibles negociaciones con el gobierno.

CHIQUITA BRANDS: NUEVO NOMBRE, VIEJAS PRÁCTICAS

Las empresas bananeras multinacionales en la región de Urabá lograron acabar con mucho del trabajo sindical en las plantaciones asesinando a más de 400 sindicalistas por medio de paramilitares entre fines de los ochenta hasta mediados de los noventa. Las bananeras se volvieron socios muy estrechos de los paramilitares y siguieron también después apoyándolos de cualquier manera. En 1997 Carlos Castaño, como jefe de las AUC, sostuvo una reunión con el gerente general de Banadex, subsidiaria de Chiquita Brands, que al parecer fue el inicio de una gran colaboración. Hasta el 4 de febrero de 2004 Chiquita le pagó más de 1,7 millones de dólares a los paramilitares. Ese mismo año le tocó dejar Colombia. Los pagos se hicieron principalmente con cheques a nombre de Convivir Papagayo, una de las «cooperativas paramilitares» avaladas por Álvaro Uribe cuando era gobernador en Antioquía.

En abril de 2008, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una entrevista exclusiva con RCNTV declaró:

> Las multinacionales le deben la verdad al mundo y al país. Le pongo el caso específico de Urabá como ejemplo donde todas las multinacionales bananeras, todas les pagaban 3 centavos de dólar a las Autodefensas. (…) vinieron a pedir apoyo. En base a esos apoyos y acuerdos a los que llegamos pagaban tres centavos de dólar (por caja) a través de Convivir Papagayo.

Además de Chiquita, según Mancuso, también pagaban Del Monte y Dole.

Chiquita también sobornó a funcionarios de gobierno para obtener una zona aduanera especial en Turbo, administrada por ellos mismos[39]. Esa zona fue de gran ayuda para los paramilitares y poniéndola a su disposición, Chiquita facilitó la extensión militar y territorial del paramilitarismo.

> El 7 de noviembre de 2001, Banadex fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su «mejor gol» y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente[40].

Los hechos fueron confirmados en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la bananera (a raíz de una investigación de la Securities and Exchange Commission de EE.UU., y por un informe de la OEA). Chiquita reconoció también pagos al ELN y las FARC entre 1989 y 1997. Aunque los compromisos con los paramilitares superan en mucho las relaciones con la guerrilla y no se explican por un simple pago de «impuestos» por control territorial. En la época durante la cual Chiquita apoyó a las AUC, éstas asesinaron a miles de personas en la zona, muchos de ellos trabajadores de las bananeras. Y aunque ese sea el único envío de armas por el cual Chiquita haya sido investigada, queda la seria duda de que así haya sido. Carlos Castaño, en una entrevista en el 2002 declaró: «Es el mayor logro obtenido para las AUC. A través de Centroamérica, cinco embarques, 13 mil fusiles»[41].

Al final, Chiquita acordó con el Departamento de Justicia estadounidense pagar una sanción de 25 millones de dólares por haber financiado a las AUC, catalogado como grupo terrorista de parte de EE.UU. desde el 10 de septiembre de 2001. Chiquita fue solamente acusada de haber actuado en contra de leyes estadounidenses y las víctimas del paramilitarismo no recibieron nada de ese dinero. Y en Colombia, aunque Chiquita haya admitido todo, no se dio ningún juicio en contra de la bananera, su subsidiaria Banadex o los responsables, ni por la colaboración financiera con el paramilitarismo, ni por los sobornos pagados, ni por contrabando de armas. Aunque no debería sorprender ni la actuación sanguinaria de Chiquita, ni que quede impune. Antes de cambiar su nombre a Chiquita Brands en 1970 la empresa llevó durante 42 años el de United Fruit Company (1928-1970) y fue corresponsable de la gran masacre (más de 1.000 muertos) en contra de los obreros de las bananeras en Colombia en 1928.

Según declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso frente a la Fiscalía, casi todas las grandes empresas, especialmente transnacionales, pagaban a los paramilitares, además de Chiquita Dole Food Company[42]

y Fresh Del Monte[43]. También pagaban la empresa Postobón (grupo Ardila Lule de Colombia, que controla casi por completo el mercado de la bebidas no alcohólicas), Bavaria (propiedad de Miller, la segunda cervecera del mundo), las empresas carboneras y muchas más. El fiscal general Mario Iguarán declaró que «no pagaron por seguridad, pagaron por sangre».

COCA-COLA Y LAS AUC

> En Coca-Cola una y otra vez durante los últimos años ha habido abusos contra trabajadores organizados sindicalmente. Los métodos van desde intimidaciones, secuestros y torturas hasta la muerte. En una celebración donde había mucho alcohol en 1996, Mario Mosquera, gerente de la empresa Panamco (la embotelladora colombiana de la Coca-Cola) en Carepa anunció en voz alta que acabaría con el sindicato con ayuda de los paramilitares. Desde entonces se ha asesinado en Carepa a varios activistas sindicales y los paramilitares se mueven sin problemas por la empresa[44].

Éstas son las afirmaciones de un activista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal.

Asimismo, los paramilitares de la AUC entran y salen de la empresa embotelladora de Panamco en Barrancabermeja, y dejan cartas amenazadoras a sindicalistas activos. Esto sucede bajo el encubrimiento de la gerencia local. Cuando la AUC protestó en el año 2001 contra la desmilitarización de la región y las conversaciones con el ELN por medio de bloqueos de carreteras, Coca-Cola suministró las bebidas a los manifestantes.

Con ayuda de los paramilitares se agilizaron también los procesos de desregulación, como describe en forma impresionante un miembro de Sinaltrainal:

> A principios de los años noventa trabajaban en las sucursales de Coca-Cola Colombia más de 10.000 trabajadores, todos disponían de contratos ilimitados y de un ingreso promedio de 600 a 700 dólares. Actualmente, luego de una reestructuración fundamental de la empresa, sólo unos 2.500 trabajadores mantienen contratos con Coca-Cola y apenas 500 de esos contratos son fijos, los 7.500 restantes son empleados por las filiales. Su ingreso mensual promedio es de sólo unos 150 dólares. Las anteriormente buenas condiciones

laborales de Coca-Cola en comparación con otras empresas colombianas, en sólo 10 años cambiaron todas a peor. Para imponer esto debió ser desmantelado el movimiento sindicalista, entre otros, que combatía esas condiciones y la reestructuración planteada. Durante dos huelgas en 1995 y 1996 fueron asesinados siete de nuestros líderes sindicales de Coca-Cola Colombia, más de 50 debieron abandonar sus regiones y más de 6.000 de los 10.000 empleados han sido reemplazados en diez años. El número de nuestros afiliados en Coca-Cola disminuyó de los 2.500 anteriores a unos 500[45].

El 31 de agosto de 2002 fue asesinado otro sindicalista de Coca-Cola: Adolfo de Jesús Múnera López, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la región del Atlántico y que ejercía funciones de suplencia en Sinaltrainal. Durante años fue vejado y amenazado. En 1997 el Ejército derribó su casa, tuvo que huir y fue despedido por no presentarse a su lugar de trabajo. Tras un procedimiento judicial con varias instancias, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció por un deber de readmisión. Diez días después Múnera fue asesinado a tiros por los paramilitares.

El 30 de marzo de 2003 fue admitida una demanda de Sinaltrainal contra la empresa embotelladora latinoamericana Panamericana Beverages Inc. y la colombiana Panamco y Bebidas y Alimentos ante una corte federal estadounidense en Miami, que según la demanda, utilizan grupos paramilitares para evitar el trabajo sindical y desmantelar los sindicatos; en septiembre de 2006 se declaró que no había jurisdicción. En marzo de 2008, los abogados de Sinaltrainal y los demandantes individuales presentaron la apelación en la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos, demandando que se declare que sí hay jurisdicción para las demandas contra Coca-Cola.

Mientras, las persecuciones de sindicalistas en Coca-Cola siguen. La supuesta desmovilización paramilitar no se nota. Al contrario, desde abril de 2007 empezó una nueva campaña de amenazas de muerte firmadas por los supuestos «nuevos paramilitares» o «grupos emergentes», como son titulados en la prensa. Las Águilas Negras-AUC enviaron varias cartas con amenazas de muerte a una docena de activistas de Sinaltrainal. Como anteriormente, eso pasó en medio de conflictos laborales. A principios de 2008 el hijo de José Domingo Flórez, dirigente de Sinaltrainal

en Bucaramanga y Barranquilla, fue secuestrado, torturado y arrojado posteriormente[46].

«PARACOS», MERCENARIOS Y EMPRESAS DE ARMAS

Entre los paramilitares se encuentran igualmente numerosas conexiones con empresas de mercenarios y de armas. El cargamento de 3.117 fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov) y entre 2,5 y 5 millones de cartuchos, que Chiquita Brands y su filial colombiana Banadex S.A. introdujeron a Colombia para las AUC en 2001, provenía de GIR S.A., empresa filial de la estatal Israel Military Industries Ltd. (IMI) con sede en Guatemala[47].

Ya en 1988 IMI había suministrado 500 fusiles automáticos al Cartel de Medellín, que entonces participaba en la formación de grupos paramilitares. El papel central lo desempeñaba el mercenario israelí y comerciante de armas Yair Klein (y su empresa Spearhead Ltd.), quien formó también a la Contra nicaragüense en Honduras en los años ochenta. Klein, reservista del Ejército israelí, fue condenado en Israel por exportación ilegal de armas hacia Colombia en 1991. Klein llegó a este país en 1986 por iniciativa de la asociación empresarial Uniban (Unión de Bananeros). Según la fiscalía colombiana Uniban contactó con Ytzhak Maerot Shoshani, que vendía armas al Ministerio de la Defensa colombiano como representante de la empresa israelí Isrex, que tenía sede en Colombia.

Klein formó entre otros a los paramilitares que cometieron varias masacres en plantaciones de bananos en marzo de 1988. Un testigo declaró que los mercenarios alrededor de Klein habían recibido por parte de Uniban y algunos narcotraficantes, 800.000 dólares por su trabajo. En una entrevista Klein declaró:

> Lo primero que hicimos fue entrenar a la gente en Puerto Boyacá y en otros lugares del Magdalena Medio, donde adiestramos a un primer grupo en tácticas para encontrar a los guerrilleros. En el primer curso, que duró un mes, inmediatamente hubo contacto y combates con la guerrilla; lo que les enseñé fue cómo atacar, cómo emboscarlos y gracias a eso se pudo acabar con mucha gente de la guerrilla y quitarles dinero, producto de la extorsión y el rescate que les exigían a los ganaderos. A raíz de estos buenos resultados

> me volvieron a llamar para realizar otro curso (...) Cuando volví nuevamente a Colombia, me di cuenta de que el mismo Ejército utilizaba a la gente que yo había entrenado para atacar y emboscar. Entonces me convencí de que estos combatientes que yo entrené tenían mucha más capacidad de ataque que los mismos soldados del Ejército colombiano[48].

El 22 de julio de 2001 el Tribunal Superior de Manizales condenó a Klein en ausencia a diez años por entrenamiento de paramilitares en el Magdalena Medio y Urabá entre 1987 y 1989. Él siempre negó que hubiese cometido alguna actividad ilegal: «cuando uno es contratado por gente de la Policía, gente del Ejército, gente del Ministerio de Agricultura, dueños de fincas y gerentes de entidades y organizaciones ganaderas, creo que es suficiente para pensar que es absolutamente legal» y subraya además que los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa israelíes eran conscientes, ciento por ciento, de esta situación.

Klein fue capturado por la Interpol en el aeropuerto de Domedédovo, Moscú, cuando viajaba hacia Israel el 27 de agosto de 2007. El gobierno colombiano pidió su extradición. A finales de mayo un juzgado ruso consintió la extradición, la cual fue prohibida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El paranarco-Estado de Uribe

Luego de las elecciones para el Congreso en marzo de 2002, Salvatore Mancuso anunció que las AUC habían alcanzado su primer «éxito», ya que más de 35% de los 268 diputados que ingresaron por diferentes partidos o como candidatos regionales serían sus representantes. En abril ganó las elecciones a la presidencia el candidato de extrema derecha y formalmente independiente Álvaro Uribe Vélez. Una de las primeras felicitaciones que recibió provino de las AUC. Es un «presidente digno» dijo Mancuso, conocido personal de Uribe. Ya desde antes, los paramilitares habían condecorado a Uribe como «su candidato»; sus oficinas de campaña electoral se encontraban incluso en los campamentos de las AUC. Luego de cinco décadas, el ala más sanguinaria de la oligarquía de la extrema derecha consiguió conquistar el poder estatal y colocar al Presidente[49].

En una entrevista en abril de 2008 Mancuso, frente a la pregunta de si era cierto que las AUC controlaban 35% del Congreso, contestó:

> Lo que dije fue que el 35% del Congreso fue elegido en zonas donde estaban las autodefensas. En esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación, impartimos justicia, teníamos el control territorial y militar de la región. Y todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos ahí. (…) Quizás me quedé corto. Va a superar con creces el 50% del Congreso de la República vinculados a esos fenómenos de actores locales ilegales.

Álvaro Uribe mantuvo, por lo menos desde 1981, contactos intensivos con narcotraficantes y paramilitares. Un reporte de la inteligencia militar estadounidense Defense Intelligence Agency (DIA) de 1991 sobre los 104 «narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los carteles colombianos de narcóticos para seguridad, transporte, distribución, recolección y aumento de operaciones de narcóticos» enlista a Uribe bajo el número 82. El reporte dice literalmente (traducción propia):

> ÁLVARO URIBE VÉLEZ – Un político y Senador colombiano dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha estado conectado con un negocio incluyendo actividades de narcóticos en EE.UU. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado en la campaña política de Escobar para ganar un curul de suplente al diputado Jorge (Ortega). Uribe ha sido uno de los políticos del Senado que ha atacado todo tipo de tratado de extradición[50].

Uribe hijo entró en el negocio a principios de los años ochenta como alcalde de Medellín, durante el tiempo de Pablo Escobar. A principios de los años noventa, como director de la Administración de Aviación Civil repartió licencias y autorizaciones de vuelo a colaboradores del Cartel de Medellín. En su período como senador de la República pertenecía al bloque de diputados leales a los barones de la droga, que impedían cualquier ley en su perjuicio[51].

Entre 1995 y 1997, como gobernador de Antioquia, Uribe fomentó las «cooperativas» paramilitares Convivir, legales, fuertemente armadas, semiprivadas pero formadas por el servicio secreto militar. Durante el

mandato de Uribe, los Convivir desplazaron a más de 200.000 personas y asesinaron a miles[52]. Cuando fueron prohibidas a fines de 1997, se fusionaron con las AUC. Cínicamente, Uribe se jacta hasta hoy de haber logrado la tranquilidad en «su región».

Uribe apuntó desde un primer momento a una intensificación de la guerra. Cinco días después de la toma de posesión, decretó un estado de excepción que ha permanecido en vigor ininterrumpidamente. Esto encomienda competencias civiles al Ejército y suprime derechos civiles vigentes formales de manera fáctica. Veintiséis departamentos al norte del país y tres en el Arauca fueron colocados bajo el control directo del Ejército como áreas especiales de seguridad denominadas «Zonas de Rehabilitación y Consolidación». El Gobierno inició a lo largo de todo el país la construcción de una red de informantes que debe incluir a un millón de personas (parte de ellas provistas de armas de guerra) en las estructuras de información del Ejército. Adicionalmente, el Gobierno amplió el Ejército de 168.000 soldados con 30.000 nuevos soldados de carrera, y empezó a capacitar entre 20.000 y 30.000 «soldados campesinos», un tipo de «protectores de aldeas», paramilitares legales que viven en sus comunidades de origen. El servicio militar obligatorio fue extendido de seis meses y anunció que 10.000 reservistas del Ejército y 20.000 policías pensionados iban a ser reintegrados a las estructuras de defensa. Colombia se encuentra entre los diez países del mundo con mayor gasto militar. Según estudios de Luis Jorge Garay y otros, el gasto público en defensa y seguridad entre el 2000 y 2005 aumentó 78,4%[53].

El 1º de diciembre de 2002, gran parte de los frentes de la AUC anunció un alto el fuego para entrar en negociaciones con el Gobierno[54]. Al mismo tiempo, la AUC se reservó el derecho de «reaccionar en legítima defensa». La oferta se dio con la ayuda de altos representantes de la Iglesia católica, tradicionalmente de derecha, estrechamente vinculados con la oligarquía. Uribe y otros tres ministros pertenecen también a la orden católica de extrema derecha Opus Dei. Antes de fin de año, el Gobierno cambió la legislación que no permitía negociar con grupos armados sin estatus político reconocido para así evitar el reconocimiento oficial de las AUC. En enero de 2003, la ley competente a la guerrilla para la condonación y disminución de la pena para aquellos que colaborasen con la justicia, fue

extendida hacia los paramilitares y empezaron las negociaciones. Las conversaciones con el Gobierno comenzaron el 22 de enero de 2003. Así, el gobierno de Uribe emprendió un paso que, hasta entonces, ningún gobierno había dado: el reconocimiento fáctico de los paramilitares como actores políticos independientes.

En realidad se trataba de orquestar una amnistía para los paramilitares y su integración al aparato represivo oficial[55]. La conservadora Rand Corporation ya desde el año 2001 había propuesto: «(…) sería valioso recapacitar hasta qué medida la política de desalentar la organización legal de comunidades de autodefensa es sabia. Una red de organizaciones de autodefensa supervisada conforme con el modelo peruano podría ser una alternativa a los grupos ilegales»[56].

El 13 de mayo de 2004 el gobierno firmó con diez comandantes de las AUC, que dijeron representar a 90% de los paramilitares, un acuerdo sobre la instalación de una «Zona de Ubicación» de 368 kilómetros en Córdoba, en la cual se reunieron con 400 hombres armados de su guardia personal y gozaron de inmunidad frente a las órdenes de captura, para así seguir negociando. Al mismo tiempo, sus combatientes quedaron distribuidos por todo el país. Cínicamente, los paramilitares en el pasado habían desplazado o asesinado gran parte de la población que vivía en la zona.

Y aunque existía un supuesto alto el fuego, Amnistía Internacional declaró en el informe anual 2004 sobre Colombia que

> los paramilitares siguieron siendo responsables de matanzas, homicidios selectivos, «desapariciones», torturas, secuestros y amenazas. Durante 2003 se les atribuyó la responsabilidad de la muerte o «desaparición» de al menos 1.300 personas, más de 70% de todos los homicidios y «desapariciones» de los que se conoce la autoría por motivos políticos no relacionados con los combates[57]. En 2003 fueron desplazados 250.000 colombianos, 20.000 pidieron asilo político en el exterior.

Los líderes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, declararon:

> Existimos bajo la responsabilidad del Estado y los gobiernos que nos llevaron a velar por la justicia y la seguridad con nuestros propios puños y por nuestros propios medios. Si hablan de cárcel por lo que hicimos, todos ellos deben ir con nosotros.

Desde el comienzo de las negociaciones, no llegó a la luz pública casi nada acerca de sus contenidos y evolución. En los acuerdos firmados no quedó claro cómo se van a tratar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y faltas al Derecho Internacional humanitario, juicios penales en curso y paramilitares encarcelados. Las negociaciones no habían terminado ni la legislación había sido preparada. El 25 de noviembre de 2003 se dio la primera «desmovilización», que reforzó los temores. 855 miembros de las AUC (del Bloque Cacique Nutibara, BCN, de Medellín) entregaron unos 110 fusiles de asalto Kalashnikov, varias pistolas automáticas, revólveres, rifles y armas de fabricación casera, porque supuestamente actuaban en turnos y por eso no todos tenían armas. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de la organización para los derechos humanos Human Rigths Watch, calificó el acto como «espectáculo de la impunidad». Luego de una «resocialización» de sólo tres semanas, los paramilitares retornaron con créditos y empleos a las barriadas que habían aterrorizado anteriormente. De ellos, 698 fueron empleados por las autoridades comunales y 200 para patrullar con una empresa de vigilancia en las barriadas. Diez días antes Amnistía Internacional ya había informado que los paramilitares eran paulatinamente «reciclados» por servicios de vigilancia o habrían recibido armas y uniformes como «soldados campesinos».

El 16 de abril de 2004 Carlos Castaño fue supuestamente asesinado por orden de otros jefes paramilitares, entre ellos su hermano Vicente Castaño. Su cadáver no fue encontrado hasta años más tarde. Así que muchos dudan de que haya realmente muerto. Vicente Castaño, a su vez, se dio a la clandestinidad otra vez en 2006 cuando iba a ser arrestado y supuestamente fue asesinado por otros paramilitares en marzo de 2007. Aunque su cadáver nunca apareció. Y eso es algo que los dos tienen en común con su hermano Fidel, fundador principal del paramilitarismo, quien supuestamente murió desaparecido en la selva. Su cadáver tampoco ha sido encontrado y desde entonces las especulaciones sobre Fidel siguen. Más allá de las especulaciones, hay también indicios más serios. Durante las negociaciones entre paramilitares y gobierno en 2003, la viuda de Castaño pidió que se otorgaran a éste los mismos beneficios que a los otros paramilitares, como resulta en un protocolo aparecido en 2007[58]. A causa de su papel central en la estrategia contrainsurgente en Colombia

y sus nexos de largo tiempo con la CIA, muchos suponen que los tres, pero especialmente Fidel y Carlos, podrían estar con vida todavía.

Para las elecciones de 2006 Uribe hizo una reforma constitucional que le permitió reelegirse. El proceso de desmovilización terminó supuestamente a mediados de 2006, sin embargo, siguieron más desmovilizaciones colectivas e individuales. El número final para enero de 2007 fue de 35.213 miembros de las AUC desmovilizados. Dado que según muchos cálculos y declaraciones de los paramilitares a principios del proceso, eran entre 12.000 y 13.500, y después de la desmovilización, en julio de 2007, Indepaz contó mínimo 8.924 paramilitares activos[59], el proceso de desmovilización ha sido titulado por muchos como «una farsa». Eso se refuerza aún más mirando el trato que se les da a los graves crímenes de los paramilitares. En enero de 2007 el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, anunciaba que habían localizado 4.000 fosas comunes de víctimas del paramilitarismo en todo el país. Estimaban que en cada una de ellas podía haber entre tres y cuatro cadáveres y presumían que el total de víctimas de la violencia paramilitar podía sobrepasar las 100.000 personas.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos,

> hoy en día, de los 30 000 paramilitares desmovilizados, el 92% se benefició de un régimen de amnistía de facto instituido por decreto. Sólo un 8% recae bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz, implementada a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que estimó que la misma tenía que adaptarse para que no violara el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los paramilitares que recaen bajo la Ley de Justicia y Paz están juzgados en audiencias denominadas «versiones libres», y pueden ser condenados a una pena máxima de 8 años, que pueden purgar en «granjas productivas», o imponiendo ellos sus condiciones de «reclusión», lo cual es contrario a los más elementales principios de justicia frente a la gravedad de los crímenes cometidos[60].

El 7 de mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos el comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco». El 13 de mayo de 2008 fueron extraditados igualmente 13 jefes paramilitares y un narcotraficante, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo (Don Berna) y Hernán Giraldo[61]. La extradición

debe ser considerada un regalo para ellos. En EE.UU. serán juzgados solamente por narcotráfico y si colaboran con la justicia las penas llegan a ser aceptables. Es de dudar que luego se presenten en Colombia para ser juzgados por las masacres, asesinatos y despojos que cometieron. Salvatore Mancuso, por ejemplo, tiene pendientes en Colombia al menos 20 procesos y una condena a 40 años que pueden impedir el beneficio de una rebaja de penas a unos 8 años, prevista en la Ley de Justicia y Paz.

Así Mancuso, poco antes de ser extraditado en una entrevista con RCNTV en abril de 2008 declaró tranquilamente que espera ser beneficiado «con penas muy bajas», porque «contar las verdades en Estados Unidos de manera clara y transparente tiene sus beneficios. (…) Tengo mis abogados en EE.UU. haciendo aproximaciones, acercamientos, indagando cómo soluciono los problemas que se derivaron de mi pertenencia al grupo armado en ese país».

Y también para el gobierno colombiano la extradición representa una enorme ventaja. Como justamente señalan organizaciones internacionales de Derechos Humanos:

> En el contexto del escándalo de la parapolítica, estas extradiciones limitarán las investigaciones que adelantan la Fiscalía Nacional y la Corte Suprema de Justicia contra más de 100 parlamentarios y ex parlamentarios por sus relaciones con paramilitares y también las revelaciones sobre las implicaciones de militares en masacres, como lo admitió, por ejemplo, Don Berna hace unas semanas en relación con la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartado[62].

Las declaraciones de algunos paramilitares, e investigaciones de la Fiscalía desataron a partir de principios de 2007 el llamado escándalo de la parapolítica. Hasta mediados de junio de 2008 había 65 congresistas investigados por relaciones con el paramilitarismo, de los cuales 30 estaban presos[63]. Casi todos son de la bancada que apoya a Uribe. Sin embargo el Congreso no se disolvió ni Uribe renunció. El 22 de abril de 2008 la Fiscalía ordenó la detención del senador Mario Uribe, primo y estrecho aliado de Álvaro Uribe, por «concierto para delinquir». Salvatore Mancuso había declarado anteriormente que Mario Uribe le había pedido ayuda para conseguir votos en las zonas que estaban bajo su influencia. Mientras

otro jefe paramilitar, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, había declarado que Mario Uribe solicitó ayuda a miembros de las AUC para conseguir algunas tierras en Sucre y Caucasia. Uribe buscó asilo en la Embajada de Costa Rica, y ésta se lo negó.

Según las declaraciones de Mancuso los paramilitares no sólo escogían los congresistas, «igual hacíamos con alcaldes, igual se hicieron pactos de gobernación» y habían permeado todas las estancias de poder, incluyendo Justicia y la Fiscalía. Y también afirmó que, por ejemplo, en la región que él controlaba le pagaban a la Policía 400.000 dólares al mes.

Mientras tanto el terror sigue:

> El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio «Once de Noviembre» de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población[64].

En 2007 había 76 grupos paramilitares «nuevos», con un total de 8.924 combatientes distribuidos por 25 departamentos del país[65]. Y los nexos con el Ejército también quedaron: el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, denunció que militares de la IV Brigada del Ejército con sede en esa ciudad estaban armando a paramilitares desmovilizados[66].

Y la guerra al narcotráfico, que había sido la excusa para el Plan Colombia, ha fallado. Según un reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen (Unodc), los cultivos de hoja de coca en Colombia crecieron 27% y llegaron a 99.000 hectáreas durante el 2007.

Aparte del terrible costo humano, la estrategia de Uribe a mediano plazo es insostenible también desde el punto de vista económico. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en el presupuesto del 2008 el porcentaje destinado a defensa subió 20% en comparación con el año anterior, el mayor incremento de las últimas décadas, llegando a 21,2% de los recursos presupuestales sin incluir el pago de deuda. El promedio del gasto militar en Colombia con relación al PIB subió de un promedio de 2% entre 1950 y 1989 y de 2,8% entre 1990-1998 a 6,3% del

PIB en 2008, si se incluyen gastos locales y el Plan Colombia o Plan Patriota. Los gastos en defensa y seguridad, en conjunto con el servicio de la deuda, en 2007 representaban 49,1% del presupuesto nacional y para el 2008 será aún más[67].

Ante el desarrollo político en América Latina, Estados Unidos tiene un gran interés en mantener una fuerte presencia militar en Colombia. Frente al anuncio del gobierno de Ecuador de no querer prolongar el permiso para la base de EE.UU. en Manta, el gobierno estadounidense decidió transferir la base a una nueva base militar en Palanquero, en la Guajira colombiana, cerca de la frontera con Venezuela. Se construyen pistas de aterrizaje, se desplazarán dos batallones del Ejército hacia el lugar y se trasladará un escuadrón de helicópteros, así como aviones espía AWACS. Eso constituye una clara amenaza hacia Venezuela[68].

Al mismo tiempo se empezó a exportar el modelo paramilitar, paramilitares incluidos. En Venezuela se está dando una fuerte infiltración paramilitar desde hace varios años, que aumentó notablemente en 2007. En Bolivia, según denuncias de organizaciones sociales y del mismo gobierno, paramilitares colombianos están entrenando al grupo Unión Juvenil Cruceñista, una organización racista de ultraderecha que ha funcionado como grupo de choque de la oposición alrededor de los referendos autonómicos anticonstitucionales organizados por la élite económica y la derecha[69].

En junio de 2008 autoridades ecuatorianas arrestaron en Quito a tres colombianos y un ecuatoriano con planes para asesinar al presidente Rafael Correa. Uno de los colombianos declaró pertenecer a las AUC[70]. Las incursiones armadas de paramilitares y hasta del Ejército colombiano a territorio de Ecuador y Venezuela son frecuentes. Sólo en Puerto Nuevo, en la provincia ecuatoriana de Sucúmbios, cerca de donde se detectó la incursión colombiana para matar a Raúl Reyes y 22 personas más, desde el 2002 a finales de 2007 se contabilizaron «44 violaciones a la soberanía territorial de Ecuador y el asesinato de 63 personas a manos del Ejército colombiano y de las AUC»[71].

Notas

1. Constituye, según la mayoría de las estimaciones, alrededor de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y un porcentaje igualmente alto de la ocupación. Mucho menos que en Bolivia o Perú, aunque la riqueza acaparada durante años se sitúa alrededor de 40% del patrimonio total en Colombia.
2. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla más grande, tiene alrededor de 20.000 combatientes armados; el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que es más pequeño, tiene cerca de 8.000. A ellos se agregan algunas pequeñas agrupaciones con pocos centenares de hombres armados.
3. Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, SISDHES, CODHES. Reporte: febrero 13 de 2008.
4. Center For International Policy's. Colombia Program (CIP): «U.S. Aid to Colombia Since 1997: Summary Tables». http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm
5. Orlando Restrepo Escobar, «Auge del negocio legal e ilegal de la seguridad privada en Colombia», *El Tiempo,* 15 de julio de 2002.
6. United States Department of State (2007), «On Certain Counternarcotics Activities in Colombia. Report to Congress». http://www.ciponline.org/colombia/0706cont.pdf
7. David García, «Empresas transnacionales de "seguridad" en Colombia», *Rebelión*, 9 de diciembre de 2007.
8. Todo indica que mataron a los sobrevivientes del bombardeo, se llevaron algunos cadáveres y sólo ellos saben qué más. En el campamento se encontraba Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC y encargado de los contactos con Francia y Venezuela para una eventual liberación de retenidos en manos de las FARC. La mediación de Venezuela había conseguido la liberación de cuatro personas poco antes. En la operación murieron Raúl Reyes y 22 personas más que se encontraban en el campamento. Entre ellas, algunos mexicanos que pertenecían a una delegación en visita. Colombia fue condenada enérgicamente por todos los países latinoamericanos. Sin embargo, por la postura intransigente de Colombia las relaciones diplomáticas con Ecuador, en julio de 2008 todavía no habían sido reanudadas.
9. Jason Vest. «States Outsources Secret War», en *The Nation,* 4 de junio de 2002.
10. En EE.UU. en los riegos en la agricultura ganan sólo 40.000 dólares.
11. Vest, 2002.
12. Sanda Bibiana Flórez, «Mercenarios en Colombia: una guerra ajena», en *Proceso* nº 1291, 29 de julio de 2001.
13. Ídem.
14. La cantidad total es probablemente mucho mayor. Así, desde enero de 2003 existen de manera oficial 70 soldados norteamericanos de los Green Berrets en la región

petrolera de Arauca. No obstante, según lo expresado por Jaime Caicedo (presidente del PC colombiano) en entrevista personal de fecha abril de 2003, se contabilizaron unos 400 soldados norteamericanos uniformados en el lugar.

15. «Colombia exportó 60 millones de toneladas de carbón y coque en 2006, cantidad que subió a 72 millones en 2007. El precio promedio en 2007 cerró en 70,4 dólares la tonelada, en mayo 2008 ya estuvo en 98 dólares, los costos de producción están debajo de los 30 dólares. El valor de las exportaciones en 2007 fue de 3.495 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 11,65% con respecto al valor reportado en el año 2006, y una participación del 11% en las exportaciones totales, consolidándose como el segundo producto de exportación del país». Información Minera de Colombia (IMC): *Balance Económico de la Industria Minera Colombiana 2007*. IMCPortal, 3 de abril de 2008. http://www.asogravas.org/archivos/ balance_industria_ minera.pdf; «Sintraminergetica: Glencore y Drummond se niegan a resolver peticiones de sus trabajadores», 19 de junio 2008, http:// www.sinaltrainal. org/index.php? option= com_content &task=view&id=382&Itemid=1.
16. En una carta del senador estadounidense Patrick Leahy al secretario general de Justicia, John Ashcroft, en marzo de 2003.
17. La demanda es por «conspiración con paramilitares», relativa al asesinato en marzo de 2001 del presidente y el vicepresidente del sindicato, y seis meses después del nuevo presidente.
18. El petróleo es el principal objetivo de Estados Unidos en Colombia, según información en *El Tiempo,* 30 de octubre de 2002.
19. Y. Christian Miller, «A Colombian Village Caught in a Cross-Fire», *Los Angeles Times,* 17 de marzo de 2002.
20. Karl Penhaul, «Colombia: Americans Blamed in Raid», *San Francisco Chronicle,* 15 de julio de 2001.
21. Miller, 2002.
22. Ídem.
23. Penhaul, 2001.
24. Amnesty International, «Amnesty International Renews calls to Oil Companies operating in Colombia to respect human rights», *AI Index: AMR* 23/79/98, 19 de octubre de 1998.
25. Observatorio de Multinacionales en América Latina: «Colombia en el Pozo. Los impactos de Repsol en Arauca». www.omal.info
26. La guerrilla también es inculpada de narcotráfico, aunque esto obedece básicamente a la legitimación de la guerra. El ELN rehúsa cualquier conexión con el narcotráfico. Las FARC se han «involucrado» en la producción de coca y grava, la compra de ésta y de su pasta en las zonas bajo su control. Incluso Donnie Marshall, jefe de la Drug Enforcement Administration (DEA), dijo el 28 de febrero de 2001, ya en plena cam-

paña de EE.UU. sobre la «narcoguerrilla» en Colombia, frente a la comisión Senate Narcotics Caucus: «There remains, however, that despite the fact that uncorroborated information from other law enforcement agencies does indicate a nexus between certain traffickers and the FARC, there is no evidence that any FARC or ELN units have established international transportation, wholesale distribution, or drug money laundering networks in the United States or Europe. (No existen pruebas de que alguna unidad de las FARC o del ELN haya establecido redes internacionales para el transporte, para la preparación de grandes cantidades de drogas, o sistemas de lavado de dinero por el narcotráfico en Estados Unidos o Europa»). http://drugcaucus. senate.gov/colombia01marshall.html

27. Centro de Documentación de Indepaz, «Antecedentes de las Autodefensas Unidas de Colombia», en: *Boletín de Indepaz*, nº 13, febrero de 2003. Fidel es el hermano de Carlos Castaño y presuntamente resultó muerto hace unos años.
28. Pablo Escobar no estaba aliado con la oligarquía colombiana y no quería someterse a la estrategia estadounidense. El contexto general no puede ser ilustrado con mayor precisión aquí.
29. Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína*, Centros de Estudio del Espectador, 1988, p. 72.
30. Pascual Serrano, «Se confirma la financiación y apoyo de Estados Unidos a grupos paramilitares colombianos», 5 de diciembre de 2000, www.rebelion.org.
31. Alvan: «Denuncia Luis Guillermo Pérez, del colectivo de Abogados», en: *ANN,* 31 de marzo de 2000.
32. Juan Forero, «Colombia Massacre's Strange Fallout», *The New York Times,* 23 de febrero de 2001.
33. Bruno Rütsche (Grupo de trabajo Suiza-Colombia), «Kolumbien – am Abgrund eines offenen Krieges», september 2001.
34. Pascual Serrano, «Los paramilitares colombianos reconocen que operan en coordinación con las fuerzas del Plan Colombia», 17 de mayo de 2001,www.rebelion.org.
35. Raul Zelik, «Ursachen der Gewalt», en: Zelik, R. / Azzellini, D.: *Kolumbien – Große Geschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung*, Editorial Neuer ISP, Frankfurt, 1999.
36. Dick Emanuelsson, «La trinchera se convirtió en tumba de los paracos», en: *Voz,* nº 2079, 31 de enero al 6 de febrero de 2001.
37. En cuanto a las razones que tuvo Estados Unidos para hacerlo existen algunas especulaciones: estrategia de relaciones públicas, presionar más la legalización, etcétera, ante todo se considera seguro que eso no hubiera sucedido un día más tarde.
38. Alirio Bustos Valencia. «Alta traición de la DEA», en: *El Tiempo,* 13 de septiembre de 2000.
39. *El Tiempo,* 22 de julio de 2006.

40. «Banana «para-republic»». En semana.com, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101602, 17 de marzo 2007.
41. Ídem
42. Martha Elvira Soto F. y Orlando Restrepo, «Carlos Castaño afirma que envió instructores a las Autodefensas Unidas de Venezuela», *El Tiempo*, 30 de junio de 2002.
43. Propiedad del multimillonario David Murdoch.
44. 56% de Mohammad Abu Ghazaleh, con participación del grupo Allianz AG (Alemania), Barclays (Gran Bretaña) y FMR Corp y Melon Financial Corp (EE.UU.).
45. Darío Azzellini, «Kolumbien: 150 Dollar Monatslohn statt 600», *Interview mit einem Coca Cola Gewerkschafter*, Mai 2002, http://www.labournet.de/ internationales/co/ccdario.html.
46. Ibíd., 2002.
47. Información detallada sobre los casos de asesinatos y amenazas paramilitares y la implicación del Estado colombiano se encuentran en: Sinaltrainal: «Ampliado caso 2595 OIT por violación derecho a la vida trabajadores Coca cola», 4 de junio de 2008, http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=34.
48. Eduardo Marenco Tercero, «Militares incas en radar antiterrorista de Estados Unidos», en *La Prensa*, Managua, 23 de enero de 2003.
49. Jairo Tarazona (2008), «"El profeta de la muerte", secretos del mercenario Yair Klein». Citado en *El Tiempo*. 25 de mayo de 2008.
50. Los resultados electorales no dicen mucho. En las elecciones al Congreso, de 23,9 millones de electores sólo participaron 10 millones. 1,4 millones de votos eran inválidos, en blanco o abstenciones. Muchos de los votos para Uribe en las regiones rurales fueron conseguidos a la fuerza por los militares. En 248 casos se investigó por fraude electoral, y fiscales y autoridades electorales dieron a conocer la existencia de cuatro millones de credenciales electorales de fallecidos.
51. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm. El reporte ha sido desclasificado en 2004. El gobierno colombiano ha rechazado las acusaciones argumentando que las fuentes de la información han sido borradas en el documento y porque no se trata de una información oficialmente confirmada. Sin embargo, no hay razón para dudar de la información. El hecho de que las fuentes, por motivos de seguridad, sean borradas de documentos desclasificados es común y la seguridad de toda la lista hace suponer que se trata de un trabajo de inteligencia fundamentado.
52. Joseph Contreras, *Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*, 2002.
53. Ibíd., p. 111.
54. Helena Villamizar García-Hereros, «El gasto en Defensa y Seguridad», en: *El Nuevo Siglo*, 16 de abril de 2008.
55. A pesar de ello, asesinaron a casi 200 personas sólo en los primeros dos meses.

56. Eso no sería un paso novedoso. En el pasado, se integraron por ejemplo los combatientes desmovilizados de la guerrilla maoísta EPL a unidades rurales de la policía política (DAS) y cometieron numerosos asesinatos y masacres.
57. Rand Corporation 2001, «Columbian Labyrinth», Internet Edition www.rand.org, p. 60.
58. http://web.amnesty.org/report2004/col-summary-esl.
59. «¿Está vivo Fidel Castaño?», en: *Semana,* 4 de julio de 2007, http://www.semana. com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=102018
60. Indepaz: «Nuevo mapa paramilitar», julio de 2007. http://www.indepaz.org.co/index.php? option=com_content&task=view&id=537&Itemid=58
61. FIDH, «La desmovilización paramilitar: en los caminos de la Corte Penal Internacional», 2 de octubre de 2007. http://www.fidh.org/spip.php?article4751
62. En ese contexto es interesante que después de la extradición desaparecieron siete computadoras portátiles que pertenecían a los jefes paramilitares.
63. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), «Gobierno colombiano consolida la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia». 14.5.2008. http://www.fidh.org/spip.php?article5531
64. El Congreso bicameral de Colombia está integrado por 102 senadores y 166 representantes a la Cámara.
65. Iván Cepeda, «Carta al presidente de Colombia», *El Espectador*, 27 de enero de 2008. Indepaz: «Nuevo mapa paramilitar», ya citado.
66. TeleSUR, 29 de febrero de 2008.
67. Helena Villamizar García-Herreros, art. cit.
68. José Vicente Rangel, «Los confidenciales de Rangel», 15 de junio de 2008. http://www.aporrea. org/actualidad/a58883.html
69. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), 2 de mayo de 2008.
70. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), 14 de junio de 2008.
71. Jorge Chávez Morales, «Muertos como arroz en frontera del Ecuador», *Últimas Noticias*, 16 de marzo de 2008.

CAPÍTULO VI
VENEZUELA: PARAMILITARISMO Y «CONTRA» EN CONSTRUCCIÓN

DARÍO AZZELLINI

El proceso bolivariano en Venezuela está en la mira de EE.UU., no sólo por la gran riqueza de recursos del país (principalmente petróleo, seguido de gas, agua, aluminio, hierro, oro, biodiversidad y otros más) sino por el papel central que tiene en la integración continental que se está gestando y las posibilidades de cambios fundamentales que la política internacional venezolana abre para otros países. No cabe duda de que EE.UU. está dispuesto a tumbar el proceso bolivariano por cualquier medio. Y como se ha visto en el pasado, eso significa que la opción militar puede ser considerada. Aunque la situación política del continente, la guerra en Iraq y las características del territorio venezolano, como también el apoyo popular que tiene el proceso bolivariano, hacen improbable una intervención militar directa a mediano plazo.

Sin embargo, esa intervención no resulta necesaria. Existen otras estrategias. Entre ellas, el intento de provocar una reacción frente a las frecuentes incursiones colombianas a Venezuela y causar, de esta forma, una justificación para apoyar a Colombia en una guerra en contra de Venezuela. O la opción más promisoria: construir una fuerza contrarrevolucionaria parecida a la Contra en los años ochenta en Nicaragua, a partir del paramilitarismo. Esta maniobra se lleva a cabo con la complicidad y el apoyo de instituciones gubernamentales colombianas.

Eso no significa que no sean aplicadas todas las demás estrategias posibles para debilitar el proceso bolivariano, desde el desabastecimiento intencional, pasando por la compra de funcionarios, apoyo a la oposición, etcétera. Aquí, sin embargo, se tratarán las dos vertientes de la privatización de la guerra: el paramilitarismo y las compañías militares y de seguridad privadas (CMP y CSP).

En Venezuela operan varias CSP y CMP. Respecto a las compañías de seguridad privada en los últimos años se ha dado la participación de contratistas de seguridad en acciones de sabotaje contra PDVSA y en otros contextos desestabilizadores. Las actividades de CMP en Venezuela, a su vez, se podrían describir como guerra tecnológica, como el caso de Intesa (Informática, Negocios y Tecnología, S.A.) durante el «golpe petrolero» de 2002/2003.

En el caso del paramilitarismo se puede observar una fuerte presencia en Venezuela, especialmente en las regiones fronterizas con Colombia. En el Táchira, Apure, Barinas y el Zulia el paramilitarismo colombiano y el narcotráfico (que muchas veces coinciden) tienen grandes intereses económicos y cuentan con la colaboración de alcaldes de oposición como «bolivarianos». Los paramilitares manejan el narcotráfico, cobran «vacuna» a los comerciantes, controlan el contrabando de gasolina y alimentos hacia Colombia y cuentan en algunos casos con la colaboración de efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y de la Guardia Nacional (GN). Tienen presencia en casi todo el territorio nacional, con una fuerte tendencia al aumento especialmente en Sucre, Delta Amacuro, Amazonas y Caracas. Se dedican además a la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero. Son apoyados por los ganaderos y ejercen intimidaciones; cumplen asesinatos selectivos de campesinos y cuadros revolucionarios. En Caracas empezaron a penetrar los barrios y a regalar o vender a muy bajo precio cocaína a grupos de pequeños criminales para establecer buenos contactos y

> buscan incidir en sectores vulnerables de la población venezolana a través de grupos de colombianos que financian y «protegen» en parte a fracciones de la economía informal, específicamente en sectores de los buhoneros y empresas de taxis con el fin de construir un aparato de inteligencia hacia lo interno de la sociedad venezolana[1].

Al mismo tiempo «van suplantando a la delincuencia criolla en actividades como el préstamo usurario, el narcotráfico, la trata de personas y el juego ilegal»[2].

El 25 de junio 2008, Miguel Ángel Durán y Julio César Durán, miembros de la directiva del Frente de Ex Trabajadores de Coca Cola del estado

Portuguesa, y un niño de diez años que los acompañaba, fueron asesinados brutalmente con diez tiros en el carro en el cual circulaban. Los asesinos se acercaron con otro carro. El Frente de Ex Trabajadores mantiene desde hace años un conflicto laboral con la empresa. Aunque no se logró aclarar el asesinato, sindicalistas temen que Coca Cola Venezuela pudiese haber pasado a la misma actuación que Coca Cola Colombia, donde sus filiales mantienen una estrecha relación con paramilitares, que asesinaron a varios sindicalistas, preferiblemente en medio de conflictos laborales[3].

El paramilitarismo no es un fenómeno sólo militar o criminal y como tal, no se puede combatir solamente con Ejército y Policía, aunque esa lucha sea un componente absolutamente necesario. El paramilitarismo también es un fenómeno económico, social y cultural, que transporta e impone valores, copa espacios sociales, da trabajo y se manifiesta en todos los contextos sociales imaginables.

Tratándose de un fenómeno reciente y poco estudiado en Venezuela, parece importante avanzar algunas hipótesis sobre sus estrategias y desenvolvimiento.

La estrategia de la Contra

La estrategia de la Contra no mira hacia una victoria militar, sino más bien a una guerra de desgaste golpeando y saboteando infraestructura, producción y todo lo que pueda dar la idea de otra vida más allá de la lógica capitalista. Así como en la guerra financiada por EE.UU. en contra de la Nicaragua sandinista, la Contra evita enfrentamientos directos con fuerzas militares regulares, ataca la base de los procesos de transformación y obstaculiza los cambios. En Nicaragua la estrategia fue exitosa, el país fue arruinado, puesto contra la pared a causa de los gastos militares y humanos necesarios para repeler los ataques contrarrevolucionarios. Y mientras los recursos para mantener servicios sociales y seguir adelante con la transformación de la sociedad fueron pulverizados por la guerra, EE.UU. llevó al pueblo de Nicaragua a elegir entre proyecto sandinista/socialista y guerra, por un lado, o capitalismo y paz, por el otro.

Sin embargo, Venezuela no es Nicaragua y tiene muchos más recursos. Además, en Venezuela todavía no se logró algo necesario para crear condiciones de guerra interna: poner pobres en contra de pobres. Históricamente las clases medias y altas, aunque estén opuestas a un proyecto de cambio social y dispuestos a financiar cualquier intento de revertirlo, no arriesgan su vida y sus pertenencias combatiendo ellos mismos. Ese papel lo tienen que asumir los pobres.

Así, el paramilitarismo en Venezuela no corresponde a un simple fenómeno criminal, como ha sido presentado por la mayoría de los medios y como sigue siendo entendido por muchos en Venezuela. Así que hay que identificar la estrategia del paramilitarismo y no verlo como un acumulado de muchos hechos aislados.

El senador colombiano Gustavo Petro declaró en febrero de 2003:

> Los asesinatos y el horror en Venezuela son los paramilitares que están controlando la frontera colombo-venezolana y penetran cada vez más profundamente en ese país. (…) La táctica paramilitar es aglutinar fuerzas, concentrar hombres y recursos para hacer la guerra del terror cuando un extremo poderoso de la oposición y empresarios venezolanos les dé la orden de hacer la guerra adentro de Venezuela al estilo de la Contra nicaragüense[4].

En mayo de 2006 el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) denunció públicamente

> que la penetración paramilitar en la frontera, en los demás estados y la capital de la República, es parte activa de los planes que contra la Revolución Bolivariana y su pueblo dirige y ejecuta el imperio norteamericano, por intermedio de su gobierno, el Comando Sur y de los sectores ultrarreaccionarios de Colombia (AUC) y Venezuela.

La cual busca «generar una zona de control o cabecera de playa en el eje fronterizo que va desde los estados Zulia, Táchira, Barinas, Apure y Amazonas en una primera fase».

Vemos entonces cuáles serían, desde el punto de vista estratégico, las zonas de Venezuela importantes para una guerra contrarrevolucionaria. Por un lado la cordillera de los Andes, que representa un corredor para mover armas y combatientes[5] (y drogas) desde Colombia hacia la zona

más habitada de Venezuela y con la concentración de gran parte de la industria de producción de bienes. Apartando geográficamente además la zona petrolera del Zulia y teniendo amplio acceso a los llanos.

> Desde allí, con mercenarios colombianos desmovilizados de la AUC, sostendrían acciones permanentes de sabotaje a instalaciones estratégicas como: campos y refinerías petroleras, oleoductos, represas, puentes, entre otros; así como también asesinatos contra dirigentes del movimiento popular; generando con esto una imagen de desestabilización e ingobernabilidad hacia el mundo, dejando ver la supuesta «existencia de una resistencia armada al régimen», lo que podría legitimar una fuerza de intervención en nombre de la pacificación y la seguridad regional[6].

La otra zona estratégica es Delta Amacuro. Por sus características geográficas es ideal para las actividades de una Contra (y es de hecho muy parecido a la costa atlántica de Nicaragua). No es fácil penetrar militarmente con un ejército convencional el Delta, se tiene conexión rápida con Trinidad y Tobago para el abastecimiento desde el exterior, y por las vías fluviales hay acceso a la segunda zona industrial importante de Venezuela, las industrias básicas de Bolívar. En caso de guerra, las fuerzas militares venezolanas estarían obligadas a un despliegue territorial en dos zonas muy distantes, mientras al mismo tiempo no podrían descuidar la frontera sur con Colombia.

TRANSPORTISTAS Y TAXISTAS

Una estrategia de penetración con un trasfondo claramente contrarrevolucionario que puede ser observada, es la de asumir el control de empresas de transporte y taxis, como está pasando en varias partes del país. Al mismo tiempo, se observa un aumento de asesinatos y ataques a transportistas y taxistas a lo largo del territorio nacional; se trata de alzarlos en contra del Gobierno. La derecha logró en parte su objetivo: a partir de la segunda mitad de 2007 aumentan las protestas en el sector del transporte de Mérida hasta Caracas. En ese contexto es importante notar que los taxistas y transportistas son un sector estratégico por dos motivos:

a) pueden paralizar un país y ser una pieza contrarrevolucionaria central. El golpe de Chile se hizo a raíz de involucrar los sindicatos transportistas. Si el golpe petrolero en Venezuela no fue exitoso, en cierta medida, fue porque los transportistas no estaban con los golpistas;
b) los taxistas y transportistas forman la base de cualquier red de inteligencia: están todo el día en camino, ven y escuchan todo, nadie les hace caso y tienen radio para comunicarse. No en vano después de la revolución sandinista, en 1979, los sandinistas fundaron cooperativas de taxistas; la primera cooperativa que el EZLN construyó fuera de sus comunidades fue de transporte; y el Plan Colombia empezó con que el Gobierno financió centenares de empresas y cooperativas de taxistas en el Putumayo y ciudades. También en Venezuela, anteriormente, era muy común que a los jubilados de la Guardia Nacional se les diera un taxi para que formaran parte de la red de inteligencia.

En Venezuela el paramilitarismo está siguiendo esa estrategia: según informantes locales, en San Cristóbal gran parte de los taxis están bajo control paramilitar. Según información del FNCEZ, 80% de los taxistas en Barinas pertenecen a una red de inteligencia paramilitar. Algunos de cooperativas, otros son individuales que tienen carros con vidrios ahumados. En Caracas también están penetrando el sector transporte. Copan líneas y choferes de busetas y forman cooperativas de taxis.

Voceros de consejos comunales reportaron en mayo de 2008 reuniones de lo que denominan «mafia de los autobusetes» con dirigentes de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo en Maracaibo y Barquisimeto. Trabajadores del transporte denunciaron que varias empresas transportistas estarían involucradas —en coordinación con la oposición— en preparativos para un paro nacional en el marco de un plan desestabilizador contra el gobierno. Según un alerta que lanzó el presidente Chávez a finales de mayo de 2008, muchas de las «mafias del transporte» tienen nexos estrechos o pertenecen a sectores empresariales que tuvieron un papel activo en el golpe de 2002. Los transportistas estarían participando en la preparación de un plan desestabilizador que combine desabastecimientos, acciones en las calles y una eventual participación de sectores militares para tumbar el gobierno[7].

Paramilitarismo en Venezuela: antecedentes, acciones y contactos internacionales

La primera vez que se verifica oficialmente la presencia de paramilitares colombianos operando en Venezuela es en diciembre de 1997. Siete paramilitares son detenidos en Apure bajo la sospecha de participación en secuestros. Se les encuentran armas de guerra, mapas detallados de la zona y una lista de colaboradores ganaderos y terratenientes. Los capturados declararon haber sido contratados por el general Enrique Medina Gómez, de la GN venezolana. Recibieron 75 millones de pesos para llevar a cabo acciones en Venezuela. Una semana después los paramilitares fueron liberados por orden del mismo general y hasta recibieron salvoconductos firmados por él[8]. En 2002 Medina Gómez participó en el golpe de Estado y las actividades de la ultraderecha golpista en Plaza Altamira.

Carlos Castaño declaró en 1997 haberse reunido con 140 empresarios, ganaderos y terratenientes de Barinas, Táchira y Zulia con miras a construir una estructura paramilitar en esos estados[9].

El 15 de julio de 2000 una docena de personas fuertemente armadas secuestraron en Carabobo al empresario Richard Boulton. Las investigaciones dieron lugar a diversos allanamientos y detenciones de paramilitares colombianos en San Cristóbal, Maracay y Valencia. Sin embargo, Richard Boulton no fue liberado hasta el 15 de julio de 2002 por mediación de Carlos Castaño, quien aclaró que los secuestradores pertenecían a una supuesta facción disidente de las AUC. Obviamente eso no se pudo confirmar, así que también podría haber sido una maniobra de las AUC para evitar ser conectadas directamente con el secuestro que provocó interés internacional.

El 26 junio de 2002 varios medios difundieron un video en el cual unas supuestas Autodefensas Unidas de Venezuela declararon operar en Táchira, Apure y Zulia. Un «Comandante Antonio» dijo que reunían 2.200 hombres armados, declaró al presidente Hugo Chávez como objetivo militar y anunció que iban a cambiar el panorama político de Venezuela.

Unos días después Carlos Castaño admitió: «Tenemos gente dictando instrucción en territorio venezolano. Mantenemos comunicación. Es un proceso en gestación»[10].

Sin embargo, en 2003 las AUC desarrollaron varias incursiones militares y ataques a territorio venezolano desde Colombia. El 19 de marzo aproximadamente 500 paramilitares cruzaron el límite fronterizo natural Río de Oro (Sierra de Perijá, Zulia) con uniformes nuevos, armas de guerra y equipos de comunicación modernos. Asaltaron y saquearon el pueblito venezolano La Escuelita, portando insignias de las tropas colombianas de contrainsurgenica, el ELN y la GN venezolana. Abrieron fuego contra helicópteros militares venezolanos para evitar el desembarque de tropas. Un bombardeo de la aviación venezolana les causó unas 40 bajas y huyeron a territorio colombiano llevándose los muertos. El 28 y el 30 del mismo mes atacaron otra vez en la misma zona de Río de Oro. Luego se retiraron otra vez al lado colombiano a causa de bombardeos y patrullajes de la Fuerza Armada de Venezuela. En los tres ataques asesinaron a mínimo nueve indígenas, quemaron y saquearon un puesto de salud de emergencia, el expendio de medicinas, una cooperativa de alimentos y una videosala; masacraron los animales domésticos de la población campesina indígena y les robaron las barcas a motor que usan para trabajar y moverse en la zona. Hay indicios de que en los ataques hubo apoyo de parte de estructuras del Ejército colombiano[11]. El 4 de septiembre el Ejército venezolano fue atacado por paramilitares colombianos en el municipio de Ayacucho (Táchira), a seis kilómetros de la frontera. El 5 de septiembre murieron tres paramilitares colombianos y un soldado venezolano quedó gravemente herido en un enfrentamiento en la zona fronteriza del Táchira[12].

Después de 2003 ocurrieron enfrentamientos esporádicos, sin embargo ya no de esa magnitud y no como consecuencia de operaciones ofensivas de las AUC en contra del Ejército venezolano. La estrategia se concentró más bien en construir y consolidar estructuras paramilitares en el interior de Venezuela sin llamar demasiado la atención.

Un personaje importante en las tramas contrarrevolucionarias y nexos con las AUC fue el ex general de la GN Felipe Rodríguez, alias «El Cuervo». Rodríguez tuvo un rol central en el golpe de 2002, luego fue jefe de seguridad de Plaza Francia en Altamira (Caracas) durante la ocupación de la misma por militares y ex militares golpistas. Luego fue prófugo de la justicia, que lo buscaba como partícipe del golpe y presunto autor de unos atentados explosivos contra las embajadas de Colombia y España

en el 2003. Según informaciones de inteligencia, a principios de marzo de 2004 logró huir en helicóptero hacia el departamento colombiano del Cesar. El helicóptero pertenecía a las AUC y Rodríguez se había reunido con el entonces jefe militar de las AUC, Salvatore Mancuso, para acordar la compra de armas y entrenamiento para ataques terroristas en Venezuela[13]. Rodríguez fue capturado, fuertemente armado, el 5 de febrero de 2005 en Caracas, y fue condenado en abril de 2008 a 10 años y 6 meses de reclusión, por su participación en los atentados contra las embajadas.

Los contrarrevolucionarios venezolanos también tienen lazos estrechos con el sector terrorista cubano de EE.UU., donde hasta tienen la posibilidad de entrenar tranquilamente su lucha terrorista. *The Wall Street Journal,* en su editorial del 29 de enero de 2003 rinde cuenta de unos campos de entrenamiento terrorista en Florida. Según el periódico, allí entrenaba una alianza paramilitar compuesta por la «Junta Patriótica de Venezuela» (JPV), liderada por el ex capitán de la GN Luis Eduardo García, y los «Comandos F-4» del cubano Rodolfo Frómeta. El nombre JPV fue escogido en clara alusión a la «Junta Patriótica de Cuba», un grupo de cubanos exiliados de extrema derecha con sede en Caracas, que durante el golpe del 2002 había participado en los ataques a la Embajada cubana. García, que también había participado en el golpe del 2002, admitió haber entrenado 50 miembros de los Comandos F-4. Los dos grupos, según él, combinan sus experiencias militares e intercambian informaciones de inteligencia. «Nos preparamos para una guerra», declaró García. No cabe duda en contra de quién se dirige esa guerra. En un acuerdo firmado en 2002 para formar una «alianza cívico-militar latinoamericana» entre la JPV y los F-4 se anunció la resistencia en contra de los «nuevos regímenes comunistas» en América Latina, refiriéndose a Brasil, Cuba y Venezuela[14].

Las peticiones del gobierno venezolano al gobierno de Washington se quedaron sin responder. Sólo el entonces embajador de EE.UU. en Venezuela, Charles S. Shapiro, declaró el 30 de septiembre que se estaba investigando el asunto y si había que acusar a alguien, el gobierno de EE.UU. sabría qué hacer, y añadió sin darle mucha importancia: «Algunos venezolanos han recibido formación militar en EE.UU.».

El caso más espectacular de infiltración paramilitar hasta la fecha fue la detención de casi 130 paramilitares colombianos en la finca Daktari en

Baruta, cerca de Caracas, en mayo de 2004. Las investigaciones de la Disip (seguridad del Estado) averiguaron la participación de numerosos militares. Según un agente de la Disip, infiltrado en un encuentro en el Country Club de Caracas, efectuado el 23 de abril de 2004, al cual asistieron unos diez militares y Gustavo Zingg, se comentó que cualquier acción en Miraflores que no terminara con la muerte de Chávez sería considerada un fracaso. En el mismo encuentro se habló también de ejecutar atentados contra dos coroneles chavistas de la GN por su liderazgo, contra unos objetivos gubernamentales y grupos revolucionarios del sector 23 de Enero. También se habló de golpe usando a la Policía Metropolitana y sectores del Ejército. Un coronel de la Aviación propuso bombardear con un F-16 el *Aló Presidente* y frente a objeciones de algunos presentes con respecto a las víctimas civiles que esta operación podría generar, el coronel dijo «que esa era parte del sacrificio que había que hacer para sacar a Chávez del poder». El despegue del F-16 iba a dar la señal para el inicio de la ejecución de los planes. Los paramilitares —vestidos con uniformes del Ejército venezolano— iban a bloquear el comando móvil de la Guardia Nacional y atacar el Palacio de Miraflores. Los comandantes paramilitares colombianos recibieron dos millones de dólares para desarrollar la operación[15].

La finca donde se encontraron los paramilitares pertenecía a Robert Alonso, un exiliado cubano, hoy prófugo en Florida, y los paramilitares tenían uniformes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entre los detenidos estaba el jefe del grupo, José Ernesto Ayala Amado, alias «Comandante Lucas», del Bloque Norte de Santander de las AUC. Según sus declaraciones, había entrado al país a mediados de abril siguiendo las instrucciones del empresario venezolano Gustavo Zingg Machado (anteriormente Gustavo Quintero Machado), Alonso y un militar. Lucas al momento de la detención tenía un chaleco militar y una pistola, que en un primer momento no quiso entregar porque supuestamente todo se iba a resolver con una llamada. En medio de la detención intentó llamar a Zingg desde su celular, después de que ya habían hablado 73 veces por teléfono durante ese día. Zingg a su vez habló 31 veces con el animador televisivo Orlando Urdaneta. Lucas declaró sobre la participación de políticos de oposición del Zulia, federaciones de ganaderos, la Onidex de San Antonio del Táchira

que le dio un permiso colectivo y les asignó escolta para llegar hasta Caracas, y un efectivo de la Guardia Nacional. Según sus declaraciones, los paramilitares habían sido entrenados en el uso de fusiles FAL por policías venezolanos y planificaban un asalto para robar una gran cantidad de esos fusiles usados por el Ejército de Venezuela. En el juicio se averiguó que algunos de los colombianos no eran paramilitares y que habían sido llevados a Venezuela bajo engaño. Además de los ya nombrados, según la Disip estuvieron involucrados también Pedro Carmona Estanga, ex dirigente empresarial y golpista autoproclamado presidente en abril de 2002; María Luisa de Choissone, directora ejecutiva del Bloque de Prensa Venezolana; Liliana Hernández, diputada de Primero Justicia; Rafael Marín, ex secretario general de AD; Ovidio Poggioli, ex director del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

CONTRABANDO

Un gran negocio de los paramilitares colombianos en la zona fronteriza es desde hace muchos años el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, donde la gasolina cuesta alrededor de 30 veces más. El contrabando está en gran parte bajo control paramilitar, ya que también la usan para la producción de cocaína. Por razones obvias, debe haber una colaboración de parte de elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de Venezuela. De otra manera no se explican las grandes cantidades que pasan «inobservadas» por la frontera. Lo mismo vale para el contrabando de alimentos, otro negocio rentable en manos de los paramilitares. A finales de 2007 se podía observar en todas las tiendas de la Costa Atlántica de Colombia mayoritariamente alimentos venezolanos de contrabando. En algunos de esos rubros se daban al mismo tiempo situaciones de escasez en Venezuela, o mejor dicho, situaciones de fuerte especulación, dado que aunque productos como la leche y el azúcar no se encontraban por esa época al precio regulado por el Estado, en el mercado ilegal siempre se conseguían todos lo productos, obviamente con un sobreprecio enorme.

En muchas zonas fronterizas es común que algunos efectivos de la Guardia Nacional o del Ejército que están en las estaciones de servicio

para controlar la venta de gasolina permitan llenar también tambores cobrando un sobreprecio. Según informaciones de la población local, en varias zonas fronterizas son también efectivos de la GN quienes dan el «libre tránsito» a los contrabandistas; para que no sea tan obvio, eso se limita a ciertos días y horas[16]. Esa es también una de las razones por las cuales hubo fuertes resistencias de diferentes sectores a que los consejos comunales o comunidades organizadas asumieran la venta de gasolina.

Un teniente del Ejército, que estuvo trabajando en el Teatro de Operaciones 1 (la zona donde se juntan Barinas, Apure y el Táchira) comentó que en muchos casos los efectivos del Ejército que tenían un trabajo efectivo y presentaban resultados, eran transferidos a otro lugar por sus superiores. A él mismo le había pasado. Después de haber averiguado unas rutas de contrabando de gasolina con el equipo del cual estaba a cargo, y haber decomisado 12.000 litros de gasolina, fue «premiado» siendo transferido a Caracas. Eso, aunque él quería seguir con su trabajo en la zona, porque ya había adquirido conocimiento de las rutas de contrabando.

SITUACIÓN CARCELARIA

Las cárceles venezolanas están llenas de paramilitares, sin embargo, la mayoría de ellos no están presos como paramilitares sino por diferentes crímenes. Que no sean clasificados como paramilitares tiene consecuencias para el trato que reciben, o mejor dicho, el trato no difiere del trato que reciben otros internados, lo que facilita su actuación tras las rejas, en las cárceles (imponer su control sobre parte de la población carcelaria, reclutar nuevos seguidores entre los presos comunes, controlar ciertos negocios tras las rejas, muy probablemente —como en todo el mundo— con la colaboración de una parte del personal carcelario). Una repartición sistemática de paramilitares, guerrilleros y presos comunes en diferentes áreas de la cárcel se da en la cárcel de Santa Ana. La brutalidad de los asesinatos internos podría ser consecuencia de esa presencia paramilitar masiva en las cárceles. Han llegado a ser comunes las mutilaciones de brazos, piernas, cabezas, y el acto de cortar en pedacitos a las víctimas. Sin embargo, también hay testimonios que sostienen que el fenómeno no es nuevo, que ya hace 15 años había asesinatos de ese tipo en las cárceles venezolanas, y que el aumento no es relevante.

Penetración cultural

No hay que subestimar la penetración cultural, que prepara y abona el terreno para la penetración paramilitar. Así se observa que en gran parte de la zona fronteriza los puestos en la calle ofrecen y venden de manera masiva CD con música de paramilitares, los llamados corridos prohibidos: música con letras que exponen, de manera positiva, el fenómeno del paramilitarismo. Algunos buhoneros actúan también como red de inteligencia. Algo parecido pasa con el negocio de los DVD quemados. Una actividad que los paramilitares le quitaron a otros colombianos y que hoy controlan en buena parte. Varias de las tiendas medioclandestinas que venden CD y DVD quemados al mayor en el centro de Caracas están en manos de supuestos colaboradores de paramilitares, que a su vez se relacionan con los también presuntos colaboradores paramilitares que en la zona de El Silencio compran oro roto y dan préstamos.

Visto que el negocio no tiene los márgenes de ganancia de los otros negocios en los cuales operan los paramilitares, sino que son mínimos, ¿cuáles podrían ser las explicaciones para la penetración paramilitar de ese negocio? Por un lado, también la red de inteligencia y por el otro la influencia cultural. En Caracas, a finales de 2005, hubo una distribución notable de un video que muestra desde la perspectiva de los paramilitares cómo éstos tomaron Medellín. En 2007/2008, en medio de las tensiones fronterizas, y en el auge de las actividades de Chávez para la liberación de retenidos por las FARC, el único video sobre el país vecino que se encontraba de manera masiva en los puestos de los buhoneros era un documental de Radio Caracol Noticias (una red mediática colombiana de ultraderecha uribista) sobre Colombia y el supuesto conflicto. Eso, cuando en Venezuela están circulando docenas de documentales desde una perspectiva progresista sobre el tema.

Los brutales asesinatos en las cárceles son filmados con celulares y circulan en los celulares de estudiantes, de adolescentes de las escuelas y en los barrios, junto a cantidad de DVD que muchas veces contienen solamente imágenes de mutilaciones, asesinatos, etcétera, y que se venden en los puestos callejeros como una manera de acostumbrar a la población a ciertos niveles de violencia. En Catia (Caracas), por ejemplo, los videos

están siendo mostrados en muchos puestos de venta de DVD durante buena parte del día.

También se fomenta una fuerte cultura de consumo entre los jóvenes, creando la imagen de la importancia de bienes de lujo, motocicletas, celulares, carros, ropa de marca, etcétera. A través de este recurso se presenta el involucramiento en el paramilitarismo como manera efectiva de tener acceso a las finanzas necesarias. El líder campesino Braulio Álvarez alerta: «El sicariato hace una vida efectiva entre los jóvenes, cuyas edades oscilan entre 13 y 18 años. Eso significa enseñar a esos muchachos no solamente a matar, sino a descuartizar a personas vivas. Es algo realmente atroz»[17].

El corredor andino y el frente del este

Después de una primera etapa de penetración paramilitar económica, compra de fincas como bases, contrabando de ganado, secuestros y extorsiones, el primer nexo visible de los paramilitares en Venezuela es con los terratenientes y ganaderos que usan a paramilitares colombianos como sicarios. La penetración masiva en Venezuela empieza con la supuesta desmovilización del paramilitarismo en Colombia a partir de 2003. Desde las zonas fronterizas se extendió primero al corredor andino, hasta el momento el frente más desarrollado, en donde, incluso, ha sido avisada la posible existencia de centros de apoyo logístico y de inteligencia para las actividades contrarrevolucionarias en Venezuela, y en donde se cuenta con la presencia de especialistas internacionales. En lógica militar, después del corredor se refuerza el centro: Miranda-Caracas. Y como último se empieza a perfilar el frente del este con el eje Sucre-Delta Amacuro-Bolívar.

En el campo es evidente que los terratenientes están detrás de la organización de actividades paramilitares para contrarrestar la lucha al latifundio y la distribución de tierras a la población indígena y campesina que ha sido despojada durante siglos. Desde la emanación de la primera *Ley de Tierras,* a finales de 2001 y hasta mayo de 2008, han sido recuperadas 2,7 millones de hectáreas y más de 160.000 familias han empezado a trabajarlas. Eso desde el 2002, según los datos de los movimientos campesinos, ha llevado al asesinato de aproximadamente 200 campesinos e indígenas. La mayoría en el corredor que comprende Zulia, Barinas,

Apure y Táchira, con concentración aun mayor en zonas estratégicas a los dos lados del corredor andino, como por ejemplo el Sur del Lago.

La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Fedenaga) rompió públicamente la *Gaceta Oficial* en donde salió publicada la Ley de Tierras. José Luis Betancourt, el entonces presidente de Fedenaga, y otros representantes de la federación anunciaron que no iban a reconocer la ley. Mientras Betancourt amenazó al gobierno con armarse si la ley fuese aplicada, otros representantes de Fedenaga llamaron a sus asociados a armarse[18]. «El móvil de estos crímenes, no hay duda, tiene que ver con el rescate de las tierras y la determinación del movimiento campesino de hacer productivas esas tierras»[19].

La puerta de entrada para los paramilitares, muchos de la rocafuerte paramilitar Cúcuta, fue el Táchira. En San Cristóbal cobran vacuna a los comercios y controlan directamente una parte cada vez más grande de éstos. Supuestamente, incluso son dueños de algunos centros comerciales recién construidos. En algunas carreteras rurales de la región incluso hay retenes paramilitares que le cobran a la gente que pasa por allí. En la

> zona norte del estado Táchira, específicamente en el eje San Antonio-La Fría, Colón, Coloncito y en la costa oriental del estado Zulia, Santa Bárbara del Zulia (…) se vienen posicionando con una táctica de «limpieza social» (…); para ganar apoyo, le brindan «seguridad» al sector ganadero y comerciante afectado por el flagelo del secuestro y la extorsión, construyendo así sus bases sociales[20].

Pero no sólo eso: a finales de 2007, en Ureña y San Antonio los paramilitares, en algunos barrios (por ejemplo cerca del aeropuerto), estaban cobrando cinco bolívares fuertes por casa para «limpieza social». La gente está generalmente hasta contenta de que eliminen algunos criminales y establezcan «seguridad», así que en algunas zonas existe apoyo al paramilitarismo, son sectores que se dejan influenciar por el discurso de «limpieza social».

Como el paramilitarismo avanza siguiendo el corredor, de San Cristóbal hacia Mérida y Barinas, avanzan también las prácticas de los paramilitares. Según informaciones de un representante bolivariano de la zona, en el municipio Sucre de Barinas han sido asesinados 10 taxistas

y 58 personas por limpieza social en el lapso de dos años. En Barinas también se habla del capital paramilitar invertido en centros comerciales.

A finales de marzo de 2008 la policía del Táchira capturó cuatro presuntos paramilitares del frente Puerto Santander (Colombia) en La Fría, municipio García de Hevia. Los tres venezolanos y un colombiano estaban armados con una pistola calibre 4.5 Smith y una Glock nueve milímetros, esta última solicitada por el Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Cumaná. Según la policía los capturados estaban preparando un secuestro. Además, en ese contexto se estaría investigando también a otras personas posiblemente involucradas con extorsión, secuestro y delitos de paramilitarismo en la región[21]. Sin embargo como la mayoría de los efectivos de los órganos de seguridad vienen todavía de gobiernos anteriores en los cuales las prácticas corruptas eran encubiertas, no sorprende que muchos también continúen con sus prácticas. Así que el FNCEZ denuncia:

> Los paramilitares en la frontera tienen como base logística un cartel de narcotraficantes con muchas ramificaciones que incluso llega a alcanzar hasta los mismos cuerpos de seguridad, e importantes grupos políticos, económicos y sociales de la vida venezolana. Existen sectores del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), de la GN y las policías de los estados Táchira y Zulia que protegen y encubren las acciones del paramilitarismo; específicamente en el estado Táchira, por ejemplo, la cadena de sicariato se eleva a más de 300 asesinados y los mismos siempre son presentados por la policía como ajustes de cuentas y guerra entre bandas[22].

La peor situación se encuentra en Zulia, donde según múltiples denuncias y testigos, buena parte del gobierno regional opositor tiene nexos estrechos con el paramilitarismo. En marzo de 2008 el ex vicepresidente de la República y periodista José Vicente Rangel denunció que «existe una unidad élite en el estado Zulia que reubicó a paramilitares con protección de la gobernación de esa entidad». Según sus informaciones, frente a la presión internacional que enfrentaba el gobierno de Colombia y su presidente Álvaro Uribe después de haber atacado militarmente territorio ecuatoriano, «se giraron instrucciones para que los grupos paramilitares en Venezuela se replegaran, y algunos operadores de la inteligencia colombiana regresaran a sus bases». Los paramilitares que estaban ope-

rando en los estados Barinas, Apure y zonas fronterizas del Táchira, fueron reubicados en el Zulia[23].

El 24 de abril de 2008 efectivos de las Fuerzas Armadas descubrieron cerca de Boca de Orope, en el municipio Catatumbo, en la Sierra de Perijá, estado Zulia, un campamento de paramilitares colombianos a 500 metros de la frontera. Según informaciones de autoridades militares

> el campamento descubierto era usado para entrenar tropas irregulares de combate, ello en virtud de algunas evidencias halladas en el mismo, tales como barras de equilibrio, un túnel o «conejera», rampas de ascenso y descenso y otros obstáculos, todos construidos con troncos y materiales rudimentarios, además de insignias con el nombre de las AUC[24].

El campamento tenía además dos dormitorios de bloques de cemento, tablas de madera y techos de palma, y una cocina artesanal de barro cocido. En un rastreo de los alrededores, militares del Teatro de Operaciones número 2 incautaron «casi 80 kilogramos de cocaína, 19 uniformes militares, un fusil, dos escopetas, municiones, explosivos, varios pares de botas de hule y militares, teléfonos celulares y equipos de campaña, entre otras cosas»[25]. El campamento fue destruido con explosivos por la fuerza armada el 28 de abril. En el campamento, y en las cercanías detuvieron solamente a 4 paramilitares. Dos semanas más tarde Rangel denunció que 50 paramilitares que lograron escapar del campamento descubierto estaban «bajo la protección de efectivos de la Policía Regional de Zulia»[26].

En Machiques, Perijá, desde el 2005 los hacendados formaron grupos paramilitares con colombianos y algunos indígenas, que agreden a comunidades indígenas yukpa para arrebatarles la tierra y la vida. El conflicto por la tierra se reanudó a mediados de los años 70 cuando unos yukpa bajaron de la Sierra de Perijá y reocuparon tierras de las cuales habían sido despojados por la familia de hacendados Vargas en los años 30. Así que, como mandante de los asaltos a las comunidades ellas mismas indican a Guillermo Vargas, de la hacienda Tizina. En el intento de asesinar a Sabino Romero Izarra, líder de la lucha por la tierra de los yupka, grupos armados asaltaron, entre otras, la comunidad Chaktapa en febrero de 2007, sacaron a disparos a la gente y quemaron sus casas. En abril de 2008 Chaktapa fue otra vez asaltada. Las denuncias a la Guardia Nacional y a

otros organismos, según las comunidades, «no han resuelto nada». En muchas regiones rurales fronterizas, y a veces ni tan fronterizas, la complicidad de efectivos de la GN, Ejército o policías, como también de jueces, crea espacios en los cuales no rige la Constitución Bolivariana sino el paramilitarismo.

Según el testimonio de Rafael Urdaneta, «en el Zulia los paramilitares colombianos han tomado el poder. Se mueven libremente en el mercado "Las Pulgas" y en la zona "caliente" del comercio en La Curva de Molina». Desde estas bases de operaciones se dan a la tarea de facilitarle dinero prestado a buhoneros y comerciantes, reclutan mujeres de servicio, conserjes, jardineros y buhoneros para entrenarlos en la «industria del secuestro», tanto en la modalidad «express» (aplicable a toda clase de personas, especialmente a los de las clases populares y medias), del cual recaban sumas que oscilan desde los 300 hasta un millón de bolívares fuertes por secuestrado de forma instantánea, como el «secuestro mayor» (aplicable a las clases «alta y media»), del que recaban grandes sumas de dinero y cuyo tiempo de cautiverio es indefinido.

La tarea asignada a los «reclutas» es la de suministrar datos de sus «patrones» (dirección del trabajo, fotos, cuentas bancarias, actividades recreativas, colegios donde estudian los hijos, horarios de los miembros de la familia) que faciliten el secuestro.

Otra de las actividades de los «paracos» es controlar el tráfico de drogas en la región y sobre todo el lavado de dinero del narcotráfico, especialmente a través de las operaciones inmobiliarias (tienen predilección por la construcción de centros comerciales). «Están controlando el robo de vehículos y el cobro de vacuna»[27]. Y Urdaneta confirma lo que es *vox populi*: «En el Zulia gozan del apoyo de miembros de las federaciones de ganaderos y de la gobernación del Zulia».

Entre los grandes aliados del paramilitarismo en el Zulia está la poderosa familia Contreras Barboza, de la cual ya salió un gobernador del estado (Carmelo Contreras Barboza, 1974-1975). Omar Contreras Barboza, hermano del ex gobernador y alto dirigente del ex partido de gobierno Acción Democrática, fue acusado por el sicario Orlando Peña Luzardo de haberlo contratado para encontrar el sicario que luego mató

al doctor Pedro Dorian. Orlando Peña, detenido por porte ilegal de armas y luego acusado del asesinato de Armando García el 19 de septiembre de 2002, y acusado de más de otros 60 asesinatos y cinco desapariciones forzosas en Yaracuy, logró fugarse justo cuando había empezado a hablar sobre los autores intelectuales de los asesinatos, de los cuales ninguno se encuentra preso[28].

La construcción del frente del este se perfila de manera más clara a partir de 2008. En Sucre hay bases de narcotraficantes desde hace mucho tiempo, es un puente tradicional para el envío de droga hacia el Norte. A finales de octubre de 2003, en un pequeño pueblo costero de Sucre, en medio de un tiroteo con efectivos de la policía y la GN cayeron abatidos siete paramilitares colombianos. Otros más fueron capturados y deportados a Colombia en los siguientes días. Fue «la primera vez que se confirma la presencia de paramilitares colombianos operando en una zona ajena a la línea fronteriza entre ambos países, en el extremo occidente de Venezuela»[29].

En ese tipo de negocios, más en zonas solitarias, normalmente se intenta no llamar demasiado la atención. Sin embargo, según reportes de los últimos años se ha observado la presencia de personas con aspecto de paramilitar. Eso se explica solamente si el interés de los paramilitares va más allá del control del narcotráfico, lo que fundamenta la hipótesis de la construcción de un frente del este. Según Luis Alfredo Marín, presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Desarrollo Económico Regional del Consejo Legislativo del Estado Delta Amacuro, mínimo desde principios de 2006 se percibe presencia paramilitar en Delta Amacuro. Se observan movimientos sospechosos y lanchas rápidas con motores muy poderosos en las cuales se desplaza gente desconocida en la zona; vale acotar que en estas comunidades, por lo general, todos los vecinos se conocen. Y en Bolívar, a partir de 2007, se empezó a notar presencia paramilitar en la zona minera y, a mitad del 2008, empieza a ser evidente la cantidad de ataques y asesinatos a taxistas y transportistas.

Zona centro: penetración paramilitar en Caracas

El jueves 14 de febrero de 2008, como informó el mismo presidente Chávez, en Plaza Venezuela (Caracas) fueron capturados varios supuestos

paramilitares colombianos con panfletos en contra del gobierno, después de haber colocado una bomba de bajo poder. Más allá de perpetrar atentados, la penetración paramilitar busca infiltrar barrios y consejos comunales, como también instituciones clave. Caracas, como centro político-administrativo, cuenta con barrios cuyas iniciativas tienen impacto a nivel nacional, y por lo tanto, está en el centro de la atención paramilitar. La penetración paramilitar en la capital es ya bastante avanzada, especialmente en los barrios (con mayor presencia en Petare, El Valle, Coche y la zona de El Cementerio). En ese contexto hay que preguntarse si el supuesto aumento de la violencia e inseguridad en los últimos años es casual o una estrategia paramilitar como elemento desestabilizador y al mismo tiempo para poder presentarse con más facilidad como «fuerza de orden».

Los asesinatos de activistas de base en los barrios de Caracas y otras zonas del país han aumentado en forma preocupante, como lo reportan muchas organizaciones populares y algunos autores. Sin embargo, pasan desapercibidos a causa de su dimensión local. También juegan un papel preponderante el desconocimiento y no entendimiento del fenómeno paramilitar y los prejuicios clasistas sobre «los barrios», muchas veces ni en los mismos contextos de los crímenes y menos en los medios y en las instituciones se identifica a los asesinatos paramilitares como tales, sino que son atribuidos a la delincuencia común.

El hecho de que las víctimas suelen ser a menudo líderes sociales y activistas de base debería generar, por lo menos, alguna duda. Es evidente que la cuestión está cobrando notoriedad —aunque no explícita— en los medios. Tan sólo en la edición de *Últimas Noticias* del 28 de marzo de 2008, en la sección capitalina hubo dos noticias al respecto: en Petare fue asesinado un cuadro comunitario de un consejo comunal y en San Martín asesinaron a dos jóvenes, hijos de cuadros del consejo comunal. ¿Pura casualidad? Con frecuencia los asesinos están encapuchados, lo que presenta una modalidad nueva. Anteriormente los asesinos de barrio no se tapaban la cara porque, de todas maneras, mucha gente sabía quiénes habían sido responsables de ciertos crímenes. También se observa un aumento de asesinatos de «limpieza social», dirigidos principalmente hacia indigentes.

Una estrategia, implementada desde el 2005, fue la de acercarse a los pequeños criminales de barrio y regalarles cocaína o vendérsela a un pre-

cio muy por debajo del precio de mercado para así establecer nexos. La misma estrategia había sido aplicada en Colombia. Después de haber creado un nexo y haber hecho unos cuantos negocios favorables para los pequeños criminales, se les piden «favores», como por ejemplo matar a ciertas personas. En varios barrios, testigos comentan la aparición de armas largas en manos de los criminales locales, cosa inusual anteriormente.

El primero de mayo de 2008 *aporrea.org* publicó una denuncia de habitantes del bloque 5 de Las Lomas de Urdaneta, en Catia, Caracas. Los denunciantes recurren a la denuncia pública después de no haber tenido éxito con denuncias a las autoridades y subrayan que no han tenido tampoco la posibilidad de confirmar sus sospechas, aunque están seguros «de que por aquí hay paramilitares y que esa gente que allí se reúne es contraria al proceso». Dado que se trata de una de las pocas denuncias hechas públicas sobre cómo proceden concretamente los paramilitares en los barrios de Caracas, reporto la denuncia casi completa:

1. «Hay unos tipos muy raros, de buen vestir, de automóviles lujosos, que se sonríen con todo el mundo y no son del sector y ya se han ganado la amistad de cualquier malandro y malandra de dicho bloque, y no sólo eso, hay un malandro que no tenía ni dónde caerse muerto que ahora carga una moto nueva que ellos le regalaron».

2. «Existe un *motorhome* que de vez en cuando viene por allí mismo (con nevera y demás), se estaciona durante varios días y en ese tiempo se reúnen, entran y salen y el complot está a la vista. Los días viernes o sábados en la noche también se reúnen, pero no sabemos si en algún apartamento del bloque 5 o en la Escuela Caracas que está al lado, pues lo que vemos es la cantidad de motorizados y personas que se movilizan durante la madrugada».

3. «Hay una cantidad de motorizados cuyas motos al parecer ellos se las regalan como una forma de comprarlos y ponerlos de su lado, y nos tememos que estén siendo entrenados como paramilitares venezolanos».

4. «Todas las noches hay tiroteos por todo el sector y las armas (hasta ametralladoras) se escuchan como si estuvieran enviándose mensajes de Propatria a Las Lomas y viceversa. También en los alrededores.

> Cuando esto pasa, como lo hacen a diestra y siniestra, la gente que viene por la carretera de Las Lomas corre grave peligro. Esto nos tiene muy preocupados»[30].

Aumentan reportes sobre infiltración paramilitar en el comercio informal. Lo que responde a la estrategia de crear una red territorial fuerte de inteligencia. En ese contexto también de algunas empresas de transporte y de taxis bajo dominio paramilitar. En algunas zonas de Caracas (por ejemplo La Urbina y Las Mayas, en Coche), según varios testimonios los paramilitares han infiltrado el comercio informal y los puestos de comida. Y también se observan más y más colombianos recién llegados que trabajan como vendedores de helados en la calle. Eso es sorprendente pues solía ser una actividad para personas con muy poco acceso al mercado laboral por diferentes razones. Así que anteriormente la gran mayoría era de Haití, Trinidad y Tobago, que difícilmente encuentran trabajo por la barrera del idioma y otras causas. Los colombianos, generalmente, suelen tener un mejor nivel de educación y se integran fácilmente al mercado de trabajo venezolano.

Según informaciones de otras comunidades, los paramilitares se están infiltrando en los consejos comunales. En varios casos eso está pasando a través de la comisión de deportes. Lo que no sorprende, visto que es donde más fácil se puede evitar hablar de política, y en donde además se tiene acceso a los jóvenes de la comunidad, que son los que les interesan como potenciales reclutas.

En un barrio de Catia, una zona muy pobre, llegó un colombiano recién mudado a Venezuela (con cédula venezolana que demostró ser de una persona nacida en Venezuela, lo que, en sí, no es motivo para creer que sea paramilitar, ya que la falsificación es bastante común) y a la semana empezó a dar regalos a todos los niños de la comunidad. Un tiempo después pidió integrarse a la comisión de deportes. La comunidad en un principio no sospechó de nada, ni le pareció extraño que alguien que va a vivir en una zona muy marginalizada tuviera recursos para tantos regalos. Lo que deja en claro la importancia de acometer un trabajo de sensibilización en las comunidades. La gente empezó a sospechar cuando el personaje, que recibía a menudo visitas de otros colombianos en carros lujosos con vidrios oscuros, comenzó a hablar mal del gobierno de

Chávez, insistiendo en que la imagen sobre los paramilitares colombianos en Venezuela era falsa y que en Colombia ellos hicieron un buen trabajo dándole seguridad a la gente.

En otros barrios, y en diferentes zonas, desde Petare hasta en una parte de la parroquia Candelaria, activistas de consejos comunales comentan que en donde con el trabajo comunitario se logró reanimar calles, esquinas con una vida vecinal, a través de iniciativas del consejo comunal o trabajo comunitario, hay presión armada de pequeños criminales locales en contra de la organización comunitaria. Los informantes coincidieron en que eso les «parece raro» porque eso no pasaba anteriormente, pues los pequeños criminales antes de meterse en serios problemas con la comunidad, preferían cambiar de esquina. Sin embargo los testigos, en su mayoría, no conectaron los hechos con el paramilitarismo, debido a que en la base falta casi por completo cualquier conocimiento sobre su *modus operandi*.

IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD INSTITUCIONAL

A lo largo de todo el capítulo se evidencia como un problema masivo la complicidad de parte del Ejército, GN, Policía, instituciones gubernamentales, administración, etcétera. Así, Luis Britto García, frente a la proliferación del juego ilegal, pese a que en sitios abiertos al público esté sancionado por el Código Penal, critica que «los casinos, que son las grandes banderas de los destacamentos de ese enemigo, son hechos con la colaboración de autoridades que les permiten existir»[31]. En el campo, el problema de la impunidad de facto es muy evidente. La justicia venezolana a nivel local, en muchas zonas del país sigue estando al servicio de los ricos y poderosos. Así que aunque haya denuncias y hasta testigos en relación a muchos de los 200 asesinatos de campesinos, hay sólo una culpable en la cárcel. A nivel local, muchas veces ni la policía ni la justicia se preocupan demasiado de resolver los asesinatos o de perseguir los culpables. Y cuando no hay manera de evitar una condena, los terratenientes reciben un trato privilegiado. Este es el caso de la terrateniente Sioly Torres en Sur del Lago (Zulia). El 14 de abril de 2004, acompañada por la policía local y nueve hombres armados, quiso desalojar a la cooperativa Santa Elena de Arenales, a la cual le había tenido que ceder la mitad de las tierras que ella

reclamaba como suyas sin tener los documentos apropiados. Cuando la policía se negó a efectuar el desalojo porque los cooperativistas tenían carta agraria, Torres abrió fuego hacia los campesinos y asesinó a Jesús Antonio Guerrero López. Antes le había pedido a uno de sus acompañantes el arma con las palabras: «dame una carabina que mataré a uno de esos cerdos». La jueza sin embargo no vio ninguna intencionalidad en el asesinato y redujo la pena porque Torres había actuado «en afecto»[32].

«Yo tengo la impresión de que hay como temor de actuar contra peces gordos y ciertos apellidos en Venezuela. Por el procedimiento y la forma como ellos adquirieron los fundos y los hechos que se produjeron en esas áreas, no hay la menor duda de que tienen conexión con el sicariato», explica Braulio Álvarez[33]. Álvarez denunció la posible vinculación del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, con la compra de tierras después de presionar por medio de paramilitares y de sicarios. Rosales habría comprado durante los últimos años, mínimo siete fundos, después de que los dueños anteriores fueron presionados por grupos armados para dejar las tierras, lo que rebajó el precio de las mismas[34]. Álvarez, que ya sufrió dos atentados de parte de sicarios de terratenientes, denuncia que sólo en Zulia hay más de 1.500 campesinos «imputados por luchar a favor de la repartición justa de las tierras que son propiedad del Estado venezolano que se encuentran en manos de latifundistas y terratenientes».

José Vicente Rangel denunció que el jefe del Cartel del Norte del Valle, Wilber Varela, alias «Jabón», asesinado en Mérida a principios de 2008, salía y entraba de Venezuela desde el 2004, y contaba con la protección de funcionarios corruptos, como policías, guardias nacionales, investigadores y personal administrativo civil. Varela tenía grandes inversiones en Venezuela en centros comerciales, supermercados, fincas rurales y proyectos urbanísticos[35].

En Venezuela, la impunidad y complicidad de instituciones es claramente un problema estructural y no política de Estado como en el caso de Colombia, donde hasta paramilitares presos cuentan con el apoyo de las instituciones, como se evidencia en el caso del narcotraficante y comandante del grupo paramilitar «Águilas Negras», Gerson Álvarez Dueñas, conocido también como «Comandante John», «El Nono» o «El Paraco». Dueñas, según informaciones de las autoridades venezolanas, tenía propie-

dades en San Carlos, capital de Cojedes, donde guardaba grandes cantidades de drogas antes de enviarlas a EE.UU. y Europa. Además, con sus estructuras en Venezuela se dedicaba también al secuestro, la extorsión y el abigeato. Capturado en Venezuela, el paramilitar fue entregado al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano el 14 de junio de 2007. Apenas unas tres semanas más tarde, el seis de julio, Dueñas se fugó de la cárcel, saliendo por la puerta principal con una orden de libertad condicional. Sin embargo, su huida no se hizo pública hasta casi un año después, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) hizo pública la fuga. Supuestamente, no se había notado antes la falta del narcotraficante.

INTESA Y SAIC: GUERRA TECNOLÓGICA

La paralización casi total de las actividades de Pdvsa en diciembre del 2002 tuvo una pieza central: el saboteo del *software* operativo, de la red informática y la desaparición de las llaves de acceso a la misma. Todas las operaciones de Pdvsa en puertos, refinerías, extracción, etcétera, estaban centralmente controladas desde Caracas vía red informática. La empresa que administraba todo eso desde el 1999 era Intesa, subempresa de Pdvsa. Aunque Pdvsa había puesto todo el capital de la empresa y seguía pagando unos 80 millones de dólares al año por sus servicios, el socio mayoritario —con 60%— era Science Applications International Corporation (SAIC) de EE.UU. El artífice de ese negocio, el entonces presidente de Pdvsa, Luis Giusti, luego fue consultor de George Bush en cuestiones petroleras. Roger Brown, director del departamento «Iniciativas globales de petróleo y gas», de SAIC, fue nombrado director de Intesa[36].

SAIC es una megaempresa de servicios de tecnología con ganancias millardarias por año. 90% proviene de contratos con el gobierno de EE.UU. en defensa, servicios de información e inteligencia. Administra informaciones y es responsable del sistema informático del Pentágono, participa en el desarrollo de armas de avanzada, hace estudios de efectividad y experticias técnicas de armas, desastres, accidentes aéreos, y hasta hizo la experticia de los ataques a las Torres Gemelas. Para la guerra en Iraq, SAIC también recibió muchos contratos. Entre otros, el desarrollo y administración del

sistema informático para la producción petrolera iraquí. No es sorprendente que por su junta directiva durante la última década hayan pasado ex directores de la CIA, ex generales del Ejército, ex funcionarios del Pentágono y ex secretarios de Defensa. Durante el golpe petrolero su director era J.R. Beyster, que junto a todos los directores de los servicios de inteligencia formaba parte del Comité Asesor de Seguridad en Telecomunicaciones del Gobierno de EE.UU.[37].

En 2008 en su junta directiva, entre ex directores de empresas de armas como Raytheon, Lockheed e ITT, y de áreas de investigación sobre inteligencia y defensa, se encuentran también John Hamre, ex viceministro de Defensa entre 1997 y 2000; Anita Jones, entre 1993 y 1997 directora del área de investigación e ingeniería del Ministerio de Defensa; y el ex general de la Fuerza Aérea, John P. Jumper, también consultor del Ministerio de Defensa y miembro de juntas directivas de varias CMP.

Oficialmente, la externalización del control informático de Pdvsa fue justificada con una reducción de gastos, que en realidad nunca se dio. En cambio se dio acceso a la CIA al control de la industria petrolera venezolana. Los trabajadores, trabajadoras e ingenieros que no participaron en el paro, junto al apoyo popular y del Ejército restablecieron la producción manualmente después de haber desconectado cada área de la red informática centralizada.

En ese contexto hay que constatar que la presencia de CMP contratadas por Pdvsa u otras entidades gubernamentales sigue. Halliburton, por ejemplo, tiene estrechos vínculos con el Pentágono, opera en Venezuela desde hace 60 años y hasta multiplicó sus negocios allí durante los últimos años[38]. En determinado momento, no cabe duda alguna que Halliburton, a su manera, sería otra Intesa.

WACKENHUT: MÁS QUE SÓLO SEGURIDAD

Wackenhut es una compañía de seguridad e inteligencia. Muchos de los contratos de la transnacional estadounidense provienen del Ejército de EE.UU. y la NASA. Le presta seguridad a las plantas nucleares en territorio norteamericano y a muchas embajadas de EE.UU., incluyendo la que está en Venezuela; presta personal de seguridad para funcionarios

estadounidenses en el exterior y ha participado en la privatización del sistema carcelario en EE.UU.[39]. Parecida a SAIC, aunque de perfil más bajo, la junta directiva está compuesta de ex oficiales de la CIA y la NASA. El director venezolano de Wackenhut, Isaac Pérez Recao, pertenecía al núcleo de los golpistas en abril de 2002 y le prestó seguridad al golpista Pedro Carmona.

En octubre de 2003 circuló un video en el cual se veía a oficiales de la policía de Baruta y Chacao (alcaldías opositoras) con algunos empleados de Wackenhut y un empleado de la Embajada de EE.UU. en Caracas, el coronel retirado Corri. No se escucha bien, están hablando de operaciones y discreción, embajada y embajador, hasta que uno de los participantes exclama que no pueden ir a contar en toda esquina que son de la CIA. Luego se habla de puentes y autopistas. El motivo del encuentro no queda claro. Algunos diputados bolivarianos declararon que se trataba de la planificación de actos desestabilizadores. La Embajada de EE.UU. desmintió las acusaciones. Algunos días más tarde unos diputados bolivarianos presentaron otro video en el cual se observa la salida de un avión desde Valencia, capital del estado Carabobo, en ese entonces gobernado por la oposición. El avión, según el diputado Nicolás Maduro, pertenece a la CIA. Algunas de las personas que suben al avión están armadas, algo estrictamente prohibido en aeropuertos civiles según la ley. La Disip informó que algunas de las personas que aparecen en el video son empleados de Wackenhut. En el video también reaparece una persona que en el primer video había pasado informaciones sobre asuntos de seguridad y control. Frente a las denuncias, las oficinas de Wackenhut fueron allanadas y se retuvo armamento y municiones.

Algunas conclusiones

El enfoque de la investigación se centra en el paramilitarismo y las CSP/CMP. En un marco más amplio de estrategias contrarrevolucionarias aplicadas principalmente por EE.UU. en contra de Venezuela, los dos elementos se entremezclan con muchos más, como por ejemplo la guerra mediática y las presiones internacionales. Sin embargo, mientras esos dos campos son ampliamente documentados y debatidos, y se ha desarrollado

una política estratégica desde el Estado y desde las estructuras de base, no se puede decir lo mismo respecto al paramilitarismo y las CMP. Eso, aunque el golpe petrolero evidenció que el papel estratégico de la guerra tecnológica y el paramilitarismo han avanzado ya mucho.

Hace falta analizar la estrategia paramilitar en su conjunto, y concientizar y coordinar desde diferentes sectores de la sociedad venezolana, políticas que contrarresten y combatan el avance del paramilitarismo en todas sus expresiones. Las organizaciones de base, los consejos comunales y las organizaciones campesinas son piezas fundamentales para ese trabajo. Es muy importante informar a las comunidades sobre los mecanismos paramilitares. La infiltración es facilitada por el hecho de que la población, en su mayoría, no sabe lo que es el paramilitarismo y mucho menos identifica sus mecanismos de penetración y actuación.

Otra táctica importante sería la de emprender una investigación rigurosa de las mismas autoridades y una sensibilización de efectivos y empleados del Gobierno y sus estructuras de defensa. Hay investigaciones y operativos exitosos del Ejército y la Disip en contra del paramilitarismo. Pero también se escucha de parte de organizaciones de base y consejos comunales de los barrios de Caracas, y de comunidades campesinas e indígenas en Apure, Barinas, Táchira y Zulia, que las autoridades, no obstante haber sido avisadas, no actúan. Esto conduce a que la misma población no confíe en las autoridades y deje de denunciar los hechos, porque temen volverse un blanco prioritario de los paramilitares. La no actuación de las autoridades tiene múltiples causas. Algunas no toman en serio las denuncias, otras no están preparadas y no logran reconocer o entender el funcionamiento del paramilitarismo. Y en algunos casos hasta son cómplices de él (casi siempre por motivos económicos y no políticos).

En el marco de esta lucha hay que evitar también que la paramilitarización lleve a una actitud de rechazo y sospecha hacia los colombianos residentes en Venezuela. Frente a unos cinco millones de colombianos en el país, eso sería un sinsentido que sólo correspondería al interés de la derecha de transformar el conflicto político-ideológico y de clases en uno entre colombianos y venezolanos.

Todavía no es demasiado tarde para evitar la paramilitarización de Venezuela y la formación de un ejército contrarrevolucionario.

Notas

1. Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ): «Paramilitares amenazan nuestra soberanía nacional». Declaración de mayo de 2006.
2. Agencia Bolivariana de Noticias: «Britto García alerta penetración de paramilitarismo por industrias del vicio». 11 de marzo de 2008.
3. Prensa Unete-CTR: «Asesinados dos dirigentes del Frente de ex Trabajadores de Coca Cola en Portuguesa», 27 de junio de 2008, www.aporrea.org/ddhh/n116081.html.
4. Martín Guédez. «Campaña mediática, secuestros, asesinatos y horror», *Rebelión*, 6 de marzo de 2006.
5. Toda la guerra en Colombia también se lleva a través del control de corredores.
6. FNCEZ, declaración citada.
7. ANTV Noticias, «Mafia de autobusetes planifica paro de transporte», 31 de mayo de 2008.
8. Eleonora Delgado. «Ganaderos vinculan a oficial de la GN en plagio de Álvarez Perera», *El Nacional*, 25 de enero de 1998.
9. Martín Guédez, art. cit.
10. Martha Elvira Soto F. y Orlando Restrepo Restrepo, «Carlos Castaño afirma que envió instructores a las Autodefensas Unidas de Venezuela», *El Tiempo*, Bogotá, 30 de junio de 2002.
11. «Ataque criminal de paramilitares colombianos contra campesinos e indígenas en Venezuela». En *Ojarasca*, suplemento de *La Jornada*, 14 de abril de 2003, http://www. jornada. unam.mx/2003/abr03/030414/oja72 ecuavenez.html
12. Venpres: «Bogotá y Miami en la invasión a Venezuela», 15 de mayo de 2004. http:// colombia.indymedia.org/news/2004/05/12929.php
13. Darío Azzellini, *Venezuela Bolivariana*, Neuer ISP Verlag, Köln, 2007.
14. http://www.comandosf4.org/archivos/alianza.htm
15. «Opositores planeaban atacar un "Aló Presidente" con un avión F-16, revela investigación sobre paramilitares». En *aporrea.org*, 31 de julio de 2004, http://www. aporrea. org/tiburon/n18923.

16. Las modalidades de pasar la gasolina son muchas. También hay tráfico de gasolina con carros que han sido transformados en grandes contenedores usando todos los espacios posibles, o tuberías que pasan de un lado al otro de la frontera. Aunque parece que la mayoría del contrabando se hace en tambores por los ríos.
17. Diputado Braulio Álvarez, «Hay temor de actuar contra los peces gordos», *Últimas Noticias*, Caracas, 25 de mayo de 2008.
18. Venpres: «Bogotá y Miami en la invasión a Venezuela», 15 de mayo de 2004, http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/12929.php
19. Braulio Álvarez, art. cit.
20. FNCEZ, declaración citada.
21. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). «Policía del Táchira capturó a cuatro presuntos paramilitares en La Fría», 25 de marzo de 2008.
22. Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ). «Paramilitares amenazan nuestra soberanía nacional». Declaración de mayo del 2006.
23. Radio Nacional de Venezuela (RNV): «José Vicente Rangel: Gobernación del Zulia protege a paramilitares», 24 de marzo de 2008.
24. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN): «FAN destruyó con explosivos campamento usado por paramilitares», 28 de abril de 2008.
25. Ibíd.
26. José Vicente Rangel. «La policía regional de Zulia protege a 50 paramilitares», 12 de mayo de 2008, http://www.aporrea.org/ddhh/n113961.html.
27. Rafael S. Urdaneta D. «Rodríguez Chacín: "Guerra avisada no mata soldado"», 28 de abril de 2008, http://www.aporrea.org/ddhh/a55949.html.
28. Braulio Álvarez, art. cit.
29. *Nuevo Herald,* 26 de octubre de 2003, nhttp://www.miami.com/mld/elnuevo/ news/breaking_ news/7110300.htm
30. Denuncia: «Atención ministro Rodríguez Chacín. Movimientos sospechosos en barrio de Caracas». www.aporrea.org/actualidad/n113403.html, 01 de mayo de 2008.
31. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN): «Britto García alerta…», art. cit.
32. Darío Azzellini, ob. cit.
33. Braulio Álvarez, art. cit.
34. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN): «Diputado Álvarez denuncia imputaciones a campesinos que luchan por la repartición justa de la tierra», 19 de abril de 2008.
35. José Vicente Rangel: «Policías y GN corruptos protegían a capo colombiano asesinado en Mérida», 11 de febrero de 2008, http://www.aporrea.org/ddhh/n108904.html.
36. Ralph Alexander Foster y Tulio Monsalve, «Cómo la CIA controla Petróleos de Venezuela», *Brecha*, 05 de enero de 2003.
37. Darío Azzellini, ob. cit.
38. Más información sobre Halliburton en los capítulos II, III y V.
39. Eva Golinger, «La privatización de la guerra», *aporrea.org*, http://www.aporrea.org/tiburon/a43460.html, 30 de octubre de 2007.

CAPÍTULO VII
MÉXICO: PARAMILITARISMO COMO ORGANIZACIÓN SOCIAL, LUCHA CONTRAINSURGENTE EN CHIAPAS

DARÍO AZZELLINI

La «colombianización» de México es un hecho evidente de los últimos doce años. Desde la construcción de organizaciones paramilitares, pasando por la violencia desatada de las guerras internas del narcotráfico (que cobra ya más muertos diarios que en Colombia) y la militarización del territorio nacional (que aumenta los conflictos dado que buena parte del Ejército colabora con una u otra estructura del narcotráfico), hasta el lanzamiento de un «Plan México» (análogo al «Plan Colombia») por parte de EE.UU., que en el marco del Aspan (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) empezó con una ayuda militar de 800 millones de dólares.

Las actividades paramilitares en México no se limitan a Chiapas. Grupos armados mezclados con los militares y la Policía proceden similarmente en contra de la población también en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, en las Huastecas hidalguense y veracruzana y otras regiones. Prácticamente en todas las regiones de México en las cuales haya luchas populares indígenas y campesinas desarrolladas. En Guerrero, donde ya para fines de los años sesenta se había formado una guerrilla local[1], han sido asesinadas en los últimos años varios centenares de personas por parte de los militares y paramilitares. La costa pacífica de Guerrero, al norte de la conocida zona turística de Acapulco, ha sido particularmente afectada. La situación es parecida en Oaxaca, donde grupos de civiles armados actúan mezclados con policías vestidos de civil en las regiones de conflicto para intimidar a la población. En la formación de bandas represivas, la Policía y los militares se apoyan particularmente en la organización Antorcha Campesina constituida por el PRI, un grupo conocido por sus relaciones con el clan corrupto del ex presidente Carlos

Salinas que desde hace años, con una mezcla de retórica nacionalista y maoísta, supuestamente reivindica los derechos de los campesinos, mientras sus acciones concretas están dirigidas generalmente en contra de los grupos de oposición.

En las Huastecas, donde no sólo existe una fuerte movilización indígena sino también, supuestamente, una de las bases organizativas de la guerrilla Ejército Popular Revolucionario (EPR), el paramilitarismo se presenta en forma del Comando Popular Clandestino (CPC). No obstante el nombre dirigido a crear confusión, al parecer el CPC se encuentra bajo las órdenes del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y está siendo entrenado y financiado por el Ejército mexicano. El CPC había sido precedido en la zona por grupos de choque y paramilitares como el Frente Armado de Ajusticiamiento para la Liberación Campesina (1987-89) y Frente Indígena Reivindicador Zapatista (FIRZ, 2000-2001)[2].

El presente ensayo se concentra en el análisis del fenómeno paramilitar en Chiapas y sus modalidades específicas, que evidencian, en comparación, por ejemplo, como Colombia o Venezuela, cómo para cada situación específica es elaborada una estrategia contrainsurgente y paramilitar adecuada. La estrategia paramilitar en Chiapas se puede dividir en tres etapas. Una primera desde el surgimiento del EZLN hasta la toma de poder del presidente Vicente Fox en el año 2000, que se concentró en la creación de los grupos paramilitares y en un hostigamiento continuo, privilegiando la violencia como casi única estrategia frente a las bases sociales del movimiento zapatista. Con Fox, en un principio, se privilegió más la vía de presión económica para intentar corromper la población en rebeldía, hasta que se pasó a darle otra vez más peso a la opción militar. Con la asunción de la presidencia por parte del ultraderechista Felipe Calderón (2006) del Partido de Acción Nacional (PAN), se reforzaron todos los intentos de soborno económico, y aún más la guerra contrainsurgente y con eso el paramilitarismo.

NAVIDAD SANGRIENTA: LA MASACRE DE ACTEAL

El cuadro que se presentó en la comunidad chiapaneca de Acteal fue espantoso: ropa desgarrada y empapada en sangre tirada por todo el pueblo, colgada en los árboles y bordeando los márgenes de las pequeñas

quebradas que rodeaban el lugar. Sólo dos días antes, el 22 de diciembre de 1997, los paramilitares habían arremetido contra el pueblo y habían asesinado a 45 personas, principalmente mujeres y niños. Los perpetradores abrieron fuego contra los habitantes de la comunidad, que se habían reunido en una pequeña capilla de madera para orar y repartir las donaciones de ropa. Finalmente persiguieron a los sobrevivientes, les cortaron las extremidades con machetes y abrieron el vientre a las mujeres embarazadas.

Mientras tanto, algunas unidades de la Policía chiapaneca se encontraban a sólo doscientos metros de distancia de la capilla. Pero dejaron Acteal a los paramilitares de Máscara Roja y llegaron al lugar cinco horas después: las pobres chozas habían sido saqueadas. La Policía apareció para borrar las pruebas del delito.

La planificación final de la masacre tuvo lugar la noche anterior en Quextic, una de las comunidades vecinas controladas por el entonces partido de gobierno Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI), bajo la dirección de numerosos representantes. Grandes áreas de Chiapas están divididas entre comunidades donde dominan los paramilitares, y otras que constituyen la base social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Unas se erigen en oposición al Gobierno, sin embargo, no se posicionan del lado del EZLN y se pronuncian en contra de cualquier violencia. A una de ellas y al grupo rigurosamente católico Las Abejas, pertenecían todas las víctimas de Acteal.

El paramilitarismo en Chiapas es una forma de organización social impulsada principalmente por el Ejército y los latifundistas. Las rupturas se extienden a través de las familias. Juana Vásquez Pérez, una indígena tzotzil de apenas veinte años, proveniente de Acteal, denunció a su propio esposo por asesino y paramilitar dos días después de la masacre. En el entierro de las víctimas mostró una fotografía, probablemente la foto de su boda, de la que había arrancado su retrato. Allí podía verse a un hombre joven: «¡Es él, Armando Vásquez Luna, de Quextic, es un asesino!», gritó sollozante. Había perdido a su madre y a dos hermanas en la masacre. Su esposo era del PRI, relató, mientras la mayor parte de su familia pertenecía a Las Abejas. Ella huyó a casa de su hermano en Polhó, una comunidad de base de apoyo del EZLN.

De las Guardias Blancas a los paramilitares

La violencia en contra de los grupos de oposición y la población campesina, para la imposición de pretensiones de poder y propiedad locales no es algo nuevo en la historia de México, y menos en Chiapas. Una reforma agraria, que logró una repartición de tierra a los pequeños agricultores luego de la Revolución Mexicana (1910-1920) en el centro y el norte del país, tuvo lugar de manera muy limitada en la parte sur del país. Las familias latifundistas en Chiapas han podido mantener hasta hoy su poder político y social de los tiempos coloniales, más allá de la independencia y la Revolución. Para eso se utilizó siempre la violencia abierta contra la población campesina con el fin de conservar un sistema feudal, que fue realidad y sigue siéndolo en parte en las haciendas.

En los últimos 35 años, los latifundistas y empresarios chiapanecos han ido formando paulatinamente las llamadas Guardias Blancas en vista de las crecientes tensiones. Éstos son grupos de mercenarios armados, bien organizados, que operan discretamente y trabajan uniformados y de manera paralela a la Policía en muchas regiones del sur mexicano. Su terror es más dirigido y selectivo que el de los «desperados» tradicionales, utilizados en tiempos anteriores para la intimidación de los campesinos. Las Guardias Blancas, que están muy bien entrenadas y formadas por expertos militares, visten ropa moderna y deportiva, con lentes oscuros, camionetas *pick-up* blancas sin placa y armas automáticas. A veces son apoyados por helicópteros en el rastreo de sus víctimas.

Con el comienzo de la guerra sucia y la instalación del programa de Low Intensity Warfare (Operaciones Bélicas de Baja Intensidad) desde el levantamiento de los zapatistas a principios de enero en 1994, la situación había cambiado[3].

Según las estrategias que los asesores militares estadounidenses instruyeron también en Colombia y en Guatemala, se ha venido produciendo una formación masiva de asociaciones paramilitares con técnicas que cientos de militares mexicanos aprendieron en los últimos años en el famoso centro de formación del Ejército estadounidense School of Americas, en Fort Benning, Georgia[4]. Los grupos de derechos humanos resumen el suceso de la siguiente forma:

> diversos sectores del régimen han ido transfiriendo tareas policíacas y militares a grupos civiles organizados con técnicas militares, quienes, al estar armados y construir intencionalmente elementos de fractura dentro de las comunidades, comienzan a instalar potenciales condiciones de guerra civil que, a su vez, hacen necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en el lugar, con el fin de evitar la confrontación[5].

En regiones donde movimientos de oposición pudieron ganar terreno político contra el partido de gobierno, PRI, que ha regido desde 1929 hasta el 2000, los grupos extralegales armados intimidaban a la población civil mediante el terror. El modelo es casi siempre igual: el Ejército mexicano se posiciona en puntos estratégicos para poder controlar la región. Con ello ofrece respaldo a los grupos paramilitares, que obran tranquilamente en contra de los miembros de grupos de oposición. La relación entre el Ejército y los paramilitares es entonces mantenida por los políticos del PRI, bien sean diputados nacionales o regionales, así como alcaldes y consejeros de distrito, que financian y conducen el terror[6].

Inicialmente, entre los años 1994 y 1997, veinte mil bases de apoyo del EZLN fueron desplazados de sus pueblos y despojados de sus artículos personales, tierras y cosechas. Los paramilitares fueron a partir de entonces los nuevos dueños de las antiguas comunidades zapatistas. Con Acteal comenzaron también a extender masivamente el terror hacia aquellos que no querían tomar posición ni a favor del gobierno ni del EZLN. Durante el transcurso de los años los paramilitares asesinaron en Chiapas a cientos de personas, principalmente pertenecientes a las comunidades de base del EZLN, representantes del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda y las comunidades católicas de base, a quienes se les reprochaba un apoyo a los zapatistas. Según diversas apreciaciones, son entre doce y veinte los grupos paramilitares activos en Chiapas, con un número de miembros que va de 30 a 250[7].

¿Qué estrategia de mayor alcance, aparte de la concreta lucha contrainsurgente, se esconde tras la formación sistemática de los grupos paramilitares? Onécimo Hidalgo, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac) expresó en 2003:

> Se puede constatar que los paramilitares surgen específicamente en las zonas del EZLN y construyen geográficamente una barrera en dirección hacia la costa y la zona de la planificada conexión interoceánica. Allí se encuentran las mejores tierras y en esta región se establecerán también zonas de libre comercio. Entonces se requiere tranquilidad allí donde los intereses económicos directos son fuertes, mientras más allá no importa si los indios se matan.

EL SEXENIO ERNESTO ZEDILLO (1994-2000): EL PARAMILITARISMO COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

En un principio, el norte de Chiapas sirvió como laboratorio experimental para la guerra sucia en el sur de México, donde se formó el grupo con el cínico nombre de Paz y Justicia, constituido esencialmente en un principio por indígenas chol, como una mezcla de paramilitares y bandas de matones del PRI. Paz y Justicia hace su primera aparición pública a mediados de 1995, bajo el gobernador Julio César Ferro.

La responsabilidad concreta radicaba en el entonces comandante de la 7ª Región Militar, el general Mario Renán Castillo Fernández, que también canalizaba fondos estatales y regionales para el grupo[8]. Castillo Fernández es un egresado de la SOA[9].

Entre los fundadores de Paz y Justicia se encontraba Samuel Sánchez Sánchez, miembro dirigente de la sección regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a mediados de los años noventa diputado regional del PRI de Tila. Sánchez unió la organización de maestros rurales Solidaridad Campesina Magisterial (Socama), una agresiva avanzada del PRI, a Paz y Justicia, e integró a ganaderos de numerosas regiones en las estructuras paramilitares. Éstos pusieron a disposición sus Guardias Blancas para construir un cinturón de defensa en las zonas del norte chiapaneco y en la parte sur del limítrofe estado de Tabasco.

Paz y Justicia se estableció a partir de 1995 en los municipios Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón y más tarde en Palenque. La posterior ofensiva de los paramilitares entre 1995 y 1997 se conoció como la «Guerra de Chol», durante su transcurso unos trescientos indígenas

perdieron la vida en el norte de Chiapas. Mientras Paz y Justicia desplazó a miles de simpatizantes del EZLN como parte de la lucha militar contrainsurgente, les robó sus tierras e hizo del paramilitarismo una forma de organización social para familias y comunidades enteras, el gobierno declaró que se trataba de un conflicto religioso entre los protestantes chol y los católicos zapatistas, o simplemente de un conflicto étnico[10]. La impresión de que se trataba de un conflicto religioso fue reforzada debido a que Paz y Justicia actuó en contra de sectores católicos progresistas. Tienen la responsabilidad del cierre de algunas iglesias católicas, y también del fallido atentado a los obispos Samuel Ruiz y Vera López García el 4 de noviembre de 1997.

En realidad, con Paz y Justicia se creó una estructura que tiene unos cuantos miles de miembros si se añaden las familias de los activos. Además de los paramilitares, Paz y Justicia está compuesta por personas que pueden ser movilizadas para manifestaciones en apoyo a la política del Gobierno, para la intimidación de la población civil de oposición y como red de informantes. El grupo es financiado directamente por instituciones del Estado. Así recibió, a fines de los años noventa un pago de 460.000 dólares del gobierno regional chiapaneco, dinero que fue declarado de manera oficial como ayuda para la agricultura y ganadería y fueron suscritos por el general Renán Castillo como testigo de honor[11]. El ex gobernador chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro expresó repetidamente en reuniones en un círculo reducido que los miembros de Paz y Justicia eran las verdaderas víctimas del conflicto. Al final, ellos habían «dado su sangre». El gobierno federal de Ernesto Zedillo y el sucesor de Ferro como gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, también siguieron defendiendo a Paz y Justicia.

En 1996, además de Paz y Justicia, surgieron asimismo en zonas tzeltales, ubicadas más hacia el sur, las organizaciones paramilitares Chinchulines y Tomás Munzer. Los Chinchulines actuaban ya desde 1988 bajo distintos nombres y emprendieron alianzas a nivel comunal en 1996 con representantes del PAN[12]. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el grupo estaba compuesto en 1995 por 250 combatientes dotados con armamento bélico. En el municipio de Chilón, este grupo controla el transporte de personas y en Temó la confederación

de cafetaleros[13]. Otras agrupaciones tenían los nombres de Alianza San Bartolomé de los Llanos, Fuerzas Armadas del Pueblo, Los Quintos y Los Puñales. En las cañadas opera desde 1997 el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA)[14]. En el municipio Chenalhó, donde también se encuentra Acteal, opera Máscara Roja. Su consigna es: «¡Somos la Máscara Roja, si quieres conocernos nos vemos en el infierno!». Desde 1998 surgieron nuevos grupos bajo los nombres de Los Plátanos y Los Tomates.

El terror de los paramilitares está dirigido en contra de la población, que es desplazada y asesinada de manera selectiva y generalizada. Entre su armamento se encuentran metralletas y fusiles de asalto como AK-47, M-16, AR-15 y Uzis. Realizan el reclutamiento entre las bases del PRI u organizaciones simpatizantes del gobierno y disponen de grandes cantidades de dinero provenientes de fuentes de los servicios secretos, el Ejército, los empresarios y los latifundistas. Perciben sueldos regulares, que según el grupo y el profesionalismo rondan entre 50 y 250 dólares mensuales y mejoran sus finanzas extorsionando a la población.

Así, en el municipio de Chenalhó cada persona debía pagar el equivalente a 13 dólares (el sueldo semanal de un campesino), los maestros el triple del monto. A ello se agregan los retenes en las carreteras que, junto con los registros y expropiaciones, también sirven para el cobro de «aportes». En común acuerdo con los militares y mediante la intimidación masiva, los paramilitares controlan a nivel local algunos sectores de la economía como transporte, comercio intermediario de café, explotación de madera preciosa, etcétera. Finalmente, les queda también a los paramilitares adueñarse de los bienes de los desplazados y establecer a sus propias familias en los pueblos.

El paramilitarismo como proyecto estratégico del Ejército

La formación de grupos paramilitares es parte de una estrategia claramente definida del Ejército mexicano para la lucha contrainsurgente, de nombre Campaña Chiapas 94[15]. Esta estrategia fue elaborada bajo la

dirección del general José Rubén Rivas Peña, que aprendió su oficio —como el ya mencionado general Renán Castillo— en la SOA (School of the Americas), en Fort Benning, estado de Georgia, Estados Unidos[16]. Su objetivo consiste en la «destrucción de la estructura político-militar del EZLN». Además de las operaciones militares, psicológicas y civiles, se prevé en el capítulo, de manera explícita, la formación de grupos paramilitares. Los militares asumieron, según lo indicado, la asesoría, formación y apoyo de «grupos de autodefensa» ya existentes y otros grupos paramilitares. En los lugares donde no existían fuerzas antizapatistas, el Ejército tenía la tarea de crearlas[17]. El objetivo de ello es, por una parte, separar la guerrilla de su base e intimidar a los activistas de la oposición. Por otra, el Ejército debía ser presentado ante los ojos de la opinión pública como una instancia neutral que lucha contra los dos «extremos», es decir, los paramilitares y la guerrilla. El Ejército tiene la tarea de organizar de manera clandestina a sectores específicos de la población civil (ganaderos, empresarios, etcétera) que tengan un interés económico en el mantenimiento de las relaciones de poder, y a particulares «patrióticos». Éstos son parte de las estructuras de apoyo a las operaciones clandestinas del Ejército.

La cercanía entre los paramilitares y las estructuras gubernamentales se manifiesta también en la impunidad de la que gozan ampliamente los paramilitares. Tras la masacre de Acteal, fueron arrestados algunos chivos expiatorios gracias a la atención internacional. Y en 2007, finalmente, 34 ejecutores materiales de la masacre fueron condenados a 26 años de reclusión cada uno. Sin embargo, las mentes que estaban detrás de la masacre quedaron impunes hasta el día de hoy.

Paralelamente, el Ministerio de la Defensa estadounidense refuerza desde 1996 la cooperación militar con México en medidas desconocidas. 1.500 oficiales mexicanos fueron admitidos solamente en los primeros diez meses de 1997 en la SOA e instituciones de este tipo. Esta cantidad es aproximadamente la misma que el total de los últimos 14 años. México es hoy el país de origen de la mayor parte de los egresados de la SOA. Lo que no resulta sorprendente dado que Estados Unidos tiene importantes intereses estratégicos, políticos y económicos en México. El país al sur del río Grande sirve simultáneamente como abastecedor de materias primas y víveres, así como lugar para la producción a bajo costo.

La inestabilidad política de México amenaza también la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ello, la contención y destrucción de los movimientos sociales y organizaciones políticas es un objetivo central, por una parte, y por la otra, se trata del acceso a los recursos naturales.

Los militares mexicanos también reciben apoyo directo por parte de los famosos Kaibiles de Guatemala. Esta unidad especial del país vecino centroamericano se caracterizaba durante la guerra civil por mutilar a sus víctimas con machetes. Portaban uniformes negros, gorras verdes y caras pintadas, y siempre cargaban un machete largo a la espalda. En algunas zonas de Chiapas ya se han visto paramilitares vestidos de esa forma. En la misma Guatemala se conducen averiguaciones contra dos altos miembros del Ejército y egresados de la SOA por suministro de armas y drogas a grupos paramilitares en Chiapas[18]. A partir de la segunda mitad de los años noventa se conoció que militares estadounidenses visitaron varias veces Chiapas[19]. Numerosos empleados de la CIA compararon el trabajo en México con el de Colombia[20].

Mercenarios israelíes participan también en la capacitación de los paramilitares. Grupos más grandes de uniformados, aparentemente «extranjeros occidentales», ya han sido divisados varias veces en los bosques chiapanecos formando parte de ejercicios militares.

En 1998 se pudo identificar en Campeche a una persona de nombre Azaf y a otro de nombre Owri Saliternik, como mercenarios israelíes. Del primero existe una carta personal dirigida a una persona cercana donde incluso describe su trabajo. El antiguo jefe de la Policía, Jorge García Zubieta, que trabajó entre otras cosas como guardaespaldas del gobernador de Campeche y secretario suplente para asuntos religiosos de ese Estado, actuó como conexión. Allí, su jefe había sido Rafael Rodríguez Barrera. El mismo Zubieta había recibido instrucción militar en ese país —entre 1993 y 1995, cuando Barrera era embajador de México en Israel—[21]. Además, en 1998 un grupo de 48 europeos del norte y estadounidenses armados y con uniformes de la empresa petrolera Pemex fueron vistos durante un período de por lo menos tres meses[22]. No está claro aquí si se trata de miembros de compañías militares privadas o de mercenarios.

El sexenio Fox (2000-2006): paramilitarismo a la sombra

En los primeros años del mandato de Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), se dio una doble estrategia. La mano firme se mostró en el trato dado al caso de Monte Azul (ver p. 158 y ss). Sin embargo se privilegiaron soluciones no militares, como intentos de sobornar la base zapatista directamente o con programas de gobierno. En ese contexto se bajó la cantidad de militares presentes en Chiapas e incluso se abandonaron instalaciones militares (espacios que, como se pudo comprobar luego, fueron copados por grupos paramilitares). En cambio se aumentó el financiamiento de proyectos gubernamentales para deslegitimar la construcción de la autonomía zapatista.

La forma pública de operar, propia del presidente Fox, correspondió a una nueva estrategia de lucha contrainsurgente, declaró el politólogo y especialista de estrategias militares Carlos Fazio. En un plan secreto de nombre Chiapas 2000[23] presuntamente se encuentran descritos de manera exacta todos los pasos que fueron realizados en Chiapas durante el mandato de Fox. Al principio se fijaron estrategias para quitarle de las manos a los zapatistas la bandera de la justicia como base de la legitimidad democrática. Para ello el Gobierno intentó presentarse como creíble, y particularmente el Presidente tenía que ser presentado como un factor directo de diálogo que le dispute a los zapatistas la representación moral de los indígenas. Posteriormente el Gobierno intentó desmontar paso a paso la imagen positiva del EZLN y del Subcomandante Marcos. Para ello se intentó demostrar a la opinión pública cómo Marcos «se ha hecho inmensamente rico mediante actividades ilícitas de delincuencia organizada», mientras el EZLN estuviera implicado en el narcotráfico. El plan tambien preveía la ejecución de acciones tácticas de tipo «quirúrgico» y que el Gobierno presionara al Vaticano para que trasladara a los teólogos de la liberación y sacerdotes progresistas de Chiapas a otro lado, mientras se aconsejaba transformar los grupos paramilitares en unidades legales de la Policía mediante negociaciones con los caciques locales. El plan no dio el resultado esperado.

Sin embargo se puede observar muy bien cómo actuó. En el marco de la estrategia de deslegitimación, la base militar de la cabecera municipal

de San Andrés fue reducida en sus dimensiones para instalar una cooperativa de mujeres artesanas del PRI y más tarde se construyó hasta un hospital regional. No será casual que mientras gran parte de Chiapas está totalmente desatendido, justo a unos kilómetros de la nueva cooperativa y de la clínica se encontraban ya funcionando una clínica zapatista y una cooperativa de mujeres artesanas zapatistas.

La organización social paramilitar Paz y Justicia, después de la derrota electoral del PRI en el año 2000, se dividió. Un ala fuerte bajo la dirección de Samuel Sánchez fundó la Unión de Campesinos, Indígenas, Agropecuarios y Forestales (Uciaf). Sin embargo, en los dos años siguientes se reorganizó de nuevo como una agrupación sólida. Aunque mientras tanto siguieron existiendo autos de detención contra Sánchez y otros antiguos dirigentes de Paz y Justicia, no se produjo un verdadero seguimiento judicial. Pese a que se logró casi una docena de arrestos que llamaron la atención de los medios de comunicación, el cuartel general de Paz y Justicia siguió al igual que antes en El Limar, municipio de Tila, junto a una Base para Operaciones Mixtas (BOM) del ejército mexicano, un cuartel policial recién construido y una oficina del Gobierno[24]. Eso cuando ya en 1997 el EZLN había presentado un documento indicando con nombres, apellidos y funciones el organigrama de Paz y Justicia.

La cobertura institucional se mantuvo también después del cambio de gobierno en México y Chiapas. A principios de 2003 Fernando Valadez, representante de la ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura), acusó al gobierno federal de no hacer nada ante los paramilitares. Ni Vicente Fox ni el gobernador chiapaneco Salazar Mendiguchía habían siquiera «tocado» a los paramilitares. Salazar Mendiguchía, que como representante del PRI en la comisión parlamentaria negociadora Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), y luego como candidato a gobernador del PRD y el PAN en contra del PRI, había denunciado continuamente al PRI por la existencia de grupos paramilitares, siendo gobernador declaró que «no existen paramilitares en Chiapas»[25].

En 2005 finalmente fueron encarcelados los principales dirigentes de la UCIAF (Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres), como también de la parte radical restante de Paz y Justicia (Diego Vázquez y Sabelino Torres). La Fiscalía los acusó de haber conformado un grupo armado de

unas 50 personas que atacaron a varias comunidades con el fin de desplazar a sus opositores: «Entre las acciones violentas perpetradas por integrantes de Paz y Justicia destacan: la quema de casas, el robo de pertenencias y ganado, la privación de la vida y desaparición de los que consideraban contrarios a sus intereses». La Fiscalía General del Estado logró esclarecer unos homicidios atribuidos a Paz y Justicia y ejerció acción penal en contra de 27 personas[26].

Después de las acciones judiciales la UCIAF se fue debilitando y Paz y Justicia cayó en pedazos y fue absorbida en gran parte por el nuevo modelo paramilitar representado por la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). En algunos casos formaron la base para la Opddic, en otros, formaron organizaciones cercanas que cuentan con su apoyo. Como ha sido el caso en la zona de Salto de Agua, donde junto a los reductos de Paz y Justicia del municipio de Tumbalá formaron la Unión Regional de Campesinos e Indígenas (URCI), que mantiene lazos estrechos con la Opddic. A esas alturas la estrategia contrainsurgente ya había asumido otra vez una línea más militarista. En febrero de 2006 el Ministerio de Defensa declaró que la guerra en contra del EZLN sigue, dado que la alarma roja declarada anteriormente por el EZLN y la planificación de actividades demuestra que ese grupo mantiene vigente su declaración de guerra.

Los grupos de defensa de los derechos humanos ven la responsabilidad de la actividad paramilitar en el gobierno federal. Edgar Cortez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, afirmó en este sentido que en el año 2002 incluso «se cerró la Oficina Especial de Investigaciones sobre Grupos Armados Ilegales, que dependía de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que se haya conocido un informe público sobre el resultado de las pesquisas»[27].

Para ocultar a la opinión pública internacional la guerra sucia conducida contra la propia población, el Gobierno mexicano declaró su versión de los hechos según la cual algunos hombres enmascarados, radicales y no dispuestos a negociar, inducen a los otros indígenas a realizar acciones violentas. Según el gobierno, las masacres se debían meramente a conflictos entre clanes familiares o comunidades de pueblos enemistados. El Ejército debía entonces cumplir su deber y proteger la justicia y las leyes.

PARQUE NATURAL MONTE AZUL: PARAMILITARISMO ECOLÓGICO

Un conflicto latente que ha sido paramilitarizado por parte de los gobiernos mexicanos, y especialmente durante el mandato de Fox, es la cuestión del Parque Natural Monte Azul, en la Selva Lacandona. Allí habitan desde hace décadas doce comunidades indígenas, base de apoyo zapatista. La zona, donde habitaban los últimos 200 indígenas lacandones fue declarada zona de protección natural en 1971; a pesar de ello la convivencia con los indígenas lacandones, alejados más de 60 kilómetros, no constituía problema alguno. Sin embargo, éstos desarrollaron un lucrativo negocio provisto de derechos exclusivos en las ruinas mayas y el ecoturismo. Se mantienen del lado del Estado mexicano, rechazan las movilizaciones indígenas así como los derechos de autonomía solicitados por la mayoría de las otras organizaciones indígenas existentes en México, y defienden vehementemente sus privilegios.

Desde 1995 hay en la zona actividad de grupos armados respaldados por las autoridades gubernamentales. Lacandones armados y paramilitares de Paz y Justicia empezaron a actuar desde finales de 2002 como ayudantes del Ejército y del Gobierno mexicano, que quiere desalojar a las comunidades zapatistas bajo el argumento de que «perjudican la protección del medio ambiente». A mediados de abril de 2003, hicieron un primer ataque a una comunidad de base zapatista y destruyeron algunas casas[28].

Hasta ahora los ataques llegaron a su máxima fuerza el 13 de noviembre de 2006, cuando casi 300 personas atacaron la comunidad zapatista Viejo Velasco desalojando a los habitantes, destruyendo sus casas y asesinando como mínimo a cuatro personas: una mujer fue torturada y violada antes de ser asesinada. Las víctimas podrían ser más, visto que un año después todavía había cuatro desaparecidos y además meses después se encontraron dos cadáveres sin identificar en las cercanías. El ataque se cometió con una primera ola de 40 atacantes vestidos de civil, armados de machetes y palos, atacando e insultando a los miembros de la comunidad. Poco después, en una segunda ola, llegaron más de 200 atacantes adicionales, que en parte tenían uniformes policiales o muy parecidos y estaban armados con armas de guerra de uso exclusivo de la policía, como fusiles

M-16 y R-15. La impunidad llega a tal punto que la «Fundación Lacandona» y la Opddic reconocieron en un comunicado unos días después del ataque, su autoría.

El modelo Opddic

La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) nace en 1998 en el Municipio Autónomo Rebelde de Ricardo Flores Magón, entre las comunidades El Censo y Taniperlas. «Allí se articuló inicialmente su organización con las bases militares de Monte Líbano, Taniperlas y San Caralampio»[29]. El fundador de la Opddic es Pedro Chulín Jiménez, ex diputado local y diputado federal suplente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Anteriormente había organizado al grupo paramilitar MIRA que operó en la zona de Las Cañadas entre 1997 y 1998[30]. Pedro Chulín originalmente venía de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) en Taniperlas, que no era una organización afín al gobierno y en 1994 esa organización había participado con los zapatistas en las tomas de tierra.

La Opddic se empieza a expandir a partir del año 2000. Se sobrepone a otros grupos paramilitares como el MIRA y Los Chinchulines. Pero también a organizaciones civiles como ARIC o CNPI, y hasta a comunidades eclesiales de base. Aprovecha especialmente el desmembramiento de Paz y Justicia y copa también espacios y militantes de esa organización. Su actual presidente Carlos Moreno Hernández, de la misma región que Chulín, aparece sólo como «asesor». El objetivo de la Opddic es destruir a la organización zapatista, recuperar los espacios políticos en beneficio del Gobierno federal y estatal y quitarle a las bases zapatistas las extensas tierras que recuperaron durante el levantamiento de 1994. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusa a la Opddic de operar a favor de intereses territoriales de empresas trasnacionales (madera, agua, minería). En cambio ésta goza del apoyo financiero de programas de gobierno y hasta de Prodesis (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible), programa financiado por la Unión Europea, mientras el Ejército se ocupa de armar y entrenar a sus grupos paramilitares.

La nueva modalidad organizacional de la Opddic, y también de la URCI y la Fundación Lacandona, es funcionar como organizaciones sociales con brazo armado. El modelo de Paz y Justicia fue desarrollado aún más. La Opddic tiene amplia presencia pública, emite comunicados de prensa, se hace autopromoción con publicidad de carretera y subraya su control territorial con carteles que advierten: «Esta comunidad pertenece a la Opddic»[31]. Los paramilitares son de matriz priista, sin embargo en Chiapas mantienen relaciones también con el PAN y el PRD. Eso también debido al hecho que especialmente a nivel local se da un reciclaje de la estructuras de poder priista en el PRD. La Opddic y los otros grupos coordinan su trabajo con los partidos políticos, las instituciones de gobierno y la propia Sedena.

CALDERÓN: PARAMILITARISMO EN AUGE

Felipe Calderón, del PAN, asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006. Con apoyo de Estados Unidos, Calderón ha emprendido una militarización masiva de todo el territorio nacional y más en las zonas conflictivas. Paralelamente empezó la formación de nuevos cuerpos de policía y unidades especiales, como el Grupo Antiterrorista y Antisecuestro y en 2007 el Grupo Central Antisubversivo, un órgano con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.

Ya en la segunda mitad de diciembre de 2007 se dio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la primera reunión de la Mesa Chiapas. Allí se reúnen periódicamente

> los principales asesores del gobernador Juan Sabines, los directores de los diversos cuerpos policíacos, la Sedeso (Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas), la Sedena, el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la Comisión para la Reconciliación para las Comunidades en Conflicto del gobierno estatal, así como representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado, entre otros. En este espacio se discute y se analiza lo que sucede en Chiapas y se reúnen los elementos necesarios para planear la contrainsurgencia, contra toda resistencia civil y especialmente contra las comunidades bases de apoyo del EZLN[32].

En diciembre de 2006 unos 30 hombres armados, en su mayoría ex zapatistas, ocuparon la hacienda San Isidro en el territorio del Municipio Autónomo Magdalena de la Paz. Desde principios de 2007 las autoridades zapatistas en resistencia denunciaron un aumento de amenazas y ataques paramilitares. Según una declaración del EZLN de marzo de 2007, hay presencia paramilitar en todo el territorio zapatista y opera con el apoyo del gobierno central y del gobierno de Chiapas. La Opddic tiene presencia en comunidades de los municipios de Altamirano, Chilón, Ocosingo, Tumbalá, Salto de Agua, San Andrés Sacamchén de los Pobres, San Juan Cancuc en la zona de Pantelhó y sigue extendiéndose, penetrando por último el municipio de Chenalhó.

La estrategia de la OPDDIC, aparte de querer arrebatarles las tierras a las bases zapatistas, podría mirar a provocar un enfrentamiento armado con los zapatistas para dar el pretexto para una incursión masiva del Ejército a comunidades zapatistas.

A causa de al menos siete ataques armados de la Opddic y de la URCI, el EZLN renunció a participar en el XIX Encuentro del Congreso Nacional Indígena.

> Entre los hechos denunciados se encuentran invasiones de tierras, amenazas, intimidación mediante disparos al aire, destrucción de cultivos, robo de maíz, golpizas, detenciones y secuestros. Según los zapatistas los paramilitares cuentan con el apoyo y la complicidad de los gobiernos estatal y federal, la Policía y el Ejército[33].

A partir de mayo de 2007 la policía y el Ejército intensificaron los patrullajes en las zonas zapatistas.

Desde la llegada al poder de Calderón, de diciembre de 2006 a octubre de 2007 las autoridades zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno denunciaron 24 hostigamientos, casi todas actividades paramilitares. La CDHFBC ha comprobado la existencia de tres centros de entrenamiento para paramilitares en los cuales civiles, probablemente militantes de la Opddic, son entrenados por militares. Además hay testimonios que afirman que en la zona de Nuevo San Jacinto cada diez días un grupo de la Opddic recibe una noche de entrenamiento militar de parte de dos militares de la Base de Operaciones Río Jordán. La Opddic dispone en esa zona, según personas amenazadas, de unos 40 fusiles de asalto R-15 y M-16.

El 18 de agosto la policía del estado de Chiapas desalojó las comunidades zapatistas de San Manuel y Buen Samaritano (Ocosingo). El 20 de septiembre, la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios denunció presencia paramilitar en su zona. Los paramilitares se mueven en un grupo de 40 personas y andan armados y uniformados. Según la denuncia cuentan con el apoyo del Ejército, que el 9 de julio, el 21 de agosto (Nueva Revolución) y el 7 de septiembre (en Chulum Juárez, Tila) patrullaron en los montes de la zona con un helicóptero del Ejército acompañándolos. El grupo ha robado en comunidades zapatistas y matado vacas, cerdos y gallinas de las comunidades zapatistas. Los paramilitares son también indígenas de habla Chol, pero no del municipio mismo sino de otro.

Mientras en la oleada paramilitar emprendida a finales de los noventa los paramilitares solían actuar en sus zonas de origen, actualmente se observa que éstos se desplazan mucho y hay al parecer una planificación central que los envía a operaciones a otras comunidades para evitar que sean reconocidos.

El 22 de septiembre de 2007 el Concejo del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de San Andrés Sakamch`en de los Pobres recibió una amenaza de muerte de los grupos paramilitares «Grupo Juvenil» y «Opddic Roja de los Altos» exigiendo el desmantelamiento del municipio autónomo. El «Grupo» o «Frente Juvenil» apareció por primera vez en 2004 armado y con prendas militares, estableciendo retenes en la zona de San Andrés. «Opddic Roja de los Altos» corresponde a la reorganización de Máscara Roja como parte de la Opddic. Se trata de la misma estructura que en 2003 había planificado emboscar un carro en el cual iba a viajar el Subcomandante Marcos. El plan fue desbaratado por el trabajo de investigación y vigilancia de las comunidades zapatistas. Este grupo tiene también nexos con el grupo de creyentes católicos de derecha llamado «Apóstoles de la Palabra». Los paramilitares amenazaron no sólo a estructuras zapatistas sino también a organizaciones de derechos humanos y activistas de ONG.

La estrategia contrainsurgente abarca mucho más que la presión militar y paramilitar. Los programas de gobierno para dividir a las comunidades a partir del otorgamiento de beneficios individuales se ha acentuado más. A través del «Programa Piso Firme» las representantes del PRD le

ofrecen la construcción de nuevas viviendas a los habitantes de las comunidades zapatistas si a cambio abandonan el EZLN. Y hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está involucrada en la guerra contrainsurgente. Debido a los altos precios de la electricidad y como resultado de una campaña empezada en 1992 en Chiapas, 350.000 usuarios se niegan a pagar las tarifas de luz. CFE, acompañada por diversos cuerpos de policía del Estado, reforzó una campaña de cortes de energía en las comunidades, muchas veces organizando a los opositores de las comunidades para que actúen en contra de los usuarios que se niegan a pagar.

La estrategia central, que se vio reforzada durante el mandato de Calderón, son las acciones de paramilitares para quitarle la tierra recuperada a las comunidades zapatistas. Han aumentado las acciones directas y las intimidaciones para despojar tierras por la fuerza, como también acciones por la «vía legal». Casi todas las causas son llevadas por la Opddic, por supuesto con el apoyo de las instituciones del gobierno[34]. A finales de 2007 la Opddic ya mantenía 68 juicios agrarios «para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios, tanto en la zona de Las Cañadas como en los municipios de Chilón, Tumbalá, Sitalá, Tila, Sabanilla y Palenque»[35]. Por lo común se trata de causas en contra de la propiedad comunal aceptada después de las tomas de tierra en 1994, llevadas en nombre de ex bases zapatistas cooptadas por la Opddic para pedir titulación individual y así romper la propiedad comunal y los acuerdos colectivos.

También en la mira de los paramilitares está el Municipio Autónomo Olga Isabel (nombre oficial: Tumbalá), en la zona de Agua Azul, donde la Opddic defiende fuertes intereses económicos. Desde agosto de 2007 esta organización ha amenazado varias veces con desalojar todo el municipio autónomo y ha atacado repetidamente a predios zapatistas en la zona, como por ejemplo a Bolon Ajaw, conformado por 41 familias en 339 hectáreas de tierras recuperadas en 2001. Opddic tiene presencia en las comunidades Progreso y Joyetá, que son las que se benefician de las famosas cascadas de Agua Azul. Desde allí organiza asaltos a comunidades zapatistas cercanas, les sabotea las vías de comunicación, puentes y cultivos. El 10 de septiembre de 2007 la Opddic atacó a Bolon Ajaw, hiriendo a tres zapatistas. El 24 de noviembre de 2007, ochenta de sus militantes irrumpieron armados con pistolas, escopetas, machetes y palos

en Bolon Ajaw, golpearon a un promotor de salud enfermo que encontraron, dejándolo inconsciente, y amenazaron de muerte a quienes no abandonaran el lugar.

Después de las últimas agresiones el gobierno de Chiapas solicitó a finales de noviembre de 2007 la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar a la Opddic con respecto a las denuncias públicas en su contra y las últimas agresiones[36]. Sin embargo, eso no significó un freno a las actividades paramilitares. Y si las investigaciones darán algún resultado, todavía hay que esperar. Puede que la Opddic se haya transformado en un actor político demasiado fuerte y sea vista como una posible amenaza por parte de otros actores oficialistas.

NOTAS

1. Véase: Carlos Montemayor, *Guerra en el Paraíso*, México, 1991.
2. Rosa Rojas. «Montan campaña de desprestigio contra el FDOMEZ, aseguran integrantes del frente. Advierten de la reactivación de grupos paramilitares en Hidalgo y Veracruz». *La Jornada*, 19 de diciembre de 2005.
3. «La doctrina de Operaciones Bélicas de Baja Intensidad (Low Intensity Warfare, o LIW) fue diseñada por Estados Unidos en los años ochenta tras la derrota en Vietnam. Esta doctrina prevé, en el marco de la conducción psicológica de la guerra, la formación de grupos paramilitares para la lucha contrainsurgente». Michael T. Klare/ Peter Kornbluh. *Low Intensity Warfare: Counterinsurgency, Proinsurgency and Anti-Terrorism in the Eighties*, Nueva York, 1988.
4. La School of the Americas (Escuela de las Américas, o SOA) es un centro de capacitación para militares de Latinoamérica financiado por el Ejército estadounidense. En los cursos se imparten estrategias para la lucha contrainsurgente, tácticas de reconocimiento, operaciones comando, etcétera. Desde su fundación en 1946 más de 60.000 militares latinoamericanos han asistido a esta escuela, según informaciones de la misma. Entre ellos se encuentran muchos de los criminales de guerra más conocidos en América Latina, como por ejemplo Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, que conformaban la cabeza de la dictadura militar en Argentina. Titulados de la SOA eran

responsables, entre otras cosas de la masacre en El Mozote, El Salvador, en donde fueron asesinados 900 civiles; y del asesinato del arzobispo Óscar Romero. Después de una larga campaña de grupos de derechos humanos por el cierre de la Escuela, ésta fue rebautizada en enero de 2001 como Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC, o Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica). Para más información consultar www.soaw.org.

5. «La cuesta de la guerra: recomposición del sistema político mexicano» y «El estado de las cosas en México hoy: organismos no gubernamentales, s. a.» (Aprox. 2000), documento completo de un seminario de distintos grupos de derechos humanos y ONG convocado por Global Exchange y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), México, citado según Guillermo Correa: *El etnocidio en Chiapas*, proceso nº 1104 / 29 de diciembre de 1997.
6. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: «Ni Paz ni Justicia», 1996, p. 94; Gustavo Castro. *Boletín Chiapas al Día,* 140, Ciepac, diciembre, 1998.
7. El número total de los grupos es difícil de establecer, no sólo a causa de que algunas organizaciones tienen una presencia territorial más extendida, con grupos en varios lugares, o que las estructuras y pertenencias hayan cambiado durante los años, sino porque también hay grupos que no tienen una estructura paramilitar clara y son, más bien, grupos de sicarios.
8. Herman Bellinghausen. «El operativo contra Paz y Justicia impidió que el grupo paramilitar renovara su directiva», *La Jornada,* 15 de septiembre de 2002.
9. Darrin Wood. «Bury My Heart at Acteal»; www.globalexchange.org/campaigns/mexico/mil/BuryMyHeart.html
10. La base del EZLN está compuesta por tzotziles, tzeltales y tojolabales. Sin embargo, el conflicto no debe ser interpretado de ninguna forma como un problema interétnico. A pesar de ello, el gobierno (anteriormente el PRI y desde el año 2000 el PAN) ha buscado siempre describir el conflicto en Chiapas como disputas interétnicas, en las que el Estado debe intervenir como instancia civilizada y sensata.
11. Onécimo Hidalgo, «Los paramilitares: una guerra sin cuartel», *Manuscrito*, *S.A.*, aprox. 1999, p. 4.
12. Ibíd., p. 6.
13. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: «Chiapas: La guerra en curso», 1998, p. 25.
14. El MIRA estuvo protegido por el ex diputado chiapaneco del PRI Norberto Santiz López, y el antiguo diputado del PRI para Ocosingo, Lázaro Hernández.
15. Proceso nº 1105, 5 de enero de 1998.
16. El diputado Joe Kennedy hizo referencia al respecto en un informe de fecha 12 de enero de 1997 a sus colegas en la Cámara de Representantes.
17. Proceso nº 1171, 12 de abril de 1999.

18. Darrin Wood: *Grupos paramilitares en Chiapas. Bajo la doctrina de Fort Bragg* (en prensa), Nuevo Amanecer Europa, 1997.
19. Walter Slocum, subsecretario del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, declaró que los viajes habían tenido un carácter rutinario. A pesar de que cuando en 1998 el agregado militar de la Embajada estadounidense y un acompañante fueron detenidos en Chiapas, se negaron a dejar requisar grandes cajas de madera que llevaban consigo y que presuntamente contenían armas. Ya que el agregado militar hizo uso de su inmunidad diplomática, las cajas no pudieron ser registradas finalmente. Ref.: Agencia Informativa Púlsar, 2 de marzo de 1998.
20. *The New York Times,* 29 de diciembre de 1997.
21. Proceso nº 1105, 5 de enero de 1998.
22. Gustavo Castro, ob. cit.
23. Carlos Marín, «Chiapas: una estrategia militar», *Milenio*, 1 de enero de 2001.
24. Hermann Bellinghausen, art. cit.
25. Ricardo Martínez: «Las organizaciones de derechos humanos advierten del riesgo de acciones paramilitares en Chiapas», en www.rebelion.org, 19 de enero de 2003.
26. Pepe Gallegos: «Detienen a Samuel Sánchez, dirigente de Paz y Justicia», *El Heraldo de Chiapas,* 23 de febrero de 2005.
27. Ricardo Martínez, art. cit.
28. Hermann Bellinghausen, «Lacandones y comuneros atacaron El Paraíso y destruyeron cien casas», *La Jornada*, 23 de abril de 2003.
29. *La Jornada*, 25 de febrero de 2007.
30. Ángeles Mariscal y Elio Henríquez, «Solicita el gobierno de Chiapas investigar a fondo a la Opddic», *La Jornada,* 29 de noviembre de 2007.
31. Alejandro Reyes, «Guerra de baja intensidad en Chiapas: terrorismo de Estado y paramilitares». En *Boletines de Ciepac*, «Chiapas al día», núm. 532, 12 de marzo de 2007.
32. Onécimo Hidalgo, «Elecciones en Chiapas: recomposiciones y descomposiciones». En: *Boletines de Ciepac*, «Chiapas al día», núm. 546, 3 de octubre de 2007.
33. Alejandro Reyes: «Guerra de baja intensidad en Chiapas: terrorismo de Estado y paramilitares». En: *Boletines de Ciepac*, «Chiapas al día», num. 532, 12 de marzo de 2007.
34. Hermann Bellinghausen, «Incrementa la OPDDIC maniobras de despojo contra comunidades del EZLN», *La Jornada*, 27 de febrero de 2007.
35. Ángeles Mariscal y Elio Henríquez, art. cit.
36. Ibíd.

Capítulo VIII
GUATEMALA: PARAMILITARISMO, VIOLENCIA Y GÉNERO

Matilde Gonzáles / Stefanie Kron

Cuando Alfonso Portillo, del ultraderechista Frente Republicano de Guatemala (FRG), fue electo Presidente del país centroamericano a fines de 1999 y el antiguo dictador militar y fundador del FRG, Efraín Ríos Montt, entró de nuevo al escenario político como presidente del Congreso, la oposición de izquierda de Guatemala reaccionó con tanta discrepancia como los representantes de organizaciones internacionales. La discrepancia se transformó en estupor cuando se comprobó que una gran parte de los votos para el FRG se habían conseguido en las empobrecidas regiones rurales e indígenas.

Cómo es posible, se preguntaban, que la población indígena más terriblemente afectada por el conflicto armado interno de decenas de años elija al partido de Ríos Montt, el hombre que en abril de 1982 dio nombre oficial a un programa de lucha contrainsurgente del sector castrense guatemalteco basado en la «sustentabilidad» con el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, y cuya primera fase obtuvo triste popularidad como «política de tierra arrasada» principalmente en las regiones rurales. Fue una de las más terribles series de masacres en la historia de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas en un período de 18 meses unas 75.000 personas[1].

Las operaciones militares realizadas con motivos racistas y anticomunistas (masacres, expulsiones y la destrucción de más de 400 comunidades)[2] estuvieron acompañadas por estrategias «blandas» de pacificación y la conducción psicológica de la guerra, pero principalmente por una militarización extensa de las zonas «liberadas», cuya base consistía en el establecimiento sistemático de una red de estructuras paramilitares que debía ser extendida sobre cada pueblo por apartado que estuviese. Su objetivo era la reorganización a largo plazo del ámbito social, cultural y político de los

municipios y comunidades partiendo de una definición militar de «seguridad y desarrollo».

En el marco de las negociaciones de paz que concluyeron en diciembre de 1996, en septiembre de 1995 fueron disueltas y desarmadas oficialmente tanto las asociaciones y las estructuras paramilitares —las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)— a las cuales pertenecían para ese entonces alrededor de un millón de activos, como la figura cívico-militar del comisionado[3].

El nuevo surgimiento de los paramilitares sobre el escenario político, en el verano de 2002, trajo consigo un gran escándalo público. Dentro de las antiguas zonas de conflicto se reorganizaron en pocas semanas cientos de antiguos *patrulleros*[4], y exigían al gobierno el cumplimiento de una de sus promesas electorales: el pago de indemnizaciones por su «servicio gratuito a la patria» durante el tiempo de las confrontaciones armadas.

En el mismo año, la Avancso (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala) publicó el libro *Se cambió el tiempo. Conflicto y poder en territorio quiché*, una historia de los cien últimos años del municipio de San Bartolo Jocotenango, ubicado en una zona ampliamente habitada por indígenas, poco poblada y montañosa en el departamento de Quiché. Durante siete años, desde 1989 hasta 1996, un equipo de antropólogos y antropólogas bajo la dirección de la historiadora Matilde Gonzáles reconstruyó las historias de vida de hombres y mujeres de las comunidades de San Bartolo, llevó a cabo entrevistas con funcionarios locales políticos, religiosos y militares e investigó en los archivos locales. La idea consistía en tener en cuenta la fuerte fragmentación social y étnica de la sociedad guatemalteca y escribir una historia local sobre la guerra en Guatemala con ayuda de la historia oral.

La directora del proyecto fue amenazada de muerte reiteradas veces durante su trabajo en el libro. El resultado del estudio proporcionó una razón para el éxito electoral del FRG a fines de los años noventa: como lo demuestra el ejemplo de San Bartolo, el orden social y político en muchas zonas de las antiguas áreas conflictivas está sellado hasta hoy por las continuidades estructurales y personales del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo de la milicia guatemalteca, lo que —entre otras cosas—

condujo a que no se realizara un proceso penal a los (antiguos) paramilitares locales por las violaciones de los derechos humanos cometidas principalmente durante los años ochenta.

Por otra parte, el libro explica que la violencia sexual y la represión específica hacia el género femenino no era un fenómeno secundario en el programa de lucha contrainsurgente sino un elemento constitutivo para la imposición y el mantenimiento de un orden social local basado en el autoritarismo, la violencia, el control y la exclusión.

La siguiente traducción comentada y elaborada de dos capítulos, trata sobre la relación entre paramilitarismo, violencia y género como ejemplo de San Bartolo Jocotenango, uno de los muchos «lugares olvidados» por la historia oficial de Guatemala.

PARAMILITARISMO: LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DE LA MEMORIA

En 1981 comenzó en San Bartolo la «etapa de la destrucción y de la muerte». En el marco de muchas masacres, se asesinó no sólo a los y las simpatizantes y miembros de la guerrilla, sino que se eliminó a la oposición local completa, incluyendo sacerdotes indígenas, catequistas neocatólicos así como promotores y promotoras comunitarios de salud, de agricultura y de educación. Acto seguido vino la opresión sistemática de todas las formas autónomas de organización social comunitaria, así como la opresión de la búsqueda de conceptos de desarrollo local alternativo, que se habían desplegado a partir de los años sesenta en el marco de la movilización social y política en muchas comunidades indígenas.

COMISIONADOS, JEFES[5] Y PATRULLEROS

Los comisionados mantuvieron una capacitación suplementaria cívico-militar especial en la zona militar nº 20 de Santa Cruz del Quiché, la capital del departamento Quiché, y trasplantaron las ideas y planes del proyecto contrainsurgente en el plano local a San Bartolo desde 1981 hasta 1996.

> Los comisionados fueron los responsables de la dirección y ejecución (en el terreno) de las operaciones militares. El cumplimiento de esta tarea coincidió con sus intereses locales […]. El Ejército se valió […] del conocimiento profundo que tenían [los comisionados] de las ideas, visiones y percepciones de sus vecinos perseguidos[6].

Las órdenes e instrucciones militares fueron puestas por encima de la ley y cada forma de negación fue fuertemente penada. Una de las tareas más importantes de los comisionados consistía en «garantizar que todos los hombres del municipio entre 15 y 60 años se integraran en las estructuras militares y/o paramilitares del ejército, ya fuera como soldados, patrulleros u "orejas" [espías]»[7], otorgar las instrucciones militares a las PAC y velar por la reorganización «de las aldeas armadas como […] puntos de control (y bajo control)»[8].

POLÍTICAS DEL ESPACIO

En cada comunidad del municipio se implantó un cuartel de las PAC. Matilde Gonzáles señala que existía

> estrecha relación […] entre la actuación de las patrullas y los mandos del ejército, así como el alto grado de intervención que llegó a tener el alto mando en la reorganización y control del territorio en los ámbitos aldeano, municipal y departamental en la región del conflicto[9].

Ya que cada hombre adulto debía ponerse a la orden como patrullero por turnos, las PAC «constituían un mecanismo de control social en sí mismas y una forma de ejercicio del poder militar sobre la vida cotidiana, las 24 horas del día»[10].

Durante los años ochenta y al menos hasta la conclusión de las investigaciones para finalizar *Se cambió el tiempo…* en 1996, casi todas las actividades civiles, culturales y religiosas en las comunidades eran controladas por los jefes de las correspondientes unidades de PAC. Éstos tenían

> que impedir cada iniciativa de la población por la autoorganización, así como la presencia y la comunicación con los movimientos y organizaciones sociales. Hasta 1996 ninguna organización social de base había avanzado en el municipio y hasta bien entrados los años noventa se conocieron cada vez

> más casos en los cuales inmediatamente después de los intentos de reunión de la población, hacían acto de presencia unidades del ejército[11].

Los jefes tenían que informar a los comisionados inmediatamente sobre cada movimiento «extraño» que pasara ante ellos en su pequeña zona de responsabilidad, y éstos pasaban las informaciones a los comandantes militares de la zona[12]. «Así, el ejército creó una red de seguridad, centralmente controlada pero aparentemente localizada»[13].

Para poder estrechar los lazos de esta «red de seguridad» se emprendió una reorganización del espacio nacional y una ampliación de las autoridades estatales directas hasta los niveles de la comunidad:

> Se produjeron «espacios de clausura» […] que dividían a la gente en términos absolutos […]. Además, estos espacios fueron territorializados, movilizándose imágenes coloniales de los pueblos civilizados al monte, el hogar del diablo, de tal manera que la permeabilidad de los límites de las aldeas se reducía considerablemente[14].

Las personas de San Bartolo fueron presionadas con la opción de colaborar con los militares o paramilitares, es decir, sobrevivir y ser considerados «civilizados», u oponerse a los reglamentos militares, lo que significaba ser asesinados o tener que huir y ser considerados «bárbaros» o «salvajes» que «habitan en las montañas».

Con la ayuda de esta «política del espacio» el ejército desarrolló una tecnología de poder y administración de la población, cuyo elemento clave era el «poder discrecional» que el ejército concedía a los jefes de las PAC como parte de un modelo del control total. Esta tecnología fue justificada con un discurso que resaltaba la «protección de la población ante la expansión de los insurgentes»[15].

Continuidades personales de la militarización

En San Bartolo se mantuvo sometido «durante años» el poder civil al poder militar, se aplicó el plan militar diseñado a largo plazo de manera casi completa. El plan previó ocupar paulatinamente los cargos civiles del municipio con los comisionados y jefes de PAC nombrados y apoyados por el ejército. De esta manera debía realizarse la «democratización

mediante militarización». Desde 1983 hasta las elecciones de 1999 se alternó el clan de los antiguos comisionados y jefes de las PAC en el ejercicio de los cargos civiles. De esta manera se convirtieron en administradores de los recursos financieros y los proyectos de desarrollo, y lograron apropiarse de las grandes parcelas y casas del pueblo[16].

Mediante su política de establecer en forma segura las continuidades, el ejército se ocupó —tras la instalación de una democracia formal a partir de 1986— de la mutilación de la revitalización inicial de estructuras gubernamentales y de administración civil; logró que los actores locales (para)militares se convirtieran en órganos ejecutantes de la estrategia de la «seguridad y desarrollo» en el ámbito municipal, y con ello pudiesen dictaminar las pocas iniciativas, proyectos y actividades para el desarrollo local.

Entre 1986 y 1996 asumieron el Concejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural (CDUR) así como los Comités de Paz y Desarrollo, el proyecto propuesto en 1993 por el ejército para la transformación de las PAC. Técnicos y especialistas del ejército capacitaron a los comisionados y jefes en los discursos actuales referentes a la propuesta de zonas de desarrollo para convencer a inversionistas extranjeros y agentes de desarrollo de que ellos eran los representantes legítimos de la población —incluyendo cada grupo que se había convertido en víctima de sus violaciones de los derechos humanos (viudas, huérfanos, desplazados que habían regresado, etc.) De esta forma se ocuparon de la formación de estructuras meramente formales de la representación y administración comunitaria[17].

VIOLENCIA SEXUAL: «NORMALIDAD» EN EL TIEMPO DE LA OSCURIDAD Y DE LA MUERTE

> En San Bartolo las mujeres fueron violadas por miembros del ejército y por los hombres que durante años han gobernado su pueblo (comisionados, jefes y/o alcaldes). Éstos ordenaron la ejecución de las violaciones masivas a los demás hombres de su comunidad[18].

Al igual que en muchas zonas conflictivas, las mujeres eran consideradas «botines de guerra», pero también «carnada». Con ayuda de la violencia sexual, el ejército, los comisionados y los jefes buscaban así

degradar a las mujeres y destruirlas física, mental y moralmente, convertirlas en sus cómplices, en su propiedad. Una viuda, por ejemplo, figuraba como una mujer «suelta», como una mujer cuya existencia sin un hombre la caracterizaba como cómplice de un subversivo o un delincuente.

> Violarla era una forma de vencerla, una forma de quebrar su voluntad y obligarla a callar, violarla significaba hacerla «traicionar» a sus hombres asesinados, secuestrados y perseguidos. [...] Por mucho tiempo se le concedió a las mujeres que permanecieron en el lugar sólo dos posibilidades: la violación o la muerte[19].

La vejación de las esferas privadas

En una primera fase de la política de tierra arrasada durante la «limpieza» y las acciones de búsqueda del ejército, la violación representaba ante todo una amenaza o un acto de tortura para obligar a las mujeres a traicionar el lugar en el que se encontraba el «enemigo», el «ladrón» o el «guerrillero», es decir, los esposos, padres o hermanos perseguidos. La amenaza o la violación misma tenía lugar mientras la casa era allanada, los niños y las hermanas golpeados, los cereales robados, las mascotas asesinadas y las cacerolas y la vajilla destruidas[20]. Ximena Bunster describe la violación o el arresto de mujeres en su propia casa, como una forma de tortura que tiene como objetivo que «la protección y el refugio que ella representa se hace trizas, como también queda destruido el control y coherencia que ella mantiene en la esfera de su casa»[21].

La mujer como carnada

Otro objetivo que se deseaba alcanzar utilizando a la mujer era el arresto de los hombres prófugos que se encontraban en las listas de la muerte y se mantenían escondidos en las «montañas». Como un caso particularmente drástico, que sin embargo no representa de ninguna manera una excepción, Matilde Gonzáles describe la historia de una mujer que, después de la huida de su esposo, fue obligada por un patrullero local a acogerlo en su casa y a convivir con él.

Cuando su propio esposo volvió al pueblo para ver a su familia, fue apresado, liquidado y quemado por ese patrullero, entre otros. Según Matilde Gonzáles, la mujer sigue conviviendo todavía con el patrullero, que tiene corresponsabilidad en el asesinato de su esposo.

> Este caso, como muchísimos otros, demuestra la multiplicidad de dimensiones que conllevaba la estrategia del ejército de involucrar a la gente de la comunidad como actora. Sobre todo el dolor y el silencio que encierra la vida de cada una de estas mujeres que fueron raptadas y luego usadas como carnada o como botín de guerra[22].

La deshonra del pueblo

Luego de las primeras violaciones en las esferas familiares, las mujeres de todas las comunidades municipales fueron obligadas a entregarse al pueblo. Entonces se traían entre cien y ciento cincuenta mujeres de distintas edades a la iglesia y al ayuntamiento. Los comisionados daban la orden de la violación. Oponerse a esta orden significaba sanciones y en algunos casos la muerte de patrulleros individuales. Las mujeres eran violadas frente a todos los presentes, primero por los soldados y finalmente por los otros habitantes de las comunidades, incluyendo el propio vecino y miembros de la familia. Este ritual fue ejecutado repetidas veces durante las últimas semanas del año 1981 y en enero y febrero del año 1982. Para el ejército y los hombres que se ubicaban cercanos a los soldados, las innumerables violaciones sistemáticas simbolizaban la «danza del vencedor», el «espectáculo de la vergüenza». A partir de este momento, la comunidad en conjunto estaba incluida en los crímenes de guerra y se había convertido en cómplice. Nadie se mantuvo inocente, nadie tenía ya la supremacía moral para condenar lo que estaba sucediendo[23].

Las casas de mujeres: la esclavitud sexual

Mientras los patrulleros locales lograron, después de un largo conflicto con los jefes, que no se siguiera abusando sexualmente de las mujeres, las viudas y las mujeres cuyos esposos aún se mantenían escondidos en

las montañas fueron obligadas a «ponerse al servicio» de los soldados y comisionados. Esto significaba estar encerradas en el cuartel militar, en los edificios públicos o en casas privadas abandonadas, donde las mujeres eran sujeto de las arbitrariedades de los hombres bajo amenazas constantes y vigilancia permanente. En estas «casas de mujeres» los comisionados y los jefes de las PAC mantenían prisioneras a mujeres adolescentes y jóvenes en edades entre los 11 y 20 años. Debían mantenerse al servicio sexual de las tropas, mientras que las mujeres mayores debían preparar la comida. «Estas mujeres vivieron bajo este sistema de esclavitud sexual durante un período que duró entre ocho meses y dos años»[24].

La apropiación de mujeres de la oposición política local

«Una variante de este sistema de esclavitud sexual fue la esclavitud particular o la apropiación de mujeres de líderes comunales de parte de comisionados y jefes de la patrulla»[25]. De esta forma sucedieron en San Bartolo diferentes casos donde se obligaba a las mujeres a establecer una «colaboración» con un comisionado o un jefe de PAC locales. Las mujeres eran aterrorizadas con descripciones de detalles horribles del supuesto o real asesinato de su esposo desaparecido. Finalmente se les amenazaba con que tendrían el mismo destino o que se permitiría que la tropa entera las violara si se negaban a esta colaboración obligatoria.

> Durante el trabajo de campo pudimos comprobar que varias mujeres sanbartoleñas continuaban viviendo con sus violadores bajo la apariencia de una relación normal […]. A lo largo de 15 o 16 años de vida e hijos en común han ido desarrollando una actitud de sumisión y obediencia servil[26].

Los autores del libro *El terror sexual en El Salvador y Guatemala* interpretan esta tipología de esclavitud sexual individual de la siguiente manera:

> La sumisión a un militar es ante todo una cuestión de supervivencia, ella lo soporta para evitar un destino peor: el asesinato. El contrato no es voluntario, sino más bien coercitivo, y se asemeja más a un proceso de negociación contra la pena de muerte que a un vínculo con un ser amado[27].

Violencia y exclusión: continuidades de un orden militarizado basado en el género

Matilde Gonzáles narra lo difícil que era, incluso a mediados de los años noventa, encontrar mujeres que estuviesen dispuestas a hablar sobre el tema del paramilitarismo y la violencia sexual. Además de los sentimientos de «profunda vergüenza y culpabilidad», la autora atribuye el constante silencio principalmente a que la violación «en 1996 todavía continuaba siendo una práctica común tanto de las autoridades de la patrulla como de autoridades edilicias vinculadas al ejército»[28].

Gonzáles menciona entre los crímenes más reiterados perpetrados hasta 1996, además de los asesinatos selectivos, linchamientos, intimidaciones y expropiaciones de tierras, las constantes violaciones de las mujeres del municipio.

> Las mujeres entrevistadas declararon que varios de los alcaldes y jefes de PAC (a lo largo de los años ochenta y noventa), haciendo uso de su poder, las mandaban a llamar con los patrulleros del turno para que «se presentaran en la municipalidad a cumplir con un trámite» y que al presentarse a la alcaldía, éstos las encerraban en el despacho municipal y allí mismo las violaban[29].

La exclusión de las mujeres

Sin embargo, las constantes violaciones forman parte de los fenómenos más drásticos de una reorganización del orden de los géneros construida en el tiempo bajo los puntos de vista militares:

> En este municipio, el ejército y los jefes de las PAC […] excluyeron de los espacios y mecanismos de información, decisión y participación política a todos aquellos y aquellas que no estuvieran dentro de las estructuras militares y/o paramilitares[30].

Una de las consecuencias de la consolidación de este poder autoritario y masculino fue la expulsión de las mujeres del espacio público. Su libertad de movimiento estuvo fuertemente limitada. No podían pasar por las calles del municipio acompañadas, o recurrir a los medios de transporte público, tales como autobuses. Ya que las mujeres eran consideradas

«presas fáciles», estaban expuestas a ultrajes, agresiones públicas y abusos sexuales. De esta forma se les despojó de los pocos espacios que se les había abierto durante los años setenta. Se les prohibió formar parte de las reuniones de su comunidad o del municipio. No podían estar presentes o escuchar lo que allí se decía o se decidía. La situación era ya para 1995 igual que en los años ochenta.

Matilde Gonzáles atribuye el continuo silencio de las mujeres no sólo a las experiencias de violencia sexual, sino también a las «representaciones, que el ejército construyó acerca de ellas en el imaginario de los soldados y patrulleros». Dentro de las estructuras militares y de las estructuras de las PAC, las mujeres fueron vistas como oídas, «lenguas sueltas», «bocas difíciles de gobernar». Dentro de la concepción de los militares, «las mujeres oyen y dicen lo que oyen»[31].

LOS PROYECTOS DE AYUDA PARA LAS VIUDAS

Uno de los ejemplos más dramáticos de la preponderancia de las ideas y prácticas de la seguridad militar sobre cualquier iniciativa propia de la población para el desarrollo comunitario es la administración de los proyectos de ayuda en beneficio de las viudas a través de los actores locales militares y paramilitares. Aparte de la gerencia de los proyectos, los jefes y comisionados tenían atribuciones de igual forma en el constante control de la vida cotidiana de las mujeres viudas.

Debido a la extremadamente precaria situación de las viudas y los huérfanos en el Quiché, varias instituciones y ONG intentaron llevar a cabo programas de primeros auxilios y alimentos a partir de 1983, que debían conceder ayuda para la supervivencia de este grupo de víctimas, aun cuando los conflictos armados se mantuviesen. La realización de estos proyectos fue constantemente obstaculizada de forma masiva por el estricto control que los comisionados y jefes ejercían no sólo sobre las viudas, sino también sobre los representantes de las organizaciones de ayuda. Por lo tanto, los comisionados y jefes competentes prohibieron a las mujeres que se organizaran de manera autónoma y establecer contacto directo ellas mismas con las instituciones del proyecto.

Tan pronto como los comisionados se enteraban de que una institución deseaba iniciar proyectos para las viudas, se presentaban como sus «benefactores». A continuación, convocaban un grupo de mujeres para «preparar el terreno». Obligaban a las mujeres, bajo amenaza de violencia, a encontrarse con los iniciadores del proyecto en una reunión. Allí debían presentarse ante la correspondiente institución como un grupo organizado de mujeres, no obstante, sin hablar de lo que había causado su estatus como viudas. Durante las reuniones, los comisionados eran «facilitadores» entre las mujeres y los representantes de la correspondiente institución, ya que decían por ejemplo: «Las señoras no hablan, porque no saben la Castilla», o «ellas no saben leer, no saben escribir», «no saben llevar las cuentas», «nosotros les vamos a ayudar». En este caso, la amenaza o la ejecución de la violencia sexual representaba también la medida de intimidación más importante. Pues los comisionados y jefes no sólo se consideraban propietarios del proyecto, sino también propietarios de los cuerpos de estas mujeres. Esta situación en cuanto a la realización de los proyectos se mantuvo inmutable hasta el final del estudio a mediados de los años noventa[32].

En una entrevista realizada en marzo de 2003, la autora hace referencia al hecho de que el ejercicio del poder en San Bartolo se encuentra hasta hoy en manos de hombres que siguen instrucciones militares y que, al igual que en el pasado, mantienen relaciones con el ejército.

> Ellos establecieron un orden desigual, con estructuras jerárquicas, con obligaciones y responsabilidades definidas por el ejército; un orden masculino, que reforzó las relaciones patriarcales y la construcción de una identidad nacional basada en la masculinidad, prácticas y referentes militares[33].

La reorganización política actual de las PAC en distintas partes del país es un símbolo de que este orden social aún se mantiene en vigencia en otras antiguas zonas de conflicto.

NOTAS

1. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas entre abril y noviembre de 1982, principalmente en los departamentos Chimaltenango, El Quiché, Huehuetenango y las Verapaces. Ref.: Jennifer Schirmer: «Intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala». Guatemala, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso, 1999, p. 87.
2. Partiendo del ejemplo de la clásica discusión de las comunidades indígenas, en lo sucesivo se calificará al contexto local y aldeano de «Comunidad». Ref.: Frank Garbers: *Geschichte*, *Identität und Gemeinschaft im Rückkehrprozess guatemaltekischer Kriegsflüchtlinge*. Münster/Hamburg/London 2002, p. 58. Frank Garbers describe el concepto de colectivización «comunidad», como un proyecto flexible de la contrahegemonía fundamentado en las experiencias históricas de la colonialización.
3. Los llamados «comisionados», que incluso antes de la implementación del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo pertenecían a menudo a las élites locales económicas y políticas y ya contaban con una formación militar, representaban el «vínculo» entre el nivel del comando de las fuerzas de combate guatemaltecas y las asociaciones comunitarias de PAC.
4. Miembros temporales o permanentes de PAC.
5. La población de San Bartolo denomina *jefes* a todas las autoridades paramilitares, es decir, comisionados y comandantes de las unidades locales de PAC.
6. Matilde Gonzáles/Avancso: *Se cambió el tiempo - Conflicto y poder en territorio quiché*. Cuadernos de Investigación nº 17, Guatemala 2002, p. 428.
7. Ídem: en otro lugar.
8. Finn Stepputat, «Espacio, formación del Estado y desplazamiento forzado, una perspectiva desde Guatemala». Ponencia presentada en el taller Reconstruyendo el Tejido Social. Huancayo. Perú, 1999, p. 128
9. Matilde Gonzáles 2002, pp. 429-430.
10. Commission for Historical Clarification (CEH): «Guatemala. Memory of Silence. Tz‹inil na‹tab‘al. Report of the Commission for Historical Clarification. Conclusions and Recommendations». Ciudad de Guatemala, 1999, Cap. II, Vol. 1, p. 160.
11. Véase Gonzáles 2002, p. 431. Asimismo fue prohibida o fuertemente limitada la presencia de organizaciones para los derechos humanos, representantes de la Iglesia y de las ONG. Entre 1981 y 1996 ninguna institución y ningún activista en el ámbito de los derechos humanos podía trabajar en la zona. Los comisionados no permitieron ni una vez la presencia de representantes de las instancias estatales de los derechos humanos. Véase ídem, p. 432.
12. Se refiere a la Zona Militar nº 20 en Santa Cruz del Quiché.

13. Jennifer Schirmer, 1999, ob. cit., p. 168.
14. Finn Stepputat, ob. cit., p. 26.
15. Véase Gonzáles 2002, p. 431.
16. «Pueblo» se denomina al lugar donde se encuentran el gobierno y la administración de un municipio. En municipios poco poblados y distribuidos, el pueblo es una villa, una aldea más grande. El pueblo de un municipio constituye la unidad de administración más pequeña del Estado. Véase Gonzáles 2002, p. 438.
17. Véase Gonzáles 2002, p. 442.
18. Ibíd,, p. 407
19. Ibíd., p. 408. La antropóloga Beatriz Mann observa en el caso de Guatemala una relación causal entre el paramilitarismo y la violencia sexual: «La creciente presencia de estructuras paramilitares en las comunidades vino acompañada simultáneamente por un aumento en los casos de violaciones». Beatriz Manz, *Repatriación y reintegración – Un arduo proceso en Guatemala* (Publicación en español). Washington D.C., US. Georgetown University, Center for Inmigration Policy and Refugee Assistance, Hemispheric Migration Project, 1988. El informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Esclarecimiento Histórico (CEH) «Nunca Más», publicado en febrero de 1999, llegó al descubrimiento de que las formas extremas de la violencia sexual que fueron cometidas por soldados, comisionados, jefes y patrulleros contra las mujeres constituían la base de una planificación sistemática y estratégica. Ref.: CEH 1999, Tomo III, p. 13.
20. Véase Gonzáles 2002, p. 409.
21. Ximena Bunster, «Sobreviviendo más allá del miedo». En *La mujer ausente – Derechos Humanos en el mundo*. Isis Internacional, Santiago de Chile, 1991, p. 51.
22. Gonzáles, 2002, p. 413.
23. Ibíd., pp. 413-414.
24. Ibíd., 2002, p. 417.
25. Ibíd., 2002, p. 421.
26. Ibíd., 2002, p. 422.
27. A. Aron/ S. Corne/ A. Fursland/ B. Zelwer: «El terror sexual en El Salvador y Guatemala». En: *Ediciones de las mujeres* nº 15, Isis Internacional, Santiago de Chile, 1991, p. 162.
28. Gonzáles 2002, p. 405. Según un informe del Chrica, había sido muy difícil entonces encontrar mujeres jóvenes en algunas comunidades del departamento del Quiché que no hubiesen sido víctimas de la violencia sexual por parte de los militares. Comité para los Derechos de la Salud en América Central (Chrica), Publicación Ordinaria, San Francisco, Estados Unidos, 1988.
29. Gonzáles, 2002, p. 434.
30. Ibíd., p. 436.
31. Ibíd., p. 437.
32. Véase Gonzáles, 2002, pp. 450-451.
33. Ibíd., p. 438.

Capítulo IX
YUGOSLAVIA: GANADORES MULTIÉTNICOS DE LA GUERRA DE YUGOSLAVIA. PARAMILITARISMO ENTRE LA GUERRA, ETNIZACIÓN Y COMPLEJOS INSTITUCIONALES CRIMINALES

Boris Kanzleiter[1]

La destrucción bélica de Yugoslavia en el transcurso de los años noventa estuvo relacionada principalmente con la movilización de unidades irregulares de combate y paramilitares[1]. Mientras en el estallido de la guerra, en el otoño de 1991 decenas de miles de personas que debían prestar el servicio militar eludían cumplirlo en el ejército regular de Yugoslavia (JNA o Ejército Popular Yugoslavo), surgían en todas partes del país partidos nacionalistas y organizaciones de tropas armadas privadas[2]. En Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Kosovo, unidades regulares debieron ser reconstituidas durante el comienzo del transcurso de la guerra a partir de las milicias y tropas policiales. Sin embargo, también en el lado serbio se formaron y se emplearon tropas paramilitares en gran escala[3]. Aunque el JNA se posicionó progresivamente del lado serbio, muchas de las operaciones de guerra decisivas provenían de las milicias irregulares y de los paramilitares, en cooperación más o menos estrecha con el JNA.

La reflexión más precisa sobre la creación, formas de acción y transformación de grupos paramilitares en la antigua Yugoslavia es válida por diferentes razones. Por una parte, se esboza por medio de ellos un cuadro de la guerra en Yugoslavia que cuestiona muchas definiciones adaptadas. Categorías como «liberación nacional», «derecho de autodeterminación de los pueblos», «democracia» o «socialismo», a las que siempre recurrieron los actores de la guerra, degeneraron —ante la economía de robo— en una persistente fraseología intercambiable y sin fondo. Por otra parte, las guerras en la antigua federación (en su dinámica establecida en forma decisiva por los actores paramilitares) son posiblemente observadas

como ejemplos por muchos otros conflictos en el mundo que se expanden actualmente. Una retrospectiva a los sucesos en Yugoslavia durante los años noventa también puede ser una mirada a las guerras actuales y futuras.

EL GRAN SAQUEO

Mientras en los folletines y comentarios en cuanto al conflicto armado que estalló en el verano de 1991 el discurso se basaba en el «odio milenario» entre las «etnias» o «naciones» eslavas del Sur como causa de la guerra, los actores *in situ* se representaban como cualquier cosa, menos «arcaicos» o «tradicionales»[4]. Grupos de hombres jóvenes con modernas gafas de sol y ropa deportiva se armaron y aterrorizaron a la población civil en los escenarios de los hechos de guerra. Aunque los combatientes traían insignias y escudos sobre sus uniformes de fantasía y con ello se diferenciaban de sus oponentes, compartían en muchos aspectos el mismo gusto. Bien fuesen croatas, bosnios-musulmanes, albanos o serbios, un impresionante Mercedes con vidrios ahumados parecía estar en el candelero de todas las guerras, así como un caro reloj de muñeca Rolex y otros símbolos de prestigio y riqueza aparente.

Diversos factores son seguramente responsables por la agudización de los conflictos politicos entre las repúblicas federativas de la antigua Yugoslavia conducida bajo argumentos nacionalistas, hasta el estallido de la guerra y el establecimiento de zonas «étnicamente homogéneas»[5]. Sin embargo, al analizar el propio acontecimiento principal muchos observadores coinciden en que la búsqueda de una ganancia material que entrara en los bolsillos de los combatientes tenía un significado determinante. Particularmente en la parte inicial de la guerra en Bosnia-Herzegovina se trató de manera extensiva de un gran asalto, en el cual los paramilitares despojaban a sus víctimas de dinero, joyas, neveras y cualquier otro objeto de valor antes de expulsarlos de los lugares conquistados o de asesinarlos. Una mayoría de las más de 200.000 personas asesinadas en Bosnia entre 1992 y 1995 eran civiles. Más de dos millones de habitantes fueron expulsados y a menudo expropiados sus hogares[6].

En un informe del JNA relativo al comportamiento de los paramilitares serbios se deja constancia explícita de esta observación. Allí se afirma que las tropas irregulares son un peligro para la «moral de la guerra». Su «motivo primario» no es la lucha contra el enemigo sino «el robo de la propiedad privada y el tratamiento inhumano» a sus víctimas[7]. En lugar de un sueldo, los paramilitares habían obtenido el derecho a saquear y a llevar a cabo el «trabajo sucio» de las «limpiezas étnicas» mientras eran protegidos estratégicamente por tropas regulares. Las evidentes atrocidades cometidas por los paramilitares contra la población civil, que fueron consideradas en el extranjero, de manera racista, como atribuidos a una presunta cultura balcánica típica de violencia, en realidad contribuyeron significativamente al aumento del monto que podían extorsionar para el rescate de rehenes capturados.

Sin embargo, también los «defensores» de las ciudades y pueblos ocupados por tropas serbias se asían en forma descarada e indemne de la población civil. La *Enklave* musulmana Srebrenica, por ejemplo, estuvo bajo el control de Naser Oric y su cuadrilla hasta la ocupación por tropas serbias en la primavera de 1995. Oric, que se presentaba como defensor de la población musulmana y en abril de 2003 fue acusado por el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra contra civiles serbios, anteriormente había sido un guardaespaldas de Slobodan Milosevic[8]. La ayuda humanitaria del extranjero debía pasar por las manos de los grupos armados de Oric, cuyos miembros la vendían a la población a elevados precios de mercado negro determinados por ellos mismos. Un modelo corriente en las guerras[9]. Cuando en julio de 1993 tropas serbias tomaron el estratégico Monte Igman para el control del acceso al asediado Sarajevo, los «defensores» musulmanes, de manera nada patriótica vendieron sus posiciones para poder seguir controlando las ventajosas rutas de mercado negro[10].

La cooperación de los paramilitares más allá de límites étnicos no era una particularidad. Convencidos de seguir dominando en la guerra, los paramilitares serbios vendían armas de su abundante inventario (el JNA les había cedido armamento) a las unidades musulmanas y croatas, que carecían de herramientas para la matanza. Para algunos paramilitares su origen étnico era incluso tan insignificante que luchaban para el otro bando, como por ejemplo Franko Simatovic (alias Frenki) que, con sus

unidades enmascaradas, ha sido responsabilizado de atrocidades particulares. La tropa de Frenki luchaba en el bando serbio, aunque él mismo es croata.

El experto austríaco en los Balcanes, Norbert Mappes-Niediek, llega en su análisis del conflicto en Macedonia en 2001 a la conclusión de que en ese lugar no se trataba de ninguna manera de un «conflicto étnico», sino de una «guerra aparente» dentro de la comunidad albana por el control de rutas de contrabando. Así se conformó la UCK macedonia, principalmente por jefes gánsteres de Tetovo (una ciudad poblada mayormente por albanos en la frontera con Kosovo) que eran sacados del negocio por un empresario local y jefe del Partido Democrático de los Albanos (PDA) con representación en el gobierno.

Con la rebelión de la UCK, los amenazados contrabandistas de Tetovo podrían volver a obtener su influencia.

> El asunto del conflicto de Macedonia no había sido el derecho de las minorías, se trataba de pagos de tributaciones y zonas de influencia, y el actor no era un pueblo subyugado o sólo incitado, sino el bajo mundo que anda a rastras bajo la luz del día,

resume Mappes-Niediek[11].

Mucho apunta a que la observación realizada por Mappes-Niediek no sólo se refiere al conflicto de Macedonia, sino que presenta un rasgo característico esencial de todos los conflictos descritos como étnicos en la antigua Yugoslavia. En una reflexión más extensa sobre las biografías de los «héroes de la guerra» llama la atención que entre ellos se trataba en una mayor parte de criminales «comunes». El internacionalmente reconocido dirigente de la Guardia Voluntaria Serbia, Zeljko Raznatovic, alias Arkan, por ejemplo, cayó en prisión por primera vez en 1969 a los 17 años por un delito criminal: el robo de una cartera. En los años setenta y ochenta fue apresado otras tres veces por asalto a mano armada en Bélgica, Países Bajos y Alemania. Cada vez optó por fugarse. El jefe de los «Tigres de Arkan» se opuso en la defensa de Sarajevo a Jusuf Prazina, alias Juka, el jefe de los grupos paramilitares Lobos. Juka había realizado asimismo una carrera en el bajo mundo y había estado en prisión cinco veces[12].

El caso de Arkan y Juka no constituían de ninguna manera casos excepcionales ni curiosos, sino más bien la regla. Según apreciaciones de Milos Vasic, el experto en materia militar de la revista *Vreme* de Belgrado, las tropas paramilitares serbias se componen «en un 80% de criminales comunes y en un 20% de nacionalistas fanáticos»[13]. Entonces, las atrocidades en la guerra no eran tampoco consecuencia de un espontáneo estallido de violencia interétnico en el que los vecinos se abalanzaban unos contra otros, como fue sugerido a menudo en los medios de comunicación masiva, sino el resultado de una acción organizada en la cual grupos contados y relativamente pequeños de paramilitares armados desempeñaban el rol principal y obligaban a la masa de la población a posicionarse a lo largo de límites étnicos[14]. De esta forma se presentan los «límites étnicos», que hoy aparecen como infranqueables en el escenario bélico de, por ejemplo, la totalmente destruida ciudad de Vukovar, no tanto como causa del conflicto armado sino más como su resultado. Casi inmediatamente previo al inicio de la guerra, la mayoría predominante de la población de Yugoslavia consideraba una violenta desintegración del Estado como algo imposible e incluso indeseable[15].

COMPLEJO CRIMINAL-INSTITUCIONAL

El director del Instituto para la Investigación Criminológica y Sociológica en Belgrado, Dobrivoje Radovanovic, declara que para el inicio de la guerra ya se había dado una cooperación intencional entre las instituciones estatales y los criminales. Otros miles de reclusos fueron puestos en libertad y llevados directamente a grupos paramilitares y dotados en parte de identificaciones policiales. A cambio de la impunidad, debían participar en la guerra como empresarios privados del saqueo en conexión con unidades regulares del ejército y de la Policía, y asumir en ella los trabajos sucios. Así, los servicios secretos pudieron edificarse sobre una cooperación ya comprobada con particulares importantes del bajo mundo y redes de la mafia, que ya habían adquirido influencia en Yugoslavia desde los años sesenta. El servicio secreto exterior UDBA había utilizado criminales, incluso desde principios de los setenta, para asesinar emigrantes impopulares en el ámbito político (en general nacionalistas

croatas) en el extranjero. Incluso, Arkan trabajó presuntamente para la UDBA desde 1973.

Este procedimiento no presenta de ninguna manera un «descubrimiento serbio». Al contrario, el criminólogo Radovanovic comprueba que aquí se trata de una metodología del abundante repertorio de trabajo del servicio secreto que también es empleado en otros conflictos. En Serbia, sin embargo, durante el transcurso de la guerra se desarrolló un verdadero complejo criminal-institucional a partir de la relación de los paramilitares con los órganos estatales. Este complejo difuminó crecientemente la separación entre el ejercicio público y privado de la violencia y se materializó en poder político[16].

La proclamación de un embargo comercial de la ONU contra el país el 30 de mayo de 1992 no fue insignificante para este suceso. Las élites de la guerra, que se enriquecieron en los frentes de Bosnia a través de robos y asesinatos, ascendieron en esta situación con apoyo institucional al lucrativo comercio del mercado negro. El embargo, disipado después de la guerra de Bosnia en 1995, con la crisis de Kosovo en 1998 fue reintensificado e inmediatamente después de la caída de Milosevic en octubre de 2000 fue levantado oficialmente, se prolongó durante ocho largos años. Aunque en este tiempo nunca se agotaron los bienes de interés vital como la gasolina, su precio aumentó en gran medida. Las provechosas importaciones ilegales provenientes de los países vecinos fueron controladas por redes criminales, que estaban unidas estrechamente con instituciones, y en ellas los líderes paramilitares de la guerra con sus tropas armadas desempeñaban un rol importante[17].

Los complejos criminales-institucionales han perdurado incluso después del fin de la guerra. El capital que acumularon durante la guerra y el embargo mediante robos en una «acumulación originaria» en parte es invertido hoy día en la compra para la privatización de empresas subastadas, y con ello se legaliza[18]. Por otra parte, las redes también han abierto un nuevo y provechoso mercado con el tráfico de armas, drogas y personas que, en el caso del tráfico de mujeres y de la prostitución forzosa, fue producido en parte mediante instituciones internacionales en los Balcanes que cuentan con cien mil miembros aproximadamente (ante todo las tropas SFOR y KFOR). Incluso cuando la expresión del complejo

criminal-institucional es destacada hoy día en el «Serbia y Montenegro» (en lo cual se transformó el resto de Yugoslavia), el fenómeno es conocido en todas las antiguas repúblicas yugoslavas afectadas por la guerra[19].

Reforma de mercado y el nacionalismo como fuerza movilizadora

La formación de los complejos criminales-institucionales fue patrocinada no sólo por las economías de guerra sino particularmente por la movilización del etnonacionalismo, que convirtió a delincuentes en «héroes de guerra patriotas» y legitimó su comportamiento. En este sentido, los paramilitares mafiosos podían apoyarse en las movilizaciones nacional-populistas, que fueron iniciadas a fines de los años ochenta por los liderazgos de las repúblicas aún formalmente comunistas. Esta conexión lleva al punto central de la destrucción de Yugoslavia, ya que el estallido de la guerra en 1991 no era su comienzo sino el punto final de una desintegración económica, social y política que había socavado la entidad del Estado y su base ideológica durante los años ochenta tan sacudidos por la crisis.

Aunque esta crisis tenía sinceramente poco que ver con el supuesto «odio milenario» de distintas unidades nacionales, sino con la bancarrota económica del modelo socialista de Yugoslavia, y particularmente con el intento de superar la crisis mediante la aplicación de un programa de reestructuración neoliberal[20]. Este programa profundizó las contradicciones socioeconómicas regionales existentes y produjo una situación de quebrantamiento social. En este sentido, Yugoslavia tomó de antemano el «shock sin terapia» durante los años ochenta, que no afectó a otros antiguos países socialistas hasta los años noventa. Se cerraron industrias, se eliminaron las subvenciones a víveres y se acrecentaron drásticamente los precios de bienes y servicios de las necesidades cotidianas.

Mediante algunas cifras socioeconómicas se puede ilustrar el dramatismo de la fragmentación social. Después de que los salarios habían aumentado en forma constante y sustanciosa en todo el período de la posguerra, decayeron en promedio 2,3% anualmente entre 1980 y 1988[21]. Aunado a la casi completa desvalorización de los salarios se produjo entonces una

espiral de inflación, que en el curso del año 1989 ascendió a 1.500%[22]. Después del estallido de la guerra, la inflación en la RF de Yugoslavia alcanzó finalmente en 1993 la increíble cantidad de 11,6 millardos[23]. Paralelamente a la desvalorización de los salarios, el desempleo aumentó en forma dramática. Ya en 1988, tres años antes del inicio de la guerra, la cuota oficial de desempleo comprendía 17%[24]. Particularmente sorprendente era el desempleo juvenil, que en muchos lugares comprendía más del 50%. El año 1989 se cernía con el colapso adicional de otras 8.000 empresas con un total de ocupación de 3,2 millones (casi la mitad de todos los empleados yugoslavos), como consecuencia de un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI)[25].

La crisis se tornó explosiva debido a que afectó a las diferentes repúblicas en forma totalmente distinta. Mientras el nivel de vida en Eslovenia, industrializada y orientada hacia las exportaciones, se mantuvo comparable con el nivel de Europa occidental, a pocos cientos de kilómetros hacia el Sur, la agraria Kosovo representaba sencillamente la más pobre región de Europa. A causa de esa fragmentación las élites de la República provistas de poder mediático y recursos institucionales pudieron llevar la crisis socioeconómica a una lucha por la distribución de bienes entre las repúblicas bajo argumentos nacionalistas. Este proceso finalmente fragmentó la estabilidad de la federación.

La responsabilidad junto con la fragmentación socioeconómica radicaba principalmente en la movilización de temores dirigida por las élites, temores que fueron creados a través de propaganda televisiva, manifestaciones masivas y escenificaciones públicas. El ascenso político de Slobodan Milosevic a partir de 1986 estaba relacionado con la confirmación de una presunta discriminación de los serbios en la Yugoslavia titoísta. Por otra parte, nacionalistas croatas alimentaban los temores a los «esfuerzos por la hegemonía serbia» y el desbordamiento de zonas habitadas en su mayoría por serbios de la República croata. Los nacionalistas sugirieron a la población serbia en estas zonas que se encontraban frente a la amenaza de un resurgimiento de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacionalistas croatas fascistas perpetraron terribles masacres contra ellos bajo la ocupación alemana. Los musulmanes bosnios temían en cambio una distribución de Bosnia-Herzegovina entre Gran-Croacia

y Gran-Serbia, etcétera. Estos temores creados por las élites se manifestaron durante el transcurso de la guerra como una *self fullfilling prophecy* (profecía que se cumple por sí misma).

El nacionalismo étnico obtuvo un impulso adicional por medio de sucesos internacionales. Mediante la caída del Muro de Berlín en otoño de 1989 y las secesiones de las repúblicas soviéticas bálticas 1990/1991, el sistema de relaciones internacionales fundamentalmente se había desestabilizado. El «derecho a la autodeterminación de las naciones» como principio de ordenamiento étnico-político fue crecientemente considerado como legítimo e impuesto de manera fáctica. El «problema» en Yugoslavia consistía realmente en que ninguna república estaba habitada por poblaciones «étnicamente homogéneas». La proclamación de la independencia de las antiguas repúblicas yugoslavas produjo por consiguiente enclaves de minorías que sólo pretendían la anexión a su «madre patria», ya que de lo contrario debían temer la marginalización social en las nuevas repúblicas[26].

GÁNSTERES. HÉROES NACIONALES. *BISINISMENI*

La situación de profunda inseguridad política y social, temores generalizados y agresión generaba, a fines de los años ochenta y principios de los noventa, un marco propicio que le permitía a figuras carismáticas con apoyo institucional como Arkan, ganar cientos de hombres jóvenes para su proyecto paramilitar. Una gran parte de los Tigres de Arkan fue reclutada en la escena de *hooligans* de la Asociación de Fútbol Estrella Roja de Belgrado. Esta asociación se había convertido en un símbolo de la «esencia serbia» con el fortalecimiento del nacionalismo populista propagado por Slobodan Milosevic en numerosas manifestaciones masivas y a través de los medios de comunicación desde mediados de los ochenta. Los hinchas de Estrella Roja figuraban entre los furibundos jóvenes sin perspectivas hacia el futuro que se dejaron embelesar por el nuevo nacionalismo, que inculpaba a «los otros» por la miseria económica y política. El folklore de fanatismo (canciones, eslóganes, pancartas, etcétera) referido hasta entonces a la asociación fue etnizado de manera creciente. Particularmente en juegos contra las asociaciones croatas, con el aumento

de las tensiones políticas se llegó a batallas de *hooligans* cada vez más violentas, que parecían una antelación a la guerra[27].

Como dirigente de los *hooligans* nacionalistas de Estrella Roja apareció en 1990 Zeljko Raznatovic. El hombre de apenas 40 años en aquel entonces logró formar unas fuerzas de choque con objetivos concretos. Posteriormente, Arkan recordaba en una entrevista:

> Sí, naturalmente como hinchas los entrenamos primero sin armas (…) Desde nuestros comienzos he insistido en la disciplina. Ellos saben lo que significa ser un hincha: gritan, les gusta beber, no tienen límites, y a eso le he puesto punto final. Los obligué a dejarse cortar el cabello, rasurarse en forma ordenada, a no beber, y así todo ha tomado su curso[28].

En este sentido, el escenario evoca el intento de los extremistas de derecha alemanes a principio de los años noventa por obtener influencia sobre los *hooligans*, para que éstos provocaran pogromos contra «extranjeros» como los que se llevaron a cabo en aquel entonces en Hoyeswerda, Rostock y muchas otras ciudades alemanas.

Con las operaciones en el frente, Arkan se convirtió en una figura crecientemente popular en Serbia, donde no era muy conocido por las crueles masacres en Bosnia. En 1992 el «héroe de la guerra» se postuló como candidato independiente en Pristina, la capital de Kosovo de donde provenía su madre, y fue elegido en el Parlamento. En 1993 fundó su Partido de la Unidad Serbia (SSJ) que se ha mantenido hasta hoy. Su presidente, Borislav Pelevic, es simultáneamente jefe de la Asociación Serbia de Kickboxing. En febrero de 1995, Arkan se convirtió finalmente en el favorito de la prensa sensacionalista cuando se casó en un cursi espectáculo de boda con la cantante popular Svetlana *Ceca* Velickovic. Con la toma del Club de Fútbol de Belgrado FC Obilic, ascendió asimismo en el negocio deportivo en 1996. Su carrera tuvo un final realmente abrupto el 15 de enero de 2000 cuando un sujeto, hasta hoy desconocido, le disparó tres veces en la cabeza en el *lobby* del Hotel Intercontinental de Belgrado.

Con todo, los miembros de la Guardia Voluntaria Serbia tienen influencia decisiva hasta hoy en la política serbia. Una parte de los Tigres fue integrada a mediados de los años noventa en las fuertemente armadas

tropas policiales Unidad para Operaciones Especiales (JSO) que dependen del Ministerio del Interior, las llamadas boinas rojas, cuyos miembros fueron partícipes bajo la conducción de Frenki en los años noventa no sólo en las operaciones en el frente, sino que también liquidaron a numerosos oponentes políticos en Serbia. Después de la derrota en la guerra de Kosovo en 1999 se le fue quitando paulatinamente las riendas de las manos a Slobodan Milosevic, la JSO se cambió de bando y apoyó al líder de la oposición, Zoran Djindjic, en la toma del Parlamento el 5 de octubre de 2000 por parte de una manifestación. Sin embargo, cuando éste se posicionó en contra de la JSO y quiso apresar a algunos de los antiguos Tigres de Arkan el premier fue asesinado el 12 de marzo de 2003 por alguno de los miembros de sus filas. Una segunda parte de los Tigres relacionada con la JSO controló hasta la primavera de 2003 una creciente parte del contrabando de heroína desde los Balcanes. Ceca, que mantiene un contacto cercano con esta pandilla dirigida por el antiguo líder de la JSO, Milorad Lukovic alias «Legija», sigue siendo la diva del pop más popular de Serbia, incluso después de haber sido detenida tras el asesinato de Djindjic, por el que Legija parecía haber sido responsable[29].

El ejemplo de Arkan ilustra no sólo cómo durante la guerra en Yugoslavia pudieron surgir figuras carismáticas que condensaban en una persona la función de héroes de la guerra, criminales, políticos, jefes de la mafia y hombres de negocios, sino que también dirigían sus actividades contra la población, a la que aparentaban defender. Así, Arkan y su tropa no limitaron sus actividades de saqueo a los actos de guerra en Bosnia, Croacia o Kosovo, sino que también robaron a los ciudadanos en Serbia. Así podía Ceca ir de compras gratis en boutiques caras en Belgrado. En lugar de pagar, simplemente se remitía la factura a Arkan, quien supuestamente la cancelaría, lo que en efecto nunca sucedía[30].

Un ejemplo ilustrativo de los robos a la población «propia» mediante los presuntos «patriotas» es brindado asimismo por la Unión Democrática Croata (HDZ) fundada por el líder nacionalista croata Franjo Tudjman, quien había ejercido el poder político en Croacia desde la declaración de independencia de ese país en 1991 hasta el año 2000. Como se conoció en el otoño de 2002, la dirección de la HDZ había diseñado un plan para traspasar las empresas estatales más importantes en

Croacia en el proceso de privatización a un círculo predeterminado de cientos de familias «patriotas» particulares relacionadas con la HDZ. En este sentido, los fondos de las donaciones recaudadas en la diáspora fueron malempleados particularmente en la compra de armas. De esta forma, unos 50 millones de euros desaparecieron (que a principio de los años noventa habían sido depositados por parte de nacionalistas croatas en una cuenta a nombre de funcionarios de la HDZ) y por lo menos una parte comprobable entró en el proceso de privatización financiado por esta asociación. En lugar de una aclaratoria de los hechos, la HDZ movilizó su clientela cada vez más fuerte con la absurda argumentación de que la «guerra de liberación» no debía «criminalizarse»[31].

ETNOGUERRILLA Y MAFIA BAJO DOMINIO DEL PROTECTORADO INTERNACIONAL

Si la aparición de los Tigres de Arkan representa un ejemplo de la formación paramilitar iniciada desde las instituciones estatales (como es conocido en México, Indonesia o Colombia), el surgimiento del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) constituye un contramodelo. Este grupo paramilitar pudo evolucionar en un campo político extremadamente polarizado en cuestión de pocos meses partiendo de pequeños núcleos armados de organización hasta convertirse en un verdadero ejército de guerrilla, cuyas organizaciones emergentes forman hoy el núcleo institucional de una nueva estatalidad. El éxito del ELK no puede realmente ser concebido sin financiamiento por medio de redes de narcotraficantes, que tienen un interés particular en la lucha por la independencia estatal de la provincia, que pertenece a «Serbia y Montenegro». También la cooperación política y militar por parte de Occidente fue decisiva para su surgimiento. Como ejemplo del ELK se puede analizar cómo el nacionalismo étnico pudo ser utilizado para la formación de un complejo criminal-institucional, que en este caso se encuentra bajo el dominio del protectorado de la «comunidad internacional».

Como destaca la socióloga Beate Andrees, Kosovo constituye un ejemplo de cómo ante la «creciente fragmentación de la violencia estatal» en toda Europa oriental y suroriental adquieren importancia «redes trans-

nacionales, particulares e informales incluyendo sus estructuras de ordenamiento». Con el colapso del socialismo de Estado como marco de regulación estatal y la expansión de prácticas informales en política y economía, la «asociación étnica» ha asumido así importantes «funciones de regulación»[32]. En Kosovo, este proceso tuvo lugar en el fondo de una situación polarizada entre la mayoría de la población albana y la minoría serbia, que desde la creación de la RSFY se ha agravado constantemente por fases.

Mientras la Unión Europea reconoció las declaraciones de independencia de Eslovenia y Croacia por presión de Alemania y Austria en enero de 1991, ignoró el referéndum realizado poco tiempo después en Kosovo, en el que la imponente mayoría de la población albana se pronunció en contra de la acérrima oposición de la minoría serbia por una independencia estatal de la provincia. Como consecuencia, las fuerzas políticas líderes albanas (entonces particularmente por la Liga Democrática o LDK de Ibrahim Rugova) establecieron un «Estado sombra» que constituyó, sobre la base de pertenencia étnica, un sistema propio de educación, justicia y salud junto con un gobierno, administración y Policía. La entidad fue financiada a través de donaciones obtenidas, en forma más o menos voluntaria, de la gran diáspora albana, que se había creado con olas de inmigración desde los años sesenta. Estimaciones de 1999 parten de que junto a los dos millones de albanos en Kosovo, casi 250.000 albano-kosovares viven en Alemania, 150.000 en Suiza, así como 600.000 en Estados Unidos[33].

Mientras la situación política en Kosovo seguía empeorando en el transcurso de los años noventa, a partir de 1992 surgieron de igual forma grupos albanos armados. En febrero de 1998 entra en la ofensiva el paramilitar Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), formado principalmente a partir de la diáspora en competencia con la LDK, mientras Milosevic aprovechaba el candente conflicto en vista de la creciente oposición en Serbia para la movilización en el ámbito de la política interna. El conflicto fue escalando hasta que en la primavera de 1999 la OTAN forzó por medio de bombardeos la salida de la provincia de todas las tropas serbias regulares e irregulares. Se creó una misión de administración provisional de las Naciones Unidas (Unmik) que debía administrar la provincia en

un tiempo indeterminado. Simultáneamente, el ELK y sus organizaciones emergentes tomaron las posiciones de poder locales en muchos lugares.

> Los comandantes del ELK crearon en ámbitos locales fuerzas policiales propias, impusieron alcaldes y erigieron controles en las calles. Sólo demostraban respeto hacia las tropas de KFOR, mientras que la Policía de la Unmik todavía no tenía suficientemente personal en los primeros meses[34].

A pesar de que la comunidad internacional invertía considerables medios financieros para Kosovo desde 1999, por algún tiempo ubicó hasta 50.000 soldados de KFOR y mientras tanto (abril de 2003) pagó 4.500 policías internacionales y 5.000 policías locales, la provincia aún no logra la paz[35].

La responsabilidad de ello no sólo es de los problemas políticos, que son originados por el aún no resuelto problema del estatus así como la expulsión de más de 200.000 serbios y gitanos; sino también del establecimiento de un complejo criminal-institucional por medio de la victoria militar del ELK. Así que, parecido al ejemplo de Serbia con el Clan Zemun proveniente de los Tigres de Arkan y las Boinas Rojas, la economía de guerra también sobrevivió a la guerra en Kosovo a través de la estructura transformada del ELK.

Como lo expresaron la Fundación para las Ciencias y la Política (SWP) que trabaja para el gobierno federal de Alemania y muchas otras instituciones, el ELK fue financiado progresivamente en el transcurso de los años noventa a través de fondos que provenían del tráfico de drogas[36]. Éste había ido adquiriendo mayor significación desde la toma de la «ruta de los Balcanes», un histórico corredor de contrabando que va desde el occidente de Asia hasta Europa, por parte de grupos albanos durante los años noventa. La construcción de una red efectiva de transporte y de defensa fue conveniente para los narcotraficantes albanos debido a las cerradas estructuras familiares, y principalmente la política restrictiva de inmigración de los Estados de la UE. Muchos de los miembros de la diáspora que a menudo habitan en Europa sin papeles vigentes, dependieron de los lucrativos negocios de la droga debido a la falta de posibilidades legales de ocupación[37].

Con la progresiva escalada del conflicto político y la creciente demanda financiera del ELK se llegó a una mezcla entre la mafia de la droga y el UCK junto con sus organizaciones políticas emergentes Alianza por el Futuro de Kosovo (AAK) y el Partido Democrático (PDK), así como el Cuerpo de Protección de Kosovo (KPC), fundado como organización de contención para combatientes del ELK desmovilizados. Como lo establece Andrees, no está claro hasta qué punto éstas estén directamente implicadas en el narcotráfico o si sólo trabajan en conjunto con las redes correspondientes[38].

De cualquier forma, también en Kosovo surgió el fenómeno de los «Señores de la Guerra» (*Warlords*) que se repitió en Serbia, Afganistán o los estados africanos. Líderes más o menos carismáticos, como el dirigente de la AAK Ramush Haradinaj, unifican funciones políticas y militares, así como mafiosas y empresariales. Ante el constante desplome de una economía formal, sus actividades en el lucrativo tráfico transnacional de drogas, armas y mujeres constituyen junto con las actividades de la comunidad internacional (KFOR, Unmik, ONGs) la parte principal de la producción económica en Kosovo. Según apreciaciones de la organización para la ayuda infantil Unicef, son vendidos cada año 120.000 mujeres y niños de Europa oriental y del sur generalmente para la prostitución forzosa en los países de la Unión Europea, una mayor parte de ellos sobre Kosovo[39]. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su informe sobre el narcotráfico internacional que la «ruta de los Balcanes» abastece decisivamente el mercado de la droga en el Occidente europeo[40].

La comunidad internacional ha maniobrado en un dilema con su política en Kosovo. Por una parte, debe ceder ante la permanente insistencia de las fuerzas políticas albanas por la implantación de un Kosovo independiente y soberano si no desea presentarse cada vez más como un gobierno de ocupación. Por otra parte, la independencia llevaría en el momento actual no sólo a graves conflictos con Serbia y a la exclusión de un retorno de los refugiados, sino también a la creación de un Estado en el que las redes de la mafia provistas de cuantiosos recursos económicos disponen de influencia política decisiva. El interés de los mafiosos radica principalmente en una continua inestabilidad política para poder dedicarse a sus negocios en paz. Temen más a la paz que a la guerra, pues de ella se han aprovechado descomunalmente, así como sus colegas en Serbia.

NOTAS

1. Debo agradecer en gran medida a Dragomir *Oluja* Olujic y a Sasa Markovic por la información y las discusiones respecto al presente tema. Muchas de sus referencias están incluidas en este texto.
2. La República Socialista Federativa de Yugoslavia (RSFY), constituida por las seis repúblicas (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia), así como dos regiones autónomas (Voivodina y Kosovo), dejó de existir de manera fáctica con la declaración de independencia de Eslovenia y Croacia el 8 de octubre de 1991 y con su reconocimiento por parte de los países de la Comunidad Europea (CE) el 15 de enero de 1992. La finalmente fundada República Federal de Yugoslavia (RFY, o el resto de Yugoslavia) se formó luego del reconocimiento de la declaración de independencia de Bosnia-Herzegovina el 6-7 de abril de 1992 por parte de la CE y Estados Unidos a partir del 27 de abril de 1992 a Serbia, Montenegro, Voivodina y Kosovo. Macedonia fue catalogada como un Estado independiente por parte de la ONU el 8 de abril de 1993. La RFY fue renombrada en marzo de 2003 como Serbia y Montenegro ya que existen fuertes tendencias hacia la secesión del protectorado de la ONU en Kosovo y en Montenegro.
3. Por lo menos 150.000 personas que debían prestar el servicio militar evadían los llamados a filas y emigraban o se ocultaban. Sólo la mitad de los reservistas serbios acudían a la convocatoria, en Belgrado sólo un 15%. Referencia: John Mueller: «The banality of 'ethnic warfare'», en *International Security*, Summer 2000, Vol. 25.
4. Una comisión de expertos de la ONU contabilizó 83 agrupaciones paramilitares en la zona de la antigua Yugoslavia en 1994, durante el punto más crítico de la guerra de Bosnia. 56 de estas agrupaciones eran serbias, 13 croatas y 14 bosnias-musulmanas. Su fuerza total ascendía desde 20.000 hasta 40.000, 12.000 hasta 20.000 y 4.000 hasta 6.000 milicianos respectivamente. A ello hay que agregar los miles de combatientes albanos del ELK, que fueron movilizados desde 1998 hasta 2001 en Kosovo y Macedonia. En total debieron haber luchado entonces unos 70.000 hombres en grupos paramilitares. Véase: Mary Kaldor, *Neue Kriege und alte Kriege. Organisierte Gewaltim Zeitalter der Globalisierung*, Francoforte sobre el Meno, 2000, pp. 76-77.
5. En oposición a las afirmaciones de los nacionalistas, las naciones son construcciones políticas del presente, en los Balcanes particularmente jóvenes, lo que hace al discurso del «odio milenario» especialmente absurdo. Hasta el Siglo XIX no existió en los multiétnicos Balcanes una «conciencia nacional» que hubiese podido conducir a una constitución de naciones. Hasta entonces, se habían constituido naciones sobre las titubeantes bases del idioma y la religión. Este proceso aún no ha concluido. Ref.: Holm Sundhaussen: *Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall*, Mannheim 1993, p. 9 ss.

6. Las guerras en Yugoslavia no pueden esclarecerse satisfactoriamente por factores exclusivamente internos o externos. Se trata en mayor medida de una combinación de muchos factores. Decisivas fueron las crisis económicas de los años ochenta, que profundizaron las disparidades socioeconómicas y llevaron a una deslegitimación del sistema político, así como los cambios radicales a nivel internacional hacia el fin de la confrontación entre bloques en 1989, que posibilitaron un reordenamiento de las fronteras según principios de ordenamiento étnico-nacionales.
7. El total de víctimas de la guerra en Bosnia-Herzegovina no ha sido establecido con precisión. Según estimaciones de la Oficina Estadística de la Federación de Bosnia-Herzegovina, las pérdidas se sitúan en 242.330 muertes y 36.470 desaparecidos. Posiblemente éstas deberán ser corregidas en lo sucesivo. Ref: Matthias Vetter/ Dunja Melcic: «Synopse zu Opfern, Schäden und Flüchtlingen», en: Dunja Melcic (comp.): *Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte. Verlauf und Konsequenzen*, Wiesbaden 1999, p. 524.
8. Kaldor, 2000, p. 268.
9. Emir Suljagic: «U krupnom planu: Naser Oric. Portret Nasera Orica - bivseg zapovjednika jedinica bosanske vlade u Srebrenici, kojeg se sada tereti za ratne zlocine», en: Institute for War and Peace Reporting, Tribunal Update 308, 7-11 de abril de 2003.
10. John Mueller, art. cit.
11. Kaldor, ob. cit., p. 83.
12. Mappes-Niediek, *Balkan-Mafia, Staaten in der Hand des Verbrechens - Eine Gefahr für Europa*, Berlin, 2003, p. 13.
13. Kaldor, ob. cit., p. 79.
14. Milos Vasic: «The Yugoslav Army and the Post-Yugoslav Armies», en: D.A. Dyker / Vejvoda I. (Comp.): *Yugoslavia and After: A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth*, Longman 1996, p. 134.
15. John Mueller, art. cit.
16. En encuestas de opinión realizadas durante el verano y otoño de 1990, sólo 16% de la población yugoslava estaba a favor de que cada nación yugoslava debía formar un Estado propio. El 7% estaba indeciso, 10% decía que en parte no estaban de acuerdo y otro 61% admitía estar en completo desacuerdo. Ref: Laslo Sekelj, *Yugoslavia: The Process of Disintegration*, New York 1992, p. 277. Aunque en el mismo período de las primeras «elecciones libres» los partidos nacionalistas obtuvieron buenos resultados electorales, este hecho debe ser relativizado. Así, por ejemplo, el HDZ de Tudjman obtuvo a causa de las leyes electorales 67,5% de los mandatos en el Senado para las elecciones del 22 y 23 de abril de 1990 con 41,5% de los votos. Ref: Susan L. Woodward: *Balkan Tragedy. Chaos and Dissolution after the Cold War*, Washington D.C., p. 119.
17. Según información de Dobrivoje Radovanovic, director del «Instituto para la Investigación Criminológica y Sociológica» en Belgrado, por el autor, febrero 2003.

18. Mappes-Niediek, ob. cit., p. 44.
19. Filip Svarm/ Jovan Dulovic: «Od Arkana do Gumara. Dokumenti o Jedinici za Specijalne Operacije II», en: *Vreme*, Nº 639, 3 de abril de 2003.
20. De 70 a 80% del movimiento comercial en los prostíbulos en Kosovo y Bosnia-Herzegovina es obtenido por las visitas de miembros de organizaciones internacionales. Las mujeres obligadas a prostituirse provienen principalmente de Moldavia o Rumania y son controladas por las redes, que en mayor parte están compuestas por antiguos paramilitares. Unicef: «Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe»; junio 2002; www.unicef.de.
21. Yugoslavia era parte de instituciones financieras y movimientos de circulación económica occidentales debido a su cualidad hermafrodita como «economía de mercado socialista», y en los años setenta obtuvo vastos créditos. Cuando se encareció enormemente el precio del dólar debido al segundo «shock petrolero» en 1979, la economía cayó en una crisis de deuda. Como consecuencia, se aplicó un programa de austeridad neoliberal clásico bajo el asesoramiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntaba hacia la apertura de mercados, privatización y cierre de las industrias «no productivas». Samary Catherine: *Yugoslavia dismembered*, New York 1995, p. 62.
22. James Gapinski: *The Economic Structure and Failure of Yugoslavia*, London 1993, p. 8.
23. Catherine Samary, ob. cit., p. 55.
24. Kurt Hübner: *Die Balkanregion im wirtschaftlichen Abseits: Nachrichten von der südosteuropäischen Peripherie*, en Ulrich Albrecht/ Michael Kalman u.a.: *Das Kosovo Dilemma. Schwache Staaten und Neue Kriege als Herausforderung des 21*, Jahrhunderts, Münster 2001, p. 86.
25. Susan L. Woodward, *Socialist Unemployment. The Political Economy of Yugoslavia*, 1945-1990, Princeton 1995, p. 192.
26. Woodward 1995a, p. 129.
27. Ibíd., p. 146.
28. «¿Comienzo de la guerra en Maksimir? La conexión fútbol-nacionalismo y los *hooligans* de Estrella Roja Belgrado». Conversación con Dragan Ambrozic, en: Katja Diefenbach: *Belgrad interviews. Jugoslawien nach nato-angriff und 15 jahren nationalistischem populismus*, Berlin 2000, p. 170.
29. Ivan Colovic, *Fußball, Hooligans und Krieg,* en: Thomas Bremer/Nebojsa Popov (Comp.): *Serbiens Weg in den Krieg. Kollektive Erinnerung, nationale Formierung und ideologische Aufrüstung*, Berlin 1998, p. 270.
30. Hugh Griffiths, «A Mafia Within the State. Serbia's Special Operations Unit (JSO) has been disbanded as senior officers are accused of killing Zoran Djindjic», 28 de marzo de 2003»; www.tol.cz.
31. Relatos de este tipo pueden escucharse en todos lados en Belgrado. Sin embargo, aún hace falta realizar una investigación exacta acerca de las prácticas de los paramilitares.

32. Drago Hedl, «Hrvatska: Tudjmanovi pajtasi "otudjili" novac dijaspore», *Balkan Crisis Report*, Nr. 392, 20 de diciembre de 2002.
33. Beale Andrees, «Staatsauflösung und Kriegsfinanzen: Zur Rolle der Kriminalität im Kosovo Konflikt» en *Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, Vol. 124, año 31 (2001), pp. 411-427.
34. Ibíd., p. 416.
35. Ibíd., p. 422.
36. www.unmikonline.org/justice/police.htm#2
37. Wolf Oschlies, «Drogengeld für Terrorwaffen? Fährten zu den Finanzen der UCK» (SWP-Brennpunkt 2001); www.swp-berlin.org
38. Mappes-Niedieck, ob. cit., p. 71.
39. Beale Andrees, ob. cit., p. 423.
40. Unicef, «Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe», junio 2002; www.unicef.de
41. United States Department of State. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs: International Narcotics Control Strategy Report, marzo 2003; www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2002/pdf/

CAPÍTULO X
KURDISTÁN: EL COMPLEJO *SUSURLUK*. COOPERACIÓN ENTRE ESTADO, PARAMILITARES Y CRIMEN ORGANIZADO EN TURQUÍA

KNUT RAUCHFUSS

Cuando ambos actores del atentado del 12 de mayo de 1998 entraron en las instalaciones de la asociación de vigilancia de los derechos humanos en Turquía IHD (Asociación de Derechos Humanos), podían sentirse tranquilos. Las unidades de la Policía que generalmente controlan el sector diplomático de Ankara estaban retiradas, al igual que cualquiera que tuviera que ver con el control diario de la asociación. Con el pretexto de que habían arrestado a un amigo, lograron entrar en la oficina del entonces presidente, Akin Birdal. Cuando Birdal se percató de sus intenciones, ya le habían disparado. Pudo salvarse a pesar de que al entrar en el hospital sufrió un paro cardíaco.

En la administración de la clínica se recibieron amenazas de bomba de escuadrones de la muerte de la derecha radical, quienes también asumieron la responsabilidad por el atentado como la Brigada Turca de Venganza (TIT). La TIT está detrás de asesinatos a sueldo perpetrados por el Estado contra personas de la oposición desde los años setenta, particularmente en las regiones kurdas[1]. Catorce miembros del IHD han sido víctimas hasta ahora de atentados mediante los llamados «autores desconocidos»[2]. La acción ya había sido aireada en las semanas anteriores. Los medios de comunicación habían difundido el rumor de que Birdal trabajaba para el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

Sin embargo, no era precisamente por las presuntas conexiones con el PKK que Birdal se encontraba en la lista negra de la TIT, sino porque había hecho públicas una y otra vez la existencia de torturas sistemáticas y ampliamente extendidas, pues el IHD escondía el hecho de que 3.500

aldeas kurdas habían sido despobladas y quemadas por la milicia turca; porque había declarado públicamente que 3,5 millones de kurdos y kurdas habían sido desplazados violentamente y porque no iba a cansarse de repetir que el Estado turco es el responsable de los llamados «asesinatos por parte de autores desconocidos» y de la desaparición de personas[3]. «En mi país, los asesinos andan libremente por ahí, mientras que los autores intelectuales están tras las rejas» se lamentaba Birdal unas semanas antes del atentado, en un acto de la Federación Internacional de Derechos Humanos[4].

COMANDOS ASESINOS, SERVICIOS SECRETOS Y MAFIA CONTRA LAS IZQUIERDAS

En cuanto el primer ministro Yilmaz afirmó, inmediatamente después del atentado, que el mismo IHD podría estar detrás del hecho, la Policía detuvo a cuatro hombres poco tiempo después, entre ellos los dos perpetradores del atentado. El diario *Aydinlik*, cercano al servicio secreto MIT, publicó una pista e indicó que los autores habían tenido prolongados contactos con el servicio secreto[5].

En Estambul fue detenido Cengiz Ersever, suboficial en servicio del MIT[6]. Según declaraciones de los autores del atentado, Cengiz Ersever había formado y capacitado personalmente al comando, y trabajaba para el sicario Mahmut Yildirim, que actuaba bajo el alias *Yesil*. Según un informe de investigación del gobierno, Yesil asesinó a numerosas personas de la oposición, entre ellos a muchos y muchas activistas de derechos humanos.

Nombres como Yesil no son desconocidos en Turquía. Ellos son responsables de la cooperación entre el Estado y el crimen organizado que forma el terror desde hace tiempo, principalmente en las regiones kurdas del país. Son interminables las listas de las víctimas que fueron atacadas abiertamente en la calle, disparadas, secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas o desaparecidas. En su libro *Türkische Konterguerilla* (*Contraguerrilla turca*), el periodista Selahattin Çelik recopiló detalladamente las acciones violentas perpetradas por los escuadrones de la muerte en Turquía hasta 1995[7].

La organización de comandos asesinos por mandato del gobierno y la consecuente interdependencia estructural entre el Estado y la mafia tienen una larga historia en Turquía. La formación de la sección turca de aquel sistema de espionaje internacional, que fue primero conocida en 1990 en Italia como Gladio, había comenzado en Turquía en 1953[8].

La asociación secreta fue rebautizada en 1965 como Departamento Especial de Guerra (ÖHD) y a pesar de otro cambio de nombre se sigue conociendo hasta hoy como ÖHD. Sus activistas llevaron a cabo en los años cincuenta y sesenta operaciones conjuntas en Grecia y Chipre, y dirigieron pogromos contra la minoría griega en Estambul[9].

Después de 1971, el ÖHD recurrió a militantes de organizaciones fascistas para operaciones de lucha contra las izquierdas y grupos armenios. El reclutamiento se logró sobre la Unión Idealista. Formaban a las tropas del fascista Partido del Movimiento Nacional (MHP), así como a los «Lobos Grises». A su cuenta se agregaron entre 1975 y 1980 más de cinco mil asesinatos políticos.

Con el golpe militar del 12 de septiembre de 1980, los mercenarios clandestinos fueron aplacados mediante una abierta represión estatal. En la Guerra Fría el fin justificaba cualquier medio, y la «contención del comunismo» era justificación suficiente para destruir a la izquierda turca, más fortalecida que nunca, mediante violencia militar directa, sin perder con ello su prestigio internacional.

CONTRAGUERRILLA EN CONTRA DE LA REBELIÓN KURDA

Incluso después del fin de la Guerra Fría, el socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no perdió su rol particular. El orden laico y kemalista tuvo que mantenerse una y otra vez como garante contra el presuntamente amenazante «avance islamista», como justificación de cualquier crimen político. La destrucción de pueblos kurdos, decenas de miles de muertos, cientos de miles de fugitivos y cualquier cuadro de la barbarie que ha quedado profundamente grabado en la memoria colectiva durante 20 años de represión de la rebelión kurda, era el precio de la estabilidad de la organización occidental. Ya que un éxito de la rebelión

hubiese podido amenazar no sólo los límites orientales de la OTAN sino más concretamente el acceso hacia las bases militares en Incirlik, el petróleo del mar Caspio y las reservas hidrológicas del Éufrates y Tigris. Con ello, después de la presunta disolución de las estructuras de la Gladio se encontró un nuevo campo de acción para los sicarios del Estado en los años noventa. Junto con los llamados «protectores de los pueblos» y el Hizbullah, el Estado turco logró construir un aparato que era responsable de las operaciones particularmente sucias[10].

Para construir estas llamadas «contraguerrillas», el jefe del Estado Mayor, Dogan Güres, presentó una moción detallada ante el Consejo Nacional de Seguridad (MGK) a fines de 1992. Pero el MGK negó la aprobación con los votos del entonces presidente Turgut Özal y el comandante en jefe de la Guardia Civil, Esref Bitlis. Bitlis murió poco después en un accidente poco claro; Özal falleció por un paro cardíaco. La moción pudo ser aprobada a finales de 1993 con el apoyo del próximo presidente Süleyman Demirel y la nueva primera ministra Tansu Ciller[11]. Comenzó la formación de la contraguerrilla.

En la punta de la contraguerrilla estuvo y está —bajo la dirección del jefe suplente del Estado Mayor— el ÖHD. Detrás de éste se encuentra el Servicio Secreto Nacional MIT y el Servicio Secreto de la Guardia Civil (Jitem). Junto a ellos existían tropas especiales de la Policía bajo la dirección del presidente general de la Policía, así como unidades especiales antirrebelión Özel Tim. Ellos también eran coordinados por la ÖHD, así como los paramilitares kurdos, los llamados «protectores de los pueblos», utilizados para la lucha contrainsurgente *in situ*.

A partir de 1991 se empezó a construir en Kurdistán el Hizbullah, una organización de islamistas militantes que igualmente debía combatir al PKK. En todas estas «fuerzas especiales» existen estructuras regulares y escuadrones de la muerte que operan en forma clandestina y que se ocupan del trabajo sucio[12].

Los paramilitares señalados como «bandas» en Turquía se derivan a menudo del fascista MHP. Por una parte son remunerados directamente por sus operaciones, y por otra, obtienen de manera adicional amplios poderes de enriquecimiento en los sectores económicos de especulación de

inmuebles, juegos de azar, contrabando de drogas, contrabando de mujeres, lavado de dinero y contrabando de armas. Se encuentran bajo la protección estatal y obtienen ganancias de la economía de guerra. Con ello, los límites entre las estructuras regulares, los escuadrones de la muerte operantes en forma clandestina y el crimen organizado común son fluidos. Los actores particulares cambian en el interior de estas estructuras[13].

El interés de la mafia en esta cooperación está también relacionado con el derecho de preferencia en la agilizada privatización de empresas estatales, particularmente de casinos y bancos, con el objeto de llevar a cabo negocios ilegales o para el lavado de dinero[14]. La interdependencia entre el lavado de dinero, créditos por complacencia y especulación de inmuebles derrumbó el sistema financiero turco en febrero de 2001 y lo llevó a una crisis profunda, que arrastró lo que quedaba de la economía del país[15].

COLISIÓN CON LA VERDAD: *SUSURLUK*

En el idioma turco moderno, la palabra *Susurluk* es sinónimo de cooperación entre el Estado y el crimen organizado, pues ese es el nombre de la pequeña ciudad en cuyos alrededores un accidente automovilístico desató importantes descubrimientos. Una limusina blindada chocó contra un camión en la noche del 3 de noviembre de 1996. Lo que parecía un accidente normal se convirtió sin embargo en un problema de Estado, pues las víctimas del accidente no eran ningunos desconocidos[16]. El único sobreviviente fue Sedat Bucak, líder de una tribu kurda y parlamentario del partido gubernamental DYP, que disponía de un ejército privado de 20.000 protectores de pueblos. El conductor de la limusina era el oficial de policía Hüseyin Kocadag, antiguo comandante de las fuerzas especiales en Hakkari, así como vicejefe de la policía de Diyarbakir y Estambul. En el coche murió también con él un homicida buscado por la Interpol por múltiples asesinatos, contrabando de heroína y armas: Abdullah Catli y su amante, Gonca Us. Catli llevaba consigo un pasaporte diplomático con el nombre de Mehmet Özbay, y una credencial policial emitida por el ministro del Interior, Mehmet Agar[17].

En el maletero del coche se descubrieron numerosas armas registradas como policiales, municiones y dispositivos de espionaje[18]. El vehículo venía desde Kusadasi, donde las víctimas del accidente habían ido a escoger inmuebles. Anteriormente habían estado en Izmir y se habían reunido con el ministro del Interior, Agar, y el asesino mafioso Alaatin Cakici para negociar la reapertura de casinos en Kudasasi. La familia de la ministra de Exteriores, Ciller, fue la principal especuladora de los inmuebles discutidos[19].

En uno de los vehículos acompañantes se encontraba Haluk Kirci, que también estaba siendo buscado[20]. El accidente provocó una avalancha de descubrimientos en los medios de comunicación de Turquía. Cuatro meses después del accidente, una comisión investigadora presentó sus conclusiones y en enero de 1998, el inspector ministerial Kutlu Savas culminó su investigación de los hechos. Su «Informe Susurluk» describió de manera detallada la cooperación entre autoridades del Estado, mafia y escuadrones de la muerte.

A partir de 1978, Catli tomó parte en acciones clandestinas. Autores de masacres y atentados mencionaban su nombre una y otra vez. Fue responsable de la masacre de Bahcelievler junto con el funcionario del MHP, Kirci. Escondido tras un atentado con bomba frente a la Universidad de Estambul, organizó la huida de fascistas de una cárcel militar y liberó al posterior autor del atentado contra el Papa, Mehmet Ali Agca, de la prisión en Estambul. Agca había matado junto a Oral Çelik al director del periódico *Millyet* por petición de Catli.

Çelik y Catli han conducido en total 21 acciones en el exterior, entre ellas contra la organización armenia de resistencia Asala. Ambos estaban también implicados en el atentado contra el Papa. Çelik fue juzgado por ello en Roma y Catli admitió que le había proporcionado a Agca el arma del crimen. Por otra parte, Catli llevó a cabo un intento de golpe en 1994 contra el presidente azerbaijano Alíev y condujo operaciones secretas en Chipre. Se frustró un atentado contra el presidente de Georgia, Shevardnadze, en agosto de 1995 debido a discrepancias en la construcción de casinos[21]. Mehmet Eymür, director suplente de la sección antiterrorismo del MIT, afirmó ante la Comisión Susurluk que Catli trabajaba para el MIT y para la policía de seguridad nacional desde 1980[22].

Sin embargo, mientras Kirci estuvo en la cárcel desde 1980 hasta 1989, Catli y Çelik fueron puestos en libertad casi inmediatamente. Ambos fueron arrestados sólo temporalmente en Francia por narcotráfico. Algunas veces desaparecían los autos de detención, otras, la sola mención al encargo por parte del Estado regulaba la puesta en libertad. Aunque en 1982 bastó la intervención de las autoridades turcas en Suiza para liberar a Catlin, en 1990 debió ser liberado de la cárcel en el mismo lugar. Los nombres, Hüseyin Kocadag y Mehmet Agar se relacionaron una y otra vez con la impunidad. Después de 1989, Kirci también disfrutó de la intangibilidad bajo la protección de Agar. Después del accidente de Susurluk, Kirci desapareció hasta que en 1999 pudo finalmente ser detenido. Hasta entonces debió estar escondido en la casa de Bucak, entre otros lugares[23].

JUEGOS DE AZAR, NARCOTRÁFICO Y LA PRIMERA MINISTRA

Entre 1993 y 1997 numerosos hilos de la contraguerrilla eran dirigidos por la primera ministra o ministra de Relaciones Exteriores, Tansu Ciller y Mehmet Agar, ésta retirada de su cargo como ministra del Interior tras el accidente de Susurluk. Posteriormente se dieron a conocer las relaciones del primer ministro Yilmaz con la mafia y obligaron a su destitución en 1998[24]. Esto quiere decir que Ciller y Agar habían conducido bandas propias de manera directa y las habían financiado por medio de un fondo estatal clandestino. Luego del descubrimiento del fondo existía la amenaza del agotamiento de la financiación. Para poder obtener medios adicionales del sector de los casinos, se debió amenazar a la mafia tradicional con apartarla del negocio[25].

Junto con los juegos de azar, el narcotráfico también constituyó una lucrativa fuente de ingresos. Según estimaciones del gobierno alemán, 90% de la heroína confiscada en Europa a mediados de los años noventa había pasado por Turquía.

El Estado turco se apoderó también de este negocio después de 1993. Hüseyin Baybasin, capturado en los Países Bajos en 1996 por tráfico de estupefacientes, afirmó que Agar y su hermano habían transportado drogas hacia Europa con su buque cisterna. «Hicimos este negocio junto con

Mehmet Agar. Agar se ocupó de que pudiéramos transportar la mercancía en embarcaciones del Estado y dentro de la valija diplomática»[26]. La contienda electoral de Agar en 1995 fue financiada por el capo de la droga Mehmet Ali Yaprak[27].

El presidente de la décimo séptima sala en lo Penal de la Audiencia Provincial de Frankfurt constató el 21 de enero de 1997, relaciones estrechas entre narcotraficantes de heroína y el gobierno turco[28].

En un proceso judicial, según las declaraciones de los testigos se había evidenciado que:

> El narcotráfico desde Turquía hacia Alemania y hacia otros países europeos es organizado por las familias Senoglu y Baybasin, y estas familias están protegidas por el gobierno turco.
>
> (…)
>
> Se presume que estas dos familias traficantes tienen relaciones de extremada cercanía con un ministro turco de género femenino[29].

Hasta hoy, Tansu Ciller y su esposo no han podido justificar cómo aumentaron sus bienes privados de 13 a 70 millones de marcos alemanes durante el tiempo en que la señora Ciller desempeñó su cargo[30].

La autoridad sobre el narcotráfico, el control sobre los juegos de azar y la eliminación de la competencia poco amigable constituyen, apoyados por la violencia tanto cimentada sobre la ley como la ilegal, la red de poder de la política turca, que sirvió para conquistarlo y defenderlo en los años noventa. Con ello, el terror de Estado no sólo fue conducido hacia la oposición. La lucha por la hegemonía también fue disputada en el interior de diversos pilares del aparato del poder[31].

Con el atentado perpetrado contra Behcet Cantürk, comenzó el 15 de enero de 1994 una serie de ajusticiamientos, en los que unos cien comerciantes kurdos fueron asesinados en las metrópolis del occidente de Turquía. El inspector ministerial Savas dedujo: «Posiblemente el comienzo del incidente de Susurluk también se esconde en una declaración de la antigua primera ministra Ciller: "Disponemos de una lista de comerciantes que cooperan con el PKK". Y entonces comenzaron los ajusticiamientos»[32].

Entre los primeros que figuraban en las listas de Ciller se encontraban el diario prokurdo *Özgür Ülke* y su financiador, el comerciante y narcotraficante Cantürk. Inmediatamente después de las declaraciones de Ciller explotaron las salas de redacción del diario. Cantürk debió darse por «advertido». «Aunque no se dejó intimidar», relata Savas. «Entonces la organización de seguridad turca decidió liquidarlo y esta decisión fue ejecutada»[33]. Los autores del atentado, policías que se encontraban bajo las órdenes de Catli y que luego del crimen fueron capturados, debieron ser puestos en libertad por la policía de Estambul por instrucciones superiores[34].

Junto a Cantürk y otros jefes de la mafia, el «rey de los casinos», Ömer Lütfü Topal, también fue asesinado en julio de 1996. Poco tiempo después fueron detenidos cinco sospechosos del delito, entre ellos tres guardaespaldas del diputado Bucak.

Sus confesiones ante la Policía de Estambul fueron grabadas en una cinta magnetofónica:

> Primero nos hicieron el encargo, entonces, ¿por qué quieren ahora exigir justicia para los hombres que ustedes mandaron a matar? Llamen al presidente, al primer ministro, al ministro del Interior y al presidente de la Policía y les diré quién hizo el encargo[35].

Uno de los autores declaraba posteriormente:

> Se me ha culpado de haber cometido 91 asesinatos en el oriente y el suroriente del país. «Lo sabemos todo y no tenemos nada que decir contra eso», declaró en el interrogatorio. Pero, ¿por qué secuestró a Ömer Lütfü Topal? ¿Acaso por cuenta propia? ¿No sabe usted que sirve a un poder político, es decir, al poder de Tansu Ciller y Mehmet Agar?[36].

El ministro del Interior, Agar, consiguió vía telefónica el traslado de los reclusos hacia Ankara mediante Ibrahim Sahin, el jefe de la sección para operaciones especiales, quien los liberó allí[37].

El rastro hacia Alemania

Catli fue buscado por Interpol a causa de su fuga en Suiza y por la condena por parte de una corte parisina. A pesar de ello, siguió viajando

cómodamente por Europa[38]. Según informaciones del programa Kontraste, viajaba regularmente a Alemania sin ser capturado. El BND (servicio de inteligencia alemán) objetó cada declaración al ARD (grupo de trabajo de establecimientos públicos de radiodifusión de Alemania), que hacía referencia a «los intereses políticos del Estado»[39]. Según declaraciones del vicepresidente del departamento del servicio secreto policial en la dirección general para la seguridad, Hanefi Avci, Catli debió haber mantenido relaciones estrechas con el BND[40]. El mismo Catli había declarado acerca de sus contactos con los servicios secretos alemanes ante un jurado en Roma en 1985[41].

Pero Catli no era el único asesino mafioso que actuaba sin impedimentos en Alemania. A finales de 1996, la ZDF (una televisión alemana) informó acerca de una reunión en Baden Baden, donde debían tratarse temas como el comercio con material nuclear, entre otros. El programa Kennzeichen D presentó una foto que mostraba a tres de los cinco participantes en la reunión: Hüseyin Duman, buscado por tráfico de heroína y de armas; Aydin Dogan, director de los diarios *Hürriyet* y *Milliyet*; y Özer Ciller, esposo de Tansu Ciller[42]. Los rumores decían que un alto funcionario del MHP también debió participar en la reunión, así como el asesino mafioso Alaatin Cakici. El negocio habría sido facilitado por el ex agente de la KGB Metin Selvi. En un fax enviado por la Interpol de Vilnius a la BKA (oficina federal de investigación criminal en Alemania), se habría advertido acerca de Selvi y el contrabando. A pesar de que la BKA reconoció haber recibido la carta, el gobierno alemán se negó a declarar sobre su contenido aludiendo que se trataba de disposiciones de contenido confidencial. Un informe de averiguaciones fue clausurado por el fiscal general de Baden Baden[43].

Uno de los actores de Baden Baden, el internacionalmente buscado Alaatin Cakici, es inculpado por más de 40 asesinatos. Entre sus víctimas se encuentran, además de su esposa Ugur Kilic[44], Agop Agobian, el dirigente de la Asala[45]. Al igual que Catli, Cakici también debía esconderse tras el fallido golpe en Azerbaiyán. Le fue adjudicado un estatus oficial en el MIT y seguramente también en el Jitem[46]. Según las listas del MIT, Cakici pertenecía al equipo de Mehmet Agar. Sin embargo, esto es poco probable, pues él continuaba asesinando y amenazando a personas cerca-

nas al servicio secreto de la Policía o pertenecientes a las bandas del entorno de Ciller y Agar. En una entrevista telefónica con el programa Flash TV, Cakici hizo graves acusaciones de corrupción contra Ciller y su esposo, que llevaron a la intervención policial del canal de televisión[47].

El 17 de agosto de 1998 fue capturado en Francia. Sus contactos alcanzaban hasta la cúpula del Estado. En su agenda se encontraron direcciones y números telefónicos de agentes secretos turcos, oficiales de la Policía y políticos de alto rango[48].

El pasaporte diplomático que Cakici llevaba consigo le fue confiscado por la Embajada turca en Pekín. En esta representación internacional, Yavuz Atac (antiguo dirigente de división del MIT y un amigo cercano de Cakici[49]) había sido designado como «asesor jurídico». En realidad, Atac seguía operando para el MIT, para quien trabajó como dirigente suplente en operaciones en el extranjero. En esta función tenía bajo su cargo a un grupo de asesinos de la mafia, al que también pertenecían Cakici y Agansoy[50]. Atac ayudó a Cakici en distintas ocasiones, cuando su paradero amenazaba con ser descubierto. Se presume que la ministra del Interior, Meral Aksener, también advirtió a Cakici acerca de una inminente captura en Estados Unidos[51].

Desde la cárcel en Francia, Cakici amenazó: «¡Si yo hablo habrá un terremoto en Turquía!». Y entonces se publicaron las cintas que habían sido confiscadas en su captura. Allí se encontraban sus conversaciones telefónicas con comerciantes y políticos turcos. El periódico *Tempo* difundió como suplemento un cassette con el título *Best of Cakici* con extractos de la grabación. Las cintas habían añadido a un diputado de la oposición. Sin embargo, desde hacía algún tiempo el primer ministro Yilmaz ya las conocía.

Entre las cintas magnéticas se encontraba una donde aparecían registradas las conversaciones entre Cakici y el contratista y emperador de los medios, Korkmaz Yigit. Allí se hablaba sobre la privatización del Banco de Turquía (TTB). Cakici le prometió a Yigit que intimidaría a la competencia[52]. Yigit quería comprar a la TTB por 600 millones de dólares. Ganó la licitación en julio de 1998[53].

Después de su encarcelamiento, Yigit confesó que se había valido de la ayuda de Cakici. Por medio de su canal de televisión, también hizo difundir que el primer ministro Yilmaz había estado informado de todo. Se refirió detalladamente al rol de Yilmaz en el negocio. El ministro de Asuntos Económicos, Günes Taner, también estuvo supuestamente implicado y había otorgado apoyo financiero por un total de 200 millones de dólares para la compra del banco[54]. Cakici declaró acerca de las buenas relaciones con Yilmaz, cuyas raíces políticas tempranas se situaban entre los fascistas Lobos Grises, así como las suyas propias. Había hablado por teléfono con Yilmaz por lo menos diez veces[55]. Eyüp Asik, confidente y ministro sin cartera de Yilmaz, renunció a su cargo luego de que sus conversaciones telefónicas con Cakici fueron publicadas[56]. Estas acusaciones le costaron su cargo al Primer Ministro el 25 de noviembre de 1998.

A pesar de que formalmente estaba amenazado con la pena de muerte en Turquía, los abogados de Cakici solicitaban su extradición. El Ministerio de Justicia no sólo le aseguró que no se le juzgaría por los crímenes que implican la pena de muerte sino que prohibió cualquier interrogatorio al respecto. Cakici sólo debió responder por delitos menores. Una parte del proceso fracasó porque el Ministerio de Justicia no cumplió el plazo de la verificación para que los delitos prescribieran. Desde entonces, Cakici se encuentra en la cárcel de altas personalidades de Kartal. Ya desde su ingreso pregonaba que seguiría actuando desde la cárcel. Durante el cumplimiento de su pena, Cakici seguiría ordenando ajustes de cuentas con sus contrincantes vía telefonía celular[57].

Mahmut Yildirim, alias *Yesil*, el autor por encargo del atentado a Akin Birdal, es también uno de esos asesinos que, al igual que Cakici, actúan por encargo del MIT. Antes del comité de investigación, Hanefi Avci (vicejefe del servicio secreto policial) culpaba al jefe suplente del MIT, Mehmet Eymür, de haber mantenido contacto con Yesil en «cientos de conversaciones y encuentros»[58].

El Informe Susurluk reveló que Yesil trabajaba para el MIT y posteriormente también para el Jitem. Para ello agregó un informe del MIT en su versión original, del cual se desprende que Yesil fue responsable por lo menos de 19 asesinatos, entre ellos el del diputado kurdo Mehmet Sincar, el cofundador del MIT, Vedat Aydin, y el escritor Musa Anter. El MIT tam-

bién tenía conocimiento de una cuenta donde Yesil administraba el dinero proveniente de las extorsiones y el narcotráfico. Dotado de papeles de altos puestos, el 23 de noviembre de 1996 Yesil salió de Turquía con otros agentes del MIT en dirección hacia Beirut. Los pasajes habían sido reservados a nombre de la oficina del Primer Ministro[59]. Yesil sería el contacto con el Hizbullah en Kurdistán[60].

Asimismo, Yesil mantuvo buenas relaciones con Cengiz Ersever, oficial del MIT. Éstas se remontan a los comienzos de la «conducción especial de la guerra». Para ello, el 26 de mayo de 1998 Hanefi Avci presentó un documento confidencial sobre las conversaciones telefónicas protocolares en la base del servicio secreto del MIT. En la lista se marcaron los autores del atentado de Birdal, además del de Yesil[61]. En el proceso, Ersever confesó ser fundador del TIT y estar tras el atentado contra Birdal[62]. La Corte Suprema de Seguridad llegó a la conclusión de que Yesil había ordenado el atentado en una reunión con Ersever en las cercanías de Ankara.

SUSURLUK NO ES HISTORIA

Hoy día hay todavía cosas sin aclarar. La Comisión Susurluk fue muy limitada en su esclarecimiento. Las revelaciones hacían hincapié en las diferencias entre distintas ramas de la contraguerrilla que competían entre sí. Principalmente, las rivalidades entre el MIT y las bandas del presidente de la Policía y posterior ministro del Interior, Agar, grababan las informaciones que eran publicadas. El consecuente conjunto de revelaciones se hizo particularmente visible cuando el diario *Aydinlik*, cercano al MIT, presentó un informe donde (incluso antes del accidente) se establecían de manera detallada los principios de funcionamiento del régimen Susurluk, y se culpaba a las unidades especiales de la Dirección General de la Policía, que competía con el MIT, de proteger a este régimen. El informe mencionaba a narcotraficantes que se encontraban bajo la protección de la Policía. Hanefi Avci, uno de los jefes de las autoridades acusadas, reaccionó inmediatamente con la publicación de los nombres de traficantes que actuaban por encargo del MIT.

El MIT y el servicio secreto policial se inculpaban el uno al otro. Las zanjas entre las instituciones son tan profundas como su competencia en el marco del enriquecimiento mafioso. Más de cien informantes del MIT fueron secuestrados e interrogados por la Policía, quince de ellos fueron asesinados[63].

La publicación del informe del MIT por parte de *Aydinlik* tuvo consecuencias inmediatas para Mehmet Eymür, quien fue trasladado a la Embajada de Washington. Hoy vive allí, en el exilio, y dirige una página en Internet donde publica asuntos internos del aparato del servicio secreto turco[64].

Avci fue despedido después de sus declaraciones ante la Comisión Susurluk y acusado de divulgar informaciones confidenciales. Había publicado números telefónicos confidenciales del MIT. Sin embargo, realizó una contrademanda exitosa contra su despido y fue trasladado a otro cargo dentro de la Policía. Yilmaz y Ciller también se inculparon mutuamente además de los distintos servicios secretos, por la cooperación con grupos de la mafia. Con esto quedó claro que Ciller y Agar aseguraron su poder por medio del servicio secreto policial, mientras que Yilmaz disfrutaba más bien del apoyo del MIT. No obstante, nunca se mencionó en las revelaciones a las cúpulas militares, donde todos los hilos eran controlados de igual forma.

Partes de las investigaciones fueron guardadas bajo llave por razones de Estado y sólo se realizaron arrestos cuando obedecían al beneficio estratégico de alguna parte en el marco de las luchas por el poder intraestatal.

La mayoría no desembocó en acusaciones y mucho menos en condenas. Las reglas de amnistía realizaron su aporte a la impunidad. Nunca se produjo un verdadero esclarecimiento de los crímenes.

Y eso que a principios del verano se publicaron dos mil imágenes televisivas de operaciones policiales contra los escuadrones de la muerte del Hizbullah y de la exhumación de fosas comunes. Aproximadamente mil sospechosos fueron capturados. Con estas operaciones, el gobierno se deshizo únicamente de los ejércitos islamitas no deseados a mediano plazo, aquellos cuyo control se le había escapado de las manos, y de sus escuadrones de la muerte. La desmovilización de 67.000 protectores de

pueblos se ha retrasado hasta hoy, pese a que siguen aterrorizando a la población. Se desconoce lo que les pasará tras el levantamiento del estado de excepción y del ya muy postergado final de las luchas.

Korkut Eken, el instructor de Özel Tim; el dirigente de operaciones especiales, Ibrahim Sahin; y doce policías, fueron acusados de «fundar una organización criminal» y el 15 de enero de 2002 fueron sentenciados a arrestos menores de cuatro a seis años[65]. Tras el pronunciamiento de la sentencia, declararon cinco generales y el jefe del Estado Mayor, Dogan Güres, quienes ponían en duda la sentencia y elogiaban el sentido de obligación y la lealtad de Eken[66]. Estos intentos por defenderlo llevaron a la autoacusación. Los generales no habían declarado nada insignificante, como Eken lo manejó según las instrucciones, con conocimiento y aprobación del Consejo Nacional de Seguridad de Turquía, a quien la ÖHD debe responder directamente. Con ello, los militares también cayeron por primera vez en la mira de las investigaciones de Susurluk; sin embargo, apenas se impuso una condena.

También fracasó cada intento de llevar a juicio a Ciller, Yilmaz, Bucak, Agar y otros políticos hasta el otoño de 2002 debido a su inmunidad parlamentaria. Por ello se le retiró a Agar la inmunidad en diciembre de 1996[67], y sin embargo volvió oportunamente al Parlamento en 1999. En junio de 2000 falló nuevamente un intento por retirarle la inmunidad[68]. Sin embargo, Agar admitió ante la Comisión Susurluk: «Hemos conducido miles de operaciones secretas para el Estado»[69]. Pero no quiso confesar algo más al respecto: «Si yo hiciera una confesión aquí, deberían también traer a un presidente, tres primeros ministros y cinco generales»[70].

En el nuevo Parlamento no están representados el MHP, el DYP ni el ANAP. Ciller renunció a ser presidenta del partido. De igual forma, Yilmaz abandonó la presidencia del ANAP. Agar disfruta hoy únicamente de la protección por mandato de diputado, ya que ante las responsabilidades políticas de Susurluk fue electo como candidato independiente. Tras su entrada en el Parlamento, reingresó en el DYP y se convirtió en el presidente del partido como sucesor de Ciller[71]. En junio de 2000, diversos diarios informaron que el asesino Yesil se movía libremente en Turquía y que había vivido en la casa de un diputado en Ankara. Además, se le habría reconocido en un restaurante que se encuentra bajo la oficina central del MHP[72].

Susurluk no es historia. Los asesinatos a sueldo, las desapariciones de miembros de la oposición, torturas y violaciones por parte de paramilitares aumentaron tanto como el enriquecimiento sistemático de la conexión mafia-Estado en el narcotráfico y los juegos de azar. Así, el IHD expresa en su informe anual de 2002 que las violaciones a los derechos humanos se han acrecentado continuamente desde 1999. En el año 2002, 876 personas fueron torturadas, 75 fueron víctimas de «asesinatos con autores desconocidos», dos fueron trasladadas y desaparecieron[73]. El Estado Susurluk continúa existiendo sin estorbos. No ha caído con sus actores políticos, sino que se ha convertido en una constante de base de la República turca, así como los militares. Mesut Yilmaz, como uno de los primeros ministros cuya carrera estuvo estrechamente relacionada con el crimen organizado, sabía por qué había declarado una parte del informe del inspector ministerial Savas como cierre. Y a menudo agregaba: «Declaramos algunos sucesos como secreto de Estado, pues puede ser que posteriormente el Estado deba utilizar una vez más los mismos métodos»[74].

NOTAS

1. Pascal Beucker, «Attentat mit Ansage», en *Jungle World* 21/2 (1998), p. 21.
2. Osman Baydemir, «Eine Aktion der Konterguerilla», en *Kurdistan Report* 91 (1998) pp. 13 y 15.
3. IHD http://www.ihd.org.tr/eindex.html
4. Kendal Nezan, «Verbrecher mit Diplomatenpass», en *Le Monde Diplomatique* 7 (1998), p. 17.
5. Martin Glasenapp, «Das Attentat auf Akin Birdal. Die Farbe Grün», en *Kurdistan Rundbrief* 12/11 (1998).
6. Posteriormente fueron acusadas ocho personas en total.
7. Selahattin Çelik, *Türkische Konterguerilla*, Colonia, 1999.
8. Leo A. Müller, *Gladio - Das Erbe des Kalten Krieges*, Hamburgo (1991), p. 56.
9. Selahattin Çelik, *Türkische Konterguerilla,* p. 44.
10. Selahattin Çelik (Hg.): *Verbrecher Staat*, Colonia, 1998.

11. Desde el 25 de junio de 1993 hasta el 12 de marzo de 1996 Ciller era la Primera ministra. Después de un gobierno interino de Mesut Yilmaz, Necmetin Erbakan toma posesión del cargo (8 de julio de 1996 - 18 de junio de 1997). Durante Erbakan, Ciller se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores. Luego de un golpe no sangriento, Erbakan fue sustituido nuevamente por Yilmaz. Ciller se cambió a la oposición. Hasta las elecciones del 3 de noviembre de 2002, Ciller dirigió el Partido del Camino Verdadero (DYP).
12. Selahattin Çelik, «Verbrecher Staat», en *Çelik* (Hg.), *Verbrecher Staat*, pp. 15-35.
13. Riza Dogan, «Von der Mafiarepublik zum weltweiten Drogenimperium», en Ibíd., pp. 117-138.
14. Yeter Savas, «Die Susurlukaffäre. Eine Einführung», en IMK (Hg.): *Bandenrepublik Türkei*, p. IX.
15. Knut Rauchfuss, «Krieg mit dem Präsidentenpalast» en *Sozialistische Zeitung,* 16 de junio de 2001, p. 12.
16. Ömer Erzeren: «Ein Staat, besetzt von Mördern und Dieben», en *Die Tageszeitung,* 8 de noviembre de 1996, p. 8.
17. Agar trabajó en el aparato policial. En 1988 fue nombrado jefe de la Policía en Ankara, y en 1990 en Estambul. En este tiempo comenzó a formar escuadrones de la muerte y se dedicó al narcotráfico, la extorsión y el proxenetismo. En 1988 un informe del MIT reveló las tretas de Agar, pero esto sólo llevó a la destitución del jefe de sección del MIT, Mehmet Eymür. En 1992, Agar fue destinado a la ciudad de Erzurum, donde se dedicó a la formación de bandas armadas del MHP. En 1993, Ciller lo nombró presidente general de la Policía de Turquía. Desde 1995, Agar es representante en el Parlamento. Como ministro de Justicia de Ciller, trabajó fuertemente por el aislamiento de presos politicos y las ejecuciones extralegales y limitó los derechos de defensa. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Erbakan.
18. Kutlu Savas: «Der Susurlukbericht der Inspektionsbehörde beim Ministerpräsidialamt in Internationaler Verein für Menschenrechte der Kurden», ob. cit., (Hg.) en *Bandenrepublik Türkei? Der Susurluk-Bericht des Ministerialinspektors Kutlu Savas*, Bonn (1998) pp. 11-44; Bernd Georg Thamm, «Die internationalen Netzwerke der organisierten Kriminalität», dp-special nº 7 zur Ausgabe Deutsche Polizei 8/99, p. 13; Selahattin Çelik, «Das Geheimnis der Waffen im Susurluk-Unfall-Fahrzeug», en *Çelik* (Hg.), *Verbrecher Staat* Anhang, p. 249.
19. Yeter Savas, «Susurlukaffäre», p. IV, *Turkish Daily News,* 8 de noviembre de 1996; *Hürriyet* 18 de diciembre de 1996; Ömer Erzeren, «Die schmutzigen Geschäfte der Tansu Ciller», en *Die Tageszeitung*, 18 de diciembre de 1996, p. 21.
20. *Turkish Daily News*, 18 de diciembre de 1996.
21. Selahattin Çelik, «Verbrecher Staat», pp. 39 y 155; Kutlu Savas, *Susurlukbericht,* pp. 35 y 46; Ömer Erzeren, «Ein terroristischer Staat», en *Die Tageszeitung*, 29 de enero de 1998, p. 5.

22. *Washington Post,* 1 de enero de 1997.
23. Kendal Nezan, «Verbrecher mit Diplomatenpass», *Turkish Daily News,* 25 de noviembre; 17 de diciembre de 1996 y 21 de enero de 1999; Yeter Savas, *Kutlu Susurlukbericht,* p. 46.
24. Pascal Beucker: «Der Premier als Pate», en *Jungle World,* 47/2 (1998), p. 5.
25. Selahattin Çelik, «Die Verantwortlichen», en *Çelik* (Hg.), *Verbrecher Staat*, p. 147; Savas, *Kutlu Susurlukbericht,* p. 10.
26. Hüseyin Baybasin, «Interview», en *Çelik* (Hg.), *Verbrecher Staat*, Anhang, p. 234; Institut Kurde: «Deux chaînes de télévision condamnées pour avoir diffusé des révélations sur le trafic de drogue», en *Bulletin,* pp. 142-143 (1997).
27. Y. Savas, *Kutlu Susurlukbericht,* p. 33.
28. Ömer Erzeren, «Das Schweigen der Tansu Cille», en *Die Tageszeitung,* 27 de enero de 1997, p. 10.
29. Institut Kurde, «Un juge allemand met Mme. Ciller en cause dans le trafic de drogue vers l'Europe», en *Bulletin,* pp. 142-143 (1997).
30. Bernd Georg Thamm, «Die internationalen Netzwerke», Apuntes de conferencia, nota al pie 47.
31. Ömer Erzeren, «Bonapartismus am Bosphorus», en *Die tageszeitung,* 5 de diciembre de 1996, p. 10.
32. Y. Savas, *Kutlu Susurlukbericht,* p. 6.
33. Ibíd., p. 38.
34. Pascal Beucker, «Ermittlungen gegen den Staat», en *Jungle World* 7/2 (1998), p. 21; Sedat Yurtdas, «Susurluk, Die harte Realität der Kurden» en *Çelik* (Hg.), *Verbrecher Staat,* p. 226; S. Çelik, *Konterguerilla*, p. 169.
35. Cumhuriyet 10 de diciembre de 1996 y Milliyet, 22 de diciembre de 1996.
36. K. Nezan, art. cit.
37. Infogruppe Hannover: *Update über Susurluk*, 22 de diciembre de 1996.
38. *Turkish Daily News,* 22 de agosto de 1997.
39. René Althammer / Sabine Küper: «Susurluk in Deutschland», *Fernsehmagazin Kontraste* (1997).
40. *Hürriyet-Europaausgabe,* 27 de marzo de 1997.
41. Martin A. Lee, «Der lange Atem der Grauen Wölfe», en *Le Monde Diplomatique,* 14 de marzo de 1997, p. 6.
42. *Kennzeichen* D, 27 de noviembre de 1996.
43. Bundesdrucksache, 13 de julio de 1983.
44. Hija del jefe de la mafia Dündar Kiliç. Reprochándole que había coqueteado con el comandante suplente de la Policía de Estambul, Cakici mandó a matarla el 20 de enero de 1995 durante unas vacaciones.

45. Gerd Höhler, «Wenn Cakici auspackt, wird es in der Türkei "ein Erdbeben" geben», en *Frankfurter Rundschau,* 29 de agosto de 1998; IMK (Hg.): *Bandenrepublik Türkei*, p. 77; *Çelik*, *Verbrecher Staat*, p. 111.
46. Hanefi Avci, «Erklärungen vor der Susurluk-Kommission», en *Çelik* (Hg.), *Verbrecher Staat*. Anhang, p. 261.
47. Peter Vogel, «Neuer Anschlag auf Presse - und Meinungsfreiheit in der Türkei», en *Heyva Sor A Kurdistanê April* (1997).
48. Gerd Höhler, art. cit.
49. *New York Times,* 15 de octubre de 1998.
50. Sabine, Küper-Basgöl, «Mörderische Diplomatie» en *Jungle World* 36/2 (1998), p. 20.
51. IMK e.V.: «Wocheninformationsdienst» 18 (1999).
52. Associated Press, 15 de octubre de 1998.
53. *Frankfurter Rundschau*, 17 octubre de 1998.
54. *Berliner Zeitung*, 12 de noviembre de 1998.
55. *Kölner Stadtanzeiger*, 29 de diciembre de 1999.
56. *Die Tageszeitung,* 26 de septiembre de 1998, p. 4.
57. *Neue Züricher Zeitung*, 22 de septiembre de 2000; Jan Keetmann, «Handys im Hochsicherheitstrakt», en *WoZ-Online Dossier*, 20 de julio de 2000.
58. Kurtulus 99 (1998).
59. Y. Savas, *Kutlu Susurlukbericht,* pp. 20, 21 y 24.
60. *Kurdish Observer,* 5 de febrero de 2000.
61. Martin Glasenapp: *Das Attentat auf Akin Birdal*.
62. *Turkish Daily News,* 4 de agosto de 1998.
63. Pascal Beucker, ob. cit., p. 21
64. http://www.atin.org
65. *Cumhuriyet*, 25 de octubre de 2001.
66. *Aksam*, 14 y 15 de marzo de 2002.
67. *Turkish Daily News,* 3 de noviembre de 1999.
68. «Human Rights Foundation of Turkey», *Daily Report*, 06/117, 16 de junio de 2000.
69. *Cumhuriyet*, 18 de noviembre de 1996.
70. Yeni Safak, 15 de marzo de 2002.
71. Dr. Wulf Eberhard Schönbohm, «Parteikongress der ANAP mit Neuwahl des Vorstandes», en *Auslandsbüro der Konrad Adenauer Stiftung* [Hg.] *Länderberichte*, 24 de enero de 2003.
72. *Kurdish Observer,* 10 de junio de 2000.
73. «Presseerklärung des IHD», Ankara, 21 de febrero de 2003.
74. Yurtdas, *Susurluk*, p. 230.

Capítulo XI
AFGANISTÁN: «EL SISTEMA DE SEÑORES DE LA GUERRA ESTÁ ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE»*

Boris Kanzleiter

La «guerra contra el terrorismo» comenzó con una acción militar liderada por Estados Unidos contra el gobierno talibán y Al Qaeda en Afganistán, quienes fueron responsabilizados por los ataques del 11 de septiembre de 2001. Mientras Osama Ben Laden no fue encontrado en Afganistán, la producción de droga aumentó desde que asumió el poder el presidente colocado por la «comunidad internacional», Abdul Hamid Karzai. Los «Señores de la Guerra» retomaron el control sobre gran parte del país. Una oposición democrática y secular es sofocada en su origen. El doctor Matin Baraki, especialista en Afganistán, analiza la situación y establece que mediante la intervención internacional no se resolvió ninguno de los problemas básicos de Afganistán. El doctor Baraki es profesor de Política Internacional en las universidades de Marburgo y Kassel.

En la guerra contra los talibanes y Al Qaeda en el otoño de 2001, Estados Unidos repitió una estrategia conocida desde la guerra de Kosovo en 1999. Estados Unidos se aprovecha de su superioridad militar aérea absoluta y bombardea desde alturas seguras. En tierra, los aliados locales (en Kosovo el ELK, Ejército de Liberación de Kosovo; en Afganistán diversos Señores de la Guerra) asumen la guerra terrestre sucia. La situación política y militar en Afganistán aparenta ser hoy frágil.

—¿Estados Unidos sigue manteniendo bajo su control a sus aliados de otoño de 2001?

—Los aliados de Estados Unidos de otoño de 2001 no constituyen de ninguna manera una asociación homogénea. Visto diferencialmente, se pueden distinguir por lo menos cinco agrupaciones:

---

* Entrevista con el doctor Matin Baraki acerca de los señores de la guerra y la «guerra contra el terrorismo» en Afganistán.

1. Las fuerzas totalmente devotas a Estados Unidos alrededor del presidente Abdul Hamid Karzai. Estos elementos no tienen un programa propio y actúan como receptores de órdenes y marionetas incondicionales de Estados Unidos.
2. Los partidarios de la monarquía, que fueron ayudados y lisonjeados por la República Federal de Alemania durante años, específicamente por la Fundación Friedrich-Ebert, cercana al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Aunque en la conferencia del Petersberg fueron favorecidos por los europeos, particularmente por el gobierno alemán, fueron dejados a un lado por Estados Unidos. Hasta entonces habían sido tomados en cuenta; no obstante, desde la Loya Jirga o Gran Asamblea del Pueblo Afgano en junio de 2002 fueron definitivamente degradados a una pequeña aglomeración insignificante. El motivo de ello es que no querían seguirle la corriente a Estados Unidos sin poner reparos. Adicionalmente, no se le perdonó al ex rey Zahir Shah que su gobierno rechazara la entrada de Afganistán al pacto militar surasiático dominado por Estados Unidos, Central Treaty Organization (Organización de Tratado del Centro), a principios de los años cincuenta.
3. El general Abdul Rachid Dostum es el único Señor de la Guerra con orientación secular, independientemente de si uno lo quiere o no. Fue nombrado en la Conferencia del Petersberg como viceministro de la Defensa; sin embargo, después de la Loya Jirga fue nuevamente destituido y nombrado gobernador de cinco provincias afganas del norte, que son parte del territorio bajo su dominio. No se le perdona que anteriormente haya sido líder de la milicia del gobierno afgano de izquierda, que haya luchado contra los muyahidines (guerreros) y viejos aliados de Estados Unidos, que hoy en día conforman gran parte del gobierno. Debido a que Estados Unidos inició una alianza táctica con él, y es muy poderoso, lo toleran. Sin embargo, su exclusión debería estar ubicada dentro de los intereses de Estados Unidos; intentos de atentados contra su persona representan un testimonio elocuente de ello.
4. Los partidarios de la Jamiat-i Islami, que se reunieron en torno al antiguo presidente Rabbani, literalmente expulsado de la conferencia del Petersberg en diciembre de 2001, y su líder de milicia Ahmed Sha Masud asesinado en septiembre de 2001. Con ellos se asociaron tam-

bién el antiguo capitán del ejército afgano, Mohammad Ismai, conocido como Ismaíl Jan, y gobernador autodesignado de la provincia Herat, así como el influyente utraislamista Rasul Sayaf. Esta agrupación obtuvo en la 1ª Conferencia del Petersberg con Abdulá Abdulá el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, con Mohammad Qasim Fahim el de ministro de la Defensa y Junus Qanuni el de ministro del Interior. Sin embargo, este último fue sustituido por el importado de Estados Unidos, Abdulá Wardak en la Loya Jirga, quien anteriormente había sido gobernador de Paktia y había sido desplazado por el Señor de la Guerra local. Debido a que Estados Unidos es el poder militar indiscutible en Afganistán, los militantes de la Jamiat-i deben —quieran o no— cooperar con los ocupantes.

5. Pacha Jan Zadran, el Señor de la Guerra de Paktia que luchó contra los talibanes del lado de Estados Unidos y fue apoyado financiera y militarmente por ellos, obtuvo en la 1ª Conferencia del Petersberg el cargo de gobernador en su área de influencia en Chost. Debido a que es partidario de la monarquía y ya en el Petersberg caracterizó a Karzai como marioneta de Estados Unidos, fue inmediatamente separado de su cargo y sustituido por el importado desde Australia, Abdul Hakim Taniwal, un oportunista manejable. Para hacer respetar su pretensión, Zadran le declaró la guerra al nuevo gobernador y al gobierno de Kabul. Estados Unidos participó en la lucha contra su propio aliado anterior y desplazaron a Pacha Jan Zadran hacia Pakistán. Es posible que se incluya a la nueva coalición de Al Qaeda, el resto de los talibanes y el Hezb-i Islami de Gulbudin Hekmatyar, un antiguo aliado de Estados Unidos.

Otros protagonistas en la lucha por el poder y la influencia se arreglaron con Estados Unidos, como Haji Abdul Qadir, Señor de la Guerra asesinado en verano de 2002, capo de la heroína de la provincia oriental de Nangahar y sustituto de Karzai; y su sucesor Gul Agha Sherzai, Señor de la Guerra de Kandahar (donde se encontraba el cuartel principal de los talibanes). No obstante, dicho arreglo no debe ser a largo plazo, pues como ya deben haber constatado con perplejidad los estadounidenses, simplemente ya se han cambiado de bando algunos de los «socios de confianza» que antes cobraban de Estados Unidos.

—¿Cuál es la base económica de los Señores de la Guerra en este país completamente destruido por una guerra que data de tantos años? Según diferentes reportes, en los últimos meses la producción de heroína en Afganistán ha aumentado de manera drástica. ¿Qué papel desempeña el narcotráfico, cuáles son las funciones de otras fuentes de ingreso como las ayudas internacionales?

—Es cierto que la producción en Afganistán ha aumentado a niveles récord desde que la administración Karzai asumió el poder, lo que es una verdadera amenaza para la prevista reconstrucción. Durante el año 2001, fueron producidas cerca de 250 toneladas de opio; según cálculos de la ONU, para el año 2002 eran unas 3.500 toneladas. A pesar de que el cultivo de amapola tiene una larga tradición en Afganistán, hasta los años ochenta se produjo sólo para el consumo interno. Bajo la dirección de la CIA, Afganistán se convirtió desde el principio de los años ochenta en el centro del cultivo de amapola y especialmente de la producción.

En la frontera afgano-paquistaní proliferaron los laboratorios, donde se procesaban las materias primas derivadas de la producción afgana. Aunado a los petrodólares, la guerra civil fue financiada entre otras cosas por el ingreso proveniente de la venta de heroína. Hasta 85% de la demanda europea de esta sustancia provenía de Afganistán. Era propio de su naturaleza el hecho de que surgió una narcomafia que estaba estrechamente conectada con los líderes muyahidines que vivían en Pakistán y sus comandantes que operaban en Afganistán, así como con los jefes de tribus, grandes agricultores, empresarios de transporte y miembros del servicio secreto paquistaní, Inter Service Intelligence (ISI).

Debido a que los ingresos resultantes también eran rentables para los agricultores, éstos desistieron de cultivar otros productos agrícolas. Con ello, fue sustraída la base al cultivo tradicional de productos alimenticios en la agricultura afgana. Actualmente no existe *de facto* una agricultura en sentido propio. Ya para 1993 señalaba en uno de mis artículos que Afganistán se ha convertido en el centro del narcotráfico y del terrorismo, una afirmación que para entonces no se correspondía sin embargo con lo «políticamente correcto».

Cuando en 1992 se les encomendó el poder a los muyahidines —hago énfasis en que se les encomendó y no lo alcanzaron mediante la victoria,

como afirman de manera falsa la mayoría de los medios de comunicación—, éstos o bien destruyeron, o desmontaron las estructuras económicas y otras infraestructuras protegidas previamente por tres anillos de seguridad del Ejército soviético y afgano, y las vendieron en el mercado paquistaní. Ahora que pueden gobernar con la gracia de Estados Unidos, se encuentran frente a las ruinas, consecuencia de su propia política destructiva. En Afganistán ya no existe una economía en el propio sentido de la palabra. Para la ONU y otras organizaciones internacionales, Afganistán no existe como un sujeto económico estatal, y desde el año 2000 no se considera estadísticamente. Respecto a eso sólo hago referencia al informe sobre el desarrollo humano. Sin embargo, para referirme a su pregunta, los Señores de la Guerra sólo tienen tres fuentes de ingreso.

Primero: tráfico de armas y de drogas. Sólo mediante los negocios de la droga se obtuvieron en Afganistán alrededor de 1,2 millardos de dólares en el año 2002. Si con ello se comparan los 1,3 millardos de dólares de ayuda internacional prometidos a Afganistán para el año 2002, se hace clara cuál es la dimensión de estos negocios. Desde que los muyahidines y los capos de la droga conforman la administración en Kabul, con ayuda occidental principalmente estadounidense, y los Señores de la Guerra ejercen un dominio indiscutible en las provincias, los laboratorios de procesamiento donde se produce heroína del opio han sido trasladados en su mayoría de Pakistán hacia Afganistán. Debe resaltarse el hecho de que el cultivo de drogas tuvo su inicio y su aumento en las zonas que han estado bajo el control de los muyahidines desde principios de los años ochenta. Eran cinco provincias: las del sur: Helmand, Kandahar y Uruzgan, la provincia nororiental de Badajshan y la provincia oriental de Nangahar. En la actualidad, las extensas plantaciones de amapola comprenden unas 30.000 hectáreas en Helmand, 4.000 hectáreas en Kandahar, 5.000 hectáreas en Uruzgan, 8.000 hectáreas en Badajshan y 20.000 hectáreas en Nangahar. A ello hay que agregar que el gobierno de Karzai es incapaz de ofrecer a los agricultores una alternativa distinta al cultivo de amapola. Se les prometió un pago directo y único de 13.000 dólares por cada hectárea, lo que, sin embargo, rechazaron. Los agricultores a menudo tienen grandes deudas con los terratenientes, con los prestamistas, pero también con los capos de la droga. Así que se puede dar como un hecho que tanto el cultivo de droga como la producción de heroína seguirán.

Segundo: aduana e ingresos por tránsito. Éstos deberían ser pagados al gobierno central si fuese capaz de imponer eficazmente su derecho de soberanía. Su usurpación por parte de los Señores de la Guerra es comparable con los caballeros salteadores de la Edad Media y los bandoleros de camino.

Tercero: servicios de Ayuda Internacional. Éstos no son repartidos directamente a los que la necesitan, sino que pasan por las manos de los respectivos Señores de la Guerra que detentan el poder.

—*¿Cómo se puede clasificar históricamente la paramilitarización de Afganistán? ¿Cuándo y en qué contexto aparecieron los Señores de la Guerra? ¿Qué transformación han atravesado desde la guerra contra el Ejército Rojo desde principios de los años ochenta?*

—La paramilitarización de Afganistán es producto de la política exterior de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, particularmente desde que el gobierno de izquierda asume el poder en Afganistán en el año 1978. En sus memorias publicadas en 1996, el antiguo director de la CIA, Robert Gates, admite que el servicio secreto estadounidense había iniciado incluso seis meses antes la intervención soviética con el apoyo de los muyahidines afganos. El asesor en materia de seguridad del presidente estadounidense Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, lo confirmó frente a una pregunta de un periodista de *Le Nouvel Observateur* en enero de 1998:

> Sí. Según la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los muyahidines comenzó en el transcurso del año 1980, es decir, después de que el ejército soviético hubiera ingresado a Afganistán el 24 [¡cita textual!] de diciembre de 1979. Pero la realidad hasta ahora mantenida en secreto es otra cosa.
>
> Realmente fue el 3 de julio de 1979 cuando el presidente Carter firmó la primera directiva sobre el apoyo secreto a los oponentes del régimen pro soviético en Kabul. Y este día le escribí una nota en donde le explicaba que, según mi opinión, esta ayuda traería como consecuencia una intervención de los soviéticos. Contestó lo siguiente: «No hemos obligado a los rusos a intervenir, pero hemos ampliado conscientemente la posibilidad de que lo hagan».

Esto no era otra cosa que una declaración de guerra de Estados Unidos a Afganistán, que costó la vida a millones de seres humanos y condujo a

la destrucción de la infraestructura del país. Jimmy Carter recibió el premio Nobel de la Paz en el año 2002. Si el Derecho Internacional fuera la norma de la política mundial, Carter y Brzezinski estarían obligados a rendir cuentas ante el Tribunal Internacional de La Haya como criminales de guerra contra Afganistán, entre otros casos.

Después de la intervención del ejército soviético, políticos estadounidenses de alto rango declararon públicamente que perseguirían hasta el último afgano contra la Unión Soviética. Los países de la OTAN, incluyendo la República Federal de Alemania, apoyaban financiera y militarmente la política de los muyahidines. La mayor parte del entrenamiento militar y el armamento fue asumida por Estados Unidos. Los muyahidines fueron entrenados según el manual del terrorismo de la CIA, y actualmente utilizan estos conocimientos como miembros de Al Qaeda o talibanes contra Estados Unidos. Más de 80% del presupuesto de la CIA para operaciones secretas era dirigido a las organizaciones paramilitares afganas. Luego se supo que Estados Unidos había ingresado anualmente más de 65.000 toneladas de armas en Afganistán. En este contexto hay que ver la paramilitarización de Afganistán; es decir, sin la influencia masiva occidental, principalmente de Estados Unidos, no se habría llegado a la lamentable proliferación actual de los Señores de la Guerra de Afganistán.

Cuando en 1992 los islamistas no pudieron ponerse de acuerdo para gobernar conjuntamente Afganistán por intereses político-económicos particulares (a pesar de que habían hecho un juramento sagrado en la tumba del profeta Mohammed en la Meca, Arabia Saudita, donde prometían hacerlo en el futuro), empezaron a surgir las figuras que se han convertido en lo que reconocemos como Señores de la Guerra. Se encerraron en sus áreas de influencia e hicieron valer sus aspiraciones de poder.

Con excepción de Abdul Rachid Dostum, un aliado del gobierno afgano y el soviético, los otros Señores de la Guerra cooperaron con casi todos los servicios secretos del mundo debido a sus egoístas intereses político-económicos, e inclusive son actualmente aliados de sus principales enemigos ideológicos, el «gran Satanás», como se refirió el Imam Khomeini a Estados Unidos.

Tan paradójico como pueda ser, Estados Unidos sigue apoyando militar y logísticamente a los Señores de la Guerra para instrumentarlos contra la

coalición antiestadounidense que están conformando Al Qaeda, los talibanes y el Hezb-i Islami de Hekmatyar. Con ello, Estados Unidos desestabiliza al mismo tiempo la administración de Kabul bajo Karzai. Mientras, en poco más de un año fueron entrenados entre 2.000 y 3.000 soldados por —entre otros— Estados Unidos para un ejército nacional afgano en formación, los Señores de la Guerra tienen 700.000 hombres en pie de guerra.

—¿Cuál es la relación entre los Señores de la Guerra y la etnicidad? ¿Constituyen estos Señores de la Guerra su legitimación sobre la etnicidad o existen otros factores que desempeñan un rol?

—Luego de la cesión del poder a los islamistas, no lograron, como ya dije, cooperar de manera constructiva en un gobierno conjunto por el bienestar de Afganistán. Por el contrario, la guerra continuó contra el pueblo afgano y entre los mismos islamistas con una brutalidad nunca antes vista, apenas percibida por la opinión pública mundial. Las grandes ciudades, entre otras Kabul, fueron reducidas a cenizas. Los observadores hablaban de una incineración de Kabul. En seis áreas de influencia de los islamistas, los límites de estas áreas fueron minados y se bombardeaba la ciudad hasta que sólo quedaran ruinas. Ministerios, universidades, escuelas, bibliotecas y museos eran saqueados y fueron asesinados 50.000 civiles. La población se hallaba indefensa y perpleja ante estos acontecimientos y no podía comprender por qué los anteriormente apasionados defensores del Islam, tan presuntamente amenazado en el pasado, ahora conducían guerras unos contra otros, con consecuencias terribles para la población civil.

Los islamistas temían perder completamente la influencia y la autoridad sobre el pueblo y, con ello, aislarse. El argumento movilizador del Islam perdió su funcionalidad y fue sustituido con el pretexto de las nacionalidades. La guerra siguió con igual fuerza bajo la bandera de la «estirpe» o de la «etnia». Sin conocer las verdaderas causas de la etnización del conflicto afgano, algunos etnólogos supusieron que la diversidad racial era la génesis del enfrentamiento que data de hace muchos años en Afganistán. Con ello reducen la dimensión política del conflicto a una dimensión meramente étnica, dejando asimismo completamente de lado intereses geoestratégicos y económicos.

—El gobierno alemán desempeña un rol importante en Afganistán desde la caída de los talibanes forzada por Estados Unidos. Por una parte, un gran contingente del ejército alemán está estacionado en Kabul. Por otra, en otoño de 2001 tuvo lugar en Alemania la Conferencia del Petersberg, en la que quedó establecido el orden postalibán. ¿Hasta qué punto fomentaron las decisiones del Petersberg al sistema de los Señores de la Guerra en Afganistán? ¿Qué función cumple el ejército alemán?

—En primer lugar, debo decir que la importancia del gobierno alemán es relativa. En Afganistán, solamente desempeña un papel importante el gobierno de Bush. La organización de la Conferencia del Petersberg fue cedida de manera condescendiente al gobierno alemán por Estados Unidos y costó una gran cantidad de dinero a los contribuyentes al fisco alemán, pero fue dirigida únicamente por Estados Unidos. Este país impuso su partidario (es decir Karzai) durante su ausencia y los aliados alemanes, los partidarios de la monarquía, fueron marginados. A pesar de ello, para el gobierno alemán fue un prestigio poder actuar como anfitriones de una conferencia internacional bajo el patrocinio formal de la ONU. Sólo por esta razón, Schröder y Fischer invitaron a principios de diciembre de 2002 a una segunda conferencia de Afganistán totalmente inútil en el Petersberg con 32 delegaciones; se quiso refrescar y mejorar la apariencia internacional del gobierno de SPD-Verdes deteriorada en la campaña electoral anterior.

Para el gobierno alemán era más importante su presencia militar con las tropas combatientes en Afganistán, aunque sólo fuera porque Schröder le rogó a Bush para que lo concediera. Ese es un paso hacia la normalidad, un paso más hacia las ambiciones de gran poder de la República Federal de Alemania y un paso más hacia la aplicación de los lineamientos de la política de defensa de Alemania, al afirmar que dicho país desea tener actuación militar mundial cuando sus intereses así lo requieran. Estos lineamientos fueron aprobados en 1992 bajo el gobierno conservador-liberal, pero aplicados por un llamado gobierno rojo-verde, primero en los Balcanes y finalmente en Afganistán.

La proliferación del sistema de los Señores de la Guerra en Afganistán fue establecida contractualmente en el Petersberg, ya que no estaba en los intereses de Estados Unidos despojar de su poder a los Señores de la

Guerra que estaban aliados con dicho país. Las fuerzas orientadas secularmente y los tecnócratas, desafortunadamente, no fueron apoyados por la llamada comunidad internacional; ellos ofrecían una alternativa real a estos Señores de la Guerra.

En lo que se refiere a las misiones del ejército alemán, cumple dos:

1. En el marco de la llamada tropa de protección, International Security Assistance Force (ISAF) o Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad, protege al gobierno de Karzai, compuesto en su mayor parte por capos de la heroína, criminales de guerra y fundamentalistas.

2. Unidades especiales del ejército alemán, las tropas de élite KSK (Kommando Spezialkräfte), operan bajo el comando estadounidense en conjunto con unidades de Estados Unidos y Gran Bretaña contra los talibanes y Al Qaeda en Afganistán. Sin embargo, estas operaciones se han mantenido en secreto por largo tiempo.

—¿Existen posibilidades hoy para que opositores afganos articulen opciones políticas más allá de los Señores de la Guerra o de políticas étnicas y religiosas?

—En Afganistán, cada oposición es sofocada en su origen. Existe la llamada Civil Community (Comunidad Civil), que actualmente coopera con los que detentan el poder para poder sobrevivir. Creen que pueden mover algo a largo plazo. Entre ellos hay muchos oportunistas, también algunos de izquierda que no quisieron perderse la repartición de cargos. Estas fuerzas son apoyadas entre otras por las fundaciones de partidos alemanes, que han inaugurado sus oficinas en Kabul desde hace ya algún tiempo. La oposición propia, que representa una alternativa ante las fuerzas gobernantes en la actualidad y que también tiene una concepción de un Afganistán más allá de los Señores de la Guerra, es ignorada por la llamada «comunidad internacional».

Capítulo XII
INDONESIA: VIEJAS «NUEVAS» GUERRAS. LA PRIVATIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN INDONESIA

Henri Myrttinen

Desde la caída de la dictadura de Suharto en el año 1998, el imperio insular de Indonesia no parece encontrar la paz. Terror de milicias durante el referendo para la independencia de Timor Leste en 1999, sangrientos conflictos regionales en Aceh, Papúa Occidental, Ambon, las Molucas, Sulawesi (Célebes), y en Kalimantan (Borneo); el surgimiento de grupos islamistas radicales violentos y finalmente los atentados con bomba en Bali el 12 de octubre de 2002, el país parece hundirse en «nuevas guerras» que son llevadas a cabo por actores de la violencia privados que se definen a menudo como étnicos o religiosos[1]. Contrario a las actuales turbulencias, la era de Suharto casi da la impresión de haber sido un período de estabilidad[2].

En un análisis más específico, sin embargo, se puede ver que estas guerras no son tan «nuevas», pues tanto las raíces de los conflictos como la manera de resolverlos a menudo se remontan a los años de la dictadura de Suharto o mucho más atrás. Los conflictos son «étnicos» sólo en cierta medida y generalmente se encuentran estructuras no privadas detrás o junto a los actores «privados», como los cuerpos de seguridad del país.

La violencia privatizada en Indonesia puede ser categorizada en diferentes maneras. La clasificación utilizada a continuación deberá observarse necesariamente *grosso modo*, ya que los actores de la violencia no siempre se separan claramente unos de otros. Existen actores de la violencia privatizados y parcialmente privatizados que tienen su origen en iniciativas estatales y no-estatales.

Son apoyados por estructuras estatales no-estatales y persiguen intereses del Estado —los que corresponden a la doctrina estatal oficial— del «mantenimiento y fortificación de la república indivisa de Indonesia»

(Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, una máxima central del gobierno de la presidenta Megawati Sukarnoputri), como también objetivos políticos contrapuestos a los intereses estatales, algunos de enriquecimiento privado.

Los actores estatales de la violencia son básicamente las Fuerzas Armadas TNI (Tentara Nasional Indonesia, o Ejército Nacional de Indonesia), la Policía (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri), y el servicio secreto interno (Badan Intelijen Negara, BIN). Éstos se apoyan en estructuras estatales y no-estatales. Parte de su presupuesto proviene del Estado, otra parte se obtiene mediante actividades comerciales legales, y una considerable tercera parte surge de actividades económicas ilegales o seudolegales de grupos particulares y soldados, principalmente en relación con misiones en las zonas de conflicto del país. Los objetivos que se han trazado los cuerpos de seguridad se corresponden en su mayoría con la ideología oficial de la NKRI. Según su concepción, los cuerpos de seguridad se ven como las «guardias máximas» del Estado indiviso. Además de esta «vocación», normalmente el enriquecimiento personal no se queda atrás.

Como principales actores no-estatales de la violencia figuran los siguientes:

Grupos de milicias como Aitarak (Espina) y Besi Merah Putih (Hierro Rojo y Blanco) en Timor Leste; Satgas Merah Putih (Fuerza Roja y Blanca) o Satgas Papua (Fuerza de Papúa), en Papúa Occidental.

La Laskar-Jihad nacionalista y radical islamista.

La Jemaah Islamiyah radical islamista (que últimamente se hizo famosa como el presunto vástago regional de Al-Qaeda).

Las organizaciones armadas separatistas en sentido «clásico», como el Gerakan Aceh Merdeka (GAM - Movimiento Aceh Libre) o la Organisasi Papua Merdeka (OPM - Organización Papúa Libre).

Aunque todos estos grupos no son estatales, están apoyados o formados por sus estructuras, como por ejemplo las milicias. Sus objetivos son compatibles en parte con la doctrina de la NKRI (por ejemplo: las milicias, la Laskar-Jihad), o están contrapuestos a ellas en forma diametral (por ejemplo, el GAM, la OPM, la Jemaah Islamiyah). Además, la violencia sirve para llenar las arcas para financiar la guerra y para el enriquecimiento personal de las respectivas corporaciones de violencia.

El panorama esbozado en este artículo no ofrece una sinopsis completa de las corporaciones de violencia en Indonesia. A ello se agregan las tropas de matones de magnates locales, grupos violentos cercanos a partidos políticos, o empresas privadas de seguridad que desempeñan un rol particular en las zonas de crisis de Aceh y Papúa Occidental en la protección de inversiones extranjeras, aunque no puedan ser reseñadas con mayor profundidad en este ensayo.

Los cuerpos estatales de seguridad como corporaciones privadas (de violencia)

Como se mencionó anteriormente, los cuerpos de seguridad TNI y Polri tienen la autoconcepción de ser las «guardias máximas» del Estado indivisible de Indonesia desde la fundación del Estado en 1945 y la guerra de independencia contra Holanda. Este rol no sólo se refiere a las tareas de política de seguridad, sino que según la Constitución, estas fuerzas de combate detentan también una función social. Esta doble función, denominada *dwifungsi*, significó particularmente en los años de la dictadura de Suharto que el estamento militar (hasta 1999, el TNI y la Polri eran parte de la misma organización: ABRI) disfrutaba del derecho de participar en decisiones en todos los niveles políticos, desde lo local hasta lo nacional. Con ello podía constituirse una red de influencia que abarcara todo el archipiélago. Se constituyeron alianzas en todos los grados entre las élites militares, políticas y económicas, que en parte se superponen entre sí.

Ya que sólo aproximadamente un tercio de los gastos militares son cubiertos por el presupuesto del Estado y el resto debe ser obtenido por medio de actividades económicas, los cuerpos de seguridad desempeñan también un importante rol económico. El Ministerio de la Defensa, el cuartel general del TNI, así como todos los componentes de la Fuerzas Armadas —Ejército, Marina, Fuerza Aérea, las tropas de reserva estratégica (Komando Strategis TNI-Angkatan Darat, o Kostrad), las unidades especiales (Komando Pasukan Khusus, o Kopassus) y la Policía— disponen de fundaciones propias (Yayasan) cuyo sentido y objetivo consiste en obtener los dos tercios restantes.

Las fundaciones, que son clasificadas como de utilidad pública, disponen cada una de por lo menos una empresa *holding* que incluye en sí misma

a las diversas firmas. Los intereses comerciales se extienden desde el mercado financiero y los seguros hasta empresas de transporte, la industria minera, la industria pesquera, hasta la farmacéutica o la industria textil. Además de las empresas también existen cooperativas bajo el auspicio de las Yayasan, cuyos miembros son militares que actúan a nivel local y nacional[3].

Adicionalmente a los ingresos provenientes de las Yayasan, se perciben también ganancias de empresas estatales que son dirigidas por militares o ex militares. Al frente de todas ellas se encuentra la empresa petrolera Pertamina y la agencia de logística Bulog (Badan Urusan Logistik Nasional). Durante la mejor época de Suharto, Pertamina era la principal fuente de ingresos de las Fuerzas Armadas[4].

Además de estos ingresos oficiales y legales existen también fuentes ilegales o seudolegales utilizadas para el enriquecimiento de grupos o miembros particulares. Éstos suelen ser pagos para la protección de comerciantes o de empresas extranjeras, participación en juegos de azar, tráfico de armas y drogas, contrabando, piratería y prostitución. En estas actividades también se han presentado conflictos entre los grupos particulares por la repartición de los negocios.

A pesar de que estas actividades son ilegales, y según las versiones oficiales combatidas por la dirección militar, lo referido al aprovechamiento de fondos ilegales parece formar parte de una política de omisión por parte de la dirección civil y militar, particularmente en el marco de «misiones especiales» como en Timor Leste o las Molucas. Así, el entonces ministro de Defensa, Juwono, admitió, en una entrevista en el año 2000, que se extrajeron ingresos provenientes de los negocios ilegales de juegos de azar de los militares para la financiación de las actividades en Timor Leste.

Es particularmente evidente la mezcla de intereses económicos privados y estatales en las dos provincias conflictivas de Aceh y Papúa Occidental. Allí los cuerpos de seguridad son empleados para la lucha contrainsurgente y al mismo tiempo se encargan de la protección de los campos de extracción gasífera de Exxon Mobil en Lhokseumawe (Aceh), y la mina de oro y cobre más grande del mundo, la de Grasberg en Timika (Papúa Occidental), que es dirigida por la empresa minera estadounidense Freeport McMoRan. Al igual que otros proyectos estratégicos importantes, éstos son vigilados por las llamadas unidades Pam Provit (Pasukan

Pengamanan Projek Vital - Unidades para la protección de proyectos vitales). Los proyectos respectivos tienen una importancia extremadamente alta para Indonesia: Lhokseumawe es uno de los campos de extracción gasífera más grandes del país, mientras el ingreso tributario particular más grande de la nación resulta de los ingresos provenientes de la mina de Grasberg. En lo que concierne al ámbito nacional, este hecho aclara por qué el gobierno central no desea ceder ante los esfuerzos por la independencia, mientras en el ámbito local se vislumbran esquemas clásicos de la economía de guerra.

Según McCullogh, la Freeport McMoRan pagó en una oportunidad a la guarnición local la suma de 35 millones de dólares estadounidenses, y posteriormente otros 11 millones anuales. Con una parte del dinero se financió la lucha contra el movimiento independentista OPM, la otra cayó en bolsillos privados. En marzo de 2003 Freeport confirmó haber pagado 5,6 millones de dólares estadounidenses al TNI en el año 2002. El jefe del ejército, Endriartono Suharto, negó que los inversionistas extranjeros debieran cancelar dineros de protección a los cuerpos de seguridad y calificó las sumas abonadas por Freeport como «dinero para gastos menores» otorgado a los militares locales[5].

Existen suposiciones de que el asesinato con armas de fuego en agosto de 2001 de dos docentes estadounidenses que trabajaban en la escuela de Freeport fue comandado por miembros del TNI (se sospecha de las unidades especiales Kostrad y Kopassus) para mejorar la «moral de pago» de la empresa. Cuando el *Washington Post* hizo pública esta sospecha en un artículo, el jefe del ejército amenazó con presentar una demanda de un millardo de dólares por difamación. El *Washington Post* se retractó de la acusación en febrero de 2003 y la demanda fue retirada[6].

La British Petroleum (BP) planifica junto con Pertamina la realización de un proyecto gasífero en Tangguh, Papúa Occidental, en el cual, según se supo, la empresa multinacional renunciará de manera explícita al empleo de los cuerpos de seguridad estatales. Sin embargo, resulta dudoso que esto suceda. Las medidas de preparación ya han conducido a una creciente militarización de la región y a incidentes armados que posiblemente convenzan a la BP de que debe cooperar con los cuerpos estatales de seguridad[7].

También existen sospechas en Aceh de que los mismos cuerpos de seguridad han participado en algunos de los ataques contra las plantas de Exxon Mobil para mantener el conflicto (y con él, la economía de guerra) en marcha por una parte y, por la otra, recordar a la multinacional petrolera la importancia de los pagos por protección. Se presume que tanto Exxonn Mobil como el TNI y la Polri también transmiten recursos al movimiento independentista GAM. Existe actualmente un proceso judicial en Estados Unidos con motivo de la participación de la empresa en la lucha contrainsurgente de los cuerpos de seguridad. Se acusa a la multinacional de complicidad en torturas y asesinatos a ciudadanos de Aceh por medio de los cuerpos de seguridad nacional y los servicios de seguridad propios de la empresa. Según las acusaciones de los demandantes, Exxon Mobil puso a disposición de las fuerzas nacionales de seguridad recursos financieros, helicópteros, espacios para interrogatorios y torturas y también buldózeres para enterrar los cadáveres. En verano de 2002, el jurado competente recibió un pliego del departamento de Estado de Estados Unidos en el que se solicitaba la privación de un mayor procesamiento del caso en atención a la «guerra contra el terrorismo»[8].

LAS MILICIAS COMO PEONES DE LOS MILITARES

Los cuerpos de seguridad no sólo participan directamente en los diferentes conflictos del Estado insular como fuerzas ejecutantes de la violencia estatal o como servicios de seguridad privados o seudoprivados para las empresas multinacionales. Los conflictos son incitados también por medio de grupos que deben ser considerados en mayor o menor medida como los peones de los militares. Aquí se trata principalmente de las milicias, que en los últimos tiempos han estado progresivamente activas en Papúa Occidental y fueron conocidas a nivel internacional mediante la ola de violencia de Timor Leste en 1999. La responsabilidad por la formación y el apoyo de los grupos de milicias la tiene principalmente la unidad especial Kopassus.

Las milicias tienen una conocida tradición en Indonesia por lo menos desde la guerra de independencia, aunque estos nuevos grupos sólo se utilizan para la difusión de inseguridad en la población: mediante sus

actividades se mantiene un constante estado de conflicto que no es ni guerra ni paz.

La formación intencionada de estos grupos revela conocidas similitudes con las estrategias contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la CIA como, por ejemplo, las aplicadas, entre otros, en Estados del sureste asiático y en Latinoamérica desde los años sesenta. Las similitudes no son casuales, pues de hecho las unidades indonesias han sido entrenadas en la lucha antiguerrilla por unidades especiales australianas, británicas y estadounidense, entre otras. Así, el teniente general Prabowo Subianto, antiguo comandante de las Kopassus y las Kostrad, y el mayor general Sjafrie Syamsuddin, actual vocero del ejército (quienes fueron denunciados por graves crímenes en contra de los derechos humanos en Aceh, Java, Timor Leste y otros lugares) fueron adiestrados por unidades especiales estadounidenses en Fort Benning, donde se encuentra la sede de la reconocida Escuela de las Américas. Prabowo, quien es también yerno de Suharto, culminó, además de un curso de adiestramiento en las fuerzas especiales GSG-9 en Alemania, una formación en las US Special Forces (Fuerzas especiales estadounidenses) en Fort Bragg. Sjafrie Syamsuddin fue capacitado adicionalmente por la tropa especial australiana SAS[9].

Según un informe del *Washington Post* previo al congelamiento de la ayuda militar estadounidense para Indonesia debido a la ola de violencia en Timor Leste en 1999, se impartieron en total cuarenta y un cursos de capacitación durante los años noventa, veintiséis de ellos con las Kopassus. Según el Ministerio de Defensa estadounidense, también se le enseñó a las Kopasus derechos humanos, además de las técnicas de francotiradores. Si se analiza la capacitación en el primer ámbito partiendo de sus resultados, ésta parece haber obtenido muy pocos frutos[10].

Después de la «pérdida» de Timor Leste en 1999, los militares indonesios emplearon las tácticas de las milicias particularmente en Papúa Occidental. En este contexto se creó entre los años 1999-2000 la pro Indonesia Satgas Merah Putih, entre otras. Como supuesta reacción apareció la milicia pro independentista Satgas Papua. Sin embargo, existen especulaciones que afirman que se trata de una organización bracera de los

cuerpos de seguridad, cuya misión consiste en dividir el movimiento independentista y desacreditarlo mediante acciones de violencia[11].

Los militares y los guerreros santos

Otra agrupación que actúa con violencia a favor del mantenimiento de la NKRI —pero bajo una fuerte concepción islamista— es Laskar Jihad. Este grupo recibe un fuerte apoyo moral de algunas élites políticas de parte del aparato de seguridad. Sin embargo, actúa de manera más autónoma que los grupos de milicias.

A pesar de que la organización había hecho pública su disolución inmediatamente antes de los bombardeos de Bali, se ha mantenido activa por lo menos en Papúa Occidental, según informes de esta región[12].

Este grupo ha entrado en acción particularmente en las Molucas, Ambon y Célebes, donde tuvo participación en los enfrentamientos entre las comunidades cristianas y musulmanas, que posiblemente fueron instigadas mediante *agents provocateurs* (agentes provocadores) de las filas del TNI. En estos conflictos han muerto por lo menos cinco mil personas. En un comienzo, los combatientes de Laskar Jihad eran entrenados principalmente en Java Central, y enviados en barco de allí a las regiones en crisis (con mayor o menor apoyo abierto del TNI). El armamento de los «guerreros santos» venía de miembros de los cuerpos de seguridad, tanto de la Polri como del TNI, quienes les vendían armas por convicción ideológica o por la ganancia financiera. Sin embargo, se suministraban armas también a la contraparte, milicias cristianas como Laskar Kristus o Gang Coker, un grupo originario del ámbito criminal javanés con nexos con las Kopassus[13].

También hubo varios casos de combates entre miembros de los diferentes cuerpos de seguridad. Mientras algunos observadores hablaban de una polarización a lo largo de líneas divisorias étnicas-religiosas, otros afirmaban que se trataba de luchas por la distribución entre diversos grupos mafiosos uniformados que combatían por dinero e influencia en las zonas de conflicto.

Si los guerreros santos, sea cual sea su orientación, llegan a ser muy poderosos según los diferentes grupos dentro de los cuerpos de seguridad

y ponen en peligro sus ganancias, se les da un «castigo violento» a los empresarios privados de la violencia[14].

La Laskar Jihad está activa también en Papúa Occidental, de mayoría cristiana, y en Aceh, las dos regiones separatistas de Indonesia. Parece que el objetivo de los cuerpos de seguridad consiste en utilizarlos como suplentes en la lucha contra los separatistas.

En Papúa Occidental, las presuntas líneas divisorias étnico-religiosas son claras: se trata de musulmanes nacionalistas contra cristianos y animistas, que quieren desintegrar la NKRI. La situación es más enredada semánticamente en Aceh: el GAM, que propaga abiertamente una política islámica y ha sido metido en el mismo saco una y otra vez con organizaciones terroristas de militantes islamistas como Al Qaeda por el gobierno central indonesio, es supuestamente combatido con ayuda de Laskar Jihad, un grupo militante islamista al que también se imputan relaciones con Al Qaeda[15].

GRUPOS TERRORISTAS ISLAMISTAS: ¿PARTE DE UNA RED MUNDIAL?

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la mirada de los perseguidores de terroristas estadounidenses cayó sobre el sureste asiático, particularmente sobre Indonesia. Según Estados Unidos y los servicios de seguridad de Singapur, Malasia y Australia, el grupo Jemaah Islamiyah figuraba entre los sospechosos de ser miembros de la red Al-Qaeda. El presunto cabecilla del grupo, Abubakar Ba'asyir, fue presentado como padrino regional del terror[16]

Hasta los atentados con bombas de Bali, el gobierno indonesio negó que existiese algún problema con grupos islamistas dispuestos a la violencia y de índole terrorista. Los atentados cambiaron esto de golpe y los cuerpos de seguridad indonesios pudieron capturar a los presuntos terroristas con una rapidez impresionante. No quedó claro si, en los perpetradores o en la Jemaah Islamiyah, se trataba de «filiales» o «franquicias» del «consorcio multinacional Al-Qaeda»[17].

Mientras los autores estaban seguramente influenciados por los atentados y la ideología de la red Al-Qaeda, observadores indonesios independientes

opinan que tras ellos se esconden grupos internos de mucha influencia, como por ejemplo elementos de los cuerpos de seguridad.

Esto aparenta ser una paradoja en el sentido ideológico, pues la Jemaah Islamiyah reclama la creación de un califato islámico que comprendería Indonesia, Malasia, el sur de Filipinas y el sur de Tailandia, entre otros; mientras todos los grupos procedentes de las fuerzas de seguridad se han mantenido fieles hasta ahora a la ideología de la NKRI. En realidad, es posible que parte de las fuerzas de seguridad se hayan desprendido de la idea del Estado indiviso y en su lugar luchen por un Estado islámico.

Sin embargo, las suposiciones en Indonesia miran más bien hacia otro lado. Según las mismas, un posible objetivo del atentado era desestabilizar el régimen y el país de tal forma que los cuerpos de seguridad se volviesen nuevamente imprescindibles. Esta teoría no es tan osada, pues los cuerpos de seguridad se han visto envueltos en el pasado en intentos parecidos de desestabilización a nivel regional (en las Molucas, por ejemplo). Los que colocaron las bombas recibieron también aparente apoyo externo (bien sea por parte de los cuerpos de seguridad o de Al-Qaeda) para poder ejecutar los atentados de una manera tan mortífera. Lo que se observa como el hecho más grave es que el servicio secreto interino (BIN) haya infiltrado la mayoría de los grupos islamistas desde la era de Suharto, y que parcialmente haya participado también en la formación y aprovisionamiento de estos grupos para utilizarlos como instrumentos al igual que las milicias[18].

Si la teoría de una implicación de elementos de las fuerzas de seguridad es cierta, la cuenta parece haber salido bien: la legislación antiterrorista aprobada después de los atentados otorga a las fuerzas de seguridad facultades muy amplias y asegura su influencia política y social. Australia y Estados Unidos reanudaron la ayuda militar congelada desde la ola de violencia de 1999 en Timor Leste. Y también se reanudaría la colaboración con las Kopassus en nombre de la lucha antiterrorista, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores australiano reconoció que esta unidad tenía conexiones con organizaciones terroristas[19].

Aceh y Papúa Occidental: ¿guerrillas clásicas?

Los dos conflictos regionales más fuertes de Indonesia son los movimientos independentistas en la parte final del Estado insular ubicada más al oriente (Aceh) y al occidente (Papúa Occidental). Estas luchas se extienden desde finales de los años sesenta en Papúa Occidental y desde mediados de los años setenta en Aceh. Mientras el rol del ejército y las milicias como actores de violencia (en parte) privatizados de las «nuevas guerras» ya fue descrito en la parte anterior, las dos organizaciones separatistas, GAM y OPM, posiblemente se describen mejor en la categoría de las organizaciones clásicas de guerrillas, como surgieron desde mediados del siglo anterior en las guerras de liberación de África y Asia.

Sin embargo, particularmente en el GAM, en Aceh se encuentran varias características de las «nuevas guerras», bien sea, por ejemplo, por el mantenimiento de una economía de guerra civil que con el pasar del tiempo se convierte más o menos en el fin absoluto, o por el rol muy pronunciado de la diáspora de Aceh establecida principalmente en Malasia y Suecia. Aunque ambos conflictos son descritos a menudo como de tipo religioso, cultural o étnico, en ambos casos se trata de una distribución de los recursos percibida como extremadamente injusta. Mientras las ganancias de los campos gasíferos o minas de oro y cobre pasan a las grandes empresas extranjeras y al gobierno central, las mismas regiones se empobrecen, sufren los daños al medio ambiente y se dan violaciones masivas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad utilizadas para la protección de las inversiones extranjeras[20]. Mientras en Papúa Occidental la OPM ha dejado por ahora casi completamente la lucha armada a favor de un intento de solución civil del problema, en Aceh se está dando actualmente un frágil proceso de paz.

Conclusión

Desde el fin de la dictadura de Suharto, Indonesia ha sido aparentemente agarrada por una oleada de violencia privatizada, por «nuevas» guerras. Los actores de la violencia se extienden de luchadores independentistas a milicias fieles al Estado; de fuerzas de seguridad corruptas a tropas políticas

de matones; de servicios de seguridad privados a redes de terrorismo de militantes islamistas. Sin duda los conflictos y los atentados han aumentado desde 1998, y el total de las víctimas se ha acrecentado desbocadamente. Sin duda, la crisis económica del sureste asiático también ha traído afluencia a las organizaciones militantes. Se habla de la amenazante balcanización de Indonesia, el eslogan «Estado fallido» aparece como un presagio fatídico.

Sin embargo, un análisis más exacto demuestra que estos acontecimientos no evidencian necesariamente la desintegración del aparato estatal. Por el contrario, se trata en parte de métodos antiguos del mismo aparato que provienen incluso de tiempos de Suharto o de la era previa a él. Mediante el mantenimiento de pequeños conflictos, los cuerpos de seguridad pueden legitimar su influencia política, social y económica y junto a ello, llenar sus bolsillos a través de las economías de guerra locales. El papel social y político de los cuerpos de seguridad está cimentado en la Constitución, el importante papel económico se remonta a los años de inicio de la República. Los métodos de la guerra de baja intensidad fueron desarrollados y refinados en parte con la cooperación de militares occidentales. En este sentido se formaron, apoyaron e instrumentaron grupos criminales de índole religioso-violento, entre otros, y tal vez también, asociaciones terroristas. Su parte de responsabilidad por la militarización de regiones completas de Indonesia la tienen también las empresas multinacionales presentes en el país, que pagan muy bien a las fuerzas estatales de seguridad por sus servicios, dentro de los cuales se dan numerosas violaciones de los derechos humanos.

NOTAS

1. Para el concepto de «nueva guerra» revisar Herfried Münkler, *Die neuen Kriege*, Hamburg, 2002; Mary Kaldor, *Neue Kriege und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung*, Francoforte sobre el Meno, 2000.
2. En este sentido obsérvese: Sidney Jones: «Anatomy of Conflicts in the Post-Soharto Era», en *The Jakarta Post*, 19 de diciembre de 2002.

3. Lesley McCulloch, «Trifungsi: The Role of the Indonesian Military in Business». Conference Paper; «Soldiers in Business: The Military as an Economic Player». Conference, Yakarta, 16-19 de octubre de 2000. http://www.bicc.de/budget/events/milbus/confpapers/mcculloch.pdf
4. Ídem.
5. «TNI Still Welcomes Freeport Aid». *The Jakarta Post*, 21 de marzo de 2002.
6. Agence France Presse: «Indonesian Military, US Paper reach deal over Papua article», 24 de febrero de 2003.
7. *Down to Earth*: «A Visit to BP's Tangguh Project in West Papua». En: *Down to Earth Newsletter* # 55 (2002) http://dte.gn.apc.org/55BP.htm
8. International Labor Fund: «Exxon Mobil: Genocide, Murder and Torture in Aceh». Washington D.C., 2002. http://www.laborrights.org/projects/corporate/exxon/index.htm
9. Hamish MacDonald, (Hg.): Desmond Ball; James Dunn; Gerry van Klinken; David Bourchier; Douglas Kammen; Richard Tanter: «Masters of Terror - Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999». Canberra Informe 145, Canberra 2002. http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm
10. Dana Priest, «Elite Unit Suspected of Torture». *The Washington Post*, 23 de mayo de 1998. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/ overseas/ stories/priest0523.htm
11. Amnesty International: Indonesia: «Impunity Persists in Papua as Militias Take Root». Press Release 27/91, 27 de septiembre de 2000. http://www.amnestyusa.org/news/ 2000/indones09272000.html
12. John Martinkus, «Islamic Extremism Gains a Foothold in Christian Papua». En *South China Morning Post*, 19 de febrero de 2003.
13. Tapol: «Kopassus and the Maluku Crisis». En *Tapol Bulletin* No. 169/170 (2003), Tapol - «The Indonesia Human Rights Campaign».
14. Ídem.
15. Tapol: «Violence flares up again in Maluku». En *Tapol Bulletin,* nº 166/167 (2002), Tapol – «The Indonesia Human Rights Campaign».
16. Singapore Ministry of Home Affairs: «White Paper : The Jemaah Islamiyah Arrests and The Threat of Terrorism». Singapore, 2003. http://www.mfa.gov.sg/wp/complete.zip
17. Ignacio Ramonet, «Le Nouveau Visage du Monde». En *Le Monde Diplomatique*, 12 (2001). http://www.monde-diplomatique.fr/2001/12
18. Tapol: «The Bali Blast and Beyond». *En Tapol Bulletin*, nº 169/170 (2003) Tapol – «The Indonesia Human Rights Campaign».
19. «Kopassus linked to terrorist groups, official admits». En *Sydney Morning Herald*, 23 de noviembre de 2002.
20. Carmel Budiardjo, Liem Soei Liong: «West Papua. The Obliteration of a People», Thornton Heath, 1988.

CAPÍTULO XIII
CONGO: EJÉRCITO-EMPRESA, INTERESES ECONÓMICOS Y «COMERCIALISMO MILITAR» EN EL CONGO

BJÖRN AUST

Con poca atención por parte de Occidente, participantes de la guerra congoleña y numerosos Estados vecinos se encuentran en guerra desde 1999 en la República Democrática del Congo (RDC), el antiguo Zaire. Las luchas resultan en la destrucción fáctica del Estado sin que se haya logrado una decisión militar, y mucho menos una solución política del conflicto. No obstante, la guerra no señala ningún proceso de destrucción movido «irracionalmente» o por «enemistades étnicas», como se sugiere en algunos medios: en su lugar, las economías de guerra, que están relacionadas estrechamente con el mercado mundial y cuyos actores explotan las riquezas de los suelos, determinan la dinámica racional del conflicto. Algunos mecanismos importantes de esta economía política de la guerra serán investigados en este ensayo. Luego del bosquejo de la guerra y algunos planteamientos aclaratorios, se investigará la transformación de las tropas de intervención en actores seudoprivados, así como las funciones políticas de la intervención externa bajo la palabra clave «comercialismo militar». En el trasfondo se encuentran las prácticas «comerciales» de los cuerpos de combate de Zimbabwe, que estuvieron aliados con la RDC durante la guerra.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL AFRICANA

Debido a las complejas causas y dimensiones del conflicto, así como su efecto desestabilizador para toda la región de África central, los expertos denominan a la guerra actual como la «Primera Guerra Mundial Africana», o como la «Gran Guerra». Realmente, la guerra terminó «oficialmente» en diciembre de 2002, en tanto que los participantes en el conflicto congoleño acordaron una «agenda» para el desarme de los combatientes

y concertaron un gobierno de transición. Se había adelantado en los acuerdos relativos a la retirada de las tropas de intervención. Por supuesto, la paz está establecida sólo en el papel, pues se ve amenazada por violentos combates locales principalmente en el noreste del país, para que los observadores teman una nueva escalada a nivel nacional y también una nueva intervención de los participantes externos[1].

Ya las medidas de las catástrofes humanitarias justifican la concepción de «guerra mundial», pues ésta se caracteriza por la destrucción y el saqueo, por desplazamientos intencionales y excesos masivos de todos los participantes de la guerra contra la población civil: según apreciaciones de organizaciones humanitarias, desde 1998 la guerra ha torturado entre 2,5 y 3,5 millones de vidas humanas, ha provocado unos 2,7 millones de refugiados congoleños en su propio país. La mayoría de las personas fallecieron, bien en la fuga, víctimas de atentados de las agrupaciones armadas, o famélicos y enfermos por causa de la guerra. «Sólo» unos 350.000 de los fallecidos perdieron sus vidas como combatientes en enfrentamientos militares[2].

En la «Primera Guerra Mundial Africana», que después de la guerra de 1996/1997 ya era la segunda en Kinshasa, combatían tres organizaciones de rebelión congoleñas contra las tropas gubernamentales de la RDC: el apoyado por Ruanda, Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RDC), así como el Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) y el RDC - Mouvement de Libération (RDC-ML), que están aliados con Uganda. Adicionalmente, el gobierno de la RDC intentó movilizar actores de la violencia regionales por sus intereses, como por ejemplo las milicias Mai-Mai, que no seguían una agenda política coherente y estaban enredados en rivalidades internas. También los rebeldes de las guerras civiles de los Estados vecinos, principalmente unidades y milicias del antiguo gobierno ruandés, utilizaron la periferia del país como zona de repliegue, y estaban envueltos en alianzas tácticas en las luchas por el poder en el Congo[3].

Para el transcurso de la guerra fue decisiva la abierta intervención de fuerzas de combate regulares de numerosos Estados colindantes: Ruanda provocó la guerra con la entrada del Ejército Patriótico de Ruanda (Rwanda Patriotic Army, o RPA) en agosto de 1998, así como mediante la formación y el apoyo del RCD. Con 25.000 soldados oficialmente (la cantidad

real es estimada en un número mucho mayor), el fuerte RPA ocupó otras partes del occidente del país. Mientras Uganda entró a la guerra del lado de Ruanda, las intervenciones de Angola, Zimbabwe y Namibia aseguraron la supervivencia del gobierno en Kinshasa. El gobierno de Zimbabwe, que para ese momento contaba con 14.000 soldados del Zimbabwe Defense Forces (ZDF) en la RDC, ejerce hoy gran influencia sobre el gobierno congolés. Aunque durante el primer año del conflicto los frentes se habían ampliado, los participantes de la guerra permitieron una y otra vez el fracaso de los esfuerzos de paz realizados por mediadores externos: el Acuerdo de Lusaka, ya negociado para julio de 1999, se mantuvo durante largo tiempo sin consecuencias políticas, y no fue implementado por las misiones de observación de las Naciones Unidas (Mission Observatoire des Nations Unies au Congo - Monuc), que debía inspeccionar la aplicación de dicho acuerdo[4].

¿Caos o negocio? Intereses económicos en la guerra del Congo

Después de que la «Gran Guerra» se extendió durante cuatro años, la RDC ya no existía *de facto* como Estado. Su territorio, casi tan grande como Europa occidental, se desintegró en territorios estatales y rebeldes, zonas de influencia de poderes externos así como regiones bajo el control de milicias locales. Realmente, el control de los participantes de la guerra se encuentra en «sus» territorios debido a la magnitud del país, la desintegrada infraestructura, así como su mínima legitimidad política y la oposición aparentemente precaria y regular de combates (generalmente) locales. No obstante, la decadencia de las estructuras estatales por sí sola no significa que domina el caos: teóricos como el sociólogo y etnólogo Georg Elwert han denominado a los actuales negocios de la guerra como «mercados de la violencia», y han señalado la sólo aparente irregularidad como «economía de mercado irregular y radicalmente libre»[5]: allí los participantes de la guerra explotan económicamente el conflicto, y la violencia armada es convertida simultáneamente en «medios de producción» del poder político y económico, así como en «bienes» que pueden ser comprados por aliados, mercenarios, Señores de la Guerra locales, etcétera.

La misma violencia excesiva —que demuestran las fuerzas y temen los opositores— encuentra su motivación nacional en el mercado de la violencia.

Las materias primas naturales desempeñan un papel decisivo para el «mercado de la violencia» congoleño: un país rico en valiosos y singulares minerales, metales y piedras preciosas, pero también en maderas tropicales y otras materias primas agrarias, que le dan a las economías de guerra su base económica. La sustracción de materias primas y su exportación posibilitaron a la élite de la guerra prepararla directamente, así como asegurar sus pretensiones de poder político: los diamantes de la provincia de Kasai y Bandundu constituyen cerca de 30% del total de las exportaciones (formales) del gobierno congoleño y son, junto al sector de la industria minera, la fuente de ingresos más importante. Namibia llegó a un convenio con el gobierno de Kabila para la intervención con concesiones diamantíferas, y la empresa petrolera estatal de Angola, Sonangol, obtuvo 60% del total de una empresa colectiva angoleño-congolesa que extrae petróleo en el delta del río Congo. Empresas de Zimbabwe extraen el «cinturón de minerales» congoleño diversos metales, minerales, diamantes y exportan maderas tropicales. Los grupos rebeldes MLC y RCD-ML, así como las élites militares de Uganda, comercian regularmente con los diamantes y el oro que se encuentra en la Provincia Oriental.

Junto a un creciente número de científicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas, una comisión de expertos de la ONU estudió la economía de guerra en la RDC y constató en abril 2001 que

> la explotación de las materias primas naturales de la RDC mediante las fuerzas de intervención externas es sistemática y sistémica (…). Debido a sus recursos lucrativos, el conflicto logró una situación de cero pérdida para todos los grupos armados. Rivales y enemigos son a veces socios en los negocios (…), los enemigos compran armas a los mismos comerciantes y contactan los mismos mediadores (para sus transacciones económicas). Los intereses comerciales han obtenido la primacía sobre los intereses de seguridad. El único perdedor en esta gran aventura comercial es la población congoleña[6].

Las economías de guerra no constituyen fenómenos aislados, sino que se integran estrechamente en los flujos de bienes y de capital de la economía mundial, lo que es demostrado entre otras cosas por las redes globales

de comerciantes de armas, que (a menudo) abastecen ilegalmente a los participantes de la guerra[7]. Un representante importante de la «rama» es Victor Bout, que armó una red mundial de empresas criminales y legales, y que abasteció tanto a los gobiernos como a los rebeldes del MLC en la guerra del Congo. Para los rebeldes del RCD y el ejército de Ruanda, Bout organizó el transporte de minerales de los territorios ocupados[8]. Realmente, los socios comerciales no pertenecen de ninguna manera a los círculos internacionales de la mafia, más bien han obtenido lazos con la economía mundial regular en la exportación de materias primas: los participantes de la guerra y sus clientes en el mundo de la OCDE sacan provecho de la globalización y de la política de desregulación neoliberal de instituciones financieras internacionales y Estados occidentales, que han limitado drásticamente las posibilidades de control estatal sobre el intercambio de bienes y de capitales.

Consorcios transnacionales como por ejemplo el grupo empresarial estadounidense OM Group y el belga Groupe George Forrest (GFF) iniciaron una empresa colectiva con la empresa estatal Gécamines en el sector minero en el Congo. Además de las concesiones para la extracción, obtuvieron acceso a reservas de germanio por un valor de dos millardos de dólares estadounidenses. Gécamines fue excluida de los lucrativos alcances del negocio[9]. Empresas más pequeñas se especializaron en el sector de la explotación de materias primas, del transporte o del procesamiento, como por ejemplo la alemana H.C. Starck, hija de Bayer. Esta empresa pertenece a las pocas firmas a nivel mundial que puede extraer tántalo, importante para la tecnología de comunicación, entre otras, de la contracción de minerales coltan, que es extraída principalmente en las provincias de Kivu, controladas por Ruanda. Starck, así como otras empresas, sacaron (y sacan) provecho de la «fiebre del coltan» que surgió a fines de los años noventa particularmente con los brotes de innovación en la tecnología de comunicación. Los altos niveles de ganancia hicieron lucrativo el negocio: a pesar de que la materia prima recuperada mediante el aprovechamiento extremo de los garimpeiros en la explotación a cielo abierto puede ser adquirida por unos 7 o 15 dólares estadounidenses por kilo, en realidad alcanzaron durante el apogeo de la fiebre del coltan en su forma elaborada, hasta 380 dólares estadounidenses. Por motivo de la recesión

en el mundo OCDE, entre otras causas, el precio ha descendido hoy hasta unos 80 dólares. No están disponibles los montos exactos del volumen de comercio y márgenes de ganancia de las empresas aquí mencionadas[10].

La política económica de la Guerra del Congo

La lista puede complementarse con otras ramas, como por ejemplo el comercio de diamantes. Sólo constituye una fotografía instantánea que demuestra que diversos actores realizan negocios lucrativos bajo condiciones de guerra, que no le imprimen una caída en la violencia irracional en una determinada región del mundo, sino que representa procesos racionales de acumulación de ganancias económicas (y poder político), incluidos en los contextos económicos globales. Ello se ve reforzado también por los resultados de las investigaciones de paz y conflicto[11]. Se realizaron observaciones parecidas en África, principalmente en Angola, Liberia y Sierra Leona y se pueden ubicar en un marco conceptual: se desenvuelven de allí tres hallazgos que se relacionan con la globalización del capitalismo neoliberal posfordista y los radicales cambios políticos después de la Guerra Fría. Estos son:

• Materias primas valiosas convertidas en factor decisivo de la dinámica del enfrentamiento (no sólo en África), que con el fin del conflicto Este-Oeste agotó las entradas externas de los patrones de los bloques de poder en armas, municiones y dinero. Las organizaciones rebeldes de hoy día y los gobiernos estatales son básicamente más fuertes en las rentas de una economía de guerra local, y su inclusión en contextos económicos globales es dependiente, pues en primer lugar la explotación «ilegal» de recursos disponibles localmente posibilita el «sustento» de una tropa apta para el combate, la compra literal de la lealtad y la importación de armamento bélico. En parte se habla de «fuga de recursos», pues realmente el peligro de escalada de los conflictos sociopolíticos es mayor en las regiones ricas en recursos.

• Las economías de guerra se establecen como sistemas de ordenamiento político económico. Cuando un Estado «se desintegra» en zonas de influencia de actores armados, como en la RDC, en su lugar surgen ordenamientos sociales que se apoyan en relaciones informales y personalistas. Se basan realmente en la explotación de recursos y poblaciones

locales, pero también les ofrecen protección ante los otros actores de la violencia a las personas que allí residen. Señores de la Guerra locales realizan una especie de «acuerdos informales» con la población y pueden reclamar cierta legitimidad si toman en cuenta las reglas no escritas y las expectativas de su clientela. Sin embargo, en última instancia estos ordenamientos sociales son regulados por medio de la violencia («mercados de la violencia»)[12].

• Las economías de guerra transforman los intereses de sus actores en tanto que desarrollan su propia dinámica. Cuando el dominio político se apoya sustancialmente en la compra literal de la lealtad y el apoyo político, la defensa de la base económica se convierte en el requisito inmediato principal para la «supervivencia» como actor político o militar. Con la creciente duración de la guerra se estableció una espiral de violencia y explotación mediante la cual se cambió el motivo direccional de la violencia en el conflicto[13]: La prioridad militar y política ya no era el amplio dominio de un Estado y sus instituciones, sino el control local de los importantes yacimientos de recursos y las vías comerciales. En el «ámbito táctico» este hecho ofreció a los opositores el aliciente (o también la necesidad) para entrar en contactos económicos o comerciales.

Para muchos de los actores de los «mercados de la violencia» su mantenimiento de cierto nivel es necesario, ya que su poder se debe sólo a las ganancias de la economía de guerra, así como a las redes informales que sustraen todo el control mediante las instituciones estatales. Para estos «empresarios de la guerra» resulta económicamente lucrativo y políticamente racional continuar una guerra a pesar de las mínimas esperanzas de victoria militar, en lugar de entrar en negociaciones políticas. Esto aclara por qué los participantes de la guerra del Congo eludieron las negociaciones y frustraron una y otra vez el acuerdo ya suscrito en el marco del proceso en Lusaka.

«COMERCIALISMO MILITAR»: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA INTERVENCIÓN

A pesar de las prácticas sistemáticas de explotación económica y robo, las economías de guerra siguen siendo también economías «políticas»: las

funciones políticas de la «economía de la intervención» son estudiadas sólo con recurso a un aspecto hasta ahora poco observado de las economías de guerra actuales que se denomina «comercialismo militar», o «comercialización de la intervención militar externa», la cual se plantea cuando los cálculos comerciales se convierten en la consideración clave en el envío del ejército nacional[14].

El «comercialismo militar» describe un suceso actual en «Estados débiles» de África. Luego de proyectos de desarrollo fallidos y estancamiento económico, sus élites enfrentan recursos económicos decrecientes y creciente presión externa mediante imposiciones neoliberales de políticas de desarrollo y de emisiones de créditos de préstamos internacionales. Ante este trasfondo se estrechan los márgenes de movimiento comercial de estas élites, que desde hace décadas han basado su poder en diversos estilos de política clientelar y actualmente ya no pueden seguir costeando las formas «clásicas» del patrocinio (inclusión en instituciones, participación en rentas estatales, etcétera). Esta situación se ha intensificado crecientemente con la caída del conflicto Este-Oeste y las ayudas militares relacionadas con el mismo: el armamento y el personal ya no pueden ser financiados, así que los saqueos, revueltas y criminalidad de los soldados están a la orden del día[15]. Para los gobiernos débilmente legitimados (también en las democracias formales) esto significa una amenaza enorme, pues las fuerzas de combate desempeñan un rol ambivalente en la política del continente desde la descolonización. Muchos aparatos militares africanos fueron asumidos como objetos heredados de las antiguas potencias coloniales y mantuvieron también su función bajo los nuevos gobiernos. Dicha función consistía en la defensa de los intereses de las élites políticas, así como la contención de disturbios internos.

Simultáneamente las élites militares, temidas por los jefes de Estado y los gobiernos, eran contrincantes por el poder político —desde 1963 hasta 2002 se produjeron golpes por lo menos en la mitad de los Estados de África—. Para disminuir los disturbios, las élites militares fueron incluidas a menudo en posiciones lucrativas e influyentes de la red clientelar, particularmente en Estados cuyos ejércitos y gobiernos surgieron de antiguos movimientos de liberación. Resulta significativo que a pesar de la democratización formal, desde mediados de los años noventa volvió a aumentar

el número de disturbios militares, ya que sólo unos pocos Estados pueden permitirse estar bajo las condiciones de la globalización neoliberal y el debilitamiento de su aparato militar, así como su lealtad política. Un ejemplo es Angola, cuyas élites gubernamentales del ejército prolongaron durante la guerra contra la Unita, en los años noventa, crecientes concesiones en las pacíficas regiones diamantíferas en al noreste del país[16].

Debido a que en la mayoría de los países (ya) no están disponibles los suficientes recursos internos, las élites gubernamentales utilizan sus ejércitos como instrumento para explotar recursos externos adicionales. El arrendamiento de grandes contingentes de fuerzas de combate para misiones de la ONU sigue siendo la variante más pacífica de esta comercialización de la intervención externa. La organización de Estados alimenta sus aparatos que de otra forma no tendrían que pagar por los gobiernos enviados. Resulta problemático en el contexto de la práctica intervencionista que ha variado desde mediados de los años noventa. La estricta prohibición de la intervención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en cuanto a la delegación de «misiones de paz» de la ONU en la OUA y organizaciones regionales (principalmente la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Ecowas, y la South African Development Community, SADC) ha venido creando un «nuevo intervencionismo» de Estados africanos en crisis y guerras de la región. Como éstos se resistieron a las intervenciones abiertas con fuerzas de combate antes del fin del conflicto Este-Oeste, casi un tercio de ellos estuvo envuelto en guerras y crisis limítrofes con tropas regulares a fines de los años noventa.

Como modelo de esta tendencia se toma la intervención de la Ecowas en las guerras de Liberia (1990-1997) y Sierra Leona (1998-2000) bajo la dirección de las fuerzas de combate del poder regional de Nigeria, en el cual se produjo una participación de la Ecomog en la economía de guerra local. En este sentido, las perspectivas del control de los recursos desempeñaron un papel decisivo:

> La élite de los Estados militarmente potentes puede utilizar la desintegración de un Estado colindante como fachada para las propias actividades ilegales. El comercialismo militar trae consigo recursos externos bajo el control de la red patrimonial de los estados interventores y permite con ello una repartición que apoya al régimen (de la potencia interventora)[17].

La cambiada práctica de intervención es, según Christian Dietrich, también una aclaratoria para la creciente «desaparición» de ejércitos privados como Executive Outcomes o Sandline International, que ingresaron directamente en las operaciones militares con tropas (alquiladas) hasta mediados de los años noventa. Mientras siga existiendo un mercado para los servicios especiales en capacitación, reconocimiento o logística, así como misiones en protección de objetivos o personas, los Estados africanos que «alquilan» las fuerzas de combate regulares han asumido el segmento de mercado de las unidades combatientes de mercenarios[18].

«Comercialismo militar» en la guerra del Congo: oponentes codiciosos y amigos costosos

La Guerra del Congo es hasta ahora la prueba más significativa de esta tendencia del «comercialismo militar». La riqueza de recursos en el país era conocida por todos los participantes, así como las debilidades políticas del gobierno y el estado de desolación de las fuerzas de combate. Esto produjo la intervención oficial de Ruanda, que vio amenazadas sus fronteras por las milicias Interahamwe —protagonistas del genocidio de 1994—, y al gobierno de Kabila (en cierta parte beneficiado) se le reprochó la apatía ante estas fuerzas de combate[19]. Asimismo, Uganda entró en la guerra del lado de Ruanda por «motivos de seguridad». Las oponentes fuerzas de Angola, Namibia y Zimbabwe, aliadas con Kinshasa, intervinieron con un mandato de la SADC para la «restitución de la integridad nacional» de la RDC. La explotación de los recursos no era la única «verdadera» razón para la intervención[20], pues como lo demuestra el transcurso del conflicto, particularmente para Ruanda, Uganda y Zimbabwe los intereses de seguridad estatales habían pasado ya a un segundo plano, y los intereses particulares de las élites de la guerra y el mantenimiento de las economías de guerra se convirtieron en el motor del conflicto. En realidad, los combates más fuertes tuvieron lugar entre los participantes en las regiones más ricas en materias primas. Muestra clara de ello es la destrucción de la alianza entre Ruanda y Uganda por los derechos competentes para el control del comercio de diamantes, que escalaron durante el verano de 1999 y 2000 en confrontaciones militares

abiertas por la ciudad diamantífera de Kisangani, en las cuales Uganda salió vencedora[21]. En lo sucesivo, sólo se puede ahondar el ejemplo de Zimbabwe en relación con el ZDF.

Zimbabwe sigue siendo hasta hoy el aliado político más importante del gobierno en Kinshasa, cuya rápida entrada en la guerra con armas pesadas y unidades de la fuerza aérea (junto con tropas angoleñas) desvió la amenazante derrota ante el RPA que avanzaba en agosto de 1998. Oficialmente, el gobierno de Robert Mugabe trabajó por una resolución de la organización regional SADC por la «defensa de la soberanía» del Congo, que fue decidida de todas formas bajo presión masiva de Mugabe contra el escepticismo de los Estados miembros. Sólo Angola y Namibia prestaron asistencia militar real. Para la intervención de Zimbabwe, que no tiene límites comunes con la RDC, los intereses político-económicos desempeñaron un rol importante ya desde un principio; de hecho, entre las élites de Zimbabwe no sólo era legendaria la riqueza de recursos del Congo, sino también la inestabilidad política local y la destrucción *de facto* de la economía. En efecto, el gobierno había invertido en Harare, en el entonces «líder rebelde» Laurent Kabila, con la esperanza de negocios a futuro e influencia política ya en la primera guerra del Congo 1996-1997. Además de unos cinco millones de dólares estadounidenses en apoyo financiero, se realizaron suministros de armamento militar y municiones por un valor de cincuenta y tres millones de dólares estadounidenses mediante la empresa de las fuerzas de combate de Zimbabwe. En el caso de un nuevo cambio de gobierno en el Congo, así se temió en Harare, no se hubiera podido hacer un reembolso de las deudas[22].

Los motivos político-económicos resultaban cada vez más decisivos con la larga duración de la guerra. Zimbabwe estacionó 14.000 soldados del ZDF en la provincia rica en recursos de Katanga con sus yacimientos de diamantes, germanio, cobre, cobalto y estaño, pero también en las provincias de Kasai Oriental (aquí se encuentra la ciudad diamantífera de Mbuyi-Mayi) y Kasai Occidental, así como Bandundu. La presencia de tropas del ZDF en Katanga evitó, por una parte, la entrada del RPA en las regiones que representaban las reservas económicas de la vida del Congo. Además, aseguró también la supervivencia política al régimen de Mugabe.

El régimen autoritario se apoyó en un sistema clientelar que debía balancear los derechos entre las élites políticas del ZANU-PF y las fuerzas de combate. La mala economía y la corrupción, así como la creciente carencia de recursos (la industria procesadora de los metales agotó literalmente los yacimientos[23]) y la creciente competencia en Sudáfrica por los mercados regionales habían debilitado significativamente la economía de Zimbabwe[24]. En esta situación, la intervención se presentó como un logro a corto plazo de estrategias prometedoras, pues un pacto de asistencia suscrito por los gobiernos de Zimbabwe y la RDC el 4 de septiembre de 1998 acomodó el camino para la preparación sistemática de las élites de Zimbabwe en las costas del Congo: la dirección política admitió abiertamente en Harare que su motivo era producir ganancias de su apoyo político y militar de la RDC mediante el acceso privilegiado a sus recursos[25]. Esta práctica se asemeja a la llamada *security equity swaps* (intercambios por seguridad-equidad), que acordaron las PMC (por ejemplo la Executive Outcomes) con gobiernos débiles en los años noventa.

En cierto modo, detrás del ZDF llegaron al Congo numerosas empresas del ZANU-PF y de la ZDI como consecuencia del pacto de asistencia, y se aseguraron participaciones beneficiosas en empresas colectivas con empresas congoleñas o concesiones en la industria minera y el sector diamantífero:

—M & S Syndicate y Zidco: empresas que pertenecen al ZANU-PF y son activas en el sector de los bancos[26].

—ZDI: la propia empresa militar Zimbabwe Defense Industries (ZDI) suministró a las fuerzas de combate congoleñas armamento, municiones y armas, y participa con 37,5% en las ganancias de Gécamines[27].

—Operation Sovereign Legitimacy (Osleg), propiedad del ZDF, permitió negocios entre élites de Zimbabwe y la RDC[28].

—Cosleg es una empresa colectiva de Osleg y la empresa congoleña de exportación Comiex, que está envuelta principalmente en el sector diamantífero, la banca y el comercio de madera tropical[29].

—Oryx Natural Resources: empresa oficialmente privada cuyo socio principal es sin embargo el ZDF. Está activa particularmente en el sector diamantífero.

—Socebo: poco conocida, es el compromiso del ZDF en el sector forestal. Socebo es en 98% Cosleg, las participaciones restantes se dirigen a las élites del Congo y de Zimbabwe. Las concesiones de Socebo para la tala de madera tropical comprenden un área de casi 1,5 veces el tamaño de Gran Bretaña. En una filial de Socebo también participa mayoritariamente el Western Hemisphere Capital Management (WHCM), que presuntamente explotará las concesiones[30].

La participación de la economía de guerra del Congo-Zimbabwe en los sectores formales del mercado mundial se desarrolló debido a que la intervención de Zimbabwe pudo apoyarse en una base diplomática con la resolución de la SADC.

Asimismo, altos funcionarios congoleños de los departamentos competentes en las lucrativas partes comerciales del sector minero y de la industria de minas y las direcciones empresariales de las empresas estatales congoleñas (como por ejemplo Gécamines) legalizaron literalmente con sus firmas la venta de riquezas naturales del Congo. De allí sacaron provecho también numerosos consorcios internacionales y empresas como socios, inversionistas, filiales e importadores de materias primas de la economía de guerra: entre ellas se encuentra la británica Tremalt, por nombrar alguna, en la cual también participa ZDF. Tremalt obtiene concesiones de extracción de diamantes por valor de un millardo de dólares estadounidenses al bajo precio de 400.000 dólares por parte del gobierno de la RDC[31].

Con ello, Tremalt indica un sistema organizado de corrupción, engaño, intimidación y, en parte, utilización intencional de la violencia contra funcionarios de departamentos competentes, empleados de empresas estatales y justicia mediante redes de élites del Congo y de Zimbabwe formadas por militares, empresarios y políticos de alto rango, en el cual las empresas privadas (primordialmente) también obtienen buenas ganancias. Según investigaciones de la comisión de expertos de la ONU, se

> transfirió propiedad pública bajo el control de las empresas estatales del sector minero y de la industria minera por un valor no menor a cinco millardos de dólares estadounidenses a la posesión de empresas privadas, sin que el presupuesto estatal de la RDC recibiera alguna compensación por ello[32].

El hecho de que actores de las redes hicieran aportes para la dilatación de la guerra y la inestabilidad política demuestra el ejemplo del mariscal de la fuerza aérea de Zimbabwe, Perence Shiri, y del director del servicio secreto congoleño, Didier Kazadi Nyembwe, figuras centrales de la privatización de recursos congoleños y que además organizaron el armamento y apoyo de las milicias Mai-Mai y del AliR/FDLR, que combatían en el occidente del país contra la RDC y el RPA[33]. Ya que era sabido que la paz y las reformas políticas amenazaban sus posiciones en el poder y sus fuentes individuales de riqueza, las observaciones actuales sugieren que los primeros meses después del tratado con Ruanda en Pretoria (julio de 2002), en el cual el RCD se comprometió al desarme de las milicias Mai-Mai y AliR/FDLR, se tomaron medidas correspondientes a fines de octubre. Era procedente el despido, por parte del presidente Joseph Kabila, de las personas mencionadas en el informe de la comisión de la ONU[34].

Conclusiones y perspectivas

Los lucrativos yacimientos de materias primas del Congo han contribuido decisivamente con la formación de sistemas de economía de guerra que marcan la dinámica de la guerra de explotación y violencia. El modelo aclaratorio del comercialismo militar demostró, con el ejemplo de Zimbabwe, que con la intervención en el Congo y la explotación de las riquezas de su suelo se financiaron «externamente» en cierta forma las relaciones clientelares y se pudieron «exportar» los conflictos entre élites.

De hecho, para Zimbabwe es también dominante la estrategia a corto plazo del aseguramiento del dominio: las ganancias de la explotación de materias primas han venido disminuyendo desde la explotación abusiva de yacimientos poco accesibles, pues para poder recuperar las riquezas potenciales del Congo se necesitan mayores inversiones en infraestructura que no pueden ser aportadas por empresas seudoestatales como Zanupf y el ZDF. En el sector y la industria minera, los costos estimados ascienden al millardo. Incluso las concesiones de Socebo en el sector forestal se han comprobado como negocio de pérdidas, ya que las inversiones necesarias, de unos 160 millones de dólares estadounidenses, no pueden ser financiadas[35]. Después de la primera fiebre del oro, empresas

occidentales se fueron retirando progresivamente del negocio ya que el riesgo de inversiones a largo plazo les parecía muy alto bajo las condiciones de inestabilidad y corrupción. Zimbabwe también ha sido víctima de críticas a nivel internacional (no sólo) por la intervención en el Congo. Banco Mundial, FMI, UE y la Mancomunidad Británica han congelado ayudas, créditos y programas de conversión de deuda[36]. Mientras la ganancia de la explotación del Congo va dirigida a las cuentas bancarias de funcionarios influyentes de las élites, los costos mensuales de la presencia militar adeudan veintisiete millones de dólares estadounidenses, la mayoría de las tareas en acciones de defensa y las altas pérdidas militares del ZDF por las confrontaciones con el RPA, que igualmente vacían las arcas estatales[37]. Las derrotas militares contra tropas de Ruanda también han conducido, en el ámbito militar, a la oposición contra la intervención —y contra las élites gubernamentales alrededor de Mugabe[38].

La estrategia del «comercialismo militar» ha asegurado a largo plazo la lealtad de ciertas élites decisivas en ZANU-PF y el estamento militar, para que Mugabe pudiese «ganar» tres elecciones desde la entrada en la RDC a pesar de la creciente crítica internacional; realmente, sólo por represiones masivas e intencionales contra la oposición, en donde participaban decisivamente unidades de los militares, y por la manipulación de los resultados. A mediano plazo la estrategia no ha salido realmente a cuenta, e incluso se han disipado otras posibilidades de aseguramiento del dominio clientelar mediante la explotación extrema de los recursos del Estado, y ha aumentado la presión comercial de las élites, así como posiblemente la preparación para aventuras de mucho más riesgo.

Según la opinión de observadores, esto puede influir nuevamente en la situación en el Congo, donde a pesar de la situación pacífica formal no se le ve fin a la violencia y a la explotación económica. Las élites de la guerra de todos los participantes que han intervenido han seguido diversas estrategias de adaptación previas a la retirada de sus fuerzas de combate para mantener derecho el flujo de recursos de la RDC[39]. «Los soldados se van, los saqueadores se quedan», puntualizaron periodistas de *Africa Confidential* la situación el pasado mes de octubre[40]. Sin embargo, actualmente los Señores de la Guerra locales intentan cambiar a su antojo las relaciones de poder y de propiedad en forma violenta, particularmente en el oriente

del país. Con miras al creciente problema de las potencias interventoras, esbozado en este ensayo sólo a manera de ejemplo en Zimbabwe, de financiar con recursos propios las codicias, así como las prebendas obtenidas en el marco de la guerra por las élites poderosas, podría otorgar en sí misma la causa de que los soldados regresen a la inestabilidad en el Congo.

NOTAS

1. Entre otros, International Crisis Group (ICG): «The Kivus: The Forgotten Crucible of the Congo Conflict». *ICG Africa Report* No. 56. Nairobi/ Brussels 2003, p. 9 y p. 23.
2. Entre otros el diario del 18 de diciembre de 2002: «Frieden der Warlords» (Dominic Johnson); «UN Security Council (UNSC)»: «Thirteenth Report of the Secretary-General on the UN Organization Mission in DR Congo». UN*Document* S/2003/211(2003).
3. Entre otros David Shearer, «Africa's Great War» en *Survival*, 41:2 (2001), p. 89-106; Bernard Jacquemart, «République Démocratique du Congo», en J. Balencie / Grange de la A. (Hg.), *Mondes Rebelles. L'Encyclopédie des Acteurs, Conflits et Violences Politiques*. Paris, 2001, pp. 810-856.
4. ICG: «Scramble for the Congo. Anatomy of an Ugly War», *ICG Africa Report* nº 26. Nairobi/Brussels, 2000.
5. Georg Elwert, «Gewaltmärkte. Beobachtungen zur Zweckrationalität der Gewalt», en T. Trotha (Hg.): *Soziologie der Gewalt*, Opladen, 1997, pp. 86-101.
6. UN Security Council, «Report of the Panel of Experts on the Illegal Explotation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo». UN-Dokument S/2001/357 (2001), p. 213.
7. Obsérvese, entre otros; Wolf-Christian Paes, «Kleinwaffen-Eine Bedrohung für die Dritte Welt», *Aachen* 2002.
8. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), «The Merchant of Death», en ICIJ (Hg.), *The Business of War*. Center for Public Integrity 2002 (http://www.icij. org/dtaweb/icij_bow.asp)
9. *Africa Confidential* (AC), 25 de octubre de 2002: «Soldiers Go, Plunderers Stay» en AC 43:21 (2002), pp. 1-5, UN Security Council, «Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo». UN-Dokument S/2002/1146 (2002), p. 10.
10. Dominic Johnson; Christiane Kayser; Aloys Tegera, *Coltanfieber: Wie ein seltenes Metall das Leben im kriegsgeschüttelten Osten der Demokratischen Republik Kongo verändert hat Berlin,* 2002; Montague, p. 6; UNSC, Final Report, p. 16; Björn Willum,

«Purely Beneficial or Contributing to War?», en *Foreign Aid to Rwanda*, University of Copenhagen, Institute of Political Science: Dissertation 2001, p. 16

11. Entre otros M. Berdal; D.M. Malone (Hg.): *Greed and Grievances. Economic Agendas in Civil Wars*, Boulder / London 2000. Medico International (Hg.): *Ungeheuer ist nur das Normale. Zur Ökonomie der «neuen» Kriege*. Frankfurt/Main 2002.
12. Asimismo argumentan Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz, *Africa Works. Disorder as a Political Instrument*, Oxford, Indiana, 1999.
13. Philippe LeBillon: Risiko Ressourcenreichtum: Ursache und Wirkung der «neuen Kriege». En *Medico*: *Ungeheuer*, pp. 28-49.
14. Christian Dietrich, «Hard Currency. The Criminalized Diamond Economy of the Democratic Republic of Congo and its Neighbours». Partnership Africa/Canada/ International Peace Information Service/ Network Movement for Justice and Development, S.L. 2002. Christian Dietrich, «The Commercialisation of Military Deployment in Africa», en *African Security Review* 9:1 (2000) (http:// www.iss.co.za)
15. Entre otros Anatole Ayissi, «Der Aufstieg des Lumpenmilitariats. Militärmacht und politische Ohnmacht in Afrika» en *Le Monde Diplomatique* 9:1 (2003), pp. 18-19. «Peter Lock: Africa, Military Downsizing and the Growth in the Security Industry» en J. Cilliers / P. Mason (Hg.): *Peace, Profit or Plunder? The Privatisation of Security in War-Torn African Societies*, Pretoria, 1999, pp. 11-36.
16. Tony Hodges, *Angola: From Afro-Stalinism to Petro-Diamond Capitalism*, Oxford/ Indiana, 2001, pp. 147-151 y p. 158; L. Rimli.
17. Christian Dietrich, *Commercialisation* (Traducción B.A.)
18. Christian Dietrich, 2002, *Hard Currency*, pp. 36-38.
19. David Shearer, *Great War*, p. 92; ICG, *Anatomy…*, p. 11.
20. John F. Clark, «Explaining Ugandan Intervention in Congo: Evidence and Interpretations» en the *Journal of Modern African Studies* 39:2 (2001), pp. 261-287. Michael Nest, «Ambitions, Profits and Loss: Zimbabwean Economic Involvement in the Democratic Republic of the Congo», en *African Affairs* 100 (2001), pp. 469-490.
21. ICG, *Anatomy…*, p. 8.
22. Michael Nest, art. cit., p. 471 y p. 484.
23. Christian Dietrich, *Hard Currency*, p. 42.
24. Joann McGregor, «The Politics of Disruption: War Veterans and the Local State in Zimbabwe», en *African Affairs* 101 (2002), pp. 9-37.
25. ICG, *Anatomy…*, p. 60; David Shearer, ob. cit., p. 97.
26. Dietrich, *Hard Currency…*, p. 42.
27. ICG, *Anatomy…*, p. 60.
28. Dietrich, *Hard Currency*, p. 42; UNSC, Final Report, p. 9.
29. UNSC, Final Report, p. 7.

30. Global Witness, *Branching Out: Zimbabwe's Resource Colonialism in DRC*, London 2002 (2nd Edition), p. 4 ss.
31. AC, 25 de octubre de 2002, p. 2.
32. UNSC, Final Report, p. 7 (Traducción B.A.) y 7-13.
33. Ibíd., p. 8.
34. Institute for Security Studies (ISS): «Searching for Peace in the Democratic Republic of the Congo». ISS Workshop-Report, Pretoria/Johannesburg, 2002, p. 8.
35. Global Witness, *Branching Out*, p. 6.
36. ICG, Zimbabwe: «The Politics of National Liberation and International Division». *ICG Africa Report* No. 52, Harare / Brussels 2002, p. 2 y p. 16.
37. ICG, *Scramble*, p. 62.
38. AC, 22 de noviembre de 2002, «The New Veterans March home», en *Africa Confidential* 42:23 (2002), pp. 1-3.
39. ICG, «Kivu…», pp. 3 y 9; UNSC, Final Report, p. 5.
40. AC, 25 de octubre de 2002.

CAPÍTULO XIV
ANGOLA: ECONOMÍA DE GUERRA EN TIEMPOS DE PAZ. LA INDUSTRIA PRIVADA DE SEGURIDAD EN ANGOLA

LISA RIMLI

Tras dos fallidos acuerdos de paz en los años noventa, el gobierno angoleño suscribió un tratado de paz militar con las fuerzas de combate de la Unita[1] el 4 de abril de 2002 como consecuencia de la violenta muerte de Jonás Savimbi, líder de Unita. Desde entonces se encuentra en marcha un nuevo proceso de pacificación luego de una guerra civil de veintisiete años. Después de la desmilitarización de la Unita, el éxito depende básicamente de la voluntad del gobierno angoleño para realizar reformas políticas y económicas, pero también de una solución pacífica del conflicto en Cabinda (región petrolera). Por el momento, sigue siendo una pregunta abierta si el sistema político y económico de Angola es reformable, y en qué forma, cuando éste se caracteriza como una dictadura centralista unipartidista *de facto*, con corrupción generalizada y una economía de guerra privatizada[2].

Si se reflexiona sobre el rol de la industria de la seguridad en el actual proceso de pacificación, se evidencian varios problemas. El contexto de corrupción generalizada y la carente transparencia hacen aún más difícil valorar las reales actividades de estas empresas, sus redes económicas y las consecuencias que de allí se derivan. Todavía en el año 2000 permanecían activas por lo menos ciento cincuenta empresas de seguridad en Angola[3]. Resulta dificultoso obtener informaciones confiables sobre la estructura del personal, arreglos financieros y operaciones. Los socios de las empresas se mantienen generalmente ocultos, los acuerdos son negociados exclusivamente con los clientes y hay poco acceso público a ellos. Con la promulgación de la nueva Ley de Secretos de Estado en julio de 2002, el gobierno angoleño ha tomado medidas que obstaculizan aún más la publicación de acuerdos y convenios financieros con consorcios

petroleros y empresas mineras, pero adicionalmente también con empresas privadas de seguridad[4].

Dentro de las condiciones marco en Angola, en las cuales actúan mercenarios y empresas militares y de seguridad, se encuentra también una profunda militarización de la sociedad angoleña, acoplada con ausentes estructuras de estado de derecho. Las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana (OUA) para la proscripción de las «actividades de los mercenarios» aceptan de manera implícita la utilización de mercenarios a beneficio de gobiernos reconocidos[5], tendencia que fue reforzada por el acuerdo de paz militar de 2002. Mientras el Acuerdo de Lusaka de 1994 previó todavía la repatriación de todos los «mercenarios»[6], en el tratado de 2002 ya se habla solamente de mercenarios del lado de la Unita. Además, el acuerdo de paz de 2002 no dispuso en contraposición al Acuerdo Lusaka ni un acuartelamiento de la Policía paramilitar *(*Polícia de Intervenção Rápida, o PIR) ni un desarme de los civiles[7]. En este contexto radica el peligro de que las empresas de seguridad privada se mantengan bajo un control poco claro como fuerzas paramilitares adicionales. También se teme que continúe la impunidad de violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército, Policía, diversas fuerzas paramilitares y empresas de seguridad. Como factor agravante se agrega que las empresas de seguridad en el sector petrolero y del diamante se concentran principalmente en zonas donde siguen las situaciones de conflicto y donde, hasta ahora, casi no existe una tutoría efectiva de los derechos humanos, en Cabinda y las provincias diamantíferas.

La Unita fue capaz durante los años noventa, gracias a su control militar sobre zonas diamantíferas ampliamente dispersas, de asegurar el acceso a mercados de armas y redes de contrabando y de equipar un ejército convencional. El gobierno del MPLA[8] logró, en virtud de su acceso exclusivo a las reservas petroleras nacionales, no sólo ingresos mucho más altos, sino que también tuvo a su disposición un recurso geoestratégico clave. Esto le permitió al gobierno angoleño una considerable ventaja en las negociaciones en relación con la comunidad internacional y posibilitó una diplomacia petrolera «privada», particularmente con los grandes importadores de petróleo como Francia y Estados Unidos. La economía de enclave en las aguas costeras angoleñas, ampliamente desacoplada de la

guerra y el resto de la economía nacional, genera hasta hoy 90% de las exportaciones y 80% de los ingresos estatales[9]. Con la repartición de los derechos de extracción a empresas petroleras multinacionales que compiten entre sí, en asociación con la sociedad nacional petrolera Sonangol (Sociedade Nacional Angolana de Combustíveis), el gobierno pudo impulsar los bonos convencionales por nuevos derechos de extracción a nuevos niveles récord hasta 1999[10]. A partir de ello, el gobierno pudo tener acceso a créditos privados mediante garantías a ingresos petroleros futuros, los que hasta hoy le han permitido eludir las exigencias de transparencia del FMI para los créditos[11]. Gracias a la diplomacia petrolera el gobierno disfrutó adicionalmente en forma indirecta de garantías de inversión de instituciones financieras estadounidenses en el sector petrolero[12]. Esta diplomacia petrolera es cada vez más importante para Angola como país no perteneciente a la OPEP y como el segundo productor petrolero del sur de África, después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Golfo de Guinea fue declarado de «interés vital» para Estados Unidos[13].

La subida de Angola hacia un gran poder regional desde la intervención militar en el Congo-Brazzaville y en la República Demócratica del Congo / RDC (antiguo Zaire), luego de 1997 se cimentó también sobre diferentes *joint ventures* (sociedades de asociación de capitales) de Sonangol en la región[14]. A través de Sonangol, el gobierno angoleño pudo extraer una gran parte del ingreso petrolero al presupuesto doméstico y desviarlos mediante una galaxia de cuentas bancarias *offshore* (en paraísos fiscales). Según estimaciones de Global Witness y el FMI, anualmente desaparece por lo menos un millardo de dólares mediante este presupuesto paralelo en el llamado «triángulo de las Bermudas» entre el Banco Central de Angola, Sonangol y la presidencia angoleña[15]. Estos fondos no sólo se aprovecharon para el financiamiento de la guerra a pesar del embargo de armas, sino también para el masivo enriquecimiento privado de las élites gubernamentales y la formación de un sistema de patrocinio presidencial. El fondo para bonos sociales patrocinado por las empresas petroleras, como las instituciones presidenciales de beneficencia social Fundação Eduardo dos Santos (FESA), Fundação Lwini y Fundanga (Fundação Angolana de Solidariedade Social), representan un fondo de

soborno a disposición del presidente[16]. El diario privado angoleño *Angolense* calculó recientemente que las cincuenta y nueve personas más ricas de Angola podrían reunir con el 10% de su estimada fortuna privada el urgente donativo de 400 millones de dólares necesario para las organizaciones de ayuda internacional y hacer frente a la inaudita crisis humanitaria[17].

El petróleo y las probabilidades de acceso y la explotación del sector diamantífero luego de un acuerdo de paz, le permitieron al gobierno angoleño tener acceso a empresas militares y de mercenarios y a servicios militares, que influenciaron el desarrollo de la guerra en forma considerable. El contrato del gobierno angoleño con la empresa de mercenarios surafricana Executive Outcomes fue maquinado por la Anthony Buckingham's Heritage Oil, y por medio de la Chevron fue realizado un contrato con la empresa militar estadounidense AirScan en Cabinda[18]. Como reveló el escándalo Angolagate desde el año 2000, Pierre Falcone y Arcady Gaydamak, un nuevo tipo de empresarios globales de la economía de guerra, pudieron hacer fortuna con negocios de armas hasta posiciones clave en la economía angoleña. Así como lo expresó el mismo presidente angoleño, la Elf-Aquitaine se aprovechó también de manera indirecta de estos negocios de armas, que fueron desarrollados por Falcone después de 1993 mediante la empresa francesa Sofremi y después con otras empresas[19]. Los ramificados negocios de Falcone y Gaydamark condujeron en 1999 a asociaciones entre las empresas petroleras Exxon y Elf-Aquitaine/ TotalfinaElf en nuevos bloques de aguas profundas con las empresas petroleras Falcon Oil, Naphta y ProDev, que además están implicadas en negocios de seguridad y de armas[20]. Según Global Witness y el International Consortium of Investigative Journalists (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ), Falcone y Gaydamark no sólo se expandieron con sus empresas en otros sectores clave de la economía de guerra. Gracias a su privilegiada posición de cercanía con el presidente, estas empresas fueron presuntamente quienes ayudaron a abrir las puertas a una fila de empresas en el negocio de la seguridad, el petróleo y los diamantes. A este grupo pertenecen la empresa de seguridad israelí Levdan y la empresa diamantífera israelí Lev Leviev, así como la empresa de servicios petroleros estadounidense Halliburton[21]. Según el periodista Wayne Madsen, la empresa de logística Brown & Root (hoy

Kellog, Brown & Root), empresa hija de Halliburton, suministró finalmente la tecnología decisiva para la localización de Savimbi a principios del año 2002, luego de que la tecnología de espionaje francesa proporcionada por Falcone no tuviera el éxito deseado[22].

Resulta difícil estimar hasta qué punto la participación directa en combates de las empresas de mercenarios Executive Outcomes (EO) y de la IDAS[23] condujo a la victoria militar del Ejército gubernamental en la primera mitad de los años noventa. El ex jefe del Estado Mayor, João de Matos, adjudicó retrospectivamente el papel decisivo del éxito militar de las FAA primordialmente a la capacitación militar mediante unidades de élite portuguesas (comandos)[24]. Ambas empresas de mercenarios se aseguraron concesiones diamantíferas luego del acuerdo de paz de Lusaka en 1994, y después se fusionaron con empresas mineras establecidas. La IDAS fue comprada por la American Mineral Fields (AMF), mientras que la empresa minera propia de la EO Branch Energy Ltd. se unió con una empresa minera canadiense formando la DiamondWorks Ltd. En este sector diamantífero militarizado se desarrolló una relación triangular simbiótica entre empresas mineras, empresas de seguridad y de mercenarios, y el gobierno angoleño. Luego de la disolución del contrato con la EO en 1995 por presión de Estados Unidos y la ONU, la empresa se mantuvo presente en el país en forma de una serie de empresas asociadas en el negocio de la seguridad y de los diamantes[25]. Dentro de las empresas activas hasta hoy en Angola con conexión significativa con la antigua EO pertenecen, además de la Branch Energy / DiamondWorks, las sudafricanas NFD Ltd.[26] y la Saracen Angola Ltd.[27].

Con las concesiones diamantíferas, el gobierno angoleño también aseguró a partir de 1994 la lealtad de las élites militares. Generales del Ejército (FAA, Forças Armadas Angolanas) vendieron o arrendaron sus licencias, fundaron empresas mineras propias o se establecieron como «socios tácitos» privilegiados de empresas extranjeras. La élite militar se dedicó también a la expansiva industria de la seguridad privada, en donde se encuentran generales retirados de las FAA junto con figuras clave de la élite política entre los socios mayoritarios de las empresas angoleñas de seguridad más importantes: Teleservice, Alfa 5 y Mamboji[28]. Aún no está claro cuál es el origen de estas empresas y su relación con la empresa

surafricana Gray Security Services / Securior Gray[29]. Con la expulsión oficial de Angola de la empresa británica de seguridad Defense Systems Ltd. en 1998, Teleservice y Alfa 5 se aseguraron una posición de supremacía en la industria angoleña de seguridad[30]. La creciente privatización empresarial de la elite militar, que es denominada por Dietrich como «comercialización militar», fue continuada a raíz de las intervenciones militares en la RDC[31]. Con ello se desarrolló asimismo una latente competencia por el poder entre la élite alrededor del presidente José Eduardo Dos Santos y algunos generales. Después de cambiar la dirigencia militar a principios de 2001 (concretamente el jefe del Estado Mayor, João de Matos, y el jefe del Ejército, Luis Faceira)[32], José Eduardo Dos Santos suscribió un convenio de tres años con la empresa militar israelí LR Avionics para el refuerzo de su seguridad personal[33].

Aunque la mayoría de las empresas de seguridad no son utilizadas directamente en situaciones de combate, esta capacidad sin duda se mantiene. Según la ley, el personal angoleño de las empresas de seguridad debe ser reclutado de antiguos miembros del Ejército o de la Policía[34]. Henrique Morais, director civil de la influyente Teleservice, niega cualquier conflicto de intereses con el Ejército gubernamental y la Policía[35], sin embargo, la ambigüedad del mandato hace surgir algunas interrogantes principalmente en las provincias diamantíferas. En este sentido no está claro bajo qué condiciones han tenido lugar las «limpiezas» contra garimpeiros ilegales de diamantes, en las cuales cooperan el ejército, los cuerpos policiales y empresas de seguridad como Teleservice. Aparte de ello, los mandatos de empresas de seguridad también afectan en forma directa a los derechos políticos y sociales de las poblaciones locales. En un documento de 1999 de la Securities and Exchange Commission en Washington, la DiamondWorks enunció como tarea de las empresas de seguridad Teleservice y Mamboji no sólo la protección de instalaciones contra «fuego, robo, vandalismo y terrorismo», sino también contra «alzamientos civiles y disturbios»[36].

Debido a los crecientes conflictos de tierra, principalmente en las provincias diamantíferas de Lunda Sur y Lunda Norte, resulta dudoso que la ambigüedad de las tareas haya cambiado desde el final de la guerra. Según artículos de prensa locales, las «Sobas» (autoridades tradicionales)

y el partido de oposición PRS, poderoso en las Lundas, se quejan por la restricción de la libertad de movimiento, la sucesiva ocupación de las zonas agrarias mediante empresas mineras allí establecidas, y por extorsiones sistemáticas y abusos violentos contra la población mediante el Ejército, la Policía y empresas privadas de seguridad, particularmente Teleservice, Alfa 5 y Mamboji[37]. Los conflictos por tierra también se intensificaron como consecuencia del paulatino retorno de desplazados internos que se dedicaron a la extracción ilegal de diamantes por ausencia de otras alternativas[38]. Según la prensa local, los chantajes para la obtención de dinero por «proteger» a los garimpeiros por parte de altos oficiales y funcionarios siguen a la orden del día[39]. Desde el fin de la guerra no se ha hecho todavía una investigación detallada de los efectos de la industria de la seguridad y de los diamantes en la situación de los derechos humanos, como la realizada por Amnistía Internacional en la RDC[40].

La continua inestabilidad en las provincias diamantíferas tiene sus bases en los enlaces de la economía de guerra que persistieron durante años. La Unita pudo continuar con el comercio y con el rearme hasta finales de los años noventa a pesar de las sanciones de la ONU, ya que los generales de las FAA, los oficiales y los funcionarios públicos sacaban provecho del contrabando de diamantes y del comercio por encima de las trincheras político/militares[41]. Luego del nuevo estallido de la guerra en 1998, estos complejos enlaces de la economía de guerra pasaron a un segundo plano, también porque la campaña internacional contra los «diamantes de conflicto»[42] y el comité de sanciones de la ONU se concentraron en las redes criminales alrededor de la Unita[43]. El gobierno angoleño presentó en febrero de 2000 el establecimiento de la empresa de monopolio de diamantes Ascorp (Angola Selling Corporation) como medida para la contención del contrabando de los diamantes de conflicto.

Sin embargo, según Dietrich, se trataba principalmente de que la élite gubernamental quería limitar a la élite militar en su autonomía financiera e incluirla en la red de patrocinio presidencial. Además, existen indicios de que Ascorp fue fundada sobre redes de economía de guerra previamente existentes alrededor del presidente angoleño.

El socio principal, Lev Leviev, que surgió con Ascorp como el nuevo zar de los diamantes en competencia con De Beers, supuestamente logró

su entrada al negocio por su relación con Gaydamak. Asimismo, otros socios fundadores extranjeros trajeron consigo conocidas relaciones con la red global de la industria de seguridad[44].

Entre los accionistas secretos de Ascorp también se encuentra la hija del presidente, Isabel Dos Santos, que está comprometida en el negocio de los diamantes en la RDC, entre otros[45]. Mientras tanto, el contrabando ilegal de diamantes se mantuvo aun después de la fundación de Ascorp. Poco antes del fin de la guerra, aún un cuarto de los diamantes de contrabando pasaban por cuenta de la Unita[46].

Desde el fin de la guerra se ha puesto en marcha, bajo el auspicio del presidente José Eduardo Dos Santos, una nueva reestructuración del sector diamantífero, de cuya orientación todavía se conoce poco[47]. Según Dietrich, es de esperar que la «anarquía» se mantendrá en las provincias diamantíferas, mientras la lucha por el poder entre diversos intereses privados de las élites militar y política entrará en mayor vigencia en un futuro, tras la eliminación de la Unita como factor militar[48].

Intereses petroleros y de seguridad en Cabinda

Cabinda, el enclave entre el Congo-Brazzaville y la RDC al norte de Angola, se encuentra entre las regiones petroleras más lucrativas del mundo. La empresa petrolera estadounidense Chevron-Texaco tiene acceso por medio de su filial Cabinda Gulf Oil Company (CabGOC)[49] a la mayor parte del petróleo de Cabinda y posee una concesión hasta el año 2030. Con 60% del petróleo angoleño, Cabinda realiza un aporte decisivo a las importaciones petroleras estadounidenses provenientes de Angola.

Debido a sus instalaciones petroleras en tierra firme, Cabinda, al igual que Soyo al norte de Angola, es más vulnerable militarmente que las plataformas petroleras en alta mar. Desde hace décadas se disputa un conflicto en Cabinda con la guerrilla secesionista FLEC (Frente de Libertação de Cabinda), que en realidad está dividida y debilitada militarmente, pero puede contar con el apoyo de un vasto movimiento civil independentista que pretende la autodeterminación política. Al propio dispositivo de seguridad de la CabGOC en la ciudad de Malongo se sumó un número

desconocido de otras empresas de seguridad en el transcurso de los años noventa. Desde 1993, AirScan es responsable del control aéreo completo con avionetas Cessna-337, que están equipadas con sensores infrarrojos, radar y video. La empresa militar registrada en Florida, AirScan Inc., representa la presencia más visible en Angola de la industria militar privada estadounidense que tiene relaciones estrechas con el Pentágono. Jamás se realizó un contrato de MPRI con el gobierno angoleño a pesar de años de negociaciones y del apoyo insistente del gobierno de Clinton[50].

Desde el comienzo del proceso de paz en Angola en abril de 2002, las empresas petroleras presionaron a favor de un dividendo de paz en las tierras baldías de Cabinda. Entre otras, la empresa australiana Roc Oil deberá comenzar la extracción de petróleo próximamente en ese lugar[51]. La élite política de Luanda estaría directamente involucrada allí. La «institución de beneficencia» del presidente angoleño, Fundanga, dirigida por el ministro de petróleo Desidério da Costa, es socia de la Force Petroleum, una empresa asociada con la Roc Oil en Cabinda, poco conocida dentro del negocio petrolero[52].

Luego de la paz militar con Unita, el Ejército gubernamental ha aumentado masivamente sus unidades regulares y especiales antiguerrilla. Según la radio estatal, también se movilizan unidades policiales regulares y paramilitares, así como milicias paramilitares de la MPLA para la lucha contra los «terroristas» del FLEC[53]. En octubre de 2002 comenzó una ofensiva militar intensa seguida de una estrategia de tierra quemada con bombardeos masivos, destrucción de cultivos agrarios y las llamadas «acciones de limpieza», similar a la última fase de la guerra previa a la muerte de Savimbi. Un informe de derechos humanos de autores angoleños con fecha diciembre de 2002 pone de manifiesto graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al Derecho Internacional humanitario[54]. La guerra tiene lugar a puerta cerrada. Por «motivos de seguridad» se ha prohibido a organizaciones de derechos humanos angoleñas e internacionales, organizaciones de la ONU y a la prensa, que salgan de las ciudades de Cabinda y Malongo.

La presencia de AirScan en Cabinda se convirtió en noticia en la prensa internacional por primera vez en 1997, cuando las FAA intervinieron en el Congo-Brazzaville y en la RDC/Zaire, y también avanzaron militarmente

con mayor fuerza contra el FLEC. El entonces jefe de Operaciones de AirScan en Cabinda era el general de brigada (retirado) Joe Stringham, un estadounidense que anteriormente había dirigido operaciones militares secretas de Estados Unidos en El Salvador[55]. De cara a la situación actual en Cabinda, nuevamente surge la pregunta de si AirScan transmite informaciones sobre movimientos de guerrilla al ejército gubernamental de Angola por encargo de las empresas petroleras estadounidenses. Su director John Mansur, lo niega categóricamente y asegura que AirScan evita cualquier contacto con las FAA «por razones evidentes»[56].

Sin embargo, no se puede hablar de transparencia en lo que se refiere a contratos, misiones y operaciones de AirScan en Angola. Según John Mansur, AirScan sólo posee contratos con Sonangol y el Ministerio de Medio Ambiente y Pesca, es decir, con instituciones estatales y en espacios civiles importantes, como la protección del medio ambiente contra el vertido de petróleo[57]. No obstante, estos tratados con Sonangol no están disponibles para el público[58]. Además de ello, AirScan hizo mención más explícita de un contrato con la CabGOC en una versión anterior de su página en Internet[59]. También se informó sobre un acuerdo con Elf en Soyo[60]. John Mansur no tomó postura ante los mencionados indicios. Sólo puede especularse en por qué AirScan ha cambiado desde el año 2002 su propia versión referente a los contratos suscritos con empresas petroleras en Angola, particularmente con CabGOC. También han quedado sin aclarar sus relaciones con empresas de seguridad angoleñas e israelíes, y con otras subempresas[61].

Activistas de derechos humanos en Angola ponen en duda que AirScan inspeccione realmente sólo las instalaciones petroleras de Sonangol y la costa. Según Rafael Marques, diversas personas en Cabinda han identificado por las noches un avión de AirScan sobre la zona de Mayombe por su ruido característico. El grueso bosque de Mayombe no contiene ninguna instalación petrolera, sino que es una zona de repliegue del FLEC y una zona de operaciones militares de las FAA[62]. También se acusa a CabGOC de mantener un excesivo trato de cooperación con la Policía angoleña y los servicios de seguridad. Se conocieron casos concretos en los que periodistas fueron interrogados en la estación policial dentro de las instalaciones de CabGOC en Malongo[63].

Mientras el gobierno angoleño no ha tomado posición —hasta ahora— en cuanto al informe de derechos humanos de diciembre de 2002, representantes del gobierno estadounidense han expresado su «preocupación» por la tensa situación de los derechos humanos en Cabinda[64]. No se puede comprobar una corresponsabilidad de Chevron y AirScan en las violaciones a los derechos humanos de parte del ejército gubernamental y las fuerzas paramilitares en Cabinda. Sin embargo, sólo la publicación de todos los contratos y convenios, así como el libre acceso sin limitaciones de la prensa y las organizaciones de derechos humanos al territorio de Cabinda, podría aclarar esta duda.

NOTAS

1. União Nacional para a Independência Total de Angola (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola).
2. Para una valoración actual obsérvese «International Crisis Group: Angola's Choice: Reform or Regress», *Report* nº 61, 7 de abril de 2003.
3. Según Agostinho de Matos (18 de noviembre de 2000), de Alfa 5, en: *Sapo*, Especial Angola 25 Anos, http://canais.sapo.pt/educacao/1A3/227619.html. En la guía telefónica actual de Angola se encuentran sólo 43 empresas de seguridad.
4. Para la Ley de Secretos de Estado véase Lisa Rimli: «Chancen für einen nachhaltigen Frieden…, 2002»; *US Department of State: Human Rights Report 2002* (Angola), 31 de marzo de 2003.
5. Para una discusión actual de las mencionadas convenciones de la ONU y la OUA referentes a los mercenarios, corporaciones militares privadas (PMC), y empresas de seguridad (PSC), obsérvense las publicaciones de *International Alert Lilly 2002;* Lilly 2000.
6. Para los intentos por parte del gobierno angoleño de manipular la repatriación de los mercenarios según el Acuerdo de Lusaka, obsérvese: «Human Rights Watch»: *Angola Unravels*, 1999.
7. En febrero de 2003 se consideraba que un tercio de la población todavía estaba armado. «Apostolado: "Desarmamento de civis dentro de días"», 6 de febrero de 2003; United Nations Integrated Regional Information Network: «Angola: Got steps up effort to disarm civilians», 2 de abril de 2003.

8. Movimento Popular para a Libertação de Angola (Movimiento Popular para la Liberación de Angola).
9. World Bank: *Country Brief Angola*, abril 2003.
11. Reno: «The (real) war economy of Angola», 2000. Para los más recientes créditos privados negociados por Luanda véase *Africa Confidential*: «Angola: Beg, borrow and steal», Vol. 44, nº 4, 21 de febrero de 2003; AEI (Africa Energy Intelligence): «Angola: Les donateurs désertent», nº 459, 19 de marzo de 2003.
12. Reno, 2000.
13. «Greasing the Skids of Corruption», in: ICIJ: *The Business of War*, 2002.
14. AEI: «La galaxie secrète de la Sonangol», nº 432, 30 de enero de 2002.
15. *Global Witness*: «All the President's Men», 2002; BBC News: IMF: *Angola's missing millions*, 18 de octubre de 2002.
16. Messiant: «The Eduardo dos Santos Foundation…», 2001.
17. «A riqueza mudou de cor? Os nossos milionários», *Angolense,* 11 de enero de 2003.
18. Reno 2000; *ICIJ: The Business of War*, 2002, PMC-Database.
19. *Global Witness*, 2002.
20. *Global Witness*, 1999.
21. *Global Witness*, 2002; «The Influence Peddlers», en *ICIJ: The Business of War*, 2002.
22. Wayne Madsen: «Report alleges US Role in Angola's Arms-for-Oil Scandal». *Corpwatch Special*, 17 de mayo de 2002.
23. International Defence and Security Resources NV, registrada en las Antillas Neerlandesas.
24. «Tropas portuguesas ajudaram Luanda a ganhar a guerra civil», *Público*, 7 de septiembre de 2002.
25. Para el ramificado imperio comercial de la empresa Executive Outcomes, que fue disuelta oficialmente en 1999 debido a leyes de mercenarios más reforzadas en Sudáfrica, obsérvese Kareen Tech: «Executive Outcomes-A Corporate Conquest», en *Peace, Profit or Plunder,* Cilliers & Mason (Editores), 1999.
26, Nicholas Frederick and Duncan Ltd. (NFD) tienen acuerdos con Sonangol y Diamond Works, según su página principal http://www.nfddesigns.com/NFD
27. Saracen Angola Ltd. está activa, según ICIJ: *The Business of War*, 2002, PMC Database, en la limpieza comercial de minas, posee un acuerdo para la inspección de las instalaciones petroleras en Soyo y además entrenó militarmente a la Policía paramilitar PIR.
28. Entre ellos se encuentran el ex jefe del Estado Mayor, António dos Santos França, desde 1994 consejero especial del presidente y hasta el año 2001 embajador en Estados Unidos; y el ex jefe del ejército Ndalu (ambos socios de Teleservice y Alfa 5); el ex jefe del Estado Mayor, João de Matos, y el jefe del servicio secreto militar Fernando Miala (ambos socios de Teleservice). No se sabe si Mamboji aún pertenece

a Fernando Piedade Dias dos Santos (primer ministro). Human Rights Watch 1999; Christian Dietrich, *Power struggles…*, 2000.

29. Según diversas fuentes, Securior Gray, anteriormente Gray Security Services, suministra la administración de Teleservice y Alfa 5. Henrique Morais afirma que Securior Gray únicamente proporciona «consejeros» (Información vía correo electrónico de Enrique Morais, 28 de marzo de 2003).
30. Vines: «Gurkhas and the private security business in Africa», 1999.
31. Christian Dietrich: «The commercialisation of military deployement in Africa», *African Security*, Institute for Security Studies, vol. 9, 2000; *Hard Currency: The criminalized diamond economy of the Democratic Republic of the Congo and his neighbours*, 2002.
32. Para la interpretación de esta redistribución obsérvese *Africa Focus,* nº 31 de enero de 2001; *Lettre du Continent*: «Who's who: João de Matos», nº 369, 1 de febrero de 2001.
33. ICIJ: *The Business of War*, 2002, PMC-Database.
34. La base jurídica es la Ley 19/92 sobre empresas privadas de seguridad.
35. Entrevista de fecha 30 de marzo de 2001 con Henrique Morais, en http://www.teleservice-angola.com
36. Citado en *Gramma*: «Vers une Spirale de la Violence?», 2000.
37. VOA (Voice of America, aquí: Voz da América, Luanda): Lunda-Norte: «PRS acusa militares e polícia de atacar civis», 18 de junio de 2002 ; VOA: «Ocupação de terras gera conflitos na Lunda-Norte», 15 de agosto de 2002; Apostolado: «Sobas descontentes com diamantíferas», 24 de febrero de 2003.
38. Apostolado: «Deslocados com dificuldades para recuperarem a terra na Lunda», 1 de abril de 2003.
39. VOA: «Mais de treze mil garimperios ilegais dedicam-se ao tráfico de diamantes e drogas nas Lundas», 24 de septiembre de 2002; VOA: «Garimpo de diamantes vestese de fardas militares», 14 de octubre de 2002; Apostolado: «Sofisticação do garimpo», 11 de octubre de 2002.
40. Amnesty International: «Making a Killing…», 2002.
41. Hodges: «Angola from Afro-Stalinism to Petro-Diamond Capitalism», 2001; Christian Dietrich: *Power struggles…*, 2000.
42. Campaña Mundial para la Proscripción de Diamantes provenientes de Regiones en Guerra.
43. Christian Dietrich, *Hard currency…*, ob. cit.
44. Christian Dietrich: «Have African-based monopolies been effective?», 2001; «The Influence Peddlers», en: ICIJ: *The Business of War*, 2002.
45. Christian Dietrich, 2001.
46. Economist Intelligence Unit: *Angola Country Report*, febrero 2002.
47. Africa Mining Intelligence: «Dos Santos redessine l'industrie du diamant», nº 53, 15 de enero de 2003.

48. Christian Dietrich «Hard Currency: …», ob. cit.; *Gespräch mit Christian Dietrich*, 21 de marzo de 2003.
49. La Cabinda Gulf Oil Company es una *joint venture*, siendo sus socios mayoritarios Chevron (39%) y Sonangol (41%).
50. Luego de cinco años, expiró en el año 2000 la licencia expedida por el gobierno de Clinton para un acuerdo de la MPRI en Angola. Según *Voice of America* (25 de febrero de 2000), el director de la MPRI, Ed Soyster, alegó como motivo principal para el fracaso de las negociaciones del tratado la negativa de su empresa a pagar altos bonos a funcionarios del Estado.
51. Reuters: «Australia's Roc Oil eyes on Cabinda Region», 13 de diciembre de 2002.
52. AEI: «Charité petrolière», N° 443, 10 de julio de 2002.
53. BBC Monitoring: «Angola: National radio commentary says Cabindan war to be settled in days», 21 de marzo de 2003.
54. «Coalition for Citizens Rights, Reconciliation and Transparency: Terror in Cabinda…», 10 de diciembre de 2002.
55. *Mail & Guardian*: «Ex-US army vets flood to guard Angola Oilfields», 10 de octubre de 1997.
56. Información vía correo electrónico de John Mansur, 25 de marzo de 2003.
57. Ídem.
58. Entrevista con Rafael Marques, 25 de marzo de 2003.
59. Citado en Duncan Campbell: «War on Error. A Spy Inc No Stranger to Controversy, Center for Public Integrity», 12 de junio de 2002. Según información personal de Campbell, el 6 de mayo de 2002 accedió por última vez a la mencionada versión de la página de Internet. La página principal http://www.airscan.com está siendo modificada desde hace tiempo.
60. AEI: «Security Fears for Operators», nº 304, 22 de agosto de 2001. En agosto de 2001 fue encontrado en Soyo el avión de AirScan desaparecido dos meses atrás. En lo sucesivo, AirScan no ofreció comentarios a la prensa acerca de las condiciones y motivos del accidente.
61. Según ICIJ: *The Business of War*, 2002, PMC-Database, la empresa angoleña Alerta, que es posesión del antiguo gobernador de Cabinda, Armando Tati, y la empresa israelí International Security Consultants, están relacionadas con AirScan. El presidente y el director de AirScan Inc, Walter Holloway y John Mansur, presuntamente fundaron adicionalmente una empresa de seguridad registrada en Florida, de nombre Angola Africa International Ltd. Campbell, ob. cit., 12 de junio de 2002.
62. Rafael Marques, entrevista citada.
63. Salomon Moore: «Angola's Strife Threatens a Key Source of Oil», 16 de marzo de 2003; «Coalition…, Terror in Cabinda», 10 de diciembre de 2002, *Los Angeles Times*.
64. Salomon Moore, artículo citado, 16 de marzo de 2003; US Department of State, 2003.

ANEXOS

EXPLICACIÓN

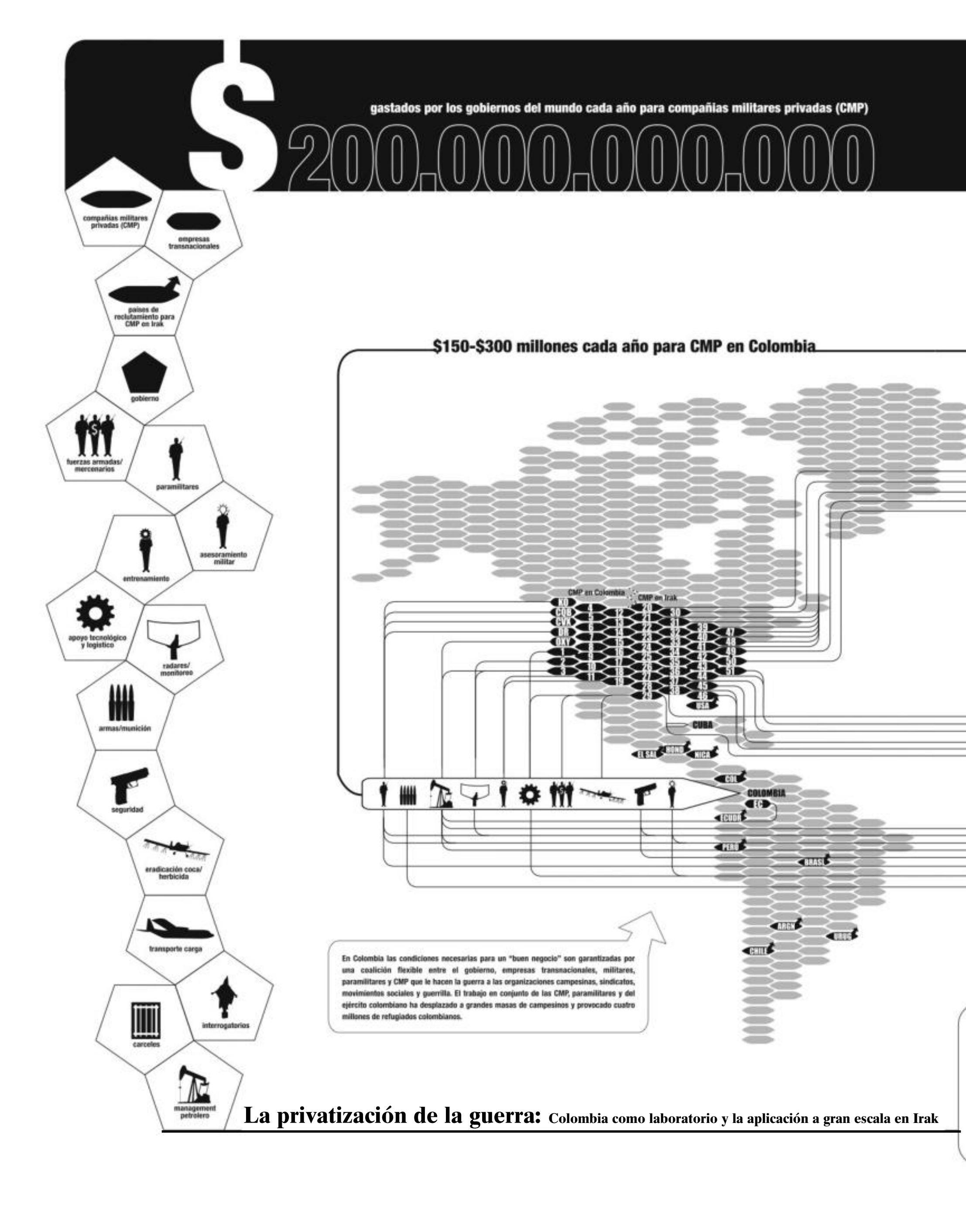
DARIO AZZELLINI
Y LIZE MOGEL

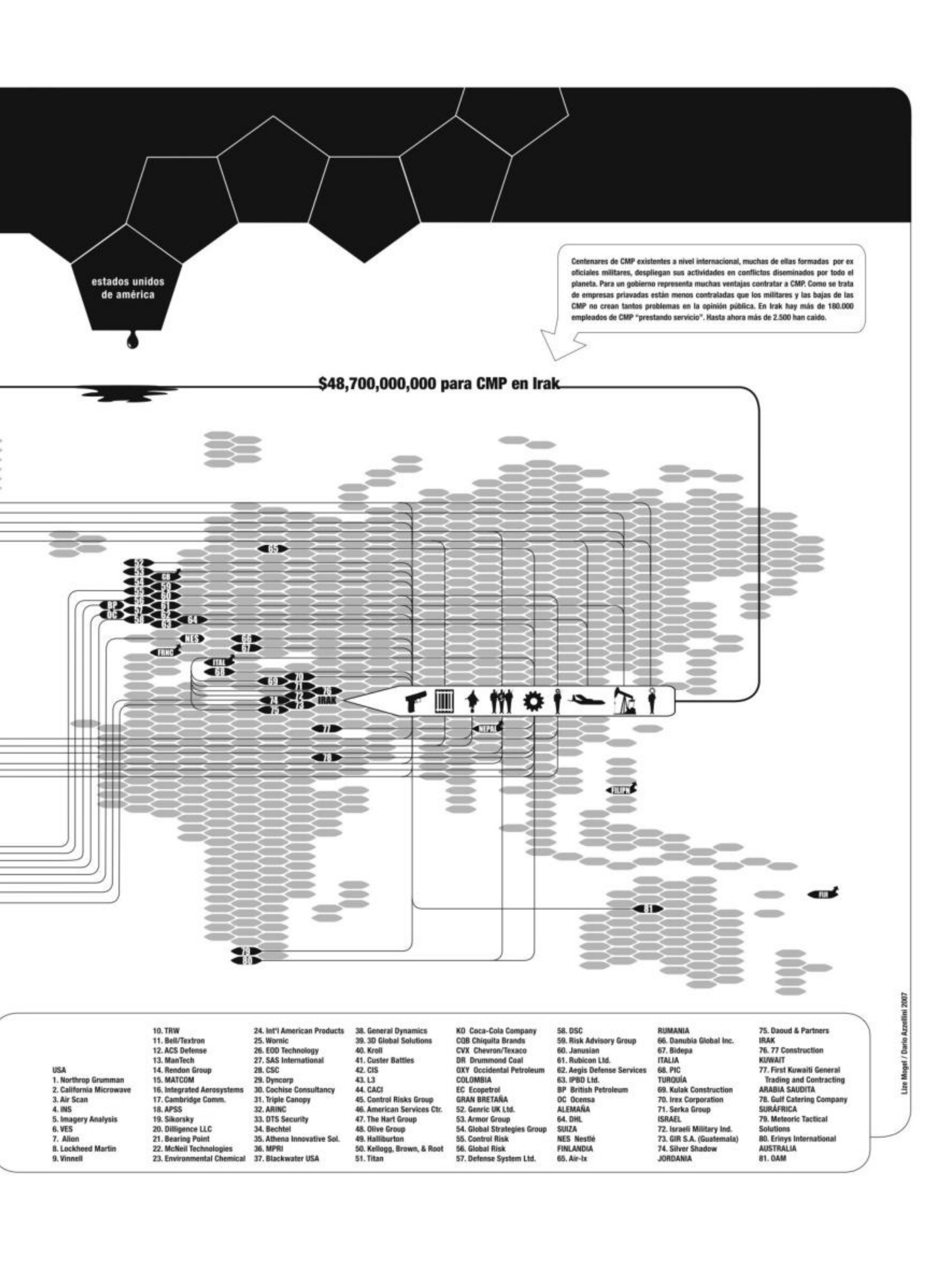
El mapa de la privatización de la guerra muestra las conexiones entre Estados (principalmente EE.UU.) y compañías militares privadas (CMP), así como sus actividades en Colombia y en Irak. Estos dos países representan, de manera ejemplar, la privatización de la guerra en el marco del nuevo orden mundial.

A la izquierda se encuentran unos símbolos que indican cuáles tareas son asumidas por CMP (p.e., la conocida imagen del preso en Abu Ghraib con capucha en la cabeza representa los «interrogatorios», que con frecuencia sirven para legitimar o hasta legalizar la tortura). En la lista abajo a la derecha se encuentran los nombres de las CMP o empresas transnacionales involucradas en el negocio de la privatización de la guerra. De los símbolos de CMP y empresas transnacionales salen líneas que llevan a los símbolos de las tareas militares que estas empresas cumplen en el país que indica la flecha.

La mayoría de CMP son de EE.UU. El número 1 (Northrop Grumman) p.e., presta ayuda técnica/tecnológica y logística (el simbolo de la rueda dentada) para operaciones militares en Colombia. La línea que sale del numero 44 (Caci) nos lleva a los símbolos para cárceles e interrogatorios adentro de la flecha que apunta hacia Irak, donde esa empresa presta servicios en esos sectores. Una parte del personal de Abu Ghraib trabajaba para Caci.

Megaempresas del sector, como Dyncorp, que tiene más de treinta mil empleados, trabajan tanto en Irak como en Colombia.


$200.000.000.000
gastados por los gobiernos del mundo cada año para compañias militares privadas (CMP)
compañias militares privadas (CMP)
empresas transnacionales
paises de reclutamiento para CMP en Irak
gobierno
fuerzas armadas/ mercenarios
paramilitares
asesoramiento militar
entrenamiento
apoyo tecnológico y logistico
radares/ monitoreo
armas/munición
seguridad
eradicación coca/ herbicida
transporte carga
interrogatorios
carceles
management petrolero
$150-$300 millones cada año para CMP en Colombia
CMP en Colombia
CMP en Irak
KO
CQB
CVK
DR
OXY
USA
CUBA
EL SAL
HOND
NICA
COL
COLOMBIA
EC
ECUDR
PERU
BRASL
ARGN
CHILE
En Colombia las condiciones necesarias para un "buen negocio" son garantizadas por una coalición flexible entre el gobierno, empresas transnacionales, militares, paramilitares y CMP que le hacen la guerra a las organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y guerrilla. El trabajo en conjunto de las CMP, paramilitares y del ejército colombiano ha desplazado a grandes masas de campesinos y provocado cuatro millones de refugiados colombianos.
La privatización de la guerra: Colombia como laboratorio y la aplicación a gran escala en Irak



estados unidos de américa
Centenares de CMP existentes a nivel internacional, muchas de ellas formadas por ex oficiales militares, despliegan sus actividades en conflictos diseminados por todo el planeta. Para un gobierno representa muchas ventajas contratar a CMP. Como se trata de empresas priavadas están menos contraladas que los militares y las bajas de las CMP no crean tantos problemas en la opinión pública. En Irak hay más de 180.000 empleados de CMP "prestando servicio". Hasta ahora más de 2.500 han caído.
$48,700,000,000 para CMP en Irak
IRAK
NEPAL
USA
1. Northrop Grumman
2. California Microwave
3. Air Scan
4. INS
5. Imagery Analysis
6. VES
7. Alion
8. Lockheed Martin
9. Vinnell
10. TRW
11. Bell/Textron
12. ACS Defense
13. ManTech
14. Rendon Group
15. MATCOM
16. Integrated Aerosystems
17. Cambridge Comm.
18. APSS
19. Sikorsky
20. Dilligence LLC
21. Bearing Point
22. McNeil Technologies
23. Environmental Chemical
24. Int'l American Products
25. Wornic
26. EOD Technology
27. SAS International
28. CSC
29. Dyncorp
30. Cochise Consultancy
31. Triple Canopy
32. ARINC
33. DTS Security
34. Bechtel
35. Athena Innovative Sol.
36. MPRI
37. Blackwater USA
38. General Dynamics
39. 3D Global Solutions
40. Kroll
41. Custer Battles
42. CIS
43. L3
44. CACI
45. Control Risks Group
46. American Services Ctr.
47. The Hart Group
48. Olive Group
49. Halliburton
50. Kellogg, Brown, & Root
51. Titan
KO Coca-Cola Company
COB Chiquita Brands
CVX Chevron/Texaco
DR Drummond Coal
OXY Occidental Petroleum
COLOMBIA
EC Ecopetrol
GRAN BRETAÑA
52. Genric UK Ltd.
53. Armor Group
54. Global Strategies Group
55. Control Risk
56. Global Risk
57. Defense System Ltd.
58. DSC
59. Risk Advisory Group
60. Janusian
61. Rubicon Ltd.
62. Aegis Defense Services
63. IPBD Ltd.
BP British Petroleum
OC Ocensa
ALEMAÑA
64. DHL
SUIZA
NES Nestlé
FINLANDIA
65. Air-Ix
RUMANIA
66. Danubia Global Inc.
67. Bidepa
ITALIA
68. PIC
TURQUÍA
69. Kulak Construction
70. Irex Corporation
71. Serka Group
ISRAEL
72. Israeli Military Ind.
73. GIR S.A. (Guatemala)
74. Silver Shadow
JORDANIA
75. Daoud & Partners
IRAK
76. 77 Construction
KUWAIT
77. First Kuwaiti General Trading and Contracting
ARABIA SAUDITA
78. Gulf Catering Company
SURÁFRICA
79. Meteoric Tactical Solutions
80. Erinys International
AUSTRALIA
81. OAM
Lize Mogel / Dario Azzellini 2007

ÍNDICE

Este libro se terminó de imprimir
en agosto de 2009,
en los talleres de la FUNDACIÓN IMPRENTA
DEL MINISTERIO DE LA CULTURA,
Caracas, Venezuela.
Son 3.000 ejemplares
impresos en papel Ensocreamy 59.8 gramos
La tipografía utilizada fue
Times Ten 11 puntos
sobre 14.4 de interlineado.